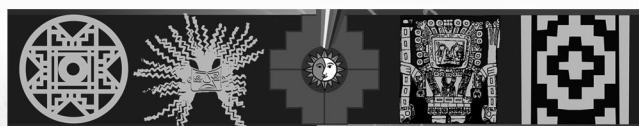


Reunión Preparatoria Región Latinoamérica y el Caribe 10^{ma} Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas



X Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas

Reunión Preparatoria Región Latinoamérica y el Caribe

“Fortaleciendo la incidencia internacional de las organizaciones indígenas de América Latina y el Caribe”

Presentación

Las organizaciones de pueblos indígenas de América Latina y el Caribe vienen participando cada vez más activamente en los procesos de incidencia a nivel internacional, planteando sus perspectivas y demandas en diversos espacios claves. Comenzando con la participación en el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas conformado en 1982, en las negociaciones relativas a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, finalmente adoptada por la Asamblea General en 2007 como también en diversas Conferencias y Cumbres Mundiales.

En el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (UNPFII, por sus siglas en inglés), los líderes de la región se han posicionado como actores claves, con demandas específicas y promoviendo mecanismos de coordinación nacional y articulación regional y global. En todo este proceso las mujeres indígenas han tenido un rol activo. En el año 2004, el Foro dedica el tema especial de su sesión a las mujeres indígenas analizando en profundidad las problemáticas y demandas particulares¹.

A diez años de la primera sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas se presentó el momento propicio para que las organizaciones de pueblos indígenas hagan un balance del estado de implementación de las recomendaciones, de las metodologías de trabajo y del rol que cumplen los miembros del Foro Permanente para lograr alcanzar mayor visibilidad y posicionamiento de las demandas indígenas en el ámbito internacional.

A su vez, el Foro Permanente en su agenda para el décimo período de sesiones, prevé dedicar medio día al debate sobre América Central y del Sur y el Caribe²,

1.- Informe sobre el tercer período de sesiones (10 al 21 de mayo de 2004): <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/384/68/PDF/N0438468.pdf?OpenElement>

2.- E/C.19/2010/15

tornándose relevante la promoción de una instancia de preparación, debate y consenso respecto de las demandas y perspectivas específicas de los líderes y lideresas indígenas de la región prestando especial atención a los pueblos indígenas del Caribe.

En esta oportunidad los cuatro miembros del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la región, Álvaro Pop, Bertie Xavier, Myrna Cunningham y Saúl Vicente conjuntamente con las principales redes indígenas convocaron una reunión preparatoria frente a la 10ma. Sesión del Foro Permanente a realizarse en mayo del corriente año.

De esa forma, los días 4, 5 y 6 del mes de abril del 2011, el Cónclave de Pueblos Indígenas de Latinoamérica y el Caribe celebró en Managua una reunión que se denominó Reunión Preparatoria a la 10ª. Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, con la finalidad de practicar un ejercicio que ha significado altamente importante, relevante y único.

El valor de esta Reunión Preparatoria reside en que por primera vez, ante el Foro Permanente, los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe se han reunido previo a una sesión, y han consensuado posiciones políticas de manera conjunta, concertada, y definiendo planteamientos políticos formales que hoy se plasman en esta publicación.

Los temas de agenda abordados incluyen:

1. Situación de pueblos indígenas en el Caribe y América Latina
2. Desarrollo con cultura e identidad
3. Pueblos Indígenas y bosques
4. Pueblos Indígenas y agua
5. Pueblos Indígenas y cambio climático
6. Pueblos Indígenas y corporaciones extractivas
7. Consentimiento previo, libre e informado
8. Avance en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
9. Situación de la niñez, adolescencia, juventud y educación – Diálogo con UNICEF.
10. Propuesta de agenda del Foro Permanente para el 2012
11. Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas 2014

Estos temas fueron ampliamente discutidos por delegados de las siguientes organizaciones regionales:

1. Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)
2. Consejo Indígena de Centro América. (CICA)
3. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)
4. Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI)
5. Consejo Indígena de Mesoamérica (CIMA)
6. Red de Mujeres sobre la Diversidad Biológica
7. Alianza de Mujeres Indígenas de Centro América y México
8. Enlace Continental de Mujeres Indígenas

Además participaron:

Miembros del Foro Permanente; Secretaria del Foro Permanente; Consejo Regional RAAN y RAAS; Comité Consultivo de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes con el Sistema de Naciones Unidas; Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI); Fondo Indígena, Representantes de las Agencias de Naciones Unidas, Amnesty Internacional, Organizaciones de Derechos Humanos, Instituciones Académicas y medios de comunicación.

En conclusion, aquí les presentamos el producto de esta participación, plena, efectiva, intensa, concertada que resalta nuestro compromiso como redes y organizaciones de pueblos indígenas de la region con la construccion de consensos y el reconocimiento de nuestros derechos a nivel intrenacional.

INDICE

Presentación

La Situación de los Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe	1
Justicia Indígena	25
Desarrollo con Cultura e Identidad	31
Pueblos Indígenas y Cambio Climático.....	35
Pueblos indígenas y Río+20	43
Resolución: Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas 2014	49
Resolución: Labor futura del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas.....	51
La Crisis Financiera Mundial y los Pueblos Indígenas.....	55
Niñez, Adolescencia y Juventud Indígenas.....	61
Resolución: ONUMUJERES.....	69
Los Pueblos Indígenas y el Agua	71
Pueblos Indígenas e Industrias Extractivas	75
Pueblos Indígenas y Bosques	83
Pueblos Indígenas y Educación	93
La Aplicación del Principio del Consentimiento Previo, Libre e Informado.....	99
Pueblos Indígenas y Salud.....	105

La Situación de los Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe

Resumen

El presente informe tiene el propósito de presentar un breve análisis en torno a la situación en que se encuentran los pueblos indígenas en Latinoamérica y el Caribe, incluyendo los principales avances obtenidos en las últimas tres décadas en cuanto al reconocimiento y ejercicio de sus derechos; el marco jurídico que los sustenta, en los ámbitos internacional y nacional; los principales factores que obstaculizan su aplicación; las demandas prioritarias de estos pueblos, así como los principales retos y desafíos que enfrentan.

El informe también incluye recomendaciones dirigidas al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, a fin de que este órgano las considere para la definición de su agenda de trabajo en pos del fortalecimiento de las organizaciones indígenas y cumplimiento efectivo, de los derechos ya reconocidos.

I. INTRODUCCIÓN

1. Este informe presenta un breve análisis de la situación en que se encuentran los pueblos indígenas en Latinoamérica y el Caribe, y en particular lo relativo al reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos consignados en diversos instrumentos jurídicos internacionales y nacionales, así como aquellos factores que limitan u obstaculizan su aplicación. Este informe aborda, asimismo, los temas y cuestiones más relevantes y prioritarias para los pueblos; al igual que los principales retos y desafíos que enfrentan.

A. Información Socio-Demográfica y Socio-Ambiental

2. A pesar de las deficiencias existentes en los sistemas estadísticos nacionales, en la actualidad se cuenta con información disponible de 21 países de la región de Latinoamérica y el Caribe dando cuenta de alrededor de 40 millones de indígenas, con distintos idiomas, cosmovisiones y costumbres, así como diferentes formas de organización económica adaptadas a los ecosistemas en que habitan¹. Y, con no menos de 522 pueblos indígenas, que habitan en 15 áreas geoculturales de Latinoamérica y el Caribe², hasta 840 pueblos identificados.

3. La cifra de lenguas que hablan los pueblos indígenas se estima en no menos de 420 lenguas que forman parte de 99 familias lingüísticas³. Muchos de estos pueblos (108) y lenguas (103), tienen un carácter transfronterizo, lo que refleja su continuidad geográfica y cultural en distintos países. Tal es el caso del quechua, que se habla en siete países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Muchos de ellos, unos 60, también permanecen sin contacto, en varios países de la Cuenca del Amazonas (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela) y del Gran Chaco (Bolivia y Paraguay)⁴.

4. Algunos organismos internacionales, como el PNUD, suelen fijar sus estimaciones en el 10% del total de habitantes. Las disparidades, en ese sentido son considerables. Destaca el caso ecuatoriano por la disparidad entre las cifras oficiales y las que tienen nuestras organizaciones representativas. En efecto, conforme cifras oficiales, utilizando el criterio auto identificación la población indígena ecuatoriana, representaría únicamente el 6,8% sobre la población total ecuatoriana, sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) estima que el porcentaje alcanza el 33,3%.

5. México⁵, Bolivia, Guatemala⁶, Perú y Colombia reúnen aproximadamente al 87% de las poblaciones de nuestros pueblos en América Latina y el Caribe. El restante 13% de nuestras poblaciones residen en 20 Estados distintos. Cinco de nuestros pueblos superan los millones de personas como los Quechua, Nahua, Aymara, Maya yucateco y Ki'che'. Seis pueblos, los Mapuche, Maya qeqchí, Kaqchikel, Mam, Mixteco y Otomí, tienen poblaciones entre medio y un millón de habitantes.

6. En Latinoamérica y el Caribe, los pueblos indígenas habitan en distintos espacios ecosistémicos con los que mantienen una relación equilibrada material y espiritualmente. La mayoría de ellos se caracterizan por estar ubicados en aquellas zonas geográficas de mayor riqueza biológica y con un buen estado de conservación.

Un buen indicador lo constituye el hecho de que casi un 80% de las áreas protegidas en América Latina incluye territorios pertenecientes a pueblos indígenas⁷. Los ecosistemas son variados y tan diferentes como el trópico húmedo en Centroamérica, los Andes, la Amazonía, la Orinoquia, el Pacífico, los Llanos Orientales y la desértica península de la Guajira. Estos espacios, son también ricos en otros recursos naturales como el petróleo, gas y minerales y, constituyen zonas altamente codiciadas para la exploración y explo-

1.- Vázquez Prada, M. () Pueblos indígenas, artífices de la conservación Mesoamericana. Una oportunidad para la integración de las diversidades biológicas y culturales. Espiral, México.

2.- UNICEF (2009). Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina.

3.- Tal como indica la publicación Mundo Indígena, 2010, de Iwgia, "en enero de 2008 se publicó oficialmente el Catálogo de Lenguas Indígenas de México por el recientemente creado Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), donde se registran 364 variantes lingüísticas de 68 idiomas indígenas, agrupados en 11 familias lingüísticas".

4.- FAO (2008). Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas.

5.- Al momento de Censo de Población y Vivienda (2005), 13.365.976 indígenas distribuidos en los 32 estados del país, lo que representa el 13% de la población total.

6.- La cifra en el 2009 se estimaba en 6,000,000 de indígenas.

tación industrial, las actividades extractivas, y el comercio ilícito de especies de flora y fauna.

7. La supervivencia de los pueblos, depende exclusivamente de los recursos existentes en esos ecosistemas, del bosque, de la caza, la pesca, la recolección de frutos y semillas, entre otros. También, son depositarios de un cúmulo de conocimientos sobre los ecosistemas en los que viven, y contribuyen a la conservación de estos sitios ricos en diversidad biológica.

B. Marco Jurídico-Normativo Nacional e Internacional

8. El Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, es un instrumento jurídico internacional vinculante para los Estados que lo ratifican y trata específicamente de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, en su Artículo No. 2 establece que “1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 2. Esta acción deberá incluir medidas: a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida”. En su Artículo No.7, establece el derecho de “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural”⁸.

9. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas⁹, establece que los pueblos indígenas tienen, entre otros los siguientes derechos: Libre determinación (Artículo 3), autonomía y autogobierno (Artículo 4), conservar y reforzar sus propias instituciones (Artículo 5), participar si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado (Artículo 6), participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos (Artículo 18), a su consentimiento libre, previo e informado cuando los Estados adopten decisiones que los afectan (Artículos 10, 19 y 32.2); determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo (Artículo 23); a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradi-

7.- FAO (2008). Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas.

8.- Convenio núm. 169 de la OIT.

9.- Resolución 61/295 de la Asamblea General

cional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma (Artículo 26.2); a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos (Artículo 29.1); y, a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos (Artículo 32.1).

10. Muchos de los Estados nacionales en Latinoamérica y el Caribe, han ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y en su totalidad se han adherido a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, la mayoría de ellos incluyen en sus legislaciones, marcos jurídico-normativos que reconocen derechos, en mayor grado unos y en menor grado otros, de los pueblos indígenas; sin embargo, existe una brecha significativa y un déficit de aplicación, entre lo consignado en estos marcos jurídico-normativos y lo que en la práctica es observado por estos Estados.

11. En efecto, si bien en muchos Estados latinoamericanos y del Caribe, existen leyes que reconocen y protegen los derechos de esos pueblos, éstas frecuentemente son violadas o bien no son observadas cabalmente. En otros casos, las leyes nacionales no se encuentran en correspondencia con las obligaciones que estos mismos Estados tienen, conforme al derecho internacional sobre derechos humanos, y, en particular sobre los derechos de los pueblos indígenas.

12. Muchas de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran íntimamente relacionadas con políticas discriminatorias y excluyentes de los Estados, por su falta de observancia a sus obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos internacionales y con la presión para explotar los recursos naturales, renovables y no renovables, tales como: hidrocarburos, minerales, forestales, hídricos, eólicos y agrícolas, existentes en las tierras y territorios de los pueblos indígenas, por parte de corporaciones internacionales y empresas nacionales. Muchos son los casos que ejemplifican esta presión, cada vez más intensa, sobre sus tierras, lo que se traduce en una rápida deforestación producto de la explotación maderera, la minería, la expansión agrícola, la colonización y los proyectos de infraestructura. Estas circunstancias hacen que tanto las instituciones nacionales, como las corporaciones y empresas que operan en ellos, se caractericen en no considerar y vulnerar los derechos individuales y colectivos; despojándolos de sus tierras y recursos. Las iniciativas de conservación del medio ambiente, o la declaración de áreas bajo regímenes de preservación y conservación tampoco toman en cuenta los derechos de los pueblos indígenas¹⁰.

II. MARCO POLÍTICO NORMATIVO QUE RIGE LA VIDA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

13. Hay una serie de instrumentos jurídicos y administrativos, en el ámbito internacional, que promueven y protegen los derechos de los pueblos indígenas. Entre ellos:

- a) La Carta de la ONU (1945) que reconoce el derecho de libre determinación de los pueblos; la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) que establece que “toda persona tiene los mismos derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, religión...”(Art.2.1);
- b) El Convenio N° 107 sobre Protección e Integración de Poblaciones Indígenas (1957);
- c) La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 1965;
- d) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. [A/RES/2200 A (XXI)] del 16 de diciembre de 1966; el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos [A/RES/2200 A (XXI)], del 16 de diciembre de 1966, vigente a partir del 23 de marzo de 1976;
- e) La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer;
- f) La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) la cual se refiere expresamente a los niños y niñas indígenas en sus artículos 17.d, 29.d y, especialmente, en el 30, base de la educación intercultural bilingüe;
- g) El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) --art. 8j8 y disposiciones conexas--, de obligado cumplimiento para las partes;
- h) La Declaración de Viena, adoptada por la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de 1993 de las Naciones Unidas, cuyo principio No.20 “reconoce la dignidad intrínseca y la incomparable contribución de las poblaciones indígenas . . . y reitera firmemente la determinación de la comunidad internacional de garantizarles el bienestar económico, social y cultural . . .”.
- i) La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobando un Segundo Decenio de los Pueblos Indígenas del Mundo (2005-2015);
- j) La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2001), que recoge la importancia de consolidar la diversidad cultural como un imperativo ético y resalta el papel que en ella juegan los pueblos indígenas;
- k) La Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales en 2005;

- l) El Plan de Acción de Durban;
- m) El Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en la décima reunión de la Conferencia de las Partes, el 29 de octubre de 2010.

En el sistema interamericano, dos instrumentos jurídicos destacan:

- n) La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948), y,
- o) La Convención Americana de Derechos Humanos (1969).
- p) La Carta Democrática Interamericana (suscrita el 11 de septiembre del 2001 durante el XXVIII Período de Sesiones. Su artículo 9 establece que la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.

También resulta de trascendental importancia, la Jurisprudencia creada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la resolución de casos que tratan sobre la violación de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Además de los instrumentos jurídicos indicados, destacan algunos documentos que reflejan la política de diversas organizaciones, entre ellas algunas pertenecientes al Sistema de las Naciones Unidas. Estos documentos son:

- q) El documento de trabajo El PNUD y los Pueblos Indígenas: una política de compromiso (2001), que establece los principios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en este ámbito;
- r) El Informe sobre Desarrollo Humano 2004 del PNUD, cuyo tema central es la libertad cultural;
- s) La Estrategia de la Organización Mundial de la Salud sobre medicina tradicional 2002-2005;
- t) La directiva operacional 4.10 sobre Pueblos Indígenas del Banco Mundial;
- u) El documento de política y normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI)¹¹, vigente desde el 30 de abril de 2006, que favorece el respeto de las normas internacionales y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas por las empresas que realizan actividades dentro de las tierras y territorios que ocupan;

- v) La política operativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dirigida a los pueblos indígenas, y una estrategia para el desarrollo indígena. Ambas han sido aprobadas en el año 2006.

14. En los últimos treinta años, ha habido importantes avances en la construcción de los marcos jurídicos y normativos que definen de modo más sustantivo los derechos de los pueblos indígenas, y regulan sus relaciones con los estados nacionales. Uno de ellos es el Convenio No.169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT, ratificado por veinte países en el mundo. De este total 15 (quince) países son latinoamericanos, siendo éstos: México (1990), Bolivia (1991), Colombia (1991), Costa Rica (1993), Paraguay (1993), Perú (1994), Honduras (1995), Guatemala (1996), Ecuador (1998), Argentina (2000), Brasil (2002), Dominica (2002), Venezuela (2002), Chile (2008) y Nicaragua (2010).

15. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General en el año 2007, ha sido la respuesta a un reclamo histórico de los pueblos indígenas, para contar con un instrumento jurídico y político que protegiera sus derechos humanos. Su contenido destaca el reconocimiento de derechos políticos, territoriales, económicos, sociales y culturales de esos pueblos. Aunque la Declaración no es vinculante, como ocurre con el Convenio No.169, su aprobación ha sido un paso muy importante relacionado con el reconocimiento, promoción y protección de los derechos y libertades de estos pueblos. Y, constituye un marco de normas mínimas para su supervivencia, dignidad y bienestar. En la actualidad, la gran mayoría de los países latinoamericanos y del caribe han adoptado esta Declaración.

16. La Declaración establece el derecho de los pueblos indígenas a su libre determinación, a su derecho por la posesión y dominio sobre tierras y territorios que han ocupado desde tiempos ancestrales o tradicionalmente, al consentimiento, libre, previo e informado cuando los Estados adopten decisiones que los afecten. El artículo 32 de la Declaración señala en su numeral 1 que “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos”; en el numeral 2., se establece que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. El requisito de la consulta previa pretende evitar la imposición de una decisión que pueda afectar significativamente las vidas de las personas y de los pueblos indígenas, de conformidad con el derecho a la libre determinación que también se encuentra amparado en la propia Declaración.

17. En el ámbito territorial, la Declaración pone de relieve el derecho de los pueblos indígenas, a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido (Artículo 26.1); a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen; y que les sean asegurados por

los Estados el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos (Artículo 26.2/3); a obtener reparación (a través de restitución o indemnización) por las tierras, territorios y recursos que les hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado (Artículo 28.1); a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos (Artículo 29.1); y, a determinar y elaborar prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos (Artículo 32.1).

18. Las modificaciones en los ordenamientos jurídicos internos, realizados por los países, con el propósito de aplicar las obligaciones emanadas del derecho internacional, muestran avances importantes aunque diferenciados. En los países Latinoamericanos y del Caribe, se han producido en los últimos años reformas constitucionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas en los ámbitos político, económico, social y cultural. Ejemplos recientes, son los casos de Ecuador y Bolivia que han llevado a cabo no sólo reformas sino promulgado nuevos marcos constitucionales. De esta forma Bolivia se ha constituido, mediante su nueva constitución, en un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario...intercultural... y con autonomías...”¹². El artículo 2, de la constitución boliviana establece que “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación..., que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales...”.

19. En la nueva constitución, se define al estado ecuatoriano como un “Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático,...intercultural, plurinacional...”¹³. El Artículo 57 reconoce y garantiza a “...pueblos y nacionalidades indígenas...” un conjunto de derechos colectivos entre los que se encuentran¹⁴: 1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social (numeral 1); 2. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles (numeral 4); 3. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita (numeral 5); 4. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras; 6. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta...será obligatoria y oportuna...”.

12.- Artículo 1.

13.- Artículo 1.

14.- Artículo 57, numerales: 1, 4, 5, 6 y 7.

20. En Nicaragua, además de los cambios en la Constitución, fue establecido un Régimen de Autonomía para los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe, mediante la promulgación e implementación del Estatuto para la Autonomía de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua, Ley No.28, y su correspondiente reglamento. Este proceso de Autonomía tiene 20 años de estar desarrollándose y profundizándose. Para ello se han promulgado nuevas legislaciones que complementan algunos aspectos del Estatuto. Ejemplo de estas Leyes es la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y los Ríos Coco, Bocay, Indio y Maíz, aprobada en diciembre del 2002 por la Asamblea Nacional, mediante la cual se organizan las autoridades indígenas territorialmente y se le asignan competencias en materia de gestión territorial y de administración de los recursos naturales.

21. Otros países que han realizado reformas constitucionales o bien adoptaron legislaciones especiales relativas a los pueblos indígenas y sus derechos individuales y colectivos son¹⁵: Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. En 1996, se reformaron los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de la Constitución mexicana. Sin embargo esta reforma se considera aún insuficiente. Otros países, como Chile, por ejemplo, “el Senado de la República votó afirmativamente sobre la idea de llevar a cabo una reforma constitucional en materia indígena, sobre la base de una iniciativa legislativa promovida por el Gobierno en acuerdo con una Comisión del Senado”¹⁶

III. LOGROS RELEVANTES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

22. Los pueblos indígenas de Latinoamérica y el Caribe, han obtenido considerables logros en el reconocimiento de sus derechos, cuyo sustento jurídico-normativo lo constituyen tanto los instrumentos jurídicos en el ámbito internacional, así como los cambios en las legislaciones de sus respectivos países. Estos cambios se constatan a través de la promulgación de nuevos marcos constitucionales o reformas significativas a los existentes, así como la aprobación y puesta en vigencia de legislaciones especiales que favorecen el reconocimiento, respeto y ejercicio de sus derechos fundamentales. No obstante, se observa claramente que estos instrumentos jurídicos internacionales, así como las legislaciones nacionales aún distan mucho de ofrecer las suficientes garantías para proteger a los pueblos indígenas de los abusos de sus derechos.

23. Diversas organizaciones del movimiento indígena de Latinoamérica y el Caribe, han estado en las últimas décadas trabajando proactivamente para que los pueblos indígenas cuenten con instrumentos jurídicos internacionales que contribuyan al reco-

15.- E/CN.4/2006/78

16.- A/HRC/12/34/Add.6

nocimiento de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales fundamentales. Asimismo, han impulsado la creación de instancias que favorezcan la aplicación de estos instrumentos por parte de los Estados Nacionales en esta región del continente. También estas organizaciones han impulsado en sus respectivos países, propuestas para introducir modificaciones y reformas políticas y legislativas a favor de los pueblos indígenas.

24. El tema del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, además de su derecho a participar en los procesos de toma de decisiones, recibió también especial atención por parte del Relator Especial de Naciones Unidas y del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En su 20avo informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre de 2009, el Relator Especial dedicó la segunda mitad de su informe a un análisis del deber de los Estados para consultar con los pueblos indígenas en temas que les afectan. También en septiembre de 2009, el Consejo de Derechos Humanos solicitó al Mecanismo que llevara a cabo un estudio sobre los pueblos indígenas y su derecho a participar en la toma de decisiones.

25. En los últimos años, se ha brindado una considerable atención a las consecuencias, que para los pueblos indígenas tiene, el Cambio climático. Este es un enorme desafío al que todos nos enfrentamos en la protección del planeta. Las dos últimas Conferencias sobre el Cambio Climático celebradas en Copenhague y Cancún, ha contado con la presencia de muchos representantes de pueblos indígenas. Muchas organizaciones han realizado llamamientos a “Detener la catástrofe mediante la Movilización global en Defensa de la Madre tierra y los Pueblos y la Soberanía Alimentaria, contra la mercantilización de la Vida, Contaminación y Criminalización”. Y, en la búsqueda de modalidades que contribuyan a una “Acción efectiva y menos retórica en la aplicación de las Convenciones de Diversidad Biológica y Cambio Climático y respeto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades”¹⁷.

26. El Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático (FIPICC) ha trabajado intensamente para asegurar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de las negociaciones en torno a la Convención- Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En este proceso se ha conseguido incluir una referencia a la Declaración en el borrador de decisión sobre la Reducción de las Emisiones producto de la Deforestación y la Degradación ambiental (REDD) que se acordó en la reunión de Copenhague. Sin embargo, los pueblos indígenas enfrentan el gran desafío porque sus derechos fundamentales, sus tierras, territorios y recursos naturales, sean respetados.

27. Los pueblos indígenas continúan con su férrea oposición a costa de muchas vidas de sus integrantes, a los megaproyectos impulsados por los Estados Nacionales, así como a las acciones de muchas empresas transnacionales y nacionales que no re-

17.- Declaración del “Diálogo de Alternativas y Alianzas de los Movimientos Indígenas, Campesinos y Sociales del Abya Yala”. La Paz, 26 de febrero 2009

conocer sus derechos colectivos sobre sus recursos naturales. Agresivos proyectos de desarrollo. En muchos países latinoamericanos como Guatemala, Panamá, Perú, Ecuador, ha habido grandes movilizaciones de los pueblos indígenas en contra de estas actividades empresariales y los megaproyectos impulsados por el Estado. En Perú se han presentado uno de los mayores conflictos sociales entre los pueblos indígenas y el Gobierno en la historia reciente del país, ahora conocido como los Sucesos de Bagua. Este conflicto provocó la muerte de 34 personas cuando una ocupación pacífica indígena de una carretera violentamente desalojada por la policía militar. Mediante esta manifestación se expresó el rechazo de los pueblos awajún y los wampis sobre las actividades mineras que se estaban llevando a cabo en sus territorios.

28. Las políticas estatales de muchos países latinoamericanos, dirigidas a la criminalización de las demandas de los pueblos indígenas por el reclamo de sus derechos, también se han encontrado con la férrea oposición de estos pueblos. Los casos más emblemáticos los encontramos en Brasil, Chile, Guatemala y Perú. En Guatemala, por ejemplo, los recientes acontecimientos ocurridos en protesta contra las actividades de las empresas mineras en territorios indígena, ha provocado la reacción del Relator Especial Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, quien ha señalado, en informe inédito, que “Guatemala actualmente experimenta un clima de significativa inestabilidad social significativa y malestar respecto a actividades en los territorios tradicionales de Pueblos Indígenas, que tiene impactos serios sobre los derechos de Pueblos y pone en peligro la gobernanza y el desarrollo económico del país”, y agrega que se “recibieron testimonios que alegan que hubo hostigamiento y ataques contra líderes de la comunidad, y que los testimonios señalan que las fuerzas de seguridad y las empresas mineras podrían ser detrás de tales incidentes”¹⁸.

29. Los pueblos indígenas han venido fortaleciendo sus capacidades organizativas, y su presencia en distintos foros e instancias nacionales, regionales e internacionales, en las que se discuten muchos de los problemas que les atañen. Los niveles de organización han venido desarrollándose con paso firme, y muchas redes y organizaciones actualmente despliegan distintos esfuerzos en pro del reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas a los cuales representan. En Latinoamérica y el Caribe destacan, entre otras, las siguientes organizaciones y redes:

1. Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, integrada por:

- a. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDSEP en Perú;
- b. Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana, APA- Guyana;
- c. Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB - Bolivia;
- d. Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, COIAB -Brasil;

18.- Desarrollo Violento: Comunidades se Defienden de la Represión en Curso en Guatemala. Escrito por Sandra Cuffe, 17 de marzo de 2011.

- e. Confederación de las Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAE – Ecuador;
 - f. Federación de Organizaciones Autóctonas de Guyana Francesa, FOAG – Guyana Francesa;
 - g. Consejo Nacional Indio de Venezuela, CONIVE- Venezuela;
 - h. Organización Indígenas de Surinam, OIS - Surinam; y
 - i. Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC – Colombia
- 2. Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)**
 - 3. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI**
 - 4. Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC.**
 - 5. Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI**
 - 6. Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu Bolivia, CONAMAQ**
 - 7. Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI**
 - 8. Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina, ONPIA**
 - 9. Consejo Indígena de Centro América (CICA)**
 - 10. Coordinadora Kaqchikel POP JAY**
 - 11. Red Continental de Mujeres indígenas**
 - 12. Alianza de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica**
 - 13. Coordinadora Indígena Mesoamericana (CIMA)**
 - 14. El Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI)**
 - 15. El Foro Indígena de Abya Yala de Cambio Climático**

30. Los pueblos indígenas han venido estableciendo las bases dirigidas a impulsar un modelo de desarrollo con identidad basado en el buen vivir. Para ello diversas organizaciones representativas de los pueblos indígenas en América Latina y el Caribe, han venido avanzando en la reflexión y el debate sobre la visión de buen vivir de los pueblos indígenas. Sin embargo, aún hay mucho por hacer de manera que se pueda contar con un modelo debidamente aterrizado que se contraponga a los modelos económicos y sociales sustentados en la matriz civilizatoria occidental. Estas organizaciones indígenas, han avanzado en la divulgación sobre su visión de desarrollo y cuentan con publicaciones al respecto, como es el caso de la CAOI. Otras han retomado el tema en sus planes estratégicos de desarrollo, como la COICA. En el caso de CICA en Centroamérica, se ha venido aplicando una estrategia de planificación propia de los proyectos comunitarios para el buen vivir, denominado Balu Wala. Esta metodología permite aplicar el CPLI, tomar en cuenta la cosmovisión y espiritualidad de los pueblos en el diseño de sus proyectos, adecuarlas a su experiencia y practica de economía comunitaria y al contexto socio ambiental. Producto de la aplicación del Balu Wala se han diseñado proyectos comunitarios.

IV. PRINCIPALES DESAFÍOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

31. Diversos desafíos enfrentan los pueblos indígenas en los países de Latinoamérica y el Caribe. Estos pueblos, y sus organizaciones más representativas, se caracterizan por desarrollar, en condiciones desventajosas, su ardua lucha en pos de la supervivencia física y cultural en un mundo dominado por la inseguridad medioambiental, las agresiones en nombre del desarrollo y la continua criminalización de modos de vida y sus protestas sociales.

32. Uno de los grandes desafíos que enfrentan estos pueblos es la superación de sus condiciones de pobreza y pobreza extrema. Dentro de la población de cada uno de los países, forman el segmento más pobre, con condiciones económicas precarias, bajos niveles de ingreso económico y un alto grado de marginación y exclusión, y poca participación en el ámbito de la economía formal, si bien cuentan en sus territorios con recursos naturales muy valorados. Son las corporaciones internacionales y empresas nacionales, las que explotan esos recursos sin que ello signifique beneficio para los pueblos indígenas.

33. Los pueblos indígenas no han obtenido mejoras sustanciales en sus condiciones sociales, económicas y políticas. Por el contrario, la falta de atención a las demandas por parte del Gobierno, pone de manifiesto la escasa importancia del tema indígena en las políticas públicas, lo que de por sí refleja su escasa o nula participación en la formulación de estas políticas.

34. Un serio desafío para los pueblos indígenas en América Latina y el Caribe, lo constituye la existencia de la “brecha de implementación”, entre las leyes que favorecen los derechos de estos pueblos, y la aplicación práctica de sus contenidos. Esto demuestra que para los Estados la cuestión indígena, no es una prioridad, y que cada vez se consolida la deuda histórica con estos pueblos. Esta situación aumenta la vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a las presiones y amenazas derivadas de un modelo de desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales, por ejemplo, el despojo territorial para la instalación de actividades extractivas a gran escala como la minería, las represas y los agro combustibles.

35. Las condiciones de vida de los pueblos indígenas continúan deteriorándose. Los indicadores socioeconómicos de salud, educación, vivienda, empleo e ingresos, continúan mostrando una enorme brecha entre las poblaciones indígenas y las no indígenas.

36. En líneas generales, las cifras censales invisibilizan sub-estiman o muchas veces no captan los indicadores relevantes para los pueblos indígenas. En muchos de los países, se carece de bases estadísticas desglosadas, sobre los pueblos indígenas y, en particular, sobre las mujeres indígenas, aún cuando sus condiciones son precarias y sufren de las mayores carencias sociales, sobre todo en materia de salud, educación y empleo.

37. Las políticas económicas y sociales, que impulsan los estados nacionales de Latinoamérica y el Caribe, dirigidas a los núcleos de población indígena son poco eficaces y su cobertura dista mucho de satisfacer las grandes necesidades y demandas socioeconómicas de estos pueblos. Pocos esfuerzos en este sentido pueden ser calificados de eficaces. Las cifras sobre la pobreza que sufren los pueblos indígenas dan cuenta de esa ineficacia. Así por ejemplo, en México, las cifras relativas a los pueblos indígenas muestran que 75% de sus poblaciones, padece pobreza multidimensional, es decir, carece de ingresos suficientes para la adquisición de bienes y servicios, y 39.2% se ubica en pobreza extrema por presentar más de cuatro carencias sociales simultáneas, de las cuales alimentación, acceso a la educación, servicios de salud y vivienda digna son las más comunes. Los niveles de desnutrición siguen siendo muy elevados para la población indígena. En Guatemala, las cifras también son elocuentes. El informe de Desarrollo Humano de 2008, indica que el 73% de los indígenas son pobres y de ellos el 26% son extremadamente pobres, contra el 35% de pobres en los no indígenas y entre ellos, solo el 8% en extrema pobreza¹⁹.

38. Los pueblos indígenas en Latinoamérica y el Caribe se ven enfrentados, a los efectos de las crisis financieras que se suceden cíclicamente y que les afecta de modo significativo. A esta situación se suman los fenómenos derivados del cambio climático y los impactos que sufren por la ocurrencia de desastres naturales, dado su alto grado de vulnerabilidad física, social y ambiental.

39. Las mujeres indígenas enfrentan a su vez mayores desafíos no solo por ser indígenas sino también por ser mujeres. Aún cuando las mujeres indígenas contribuyen con su trabajo y con sus conocimientos a la vida comunitaria, su vida productiva y reproductiva, raras veces se registra, no se valora y no se retribuye, por lo general no se cuenta con información fidedigna sobre su realidad. Las mujeres indígenas fueron y son sistemáticamente excluidas de las oportunidades y del acceso a los recursos naturales, de la producción, empleos formales e informales, espacios de toma de las decisiones, no tienen acceso a los servicios de la salud pública, educación, ni a los recursos tecnológicos. Asimismo, la mortalidad materna, es uno de los indicadores de pobreza más significativos, y afecta de manera desproporcionada a las mujeres indígenas²⁰.

40. En América Latina, los Estados y los gobiernos en turno, no han protegido a las mujeres indígenas contra la violencia, por el contrario, frecuentemente los mismos Estados han ejercido violencia contra ellas. En medio de los conflictos armados, las mujeres indígenas han sido violentadas, en los servicios públicos de salud han sufrido esterilización masiva, maltrato, abuso y abandono, además se considera violencia institucional, la falta de acceso a los servicios públicos, siempre escasos y dispersos y limitados. En

19.- IWGIA (2010). Mundo Indígena, 2010.

20.- Ver publicación "El Impacto de la Crisis Económica en la Vida de las Mujeres Indígenas. Documento base para la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe: "Qué Estado para que igualdad?" Foro Internacional de mujeres Indígenas, 2010.

los espacios laborales, escolares y políticos también han sido violentadas. La discriminación en si es violencia contra las mujeres indígenas, el empobrecimiento por políticas excluyentes también constituye una violencia contra las mujeres indígenas, la violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas se traducen en violencia contra su salud, contra su integridad y contra su vida.

41. Los denominados intereses nacionales, en el ámbito económico han estado comúnmente en contradicción con los intereses particulares de los pueblos indígenas, en los estados nacionales de Latinoamérica y el Caribe. El balance entre los intereses económicos nacionales frente al derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y expresar su consentimiento libre, previo e informado, es desfavorables para estos pueblos. Diversos ejemplos pueden ponerse de manifiesto. Tal es el caso del “Plan de Aceleración del Crecimiento” impulsado por gobierno brasileño, que contiene acciones, como la construcción de cientos de plantas energéticas hidroeléctricas en tierras indígenas de la Amazonía, sin que en ninguno de los casos se haya presentado este Plan a los pueblos indígenas afectados para su consulta previa.

42. Los pueblos indígenas de Latinoamérica y el Caribe, sufren de agresiones sistemáticas a sus intereses, derechos, y a su integridad física. Muchas de estas agresiones se producen, con una respuesta violenta de estos Estados a la renuencia de los pueblos indígenas a implementar proyectos que les causan perjuicios considerables en sus tierras, territorios, recursos naturales y hábitat. En la práctica, la imposición de programas de desarrollo a gran escala supuestamente en aras de los intereses del desarrollo nacional, produce masivas desalojos y violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas e, incluso, muertes a sus integrantes.

43. Los pueblos indígenas, enfrentan un fuerte desafío provocado por la existencia de fuertes intereses económicos y comerciales de las grandes empresas nacionales y corporaciones internacionales, por el acceso a sus tradicionales zonas de aprovechamiento de sus recursos, que se encuentran en sus tierras y territorios, lo que limita el acceso a sus tradicionales sitios de pesca, y terrenos de caza, entre otros. Estos intereses, son defendidos por los estados nacionales, en menoscabo de los intereses y derechos de los pueblos indígenas, recurriendo para ello al uso de la fuerza y la práctica sistemática de una política de violencia dirigida en contra de las poblaciones indígenas.

44. Otro desafío que enfrentan los pueblos indígenas, es la amenaza permanente y ejecución, por las autoridades nacionales, de desalojos forzosos de comunidades indígenas para dejar espacio libre a explotaciones petrolíferas y mineras además de agroindustrias. Ejemplo de ello, ocurre en las tierras ancestrales pertenecientes al pueblo Mapuche, tanto en Chile como en Argentina, donde han dado lugar a una política de criminalización sistemática de los pueblos que han osado protestar. Cuando el movimiento mapuche en el sur de Argentina se organizó para reclamar por sus legítimos derechos, tuvo que hacer frente a falsas acusaciones de separatismo realizadas por la élite política tradicional, junto a los cargos de enaltecimiento de la violencia y contacto con organizaciones terroristas extranjeras.

V. AGENDAS Y PRIORIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA ENCARAR DESAFIOS

Son múltiples y variados los temas que preocupan a los pueblos indígenas de Latinoamérica y el Caribe, a sus autoridades y organizaciones representativas. Entre ellos cabe mencionar los siguientes:

1. La defensa y protección de la tierra, el territorio y los recursos naturales, incluidos los bosques
2. La invasión de sus territorios por las multinacionales dedicadas a las industrias extractivas, las cuales profundizan las condiciones de desigualdad y miseria de las poblaciones locales y también porque ponen en riesgo la supervivencia de toda la humanidad al destruir a la Madre Tierra.
3. La militarización de sus territorios, manifiesta en la presencia de bases y campos militares de los Estados, así como de fuerzas irregulares
4. El derecho a la consulta a los pueblos indígenas, por parte de los Estados, las empresas y corporaciones, organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, Agencias de Cooperación, y otras organizaciones involucrados, en la elaboración y puesta en práctica de legislaciones, y la formulación y aplicación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de desarrollo.
5. El impulso de megaproyectos por parte de los Estados y Empresas en tierras y territorios pertenecientes a los pueblos indígenas.
6. La falta de correspondencia entre el derecho internacional y nacional, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, y las políticas operativas de las Instituciones Financieras Internacionales.
7. La aplicación del principio del consentimiento libre, previo e informado, y las carencias de mecanismos y procedimientos, jurídicamente sustentados, que aseguren esa aplicación.
8. La justicia penal y las prácticas, en este ámbito, de discriminación y exclusión hacia los pueblos indígenas.
9. La criminalización de sus justas demandas por el reconocimiento, ejercicio y respeto pleno de sus derechos fundamentales de conformidad con el derecho internacional y las legislaciones nacionales de los Estados
10. La violencia sistemática hacia sus autoridades y representantes de organizaciones indígenas
11. La presión constante, desalojo de sus sitios ancestrales y el desplazamiento forzoso de sus poblaciones
12. La amenaza de extinción física y cultural de decenas de pueblos indígenas
13. La ausencia de mecanismos de salvaguarda de sus derechos fundamentales o su ineficacia

14. El cambio climático y sus consecuencias para la vida, cultura, salud humana y ambiental, formas de vida tradicional, infraestructura local, seguridad y soberanía alimentaria, y la existencia misma de los pueblos indígenas
15. La falta de compromiso de los principales países contaminantes por asumir compromisos serios para la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero y el pago de su deuda climática
16. La utilización de mecanismos financieros relacionados con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático que pueden suponer la incorporación de los bosques y otros ecosistemas a los mercados financieros internacionales y, eventualmente, la usurpación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus tierras y territorios.
17. La aplicación del Convenio No.169 y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
18. La situación de la salud y educación de la niñez, adolescencia y juventud indígena, y las marcadas diferencias en los principales indicadores sociales, en relación a la no indígena, lo que pone en riesgo el futuro de los pueblos indígenas.
19. La situación de la mujer indígena cuyo lugar sagrado y responsabilidad para la preservación de la vida, cultura y existencia de los pueblos indígenas ha sido, es y será fundamental
20. La bio piratería y el reconocimiento, respeto y protección a sus derechos de propiedad intelectual sobre sus bienes y recursos, incluidos los genéticos, su medicina tradicional, sus conocimientos y saberes tradicionales, sus técnicas y tecnologías.

Para dar respuesta a estas preocupaciones las organizaciones de los pueblos indígenas, han considerado priorizar dentro de su agenda la atención de los siguientes temas:

1. Reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, en particular a su identidad, libre determinación, autogobierno y autodeterminación.
2. Impulso al reconocimiento, ejercicio y defensa de los derechos territoriales y sobre los recursos naturales y recursos genéticos.
3. Defensa de recursos hídricos pertenecientes a los pueblos indígenas.
4. Acciones para contrarrestar las actividades de las empresas nacionales y corporaciones transnacionales pertenecientes a las industrias extractivas.
5. Definición de mecanismos jurídicos para la aplicación del principio del consentimiento libre, previo e informado en todos los ámbitos y niveles.
6. Modificación de políticas operativas de Instituciones Financieras Internacionales.
7. Garantías jurídicas: Aplicación y/o cumplimiento de las leyes, convenios y tratados, internacionales. Salvaguardas de los derechos de los pueblos indígenas.

8. Impulso de acciones para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, y medidas de adaptación al cambio climático.
9. Análisis de mecanismos relacionados con la venta de servicios ambientales, en particular aquéllos que buscan mercantilizar los territorios y la naturaleza a través de la creación y venta de estos servicios, así como de sus implicaciones sobre sus tierras, territorios, ecosistemas, producción de alimentos y seguridad alimentaria.
10. Impulso del desarrollo con identidad, mediante la operacionalización del modelo del “buen vivir”, y la sistematización de experiencias de aplicación del modelo por los pueblos indígenas en los países latinoamericanos y del caribe.
11. Fortalecimiento de instancias que contribuyan al diálogo entre los pueblos, con los Estados, organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, Instituciones Financieras Internacionales, Agencias de Cooperación, Organizaciones no Gubernamentales, y otras organizaciones.
12. Mejoramiento de la situación de niñez, adolescencia y juventud indígenas, y mejoramiento de los sistemas de acceso y servicios de educación y salud.
13. Acceso de la juventud indígena a sistema de educación superior intercultural, facilitación de intercambios, e investigación por parte de las universidades y centros de investigación indígenas, de líneas estratégicas que demandan las organizaciones indígenas
14. Atención a los problemas que enfrentan las mujeres indígenas, y que les impide su participación efectiva en los distintos espacios de participación social y política a nivel nacional e internacional.
15. Impulso de acciones para poner un alto a la secular exclusión de los pueblos indígenas por los Estados.
16. Exigencia a los Estados, que aplican política de criminalización, a que pongan fin a los procesos de criminalización de las demandas de los movimientos sociales, en particular de los pueblos indígenas.
17. Revisión de proyectos de producción de agro combustibles que cambian el uso de la tierra y amenazan la soberanía y la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas.
18. Análisis de situación relacionada con el concesionamiento de áreas, dentro de territorios indígenas, otorgadas por los gobiernos nacionales para la realización de actividades extractivas como la minería y el petróleo.
19. Revisión de la situación relacionada con la militarización de los territorios indígenas y su impacto en las poblaciones indígenas, y propuestas de acciones.
20. Incorporación en agendas parlamentarias de la aprobación de leyes de: Derecho a la Consulta, Minería y Agua y demás recursos.
21. Participación en el diseño de boleta censal para inclusión de datos desglosados de los pueblos indígenas en los países de Latinoamérica y el Caribe.

VI. PRINCIPALES RECOMENDACIONES QUE HACEN AL FORO PERMANENTE, LAS ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

1. El Foro Permanente debe revisar la eficacia de los mecanismos utilizados por el Sistema de Naciones Unidas, para que los Estados cumplan con los derechos de los pueblos indígenas y atiendan las recomendaciones tanto del Foro, como de otros organismos y órganos de las Naciones Unidas.
2. El Foro debe prestar especial atención a la situación de los pueblos indígenas que se encuentran amenazados por las políticas de por la militarización de sus territorios y criminalización de los Estados. Y, debe actuar proactivamente, en conjunto con el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos, y otras instancias pertinentes, para que los Estados adopten medidas apropiadas relacionadas con las garantías que deben ser otorgadas a los pueblos indígenas, sus autoridades y organizaciones representativas.
3. El Foro debe impulsar la elaboración de propuestas de mecanismos jurídicos y administrativos que contribuyan a la aplicación efectiva del principio del consentimiento libre, previo e informado por parte de los Estados, las Instituciones Financieras Internacionales, las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, las Corporaciones Transnacionales y Empresas Nacionales, las Agencias de Cooperación y otras organizaciones que realicen actividades dirigidas a o en territorios de los pueblos indígenas.
4. El Foro debería considerar la posibilidad de establecer mecanismos que incluyan en un Ranking a aquéllos Estados, organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, Instituciones Financieras Internacionales, Agencias de Cooperación, Corporaciones Transnacionales y Empresas Nacionales y otras organizaciones, en función del grado en que respetan o no los derechos de los pueblos indígenas establecidos en el derecho internacional, y a través de las legislaciones nacionales pertinentes.
5. El Foro debe promover y fomentar la participación efectiva de las autoridades y organizaciones representativas de los pueblos indígenas, en los distintos espacios e instancias internacionales en donde son analizados su situación particular, así como la aplicación de los instrumentos del derecho internacional relacionados con sus derechos. Para ello debería considerar en principio una adecuada acreditación de tal representación y de los alcances y sustantividad de la misma en relación a los intereses de sus pueblos.
6. El Foro debe elaborar propuestas que contribuyan a que los pueblos indígenas estén mejor preparados para enfrentar las serias consecuencias derivadas del Cambio Climático. Y, asesorar a las autoridades y organizaciones indígenas, para la definición de estrategias que contrarresten esas consecuencias.

7. El Foro debe promover, en el caso de las discusiones y elaboración de propuestas, relacionadas con el Cambio Climático, en el ámbito internacional, que los mecanismos Indígenas existentes de la ONU, incluso la Comisión funcional del ECOSOC, el Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas, el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos, tengan acreditación y participación en los COP y reuniones intersesionales. Esta participación debe ser de igualdad con otras agencias y programas de la ONU.
8. El Foro debe fomentar dentro de la CMCC, la creación de un fondo dedicado y dirigido al apoyo financiero de los Pueblos Indígenas que impulsan procesos en el marco de la CMCC.
9. El Foro debería concertar acciones con las agencias de las Naciones Unidas como el PNUD, UNICEF, OPS, UNFPA y UNESCO, a fin de que se impulsen programas especialmente dirigidos a mejorar las condiciones en los ámbitos de la educación y la salud a la niñez, adolescencia, juventud, y a las mujeres indígenas.
10. El Foro debe revisar el nivel de cumplimiento de sus recomendaciones, y determinar el grado de eficacia de los resultados de las que sean aplicadas, haciendo para ello una valoración cualitativa de esos resultados.

VII. PRESENTACIÓN DE INTERESES Y PRIORIDADES

Durante el primer día de la reunión del Caucus de Latinoamérica y el Caribe, fueron presentados distintos planteamientos en torno a los intereses y prioridades que deberían ser considerados para presentarlos al Foro Permanente. Entre estos se encuentran los siguientes:

1. Es fundamental el reconocimiento, ejercicio y respeto pleno de los derechos Indígenas, de conformidad con lo establecido en el Convenio No.169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
2. El desarrollo con identidad no solamente debe ser visto desde el discurso, puesto que ya existen experiencias de definición y aplicación de una metodología con instrumentos, en el nivel técnico y político, cuál es el contenido del buen vivir. Son herramientas que avanzan hacia adelante. Una de estas experiencias la ha desarrollado el CICA.
3. En el marco de este modelo de desarrollo se ha priorizar el rescate del sistema de producción tradicional que ha mantenido a los pueblos indígenas. Se busca lograr la soberanía alimentaria para sustentar la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas.
4. El Tema de Seguridad territorial no ha sido posible mantenerlo, y esto reduce la posibilidad de desarrollar este modelo hacia adelante.

5. El tema relacionado con la Estrategia de Cambio Climático, es de suma importancia, por su impacto en todos los territorios.
6. El principio de Consentimiento Previo, Libre e Informado tiene que ver con todo lo que se ha venido trabajando. No hay que confundir los conceptos, pues la consulta es un mecanismo, el consentimiento es el elemento fundamental. La herramienta esencial es el consentimiento.
7. El impacto de los grandes proyectos o megaproyectos a nivel continental, también es también un tema de mucha importancia.
8. El funcionamiento de los organismos financieros que generalmente contravienen lo dispuesto en la Declaración y no respetan los derechos de los pueblos indígenas.
9. Un tema de interés, son las Políticas de Estado que favorecen a las corporaciones, que procuran el control sobre los territorios indígenas por los bienes naturales pertenecientes a los pueblos indígenas. Al los Estados les interesa por los ingresos que le representa.
10. Las Corporaciones manifiestan un poder creciente, y un interés manifiesto y sistemático por despojar los territorios e imponer su política extractivista, con el apoyo del Estado y el ejercicio de la violencia institucionalizada.
11. También crece un paramilitarismo que favorece a las corporaciones.
12. Los recursos estratégicos de América Latina, bosques, agua, biodiversidad, petróleo, Minería constituyen los soportes económicos de los Estados, con la secuela de vulneración de los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como la contaminación ambiental. Otra secuela es el debilitamiento de las economías nacionales que son dependientes de los precios internacionales.
13. Los problemas de los pueblos indígenas respecto al Agua. El agua genera conflictos. La presencia militar de las grandes potencias, como EUA en nuestro continente se concentra en regiones donde está el Agua. La protección militar y policial. La criminalización asociada al derecho de protesta de los pueblos indígenas.
14. El incumplimiento sistemático de derechos esenciales de pueblos indígenas: a. Libre determinación, b.Territorio, c. Consulta, y, d.Consentimiento Previo, Libre e Informado.
15. La vida de los pueblos indígenas se rige por convivencia armónica con la naturaleza. Cuando se les despoja a los pueblos indígenas de sus tierras, territorios y bienes naturales, esto hace que además sean despojados de su identidad, espiritualidad, sistema de organización, pensamiento propio como pueblos indígenas, de su economía comunitaria.
16. Los pueblos indígenas están permanentemente agredidos, así como la biodiversidad que es el sustento de los pueblos indígenas y la esperanza de los habitantes del planeta.
17. Se acentúa la pobreza y hay sistemas de salud caracterizados por la exclusión hacia los pueblos indígenas.

18. Se considera que es el modelo económico imperante, el causante de la crisis global, la crisis Climática y la crisis alimentaria.
19. Los pueblos indígenas son los más vulnerables a impactos del Cambio Climático, ante los desastres naturales, la afectación de su calendario agrícola, la pérdida de sus semillas tradicionales, entre otros efectos.
20. La aprobación de la declaración americana de los derechos de los pueblos indígenas, sobre los mismos derechos consignados en la Declaración, se viene postergando. Y, este instrumento es muy importante ya que ésta contempla particularidades de los pueblos indígenas de Latinoamérica y el Caribe, respecto al resto del mundo. América Latina tiene la mayor población indígena de pueblos del planeta, la mayor diversidad de cultural, y la mayor biodiversidad.
21. Un problema existente es la débil institucionalidad de los Estados, la corrupción extendida a todos los niveles, la manipulación de los grupos de poder. El surgimiento de clanes familiares en las esferas del poder, como los Kirhsner en Argentina, o los Fujimori en Perú.
22. El tema de violencia de es suma actualidad. Cuando se habla de violencia no es solo es violencia doméstica, sino la violencia en todas su formas. La violencia sistemática y dirigida hacia los pueblos indígenas es evidente. Miles de hermanos indígenas han sido asesinados por la Fuerza pública, pero también han sido víctimas de grupos insurgentes y paramilitares. La violencia política afecta a la mujer y a la niñez y a los pueblos indígenas en su conjunto. El relator especial debe tomar en cuenta el impacto de la violencia política y la brecha en el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas.
23. Hay un endurecimiento de leyes, hasta en los supuestos países progresistas como en el Ecuador. Y, en vez de protegerse los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas se protege los intereses de las Corporaciones.
24. Es común en muchos Estados Latinoamericanos, la aplicación de una política sistemática de criminalización, por parte de los gobiernos. Se criminalizan justas demandas relacionadas con el ejercicio de los derechos que han sido establecidos y reconocidos por el derecho internacional.
25. El racismo y discriminación están presentes y es un desafío pendiente de resolver, y se debería de visibilizar desde el Estado, con programas de luchas contra el racismo y la discriminación y con prácticas inclusivas de la niñez, juventud y mujeres.
26. La trata de personas, la explotación de niños y niñas, la prostitución es también un tema presente y que demanda una atención priorizada.
27. El derecho a la participación política, y el derecho de las mujeres, niñez y juventud de contar con programas desde el Estado, desde el Sistema de Naciones Unidas, para contar con capacidades de propuestas.
28. No es una generalidad tener oportunidades para las mujeres indígenas y la juventud. No solo es ser parte de participar políticamente sino de desarrollar capacidades para participar en la toma en decisiones.

29. Un tema relacionado con los efectos del Cambio Climático es el de la soberanía alimentaria, y que tiene que ver con la pérdida de conocimiento tradicional y con la biodiversidad y el conocimiento sobre la medicina tradicional. Esto se debe tomar en cuenta en los programas de mitigación ya adaptación de cambio climático.
30. También está el derecho a la soberanía y a la alimentación sana. Alrededor de esto se discute el hecho de si somos pobres o no. Para los Estados somos de un territorio que tiene una gran riqueza. El tema de la pobreza es totalmente relativo. Deberíamos mirar justa y estratégicamente los recursos que se encuentran en el ámbito del territorio y del conocimiento. Y del manejo. Y cómo participar en las políticas, en los programas en la ejecución y el monitoreo.
31. Desarrollo Económico y Educación. Hay necesidad de programas específicos para la mujer y la juventud indígenas para acceder y desarrollar sus propias iniciativas de desarrollo económico, pues hay jóvenes desocupados y por sus capacidades no tienen un acceso equitativo.
32. Se considera que desde el Sistema de Naciones Unidas se deben desarrollar estrategias con los gobiernos y los Estados para que la aplicación del principio del Consentimiento Previo Libre e Informado, sea una realidad y se vaya avanzando.
33. Hay que tener en cuenta qué capacidad tenemos para dialogar con los Estados, más allá de los gobiernos.
34. Se considera de importancia cardinal que el Programa de la Mujer de las Naciones Unidas debe visibilizar programas y líneas específicas para mujeres indígenas y no ser parte de una bolsa común.
35. Hay propuesta sobre la temática de niñez y juventud. La prioridad del con la juventud es involucrar a nuevos cuadros. Y que la lucha de los Pueblos Indígenas tenga también una referencia desde los jóvenes, para el relevo generacional.
36. La red de jóvenes mayas hizo un comunicado sobre la discriminación de los jóvenes indígenas en Guatemala. Y hay experiencias en México, Perú y Venezuela. Las prioridades han sido la articulación con organizaciones matrices, y el acomodamiento.
37. Un programa de formación en liderazgos, es propicio, para conocer las experiencias de los pueblos indígenas, y las temáticas coyunturales y los espacios de participación. En el CAUCUS, hay ausencia de la participación de jóvenes. Impulsa y motiva que jóvenes tienen presencia activa en el mecanismo de expertos y del Foro.
38. Las ineficiencias de los programas y planes de desarrollo de los Pueblos Indígenas es un tema que llama la atención, puesto que se ha sido más administradores de la pobreza, y lo que requiere son estrategias propias de articulación de largo alcance, para que el capital indígena asegure la seguridad alimentaria y servir de base para el desarrollo con identidad. Esto apoyaría la libre determinación y podrían ejercer también sus derechos sociales, culturales, económicos y ambientales.

39. Detentar igualdad y ciudadanía. Se deben tener organizaciones de tercer nivel y representación que permita la articulación de las iniciativas que se impulsan desde las zonas indígenas.
40. Que se tomen en cuenta las propias iniciativas económicas y gremiales. Se está haciendo centros empresariales indígenas en 22 Estados, en México. Para luego tener la Cámara empresarial indígena de México, que representaría a las empresas en diversos sectores de la economía. Se tendría como articular y desarrollar capacidad de las empresas indígenas en el marco de una economía indígena con un enfoque distinto. Así como de la generación de empleo y la aprovechamiento alternativo de los bienes naturales de los pueblos indígenas.
41. Se debe fortalecer el tejido social de la comunidad. Esto permitirá que las iniciativas locales de desarrollo sean reconocidas por los gobiernos. Esta es una propuesta que busca contribuir al desarrollo con identidad.

Justicia Indígena

Situación actual

En América Latina viven cerca de 50 millones de mujeres y hombres indígenas, pertenecientes a casi 600 pueblos¹, que cuentan con sus propios sistemas políticos de conformidad con sus costumbres, tradiciones, cosmogonía y espiritualidad, y basados en principios de equilibrio entre la naturaleza y las partes que componen esos sistemas para su funcionamiento.

Como producto de diversos procesos políticos bajo liderazgo indígena, los Estados han incorporado unos y ampliado otros sus marcos normativos constitucionales. En América Latina y el Caribe, se han realizado esfuerzos de inserciones de normativas relacionadas con el derecho indígena² en las constituciones latinoamericanas, en las que se observan avances en las reivindicaciones indígenas en este ámbito, pero con un ejercicio limitado porque están inmersas en un orden jurídico que obedece a la lógica de la homogeneidad cultural³.

No obstante, los preceptos constitucionales en esa materia aún escasos, pese a que en algunos países como Bolivia y Colombia se ha manifestado la voluntad política de incorporarlos al marco jurídico constitucional. El proceso de juridicidad de las demandas de los pueblos indígenas en sus expresiones más avanzadas, se refleja en las constituciones de Nicaragua (1987), Brasil (1988), Colombia (1991), Paraguay (1992), Bolivia (2008) y Ecuador (2008). En menor rango y profundidad se ubican las reformas a las cartas fundamentales de Costa Rica (1977), Guatemala (1985), México (1992), Panamá (1972 y revisada en 1983), Argentina (1994), Perú (1993) y en el caso de Chile que emitió una ley sin reforma constitucional (1993).

1.- Presentación de Dra. Mirna Cunningham, en el Forest Day 4 realizado en Cancún, México, en el marco de la COP16 de la CMNUCC. 4 de Diciembre 2010.

2.- El derecho indígena comprende "los sistemas de normas, procedimientos y autoridades, que regulan la vida social de las comunidades y pueblos indígenas, y les permiten resolver sus conflictos de acuerdo a sus valores, cosmovisión, necesidades e intereses. Las prácticas culturales indígenas se entremezclan con su administración de justicia. Sólo así podemos entender cómo elementos religiosos y espirituales se encuentran presentes a la hora de imponer una sanción y cumplir una pena. Tibán, Lourdes (2008). El derecho indígena y su relación con la justicia ordinaria.

3.- Gómez Magdalena, Publicación ALAI 256, Evolución de la política indígena de los estados, Ponencia presentada al coloquio Pueblos Indígenas y Estado en América Latina, Quito, 9 al 11 de Julio de 1998.

En el ámbito internacional; La dinámica histórica ha demostrado una evolución excluyente de estos procesos limitando la participación de sectores importantes contribuyentes a sistemas justos y equilibrados. Nos referimos a la evolución del derecho internacional penal, cuyos fundamentos políticos y doctrinales surgieron por la necesidad de enjuiciar crímenes de la primera Guerra Mundial⁴.

Después de la segunda Guerra y posterior a los inicios de la Organización de las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad recomendó a un panel de expertos la necesidad de establecer una corte permanente de justicia en materia criminal, similar o complementario al principal órgano judicial, la Corte Internacional de Justicia. El 17 de Julio de 1998 se establece la Corte Penal Internacional, en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas para el establecimiento de una Corte Penal Internacional. Siendo éste el primer órgano judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir y condenar los más graves crímenes, cometidos por individuos, en contra del Derecho Internacional⁵.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobada por la Naciones Unidas, A/Conf. 183/9, 17 de julio de 1998, tiene competencia de conocer los siguientes crímenes de conformidad al artículo 5 entre los que señala: 1. El genocidio, 2. Los crímenes de lesa humanidad, 3. Los crímenes de guerra, y 4. El delito de agresión; desarrollados los tres primeros en los artículos 6, 7, 8, y el cuarto no definido⁶.

En su Informe⁷ del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, centrado en un tema de particular interés para los pueblos indígenas, a saber, los problemas con que se enfrentan al tratar con el sistema de justicia y la relación entre el derecho consuetudinario indígena y las instituciones jurídicas nacionales, particularmente en relación con la protección de los derechos humanos. Señala que es fundamental contar con un sistema de justicia eficaz y equitativo para fomentar la reconciliación, la paz, la estabilidad y el desarrollo entre los pueblos indígenas.

Algunos de los problemas señalados en el informe son los siguientes⁸:

1. Los pueblos indígenas no disfrutaban de igualdad de acceso al sistema de justicia y que en el funcionamiento de éste suelen ser objeto de diversas formas de discriminación.
2. La discriminación contra los pueblos indígenas en la administración de justicia es muy común.
3. Los integrantes de los pueblos indígenas tienen una presencia desproporcionada en la justicia penal, donde a menudo se les niegan las debidas garantías

4.- Fernández, Jean Marcel, La Corte Penal Internacional. Soberanía versus justicia universal. Madrid, 2008, Reus.

ISBN 84-290-1524-8. autor del trabajo César Rinza.

5.- http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Penal_Internacional

6.- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del 17 de Julio de 1998.

7.- E/CN.4/2004/80, del 26 de enero de 2004.

8.- Ibid

procesales y son víctimas de actos de violencia y de malos tratos. Las mujeres y niños indígenas son particularmente vulnerables a este respecto.

4. Los numerosos casos de criminalización de actividades de protesta política y social de los indígenas.
5. Las diferencias lingüísticas y culturales intervienen también en esta dinámica de discriminación, y no siempre reciben la atención que merecen por parte del Estado.

En su informe el Relator Especial recomendó que los Estados realicen estudios exhaustivos y, de ser necesario, introduzcan reformas en sus sistemas de justicia para proteger mejor los derechos de los pueblos indígenas. También invitó a la Comisión de Derechos Humanos a tratar de esta cuestión con los Estados Miembros. A juicio del Relator Especial, las reformas deberían comprender el respeto de las costumbres jurídicas, el idioma y la cultura indígenas en los tribunales y en la administración de justicia; la plena participación de los indígenas en la reforma de la justicia; y el establecimiento de mecanismos de justicia alternativos⁹.

En su informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Chile, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, manifestó haber “recibido alegaciones sobre irregularidades procesales y discriminación a individuos mapuche, principalmente en el contexto de controversias sobre reivindicaciones de tierras y recursos naturales. Líderes tradicionales y otros dirigentes y comuneros mapuche han sido condenados y siguen siendo procesados bajo diversos regímenes penales por actos que de alguna manera se relacionan con la protesta social mapuche en torno a reivindicaciones de tierras”¹⁰.

También el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, ha visto con mucha preocupación las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, por ello en sus recomendaciones 13.d, 76, 77, 78, del tercer período de sesiones, recomienda mecanismos para operativización y vigilancia en la aplicación de los derechos de los Pueblos Indígenas. Igualmente, en su recomendación 62 del cuarto período de sesiones pide reforzar los mecanismos para abordar con carácter de urgencia las graves violaciones de los derechos humanos, la militarización de las tierras indígenas y los actos de violencia sistemática perpetrado por los Estados en contra de los Pueblos Indígenas.

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en su noveno período de sesiones, celebrado del 19 al 30 de abril de 2010¹¹, adoptó la decisión de designar a Bartolomé Clavero, como relator especial para la realización de un estudio sobre “derecho penal internacional y defensa judicial de los derechos de los pueblos indígenas”¹², quien ha concluido que con la declaración sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y el Esta-

9.- Ibid

10.- A/HRC/12/34/Add.6

11.- E/2010/43, E/C.19/2010/15

12.- Bartolomé, Clavero (2010). Derecho penal internacional y defensa judicial de los derechos de los pueblos indígenas

tuto de la Corte Penal Internacional se han abierto importantes posibilidades de defensa penal de los derechos de los Pueblos Indígenas en el ámbito Internacional.

Los Artículos, 7, 8, 10, 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas brindan elementos para la defensa y penalización de las actuaciones que afectan los derechos de los pueblos Indígenas en los distintos ámbitos incluyendo el internacional, haciendo uso de los artículos 5, 6, 7, 8, que el Estatuto de la Corte establece y que pueden ser complementaria de las jurisdicciones penales nacionales.

Amenazas:

El mismo ex relator especial Clavero ha advertido que éstas son nuevas posibilidades, razonadas en una visión del derecho penal internacional consolidado anteriormente, particularmente bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en la cual los pueblos indígenas no cualifican a efectos de la protección correspondiente de orden penal. Teóricamente los Pueblos Indígenas estaban penalmente protegidos desde la Convención sobre el Genocidio. En la práctica, tal protección no ha sido factible¹³.

La inclusión del derecho indígena en las Constituciones Latinoamericanas como forma propia de administrar justicia, no siempre es clara y presenta limitaciones legales siendo las más comunes la ausencia de procedimientos para la implementación de los derechos humanos internacionales, y la aplicación de los que se denominan medios alternos de resolución de conflicto.

Los conflictos entre los diferentes sistemas de administración de justicia (indígena y occidental) son fenómenos comunes, por la falta de experiencia y la comprensión intercultural de su actuación, que permite separar ámbitos de vigencia y actuación de cada norma bajo el principio de complementariedad.

Buenas Prácticas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, con Sentencia de 17 de junio de 2005 (fondo, reparaciones y costas), sobre tierras y territorios, en el que la comunidad Indígena Yakye Axa, sociedad tradicional de cazadores-recolectores, que ocupa ancestralmente el Chaco paraguayo, reclama la titularización de su territorio tradicional, ahora bajo propiedad privada. Se alegó que la falta de acción efectiva del gobierno de Paraguay para reconocer la personalidad jurídica de la comunidad indígena Yakye Axa y, en especial, para conceder a la comunidad la titularidad de sus tierras ancestrales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolvió a favor al reconocer que se han violado los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, así como a la vida y a la propiedad, (arts. 4, 8, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos). La Corte estableció que los Estados debían otorgar una protección efectiva que tomase

13.- Ibid

en cuenta sus particularidades, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres. Agregó que los Estados debían establecer un recurso efectivo con las garantías de debido proceso que les permita reivindicar sus tierras tradicionales.

Sin embargo, hay que señalar que si bien la Corte Interamericana resolvió a favor de la Comunidad Yakye Axa, la Sentencia de la Corte no ha sido respetada por el Estado paraguayo, y aún espera su cumplimiento por parte de este Estado.

El caso de Awastingni, en el que la esta comunidad alegó sus derechos de posesión ancestral sobre sus tierras y sus recursos, frente a una concesión otorgada por el Estado nicaragüense a la empresa SOLKARSA. En este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto a favor de la comunidad al reconocer la relación material y espiritual de la Comunidad de Awastingni con sus recursos naturales. La Corte reconoció el valor de la propiedad comunal de los pueblos indígenas a la luz del artículo 21 de la Convención Americana, la validez de la posesión de la tierra basada en la costumbre indígena, aun a falta de título, como fundamento de su propiedad sobre ellas. Dispuso la necesidad de que la estrecha relación que los indígenas tienen con sus tierras sea reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica.

Recomendaciones

El Caucus de Latinoamérica y el Caribe recomienda al Foro:

1. Promover que los Estados reconozcan los sistemas de justicia indígena, los fortalezca y promueva su desarrollo.
2. Definir sus objetivos y acciones concretas para garantizar que la administración de justicia de los pueblos indígenas se aplique en el marco del segundo decenio de los Pueblos indígenas.

El Caucus de Latinoamérica y el Caribe recomienda a los Estados:

3. Hacer prevalecer las normas nacionales e internacionales de manera supletoria para la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas reconocidos en los instrumentos internacionales.
4. Reconocer los derechos de los Pueblos Indígenas de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en las jurisdicciones penales haciendo usos del Estatuto de la Corte Penal Internacional, de manera complementaria.
5. Elaborar mecanismos procedimentales para la implementación de los instrumentos del derecho internacional, de tal forma que se permita el acceso a la justicia de manera equitativa y desarrollar procesos de capacitación y sensibilización en relación a la justicia penal indígena con el propósito de mejorar la

compresión intercultural de los operadores de los sistemas de justicia penal, que contribuya a reconocer el pluralismo jurídico y el respeto de las autoridades indígenas designados por sus pueblos para administrar justicia.

6. Retomar las recomendaciones realizadas por el Foro Permanente para las cuestiones indígenas relacionadas la protección y tutela de los derechos humanos en los distintos ámbitos que prevé la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Caucus de Latinoamérica y el Caribe recomienda a las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas:

7. Demandar al Sistema de Naciones Unidas, la creación de una Corte o Procuraduría Internacional de Justicia, para judicializar las violaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas
8. Solicitar a los organismos de Naciones Unidas mayor contribución técnica, económica para el fortalecimiento de los sistemas de justicia indígena, y el desarrollo de capacidades de las autoridades indígenas en administración de justicia, así como a los abogados indígenas.

El Caucus de Latinoamérica y el Caribe recomienda a las Organizaciones de los Pueblos Indígenas:

9. Fomentar la capacitación de las autoridades indígenas para que puedan hacer uso de los derechos reconocidos en el marco internacional, de manera particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio No.169 de la OIT.
10. Promover que sean dirimidos y resueltos los distintos conflictos que se presentan al interior de sus comunidades y territorios conforme a las normas, procedimientos, sanciones del propio sistema jurídico indígena. Y, que las autoridades de los pueblos indígenas establezcan límites, competencia y jurisdicción de competencia, estableciendo los mecanismos de relación que se deben desarrollar y cumplir entre las partes.
11. Promover procesos de judicialización en contra de los Estados que no respetan los derechos de los Pueblos Indígenas, de conformidad con el derecho internacional y nacional.

Desarrollo con Cultura e Identidad

En la Novena Sesión¹ el Foro Permanente recomendó que los Estados, el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales proporcionen apoyo político, institucional y financiero, de conformidad con el artículo 42 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a los esfuerzos de los pueblos indígenas para que estos puedan consolidar sus propios modelos y conceptos de desarrollo y prácticas del buen vivir.

Si bien en América Latina y el Caribe se ha avanzado en el debate sobre la visión de buen vivir de los pueblos indígenas, se han dado muy pocos pasos en la concreción de dichos procesos, como parte del desarrollo de los conceptos asociados al desarrollo con identidad el cual es, además de un derecho humano, una expresión del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Sin embargo, algunas organizaciones indígenas, han avanzado en la divulgación sobre su visión de desarrollo y cuentan con publicaciones al respecto, como es el caso de la CAOI. Otras han retomado el tema en sus planes estratégicos de desarrollo, como la COICA. En el caso de CICA en Centroamérica, se ha venido aplicando una estrategia de planificación propia de los proyectos comunitarios para el buen vivir, denominado Balu Wala. Esta metodología permite aplicar el CPLI, tomar en cuenta la cosmovisión y espiritualidad de los pueblos en el diseño de sus proyectos, adecuarlas a su experiencia y práctica de economía comunitaria y al contexto socio ambiental. Producto de la aplicación del Balu Wala se han diseñado proyectos comunitarios.

Otra experiencia interesante ha sido el diseño e implementación de programas educativos para promover los modelos propios de desarrollo. La Universidad Indígena Intercultural, con la participación de tres universidades indígenas – Universidad Amawtay Wasi de Ecuador, UAIN del CRIC en Colombia y URACCAN en Nicaragua están ofreciendo la Maestría de Desarrollo con Identidad para el Buen Vivir comunitario con participantes de 17 países de la Región. Las y los participantes de la Maestría están documentando las propuestas y experiencias de modelo propio de sus pueblos.

En coordinación con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas – Fondo Indígena- y el apoyo de la cooperación de Bélgica, las organizaciones indígenas regionales

1.- http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_2010_43_ES.pdf

han identificado una serie de iniciativas locales de aplicación de modelos de desarrollo propios, a los cuales se les ha brindado apoyo y de las cuales se espera documentar importantes lecciones.

En el apoyo de los gobiernos a los modelos de desarrollo de los propios pueblos indígenas vemos, sin embargo, muy pocos ejemplos satisfactorios. El gobierno de Bolivia ha apoyado el establecimiento del Fondo Indígena y el gobierno de Nicaragua ha avanzado en el proceso de titulación de territorios indígenas y los gobiernos territoriales indígenas son contraparte de programas y proyectos de cooperación internacional, lo cual les permite definir sus prioridades y responder a las necesidades y demandas de las y los comunitarios. En ambos casos, cabe destacar que el marco de autonomía indígena ha sido un paso previo importante.

A pesar de que se han dado algunos pasos en la elaboración de indicadores de sostenibilidad y el bienestar propios de los pueblos indígenas, aun continúa siendo un desafío para que sean adoptados por los gobiernos y agencias del Sistema de Naciones Unidas en sus programas con pueblos indígenas. Esa situación es una barrera para medir el impacto real de las intervenciones externas sobre los pueblos indígenas. Aunque en el proceso de medición de los ODM en los países de la región, fue muy limitada la participación directa de los pueblos indígenas, desde América Latina y el Caribe, reconocemos que tanto en las audiencias como en la reunión plenaria de alto nivel del sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General, que se celebró en septiembre de 2010 en Nueva York, hubo cierto grado de participación indígena.

En efecto, la Asamblea General, aprobó el documento final de la Reunión Plenaria de Alto Nivel de su sexagésimo quinto período de sesiones sobre los Objetivos de desarrollo del Milenio, en el cual, al referirse al logro del primer objetivo dirigido a erradicar la pobreza extrema y el hambre, señala la necesidad de “acelerar los avances en la superación de los retos que afrontan los pueblos indígenas en el contexto de la seguridad alimentaria, adoptando medidas especiales para luchar contra las causas fundamentales del grado desproporcionadamente alto de hambre y malnutrición entre los pueblos indígenas”².

Respecto al Séptimo ODM: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, al considerar la necesidad de seguir promoviendo el cumplimiento de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, La Asamblea General recomienda “reducir significativamente el ritmo de pérdida de la diversidad biológica, a través de, entre otras cosas, la preservación y el mantenimiento de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas..., y continuando las actividades encaminadas a la elaboración y negociación de un régimen internacional de acceso y distribución de los beneficios”³.

Entre las recomendaciones que hace el documento para cumplir los ODM, está la de “adoptar medidas positivas y concertadas para asegurar el respeto de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, tomando como base la igualdad y la no discriminación y reconociendo el valor y la diversidad de sus identidades, culturas y formas de organización social propias”⁴.

2.- A/RES/65/1

3.- Ibid.

4.- Ibid.

Consideramos sin embargo, que es necesario reafirmar a las organizaciones competentes que aseguren la participación efectiva de los pueblos indígenas en los procesos de examen del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel nacional y local y la inclusión de datos desglosados sobre la forma en que se logran esos objetivos en los territorios de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas de LAC vemos como un paso importante que el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), en el marco de la aplicación de su política de actuación sobre pueblos indígenas, haya convocado a organizaciones indígenas para establecer un foro de los pueblos indígenas. Reconocemos que ese paso constituye una buena práctica porque permitirá a los pueblos indígenas participar en un nivel de diálogo y consulta muy importante con el FIDA y de esa forma incidir de forma más directa en las acciones que ellos apoyan para el desarrollo rural a favor de nuestros pueblos. Esperamos que el FIDA cumpla de forma participativa la ruta establecida y que en la Región más organizaciones indígenas tengan la oportunidad de conocer y participar en este esfuerzo. Esperamos que ese ejemplo anime a otros organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales para establecer instancias de participación efectiva de los pueblos indígenas.

Independientemente de los esfuerzos por desarrollar e impulsar la aplicación de un modelo de desarrollo con identidad y cultura, aún hay algunos retos que se presentan a manera de recomendaciones.

Entre estos se encuentran:

1. La elaboración, a partir de sugerencias del Foro, de un mecanismo que precise los conceptos de “modelo de desarrollo con identidad y cultura”, “modos de vida” y “vivir bien”, y los defina operativamente mediante categorías e indicadores; de tal forma que esto permita establecer una base de diálogo e intercambio con los Estados nacionales, para su incorporación normativa en las legislaciones nacionales, y en los procesos de diseño e implementación de sus políticas, estrategias e iniciativas de desarrollo, incluidas aquéllas que abarcan el desarrollo de infraestructura, el aprovechamiento de bienes naturales, la formulación y ejecución de megaproyectos o la utilización de recursos genéticos. Esto es extensible a las formas de intervención de la cooperación internacional y de los organismos financieros multilaterales.
2. El establecimiento de un estándar internacional sobre este derecho de manera que haya un marco normativo y de políticas públicas.
3. El establecimiento de las normas jurídicas, políticas y procedimientos que aseguren la eficaz aplicación del principio del consentimiento previo, libre e informado cuando de la definición e implementación de esas iniciativas de desarrollo se trate, tomando en consideración las obligaciones establecidas en el Convenio No.169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y de otros instrumentos internacionales como el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización.

4. La necesidad de un abordaje integral de las iniciativas de los Estados para el impulso de sus programas dirigidos de manera específica a al bienestar social y económico de poblaciones indígenas, y se promueva su libre determinación, y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, previa consulta y la obtención de su consentimiento previo, libre e informado. Adicionalmente es fundamental que los pueblos indígenas tenga el control total de estos programas.
5. La evaluación de las consecuencias de los programas «transferencias económicas condicionadas» y recomendar la formulación de un diseño pertinente a la especificidad cultural, relativo a «transferencias económicas sin condiciones»
6. Que las instituciones creadas en las estructuras de los Estados sobre asuntos de pueblos indígenas sean instituciones autónomas.
7. El fomento de la capacidad y el fortalecimiento del autogobierno de nuestros pueblos, de tal manera que fortalezcan su capacidad de negociación frente a conflictos con los Estados y las Empresas que se apropian de los bienes naturales pertenecientes a los pueblos indígenas. Asimismo, la promoción, formación y fomento de la capacidad necesarios para que puedan comprender, concebir y ejecutar adecuadamente actividades de desarrollo dentro de sus comunidades, o que las afecten, incluso en relación con las actividades de aprovechamiento de sus bienes naturales en gran escala y el desarrollo de proyectos de infraestructura⁵.
8. Que el Foro plantee la eliminación de los incisos 2.e y 1.c del artículo 49 de la convención única de las naciones Unidas sobre estupefacientes de 1961. Relativo a la prohibición de la masticación de la hoja de coca, desde UN.
9. Que el Foro se pronuncie, solicitando a las organizaciones pertinentes del Sistema de Naciones Unidas declarar el año 2013 como «año internacional de la Quinoa».
10. Que el Foro solicite a las organizaciones pertinentes del Sistema de Naciones Unidas que los Estados miembros incorporen a sus constituciones los calendarios de los pueblos indígenas (calendario, andino, calendario maya, etc.)
11. Que el Foro organice reuniones específicas para el monitoreo de las recomendaciones que surgieron de su tercera Sesión dedicada a las Mujeres Indígenas.

Pueblos Indígenas y Cambio Climático

Introducción

Se estima que la población indígena de América Latina y el Caribe es de aproximadamente 50 millones de personas. Los indígenas representan a más de la mitad de la población local en países tales como Bolivia, Guatemala y Perú, y un tercio de la población en el Ecuador. Existen más de 600 pueblos indígenas en la región que son cultural y lingüísticamente diversos. A pesar de su riqueza cultural y ambiental, en los pueblos indígenas están los segmentos más marginados, empobrecidos y vulnerables del mundo.

Además, dado el incremento de los problemas ya existentes con los que viven los pueblos indígenas, el cambio climático y sus efectos ponen en riesgo su capacidad de resiliencia y de adaptación y por lo tanto pone en riesgo sus medios de vida. Otro aspecto que también provoca el cambio climático está relacionado con los derechos territoriales, así como con su soberanía y seguridad alimentaria.

El IPCC (por sus siglas en inglés Intergovernmental Panel on Climate Change), formado por científicos de todo el mundo, indican que durante los últimos 100 años la temperatura del aire superficial aumentó en promedio 0.6° Celsius (1.1°F). Este incremento en la temperatura provoca el derribamiento de los glaciales, el incremento del nivel del mar, la erosión costera, contaminación de las aguas, cambio en el régimen de los vientos, mayor frecuencia y fuerza de huracanes, mayor frecuencia de sequías en unas regiones, mayor precipitación en otros, daños en los cultivos, daños en los mitos y leyendas y en la cosmovisión indígenas.

Frente a esos cambios, los pueblos indígenas han tenido y han demostrado la capacidad de ajustar sus formas de vida desarrollando formas estratégicas sostenibles. Su conocimiento tradicional ha sido la base para identificar las medidas de adaptación y mitigación del impacto del cambio climático, solo que a veces este conocimiento no es valorado en su totalidad.

Amenazas del Cambio Climático para los Pueblos Indígenas

El cambio climático (producto de la emisión de los gases de invernadero, vinculada a las actividades antropogénicas) y sus consecuencias, constituyen, una seria, urgente e inmediata amenaza, sin precedentes, para la humanidad en general y para los pueblos indígenas en particular, para su vida, tierras y recursos, y cultura, y para el ejercicio pleno de sus derechos humanos fundamentales, la salud, el desarrollo sostenible, la soberanía alimentaria, la seguridad y la paz, por lo que resulta de suma importancia la adopción de medidas serias encaminadas a reducir estas emisiones, y de adaptación.

El cambio climático se expresa en considerables variaciones de las principales variables climatológicas y sus amenazas se dirigen a muchos pueblos indígenas en el mundo, principalmente a los que viven en ecosistemas muy frágiles, como las zonas costeras bajas y los pequeños Estados insulares, las tierras semiáridas y áridas y las tierras secas y subhúmedas (praderas), las selvas tropicales y subtropicales, y las zonas de alta montaña. Estos pueblos, ya vienen sufriendo sus impactos. Entre las principales amenazas se encuentran el incremento en la frecuencia y intensidad de severas sequías regionales, los drásticos cambios en el régimen de las lluvias y la ocurrencia cada vez mayor de incendios forestales o bien deshielos con extrema rapidez.

El cambio climático y la degradación del medio ambiente vinculada a las actividades de extracción de recursos naturales, como la minería y la explotación forestal, representan graves amenazas para los estilos de vida tradicionales y la cultura de los pueblos indígenas. Por su alto grado de vulnerabilidad física, económica, social y ambiental, los pueblos indígenas sufren las consecuencias más graves del cambio climático y lo reciben de múltiples formas. Los ecosistemas en los que viven, pueden ser afectados y afectarles sus formas de vida: en unas zonas hay deshielos, en otras sequías, reducción de la disponibilidad de agua potable, inundaciones, deslaves, intensidad de altas temperaturas y otros. En muchos casos ha habido desplazamiento poblacional exponiendo a estos pueblos a la pérdida de identidad y valores culturales y espirituales.

Buenas prácticas

Dentro de lo que pudiera considerarse como buenas prácticas, dependiendo de cada contexto éstas podrán variar, vemos experiencias como la iniciativa del Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático, a través del cual se participa como observadores e incidencia en las inter sesiones y las conferencias del proceso de negociación sobre cambio climático.

En esos procesos consideramos que el monitoreo es fundamental, y por eso se ha constituido la Red Global de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible (Indigenous Peoples Global Network on Climate Change), en la que participan organizaciones indígenas de diez países¹ siendo éstas de 4 países de la región. También hay organizaciones indígenas regionales que se están planteando hacer monitoreo, (como COICA). El Foro Permanente sobre cuestiones indígenas en la ONU se ha comprometido de igual manera a monitorear el proceso.

Una buena práctica fue la gestión del Foro Internacional Indígena sobre Cambio Climático ante el Secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que logró que se designara a un punto focal indígena para ser el interlocutor de los temas de interés del Foro. Esto permite hacer llegar la voz a lugares de alto nivel del sistema de la ONU.

1.- Red Global de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible (Indigenous Peoples Global Network on Climate Change), en la que participan organizaciones indígenas de diez países: Camerún, Brasil, Filipinas, Indonesia, Kenya, México, Nepal, Nicaragua, Perú y Vietnam.

Otra práctica, calificada de excelente, fue la planificación y realización conjunta del Taller Técnico Internacional de los Pueblos Indígenas con los Estados sobre el Cambio Climático, realizado en Xcaret, Quintana Roo, México, realizado los días 27, 28 y 29 de septiembre del 2010. Este taller fue organizado conjuntamente entre el gobierno de México y el Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático.

El Foro Permanente y el Cambio Climático

El Foro ha venido abordando y estudiando el tema y la problemática asociada al cambio climático desde sus primeras sesiones, y ha externado sus preocupaciones y brindado sus recomendaciones a los Estados, a los Órganos y Organismos del Sistema de Naciones Unidas, así como a las Organizaciones Indígenas, empresas y corporaciones, e instituciones financieras internacionales.

En su informe sobre el segundo período de sesiones celebrado del 12 al 23 de mayo del año 2003, el Foro recomendó al “Consejo Económico y Social que el Sistema de las Naciones Unidas garantice la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en los procesos y convenios sobre el medio ambiente, tales como los relativos a la desertificación, los humedales y el cambio climático”².

También el Foro ha estado interesado en que las organizaciones indígenas cuenten con suficiente información y capacitación para entender y comprender las consecuencias que tiene el cambio climático, y proponer medidas para afrontarlo. En tal sentido, a través del informe sobre el sexto periodo de sesiones celebrado del 14 al 25 de mayo del año 2007³, recomendó que “las organizaciones de las Naciones Unidas presten asistencia técnica y organicen, en colaboración con las organizaciones de los pueblos indígenas, cursos prácticos regionales sobre...el cambio climático, la diversidad biocultural y los medios de vida: la custodia por los pueblos indígenas y nuevos retos, a los que asistan miembros del Foro y otros expertos, representantes de los pueblos indígenas, parlamentarios indígenas, representantes estatales y representantes del sistema de las Naciones Unidas a fin de formular recomendaciones...”. También recomendó que “los Estados, las organizaciones y los donantes aporten recursos para organizar los seminarios regionales y que se incluya en el informe sobre la situación de los derechos humanos de los indígenas en los Estados y territorios amenazados de desaparición por razones ambientales en los debates que se celebren en los cursos prácticos”.

Durante el séptimo período de sesiones celebrado del 21 de abril al 2 de mayo de 2008⁴, el Foro Permanente abordó como parte de su agenda el tema especial denominado “El cambio climático, la diversidad biocultural y los medios de vida: función de custodia que ejercen los pueblos indígenas y nuevos retos”. Entre los planteamientos del Fondo se encuentran:

2.- E/2003/43 E/C.19/2003/22

3.- E/2007/43 E/C.19/2007/12

4.- E/2008/43 E/C.19/2008/13

1. Los pueblos indígenas, gracias a su experiencia como garantes de la custodia de la diversidad biológica y cultural del mundo y de los medios de vida y los conocimientos ecológicos tradicionales, pueden aportar una colaboración significativa al diseño y la aplicación de medidas de mitigación y adaptación más apropiadas y sostenibles. También pueden proporcionar asistencia para trazar el camino hacia el desarrollo de comunidades sostenibles con bajas emisiones de carbono.
2. Los antepasados de los pueblos indígenas se adaptaron a los cambios climáticos durante miles de años; no obstante, hoy en día, la magnitud, la aceleración y la complejidad sin precedentes de los efectos del cambio climático representan grandes retos para la capacidad de adaptación de los pueblos indígenas.
3. Algunas de las medidas de adaptación y mitigación adoptadas, que se han presentado como soluciones al cambio climático, también han afectado negativamente a los pueblos indígenas y especialmente a las mujeres indígenas
4. Las estrategias de mitigación y adaptación deben tener un carácter holístico y contemplar no sólo las dimensiones ecológicas del cambio climático, sino también sus efectos en la sociedad, , los derechos humanos, la equidad y la justicia ambiental.
5. La importancia de reconocer el cambio climático mundial y la necesidad de afrontarlo con urgencia y aplicar prácticas limpias, justas, sostenibles y basadas en la energía renovable en economías locales para resolver los problemas que enfrentan los pueblos indígenas.
6. El mecanismo para un desarrollo limpio, el Marco de inversiones para la energía limpia, el Marco de Nairobi, el Programa de Trabajo de Nairobi y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial son buenos ejemplos de las alianzas para movilizar fondos en apoyo de la adaptación que serán cada vez más importantes. Esos mecanismos deben responder a las necesidades de los pueblos indígenas e incluirlos como asociados en el diseño y ejecución de programas que respondan a los problemas locales y a los objetivos y planteamientos de las mujeres y los hombres indígenas.
7. Los científicos, los encargados de la formulación de políticas y la comunidad internacional en su conjunto deben emprender consultas periódicas con los pueblos indígenas de forma que sus estudios y decisiones sean informados por los conocimientos y experiencias tradicionales de los pueblos indígenas.
8. El Foro puede tener un papel en la tarea de asegurar que los conocimientos tradicionales y las mejores prácticas de los pueblos indígenas que sean pertinentes para la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias se tengan en cuenta en los procesos de negociación previos a la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en Copenhague y actividades ulteriores.
9. Los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas, la equidad, la justicia social, el desarrollo sostenible y el desarrollo con respeto de la identidad

deben seguir siendo los principios fundamentales en que se basen las negociaciones, las políticas y los programas relativos al cambio climático.

10. El enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos y el enfoque ecosistémico deben guiar el diseño y la aplicación de políticas y proyectos sobre el cambio climático a nivel local, nacional, regional y mundial. También debe garantizarse el papel crucial de las mujeres y los jóvenes indígenas en la formulación de medidas de mitigación y adaptación.
11. El actual marco para la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques no cuenta con el apoyo de la mayoría de los pueblos indígenas. Se arguye que las propuestas existentes para la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques refuerzan la ordenación forestal centralizada e impuesta desde arriba y van en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas. Para beneficiar directamente a los pueblos indígenas, las nuevas propuestas para evitar la deforestación o reducir las emisiones derivadas de ésta deben abordar la necesidad de introducir reformas en las políticas mundiales y nacionales y guiarse por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, respetando los derechos a la tierra, los territorios y los recursos, así como los derechos a la libre determinación y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados.

También el Foro, en su informe sobre el octavo período de sesiones celebrado del 18 al 29 de mayo de 2009 ha acogido “con beneplácito el siguiente mensaje de la Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático, celebrada en Anchorage, Alaska, del 20 al 24 de abril de 2009, que figura en la Declaración de Anchorage: “Ofrecemos compartir con la humanidad nuestros conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas relacionados con el cambio climático, siempre que se reconozcan y respeten plenamente nuestros derechos fundamentales como guardianes intergeneracionales de esos conocimientos. Reiteramos la necesidad urgente de una acción colectiva”⁵.

Entre otras, también se pide al Foro Permanente que tome en consideración a las Recomendaciones de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra celebrada en Tiki Paya, Cochabamba Bolivia del 20 al 22 abril de 2010, dándole prioridad a cambio climático, conocimiento tradicional y medicina tradicional.

Algunas de las recomendaciones efectuadas, durante el séptimo período de sesiones, son las siguientes⁶:

5.- E/2009/43, E/C.19/2009/14

6.- E/2007/43 E/C.19/2007/12

12. Adoptar, por la comunidad internacional medidas serias para mitigar el cambio climático. La supervivencia de las formas de vida tradicionales de los pueblos indígenas depende en gran medida del éxito de las negociaciones internacionales encaminadas a establecer acuerdos sólidos que puedan hacerse cumplir y que sean realmente eficaces para luchar contra el cambio climático. El Foro acepta el argumento fundamental del Informe Stern de que la adopción de medidas firmes e inmediatas para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero sería menos costosa que tratar de adaptarse a los cambios generalizados que el cambio climático causará en el futuro si no se le pone freno.
13. Respetar en las deliberaciones y negociaciones sobre el cambio climático, el derecho de los pueblos indígenas a cultivar y desarrollar sus conocimientos tradicionales y sus tecnologías ambientalmente benignas. En el caso de los pueblos indígenas que viven en condiciones de aislamiento voluntario y que habitan las zonas de mayor diversidad biológica del Amazonas, debe hacerse hincapié en el respeto del requisito básico de obtener su consentimiento previo, libre e informado para cualquier intervención externa.
14. Servir de clave y marco obligatorio para los Estados, en la formulación de planes de desarrollo y debe ser considerada elemento fundamental en todos los procesos relacionados con el cambio climático a nivel local, nacional, regional y mundial, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Las políticas de salvaguardia de los bancos multilaterales y las políticas actuales y futuras sobre los pueblos indígenas de los órganos de las Naciones Unidas y de otros órganos multilaterales deben aplicarse en todos los proyectos y programas relacionados con el cambio climático.
15. Prestar, los Estados, los organismos, órganos y fondos de las Naciones Unidas, otros órganos multilaterales e instituciones financieras y otros donantes, apoyo técnico y financiero para proteger y fomentar la gestión de los recursos naturales por los pueblos indígenas, las tecnologías ambientalmente benignas, la diversidad biológica y la diversidad cultural y los medios de vida tradicionales y de bajo carbono de los pueblos indígenas (pastoralismo, agricultura rotativa o itinerante, caza y recolección y caza con trampas, pesca marina y costera, agricultura de alta montaña, etc.). Además, que las conversaciones y negociaciones sobre el fortalecimiento de los vínculos entre el cambio climático, la diversidad biológica y la diversidad cultural con arreglo al Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático aseguren la participación efectiva de los pueblos indígenas.
16. Realizar, el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de las Naciones Unidas, los centros de investigación universitarios y los organismos competentes de las Naciones Unidas nuevos estudios sobre los efectos del cambio climático y las respuestas al cambio climático en los pueblos indígenas que viven en ecosistemas muy frágiles, como las zonas costeras bajas y los pequeños Estados insulares, las tierras semiáridas y áridas y las tierras secas y subhúmedas (praderas), las selvas tropicales y subtropicales, y las zonas de alta montaña.

17. Pedir (el Foro Permanente) al Consejo Económico y Social y la Asamblea General, junto con los demás órganos y organismos de las Naciones Unidas, tomen medidas urgentes, serias y sin precedentes, reconociendo que el cambio climático es una amenaza urgente e inmediata para los derechos humanos, la salud, el desarrollo sostenible, la soberanía alimentaria y la paz y la seguridad, y exhorta a todos los países a alcanzar los niveles más altos y más estrictos de reducción de los gases de efecto invernadero.
18. Instar al mecanismo de expertos sobre los pueblos indígenas del Consejo de Derechos Humanos a determinar si las políticas y proyectos sobre el cambio climático establecidos o propuestos se ajustan a las normas establecidas por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Estos órganos, junto con los miembros del Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas, deben colaborar con los Estados, los órganos multilaterales, los donantes y los pueblos indígenas para asegurar efectivamente que la aplicación de la Declaración sea un elemento fundamental del diseño y la ejecución de las políticas y programas sobre el cambio climático.
19. Reafirmar la necesidad de que todos los actores respeten el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación sobre medidas de mitigación y adaptación en sus tierras y territorios.
20. Garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas que viven en los bosques y recompensarlos por su función histórica de custodios para continuar con la conservación y el uso sostenible de los bosques, en el marco de la atención política a los bosques que han estimulado los debates actuales sobre políticas en torno a la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. De conformidad con el principio del consentimiento libre, previo e informado, los pueblos indígenas no deben quedar excluidos de las decisiones sobre los programas y políticas forestales a todos los niveles que administren justicia y contribuyan al desarrollo sostenible, la protección de la diversidad biológica, la mitigación del cambio climático y la adaptación a éste, sino que deben tener una participación central en esos programas y políticas y beneficiarse de ellos.

El Foro, durante el noveno período de sesiones celebrado del 19 al 30 de abril de 2010⁷, “instó a los Estados a que revisen sus políticas sobre las industrias de los biocombustibles que, so pretexto de remediar las repercusiones del cambio climático, están provocando la deforestación de grandes zonas forestales y el desplazamiento de los pueblos indígenas. De este modo aumenta la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y en particular de quienes viven en un aislamiento voluntario”. Asimismo, alentó a la FAO a seguir apoyando “a las organizaciones de los pueblos indígenas en la esfera de la comunicación para el desarrollo. En particular, el Foro Permanente recomienda que la FAO

continúe prestando apoyo a las plataformas de comunicación de los pueblos indígenas y sus actividades en el ámbito del desarrollo territorial participativo y la adaptación al cambio climático basada en la comunidad”⁸.

Recomendaciones

El Foro Indígena Latinoamérica y el Caribe, recomienda lo siguiente:

1. Instar a los Estados, Organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, Instituciones Financieras Internacionales, Organizaciones de los Pueblos Indígenas, Empresas dedicadas a las industrias extractivas, a tomar en cuenta los planteamientos efectuados por el Foro y a cumplir con sus recomendaciones, para hacer frente a los problemas derivados del cambio climático y sus consecuencias.
2. Todos los actores en cuestión deben de practicar el derechos de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado, ante cualquier iniciativa o mecanismos de REDD, que se intente desarrollar en territorios indígenas.
3. Asegurar la participación plena y efectiva de delegados especialistas indígenas en todos los mecanismos, órganos y procedimientos establecidos bajo la CM-NUCC, incluyendo la mitigación, adaptación, financiación, MRV, transferencia de tecnología.
4. Dar espacio para el reconocimiento y protección del conocimiento indígena, las innovaciones, tecnologías, expresiones culturales tradicionales, creencias espirituales como alternativas de solución a las nuevas situaciones creadas por el cambio climático.
5. Se debe gestionar ante los Estados y la cooperación internacional para asegurar recursos financieros para implementación de campañas de educación, sensibilización y toma de conciencia sobre cambio climático, adaptación y mitigación.
6. Asegurar el acceso directo e inmediato de los pueblos indígenas, especialmente a las mujeres, a la financiación, las tecnologías apropiadas y el fortalecimiento de capacidades para la mitigación y la adaptación.
7. Garantizar la perspectiva de equidad de género e inter-generacional (niños, mujeres, jóvenes y ancianos) en todos los textos de negociación.

8.- Ibid

Pueblos indígenas y Río+20

El 7 y 8 de marzo pasado, en la ciudad de Nueva York, se realizó la II Sesión del Comité Preparatorio de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En esa ocasión el Comité Preparatorio de Río+20, ha generado las siguientes preguntas: ¿Qué va a ofrecer la conferencia? ¿Cuál será el resultado? ¿Cómo Río+20, será diferente de otras conferencias sobre el desarrollo sostenible? ¿Cuáles son los principales problemas y desafíos?

Por otro lado, las Partes (Gobiernos) plantearon gran cantidad de interrogantes, tales como: ¿Cómo definir economía verde? ¿Cuáles son la beneficios, riesgos y retos de la economía verde, y su relación con la erradicación de la pobreza? ¿Cómo hacer el desarrollo del marco institucional para al Desarrollo Sostenible (DS)? ¿Cómo tratar el tema de alimentos y crisis energética? ¿Recuperación ante los desastres? ¿Cómo dar coherencia a finanza, comercio, inversión, creación de capacidades y transferencia de tecnología? ¿Cómo hacer educación para el DS? ¿y la pérdida de biodiversidad y de agua, recursos marinos y costeros? Y muchas otras interrogantes.

Ahora, ante las decisiones adoptada en la II Reunión Preparatoria, que están relacionadas con el proceso para la preparación del proyecto de documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 2012 y que son las siguientes:.

El Segundo Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible:

- (a) *Pide a la Mesa el inicio de un proceso abierto, transparente e inclusivo dirigido por los Estados miembros, para preparar a su debido tiempo un proyecto de texto, basado en todas las entradas de preparación, para servir como base para un documento final de la Conferencia;*
- (b) *Invita a todos los Estados miembros, los organismos pertinentes de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y las partes interesadas pertinentes a que proporcionen sus aportes y contribuciones por escrito el 1 de noviembre de 2011 para su inclusión en un documento de compilación para servir como base para la preparación de cero el proyecto de los resultados documento;*

- (c) *Pide a la Mesa para compilar estos aportes y las contribuciones y presentar su texto compilado a los Estados miembros y otras partes interesadas en la segunda reunión entre períodos de sesiones que se celebrará a mediados de diciembre de 2011, para recabar sus comentarios y orientación;*
- (d) *Exhorta a los co-presidentes en nombre de la Mesa para presentar el proyecto de cero del documento final para su consideración por los Estados miembros y otras partes interesadas, a más tardar a principios de enero de 2012;*
- (e) *Recomienda a la Mesa a convocar una reunión de tres días en enero de 2012 en el sentido de tener debates iniciales sobre el proyecto de documento final, y dejar de lado una semana completa para las negociaciones en cada uno de los meses de febrero, marzo y abril, 2012, asegurando que todas estas reuniones son informales y, como tal, han de tener cabida dentro de los recursos existentes.*

Antes de llegar a esas decisiones las Parte participantes en la Segunda Sesión, tuvieron interrogantes tales como:

Nosotros, en el Foro Latinoamericano, debemos generar otras interrogantes relacionadas con los temas de interés y preocupación de los pueblos indígenas, sobre la base de una evaluación de, al menos, del Capítulo 26, de la Cumbre de Río, que presentamos a continuación:

¿Cuál va a ser el posicionamiento político de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, para la reunión en junio 2012? ¿Qué interrogantes tenemos ante la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente, conocida como Río +20 o Río 20'?

Para generar la discusión, a continuación presentamos el Capítulo 26, de la Cumbre de Río y que se relaciona directamente con los pueblos indígenas:

Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus comunidades

Bases para la acción

26.1. Las poblaciones indígenas y sus comunidades han establecido una relación histórica con sus tierras y suelen ser, en general, descendientes de los habitantes originales de esas tierras. En el contexto del presente capítulo, se sobrentiende que el término “tierras” abarca el medio ambiente de las zonas que esas poblaciones ocupan tradicionalmente. Las poblaciones indígenas y sus comunidades representan un porcentaje importante de la población mundial. Durante muchas generaciones han acumulado conocimientos científicos tradicionales holísticos de sus tierras, sus recursos naturales y

1.- UNCSD, por sus siglas en inglés.

el medio ambiente. Las poblaciones indígenas y sus comunidades habrán de disfrutar a plenitud de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin trabas ni discriminación. Su posibilidad de participar plenamente en las prácticas de desarrollo sostenible en sus tierras ha tendido a verse limitada como resultado de factores de índole económica, social e histórica. Habida cuenta de la relación recíproca existente entre el medio natural y su desarrollo sostenible y el bienestar cultural, social, económico y físico de las poblaciones indígenas, en las actividades nacionales e internacionales encaminadas a lograr un desarrollo ecológicamente racional y sostenible se debería reconocer, promover y fortalecer el papel de las poblaciones indígenas y sus comunidades, y darle cabida.

26.2. Algunos de los propósitos inherentes a los objetivos y actividades en esta esfera del programa ya se han enunciado en instrumentos jurídicos internacionales tales como el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales (No. 169) de la OIT que se están incorporando en el proyecto de declaración universal de los derechos de las poblaciones indígenas que prepara el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones Indígenas de la Comisión de Derechos Humanos. El Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1993), proclamado por la Asamblea General en su resolución 45/164 de 18 de diciembre de 1990, constituye una ocasión propicia para continuar movilizando la cooperación técnica y financiera internacional.

Objetivos 26.3.

Al prestar su plena cooperación a las poblaciones indígenas y a sus comunidades, los gobiernos y, según procediera, las organizaciones intergubernamentales deberían proponerse el cumplimiento de los objetivos siguientes:

- a) Instituir un proceso encaminado a investir de autoridad a las poblaciones indígenas y a sus comunidades, mediante la adopción de medidas que incluyan:
- i) La adopción o ratificación de las políticas o instrumentos jurídicos apropiados a nivel nacional; ii) El reconocimiento de que las tierras de las poblaciones indígenas y sus comunidades deben estar protegidas contra actividades que presenten riesgos para el medio ambiente o que la población indígena de que se trate considere improcedentes desde los puntos de vista social y cultural; iii) El reconocimiento de sus valores, sus conocimientos tradicionales y sus prácticas de ordenación de los recursos, con miras a promover un desarrollo ecológicamente racional y sostenible; iv) El reconocimiento de que la dependencia tradicional y directa de los recursos renovables y los ecosistemas, incluido el aprovechamiento sostenible, sigue siendo esencial para el bienestar cultural, económico y físico de las poblaciones indígenas y de sus comunidades; v) La elaboración y consolidación de los acuerdos nacionales sobre solución de controversias en lo que respecta al arreglo de problemas relacionados con la ordenación de tierras y la gestión de los recursos; vi) La promoción de otros medios de producción ecológicamente racionales para asegurar diversas opciones respecto de como mejorar la calidad de su vida, de manera que puedan participar efectivamente en el desarrollo sostenible; vii) La atención al aumento de la capacidad en favor de las comunidades indígenas, sobre la

base de la adaptación y el intercambio de experiencias, conocimientos y prácticas de ordenación de los recursos tradicionales, para asegurar el desarrollo sostenible de esas comunidades;

b) Establecer, cuando proceda, acuerdos para intensificar la participación activa de las poblaciones indígenas y sus comunidades en la formulación de políticas, leyes y programas relacionados con la ordenación de los recursos en el plano nacional y otros procesos que pudieran afectarles, así como para propiciar que formulen propuestas en favor de políticas y programas de esa índole; c) Participación de las poblaciones indígenas y sus comunidades, a los niveles nacional y local, en las estrategias de ordenación y conservación de los recursos y en otros programas pertinentes establecidos para apoyar y examinar estrategias de desarrollo sostenible, como las que se sugieren en otras áreas de programas del Programa 21.

Actividades 26.4.

Tal vez sea menester que algunas poblaciones indígenas y sus comunidades, de conformidad con la legislación nacional, tengan un mayor control sobre sus tierras, se encarguen de la ordenación de sus propios recursos, participen en la adopción de decisiones relativas al desarrollo que les afecten y, cuando proceda, en el establecimiento o la ordenación de zonas protegidas. A continuación figuran algunas de las medidas concretas que los gobiernos podrían adoptar:

a) Examinar la posibilidad de ratificar y aplicar los convenios internacionales vigentes relativos a las poblaciones indígenas y a sus comunidades (donde no se haya hecho todavía), y apoyar la aprobación por la Asamblea General de una declaración sobre los derechos de las poblaciones indígenas; b) Adoptar o reafirmar políticas o instrumentos jurídicos apropiados que protejan la propiedad intelectual y cultural indígena y el derecho de las poblaciones indígenas a preservar sistemas y prácticas consuetudinarios y administrativos.

26.5. Las organizaciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales de financiación y desarrollo y los gobiernos, apoyándose en la participación activa de las poblaciones indígenas y de sus comunidades, según procediera, deberían tomar, entre otras, las siguientes medidas para incorporar sus valores, opiniones y conocimientos, así como la contribución excepcional de la mujer indígena, en políticas y programas de ordenación de los recursos y de otra índole que pudieran afectarles:

a) Nombrar un centro de coordinación especial en cada organización internacional y organizar reuniones de coordinación anuales entre organismos en consulta con los gobiernos y las organizaciones indígenas, según proceda, y establecer un procedimiento en cada organismo operacional y entre organismos para prestar ayuda a los gobiernos a fin de velar por la incorporación consecuente y coordinada de las opiniones de las poblaciones indígenas en la elaboración y aplicación de políticas y programas. Con arreglo a este procedimiento, se debería ofrecer información a las poblaciones indígenas y a sus comunidades, se deberían celebrar consultas con ellas y permitirse su participación en la adopción de decisiones a nivel nacional, en particular respecto de los esfuerzos

regionales e internacionales de cooperación. Además, en esas políticas y programas se deberían tener plenamente en cuenta las estrategias basadas en las iniciativas locales indígenas; b) Prestar asistencia técnica y financiera a los programas de aumento de la capacidad a fin de apoyar el desarrollo autónomo sostenible de las poblaciones indígenas y de sus comunidades; c) Fortalecer los programas de investigación y enseñanza encaminados a:

i) Lograr una mayor comprensión de los conocimientos y de la experiencia en materia de gestión relacionados con el medio ambiente con que cuentan las poblaciones indígenas y aplicarlos a los problemas contemporáneos del desarrollo; ii) Aumentar la eficacia de los sistemas de ordenación de recursos de las poblaciones indígenas, por ejemplo promoviendo la adaptación y la difusión de innovaciones tecnológicas apropiadas;

d) Contribuir a los esfuerzos que despliegan las poblaciones indígenas y sus comunidades en las estrategias de ordenación y conservación de los recursos (como las que se podrían aplicar en relación con proyectos apropiados financiados por medio del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Plan de Acción Forestal en los Trópicos) y otras actividades previstas del Programa 21, entre ellas los programas sobre reunión, análisis y utilización de los datos y la información de otra índole en apoyo de proyectos relacionados con el desarrollo sostenible.

26.6. Los gobiernos, en cooperación plena con las poblaciones indígenas y sus comunidades, según procediera, deberían:

a) Crear o fortalecer los mecanismos nacionales para celebrar consultas con las poblaciones indígenas y sus comunidades con miras a tener en cuenta sus necesidades e incorporar sus valores y sus conocimientos y prácticas tradicionales o de otra índole en las políticas y programas nacionales en materia de ordenación y conservación de los recursos naturales y en otros programas de desarrollo que puedan afectar a esas poblaciones; b) Cooperar en el plano regional, según proceda, a fin de tratar las cuestiones indígenas comunes con miras a reconocer y aumentar la participación de esas poblaciones en el desarrollo sostenible.

Medios de ejecución

a) Financiación y evaluación de los costos

b) Mecanismos jurídicos y administrativos 26.8. Los gobiernos, en colaboración con las poblaciones indígenas afectadas, deberían incorporar los derechos y responsabilidades de las poblaciones indígenas y sus comunidades a la legislación de cada país, en la forma apropiada a su situación particular. Los países en desarrollo podrán requerir asistencia técnica para llevar a cabo esas actividades.

c) Desarrollo de los recursos humanos

26.9. Los organismos de desarrollo internacional y los gobiernos deberían destinar recursos financieros y de otra índole a la educación y la capacitación de las poblaciones indígenas y sus comunidades para que pudieran lograr su desarrollo autónomo sostenible, contribuir al desarrollo sostenible y equitativo a nivel nacional y participar en el. Se debería prestar atención especial al fortalecimiento del papel de la mujer indígena.

En consideración a lo anterior, el Foro de Pueblos Indígenas de América Latina recomienda Foro Permanente:

- Se recomienda que el Foro juegue un rol protagónico y tenga mayor incidencia en el proceso preparatorio Río+ 20 y en la propia Conferencia para garantizar la participación de los pueblos indígenas y la inclusión de sus demandas y temas prioritarios.
- Impulsar al interior de los países un proceso de lobby por parte de los pueblos indígenas para que lleven la posición de los pueblos indígenas de Latinoamérica.
- Se recomienda al sistema de Naciones Unidas que promuevan y generen procesos preparatorios de los pueblos indígenas frente a Río +20.
- Promover procesos de incidencia a nivel regional para que las posiciones de los pueblos indígenas sean incluidas en los informes y documentos finales de la Conferencia.
- La participación de los pueblos indígenas tiene que ser activa, plena, activa y permanente.
- El Foro debe impulsar un proceso preparatorio para que los pueblos indígenas puedan preparar y consensuar una posición global.
- Se recomienda al sistema de Naciones Unidas que apoye el proceso de elaboración de estudios de casos nacionales para que sean parte de la etapa preparatoria.
- Se recomienda al Foro que adopte en la reunión temática de enero el tema sea Río + 20.
- Se recomienda al sistema de Naciones Unidas que difunda la información relevante sobre el proceso de Río +20 ya que muchas organización no acceden a la información.
- Se recomienda a las organizaciones y redes indígenas que se creen una Comisión, en donde se abarquen organizaciones y autoridades de cada pueblo, que estudie estas temáticas y las difunda a los diferentes pueblos, para que se genera incidencia en las instancia de gobierno, así como para que se establezca la posición en conjunto de los pueblos, respecto de temas que se estén negociando a nivel internacional.

5 de abril 2011

**Resolución:
Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas 2014**

El Conclave de América Latina y el Caribe reunido los días 04, 05 y 06 de abril de 2011 en Managua, Nicaragua en el marco de la Reunión Preparatoria de cara a la 10ma sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas:

Reafirmando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada por la Asamblea General a través de la resolución 61/295, anexo. Recordando todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y del Consejo Económico y Social relativas a los derechos de los pueblos indígenas,

Acogiendo con beneplácito la resolución A/C.3/65/L.22/Rev.1 del 12 de noviembre de 2010 de la Asamblea General de Naciones Unidas a través de la cual decide organizar una reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General, que recibirá el nombre de Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas y que se celebrará en 2014, con el fin de intercambiar puntos de vista y las mejores prácticas sobre el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, incluido el cumplimiento de los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, e invita al Presidente de la Asamblea General a celebrar consultas de composición abierta con los Estados Miembros y los representantes de los pueblos indígenas en el marco del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, así como con el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Relator Especial, con miras a determinar las características de esa reunión, incluida la participación de los pueblos indígenas en la Conferencia;

El Conclave de América Latina y el Caribe,

1. **Recomienda a la Asamblea General convocar a procesos de diálogos interactivos y audiencias de alto nivel entre Estados Miembros y representantes de las organizaciones indígenas en el marco del 11vo y 12vo periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.**
2. **Solicita a la Oficina del Presidente de la Asamblea General del 65avo período de sesiones la designación de facilitadores a fin de impulsar un proceso de consulta con las organizaciones indígenas, los miembros del Foro Permanente y los demás Estados Miembros donde se discutan las modalidades de la reunión y los mecanismos de participación.**
3. **Solicita a la Asamblea General garantizar la participación de los pueblos indígenas tanto en el proceso de preparación como en la misma Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas considerando especialmente la participación de mujeres y jóvenes indígenas.**
4. **Recomienda a la Asamblea General que encargue al Secretario General en consulta con los Estados Miembros, las organizaciones y mecanismos competentes de las Naciones Unidas las organizaciones de pueblos indígenas y otros interesados, la elaboración de un informe sobre avances, desafíos y mejores prácticas sobre el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, incluido el cumplimiento de los artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas a ser presentado durante la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas en el 2014.**
5. **Decide conformar un grupo de trabajo conformado por los miembros del Foro Permanente de la región y las principales redes indígenas de la región para dar seguimiento al proceso de la Conferencia 2014.**
6. **Decide impulsar un proceso de reuniones regionales preparatorias reportando los resultados al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas.**
7. **Solicita a las agencias del Sistema de Naciones, Instituciones donantes, Cooperación internacional y Estados Miembros que destinen apoyo financiero para realizar el proceso de consultas y reuniones preparatorias.**

Resolución:
Labor futura del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas

El Conclave de América Latina y el Caribe reunido los días 04, 05 y 06 de abril de 2011 en Managua, Nicaragua en el marco de la Reunión Preparatoria de cara a la 10ma sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas,

Reafirmando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada por la Asamblea General a través de la resolución 61/295, anexo.

Recordando todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y del Consejo Económico y Social relativas a los derechos de los pueblos indígenas,

Reconociendo al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas como un espacio de incidencia a nivel internacional fundamental para la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la coordinación dentro del sistema de Naciones Unidas y el acercamiento entre los Estados Miembros y los pueblos indígenas,

Reafirmando el mandato del Foro Permanente como órgano asesor para examinar las cuestiones indígenas en el contexto de las atribuciones del Consejo Económico y Social relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos,

Considerando el artículo 42 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas donde se establece que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, entre otros, promoverá el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la Declaración y velará por su eficacia,

Resolución: **Labor futura del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas**

El Conclave de América Latina y el Caribe recomienda al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas:

1. Acoger la Declaración de las y los adolescentes y jóvenes de los diferentes pueblos indígenas de las Américas, adoptada en marco del VI Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, realizado en la comunidad indígena Hueyapan – Tetela del Volcán del Estado de Morelos, del 05 al 08 de marzo del 2011.
2. Priorizar las demandas de niños, niñas y jóvenes indígenas garantizando su participación en los diferentes procesos impulsados por el Foro Permanente y considerándolos sujetos de derecho, agentes de cambio y protagonistas en la lucha por la eliminación de la pobreza, exclusión y racismo.
3. Acoger la Declaración de Mujeres Indígenas contra la violencia adoptada por las mujeres indígenas de las Américas reunidas en Lima, Perú el 24-25 de Noviembre de 2010 en el marco de la Reunión Preparatoria del Enlace Continental de Mujeres Indígenas Región Sudamérica.
4. Prestar especial atención al tema de la violencia contra las mujeres indígenas apoyando el desarrollo de estrategias de prevención, documentación y erradicación de la violencia con enfoque intercultural, diseñadas e impulsadas por las propias comunidades y organizaciones de pueblos indígenas y considerando una conceptualización indígena sobre la violencia de género. Impulsar un proceso de acercamiento y diálogo entre las mujeres indígenas, ONUMJERES y el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW).
5. Prestar especial atención al tema de la salud y los pueblos indígenas haciendo énfasis en la reducción de la mortalidad materna, el respeto por los derechos de salud sexual y reproductiva, y los efectos negativos en la salud de niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres indígenas de los procesos de contaminación ambiental principalmente afectando las tierras, aguas y alimentos con productos tóxicos como el mercurio, uranio, residuos nucleares, pesticidas etc.
6. Considerar con mayor énfasis la situación de los pueblos indígenas viviendo en las ciudades, los pueblos indígenas migrantes, transfronterizos y los pueblos indígenas sin representación y/o sin reconocimiento, promoviendo el establecimiento de mecanismos de consulta directa con dichos pueblos.
7. Jugar un rol proactivo y liderar el proceso preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20 promoviendo procesos de incidencia y visibilización de las demandas de las organizaciones de pueblos indígenas y facilitando la participación de representantes indígenas considerando en particular a las mujeres indígenas.
8. Jugar un rol proactivo y liderar el proceso preparatorio de la Conferencia de Pueblos Indígenas a llevarse a cabo en 2014, impulsando espacios dialogo entre los Estados Miembros y las organizaciones de pueblos indígenas.

Resolución: **Labor futura del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas**

9. Promover un dialogo e intercambio de alto nivel durante la Conferencia de Pueblos Indígenas con la participación de la mayor cantidad de jefes de Estado y representantes de las redes de pueblos indígenas, impulsando la construcción de consensos y la obtención de compromisos concretos en pos del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas ampliamente reconocidos en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La Crisis Financiera Mundial y los Pueblos Indígenas

La crisis financiera y económica que ha venido afectando al mundo en los últimos años, la más grande de todas desde la gran depresión, es una manifestación de una de las muchas crisis cíclicas que afecta al capitalismo, y se encuentra asociada al apetito voraz de este sistema por el consumo y las ganancias y, en el presente caso, acelerada por las prácticas bursátiles fraudulentas llevadas a cabo en los grandes centros financieros a nivel mundial.

Una de las principales características de esta crisis mundial es su naturaleza sistémica e integral, reflejada en la superposición que presenta en los sectores financiero, climático, energético, social y cultural, expresando así la descomposición, no solo del neoliberalismo como doctrina económica, sino del capitalismo como sistema y de la matriz civilizatoria occidental, y sus pilares erróneos de separación entre humanidad y naturaleza, hombre y mujer, individuo y comunidad, igualdad y diversidad¹.

Los países desarrollados, pretenden salir de su crisis, profundizando la presión sobre la Pachamama y los bienes naturales (agua, alimentos, biodiversidad, hidrocarburos, bosques), a través del capital transnacional y sus estrategias de los “TLC”, el impulso de megaproyectos así como de la estigmatización y criminalización de los derechos y movimientos indígenas y sociales².

El modelo de desarrollo basado en la visión occidental de vivir mejor, con un marcado énfasis individualista, y que tiene en la actualidad su máxima expresión en la doctrina y práctica económica del neoliberalismo, como la expresión más pura del capitalismo salvaje y depredador, se encuentra en decadencia y “no encuentra solución alguna a la crisis moral, espiritual, cultural, socioeconómica y humana”³.

1.- Declaración del “Diálogo de Alternativas y Alianzas de los Movimientos Indígenas, Campesinos y Sociales del Abya Yala”. La Paz, 26 de febrero 2009.

2.- Ibid

3.- El Buen Vivir, un principio ancestral en respuesta a la crisis mundial. <http://indigena.todosatierra.com>.

La Crisis Financiera Mundial y los Pueblos Indígenas

Este modelo ha tenido entre los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, serias y duraderas repercusiones, para su vida y culturas. Entre ellas cabe destacar:

1. Sistemática y reiterada violación de sus derechos fundamentales de carácter colectivo e individual, incluyendo el derecho a la vida.
2. Invasión y apropiación de sus tierras, por las corporaciones transnacionales y empresas de los Estados nacionales.
3. Explotación de sus tierras y de sus recursos naturales, incluidos los recursos genéticos y el agua que constituye fuente de vida material, cultural y espiritual.
4. Expropiación de tecnologías y saberes relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales.
5. Contaminación ambiental en los territorios pertenecientes a los pueblos indígenas.
6. Migración forzosa, por las condiciones socioeconómicas de los pueblos indígenas en sus lugares de origen, y la consecuente falta de derechos en el país receptor de los indígenas migrantes.
7. Flexibilidad laboral, sin garantías y prestaciones, ni seguros.
8. Pérdida de su patrimonio y valores culturales.
9. Aumento de la vulnerabilidad física, económica, social, ambiental y cultural

Una de los mecanismos, dirigidos a propiciar el libre comercio entre los Estados, lo constituye la suscripción e implementación de los Tratados de Libre Comercio (TLC). Estos tratados, que son suscritos asimétricamente entre los países desarrollados y los denominados países en vías de desarrollo, tienen considerables efectos negativos sobre los derechos de propiedad intelectual sobre los recursos, bienes y saberes de los pueblos indígenas.

Frente al modelo de desarrollo que procura la asimilación de los pueblos indígenas al “mundo civilizado” y que considera a las culturas y los valores de los pueblos indígenas en contradicción con los valores de la economía de mercado, tales como la acumulación de ganancias, el consumo y la competencia; se contraponen el propio de los pueblos indígenas: el desarrollo con cultura e identidad que se caracteriza por un enfoque holístico, que procura cimentarse en los derechos y la seguridad de la colectividad y en un mayor control y gobierno autónomo de las tierras, los territorios y los recursos. Esos conceptos se basan en el respeto a los antepasados, pero también están proyectados hacia el futuro teniendo la flexibilidad suficiente para aceptar cambios. Los valores de reciprocidad, solidaridad, equilibrio, sostenibilidad, intercambio y colectividad son los pilares del modelo indígena⁴.

4.- Ibid

La Crisis Financiera Mundial y los Pueblos Indígenas

El cambio climático, la crisis alimentaria y las políticas de privatización, concesión y explotación de los recursos naturales son los aspectos de la crisis actual que más impacto tienen y tendrán en la vida de las comunidades indígenas y en la vida de las mujeres indígenas⁵.

Algunos impactos de la crisis, sobre los pueblos indígenas han sido los siguientes:

1. Malnutrición, y enfermedades prevenibles o curables, el incremento del desempleo, dadas sus menores oportunidades para la obtención de empleos, y, consecuentemente, la disminución de sus ingresos; la reducción del acceso a la educación y servicios de salud; y, las carencias en materia de protección social.
2. La disminución de su seguridad humana, y el incremento de su grado de vulnerabilidad económica, social, cultural y ambiental.
3. La amenaza creciente sobre sus tierras y recursos debido a las actividades extractivas que, a su vez, repercuten en la destrucción del ambiente y sus ecosistemas.
4. El incremento acelerado de la destrucción de áreas boscosas pertenecientes a los pueblos indígenas.
5. La afectación de los ecosistemas en los que habitan los pueblos indígenas debido principalmente a las actividades de extracción de recursos naturales, como la minería y la explotación forestal, representan graves amenazas para los estilos de vida tradicionales y la cultura de los pueblos indígenas
6. Una mayor inseguridad económica y alimentaria de las poblaciones indígenas en América Latina y el Caribe.
7. La disminución del acceso a los servicios de salud, educación y empleo, debido a los menores presupuestos públicos para el financiamiento de las políticas y programas sociales impulsados por los Estados.
8. El impulso de programas para enfrentar la crisis financiera y económica, principalmente dirigidos a la construcción de enormes obras de infraestructura, lo que implica el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas sin su consentimiento previo, libre, informado y de buena fe.
9. La construcción de megaproyectos privados y públicos. En particular aquéllos relacionados con la construcción de oleoductos, gaseoductos, hidroeléctricas y carreteras hacia áreas con recursos naturales en territorios indígenas.
10. La flexibilización de las regulaciones sociales, ambientales, y aquéllas dirigidas a los pueblos indígenas, por parte de los Estados y de los organismos financieros que, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, proveen de recursos a las empresas, para el financiamiento de los proyectos de sus proyectos inversión.

5.- Ver documento: "El Impacto de la Crisis Económica en la Vida de las Mujeres Indígenas." Documento base preparado por FIMI para la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 2010.

La Crisis Financiera Mundial y los Pueblos Indígenas

El Foro Permanente ha mostrado su preocupación por las consecuencias que la crisis financiera y económica mundial tiene sobre los pueblos indígenas. En este contexto, durante el octavo período de sesiones llevado a cabo del 18 al 29 de mayo de 2009, nombró Relatora Especial a la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, para que realizase un estudio sobre las consecuencias de la crisis económica mundial para los pueblos indígenas, determinara medidas y formulara propuestas a los gobiernos y los órganos, organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas para hacer frente a esas consecuencias y presentara un informe al respecto en el noveno período de sesiones del Foro, celebrado en el año 2010⁶. Durante el noveno período de sesiones, el Foro Permanente decidió volver a nombrar a Victoria Tauli-Corpuz Relatora Especial para terminar el estudio sobre las consecuencias de la crisis mundial para los pueblos indígenas a más tardar el 31 de diciembre de 2010 y presentarlo al Foro Permanente en su décimo período de sesiones de 2011⁷.

También el Foro Permanente ha insistido en la necesidad de que las soluciones para enfrentar los problemas derivados de la crisis económica y financiera mundial, requieren ajustarse a enfoques de desarrollo basados en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Y, que es fundamental la participación efectiva de los indígenas en la planificación que los Estados adopten para enfrentar la crisis. Esta recomendación se ajusta plenamente a lo indicado en el artículo 23 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual señala que “los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones”⁸.

El Caucus de Latinoamérica y el Caribe recomienda a los Estados, las siguientes medidas encaminadas a contribuir a disminuir los impactos de la presente crisis internacional, y sus repercusiones en los pueblos indígenas:

1. Definir, en conjunto con los pueblos indígenas, de programas y medidas concretas, rápidas, decisivas y coordinadas, que contribuyan a lograr avances y mejorías importantes y significativas en las condiciones socioeconómicas de los pueblos indígenas, en particular en aspectos como reducción de pobreza, salud y educación. Tales programas deben tomar en consideración las condiciones particulares de cada uno de los pueblos indígenas y de sus respectivas poblaciones, así como la aplicación del principio del consentimiento previo, libre e informado, y la consideración del enfoque de derechos para llevarlos a la práctica.

6.- E/2009/43, E/C.19/2009/14

7.- E/2010/43, E/C.19/2010/15

8.- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

La Crisis Financiera Mundial y los Pueblos Indígenas

2. Formular y aplicar políticas especiales, en conjunto con los pueblos indígenas, encaminadas a que gocen plenamente de todos los derechos políticos, económicos, sociales, y culturales consignados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio No.169 de la OIT, así como en las legislaciones de cada uno de los Estados.
3. Impulsar la definición aplicación de normas jurídicas, administrativas y procedimentales encaminadas a la protección y defensa de los territorios, recursos y derechos económicos, en particular los relacionados con la protección intelectual de sus bienes, recursos, conocimientos, saberes, técnicas y tecnologías propias de los pueblos indígenas.
4. Definir e implementar, conjuntamente con los pueblos indígenas, programas encaminados a facilitar el acceso a financiamiento suficiente y en condiciones favorables para el fomento de sus capacidades en infraestructura, productivas, comerciales y técnicas, y que brinden apoyo a los procesos de desarrollo sostenible que ellos impulsan.
5. Establecer conjuntamente con los pueblos indígenas, y con el financiamiento de organismos internacionales como el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y el Banco Interamericano, el establecimiento de programas, especialmente dirigidos a los pueblos indígenas, contribuyendo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y los compromisos internacionales que tienen los Estados en materia de desarrollo.
6. Definir en conjunto con los pueblos indígenas, los mecanismos que permitan y faciliten, a través de la asociatividad, la obtención de beneficios equitativos para éstos, cuando sean desarrolladas actividades de aprovechamiento de recursos existentes en sus territorios, por parte de empresas nacionales y corporaciones transnacionales.

Niñez, Adolescencia y Juventud Indígenas

El artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que en su aplicación se “prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los... jóvenes, los niños... indígenas...”. Y, que “los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que... los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación”¹.

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 192 países, en su artículo 30, establece que en “los Estados en que existan... personas de origen indígena, no se negará a un niño que... sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma”².

Los niños, adolescentes y jóvenes indígenas son sujetos de derechos generales fundamentados en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, y de derechos específicos basados en la protección y cuidados que requieren los niños y adolescentes para asegurarse jurídicamente los derechos iguales e inalienables de la familia humana; también como indígenas, son sujetos de derechos individuales y colectivos relacionados con el reconocimiento de su propia naturaleza y de su diversidad cultural³. Sin embargo, el ejercicio de sus derechos generales y especiales dista mucho de cumplirse plenamente.

Muchos son los problemas que enfrentan, y aquejan a, los niños, adolescentes y jóvenes indígenas. Entre ellos se encuentran:

1.- La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

2.- Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989

3.- Encuentro Latinoamericano pueblos indígenas y gobiernos (2010). Niñez Indígena en América Latina: Situación y Perspectivas.

1. El limitado acceso a la educación y a la calidad educativa
2. Bajo nivel de acceso de los adolescentes a la educación secundaria, lo cual se evidencia en el hecho de que si los promedios nacionales son menores al 50% en la población general; en poblaciones indígenas, especialmente rurales se estima que puede ser el 20%, especialmente en niñas y adolescentes.
3. La prevalencia de altas tasas de desnutrición, morbilidad y mortalidad infantil.
4. La existencia de nuevas enfermedades que les afectan, tales como el VIH-Sida.
5. La falta de acceso al empleo y a contar con empleos de calidad.
6. La migración obligada por la falta de oportunidades y, consecuentemente, los efectos relacionados con la pérdida de valores culturales y la transculturización.
7. Trafico de personas, específicamente de niñas y niños, adolescentes y jóvenes.
8. Violencia que suceden en nuestros países impacta en niños, niñas, adolescentes y jóvenes como víctimas y al presenciar crímenes, conflictos, despojos de tierras entre otras.
9. Explotación sexual infantil y de jóvenes.
10. Falta de reconocimiento político de la niñez y juventud como sujetos que aportan, como las limitaciones de acceso al poder político, cargos, la escucha de las opiniones y demandas.
11. Hace falta reflexionar sobre los ciclos de vida de la Niñez, adolescencia y juventud en cuento a los momentos específicos de estas etapas, ya que en las culturas indígenas cada etapa tiene su propia concepción desde su cosmovisión.
12. UNICEF, actualmente solo se enfoca en el trabajo de niñez y adolescencia, y no existe una instancia que se dedique a los y las jóvenes específicamente de sus problemáticas.

Las cifras son muy indicativas. La mortalidad infantil, en Panamá, de los niños y niñas indígenas alcanza una cifra de 84 por cada mil nacidos vivos, en tanto que la cifra de los niños y niñas no indígenas es de 17 por cada mil nacidos vivos. La diferencia es de casi el 400% más, esto significa que mueren 4 veces más niños y niñas indígenas que niños y niñas no indígenas.

Un estudio sociodemográfico de la CEPAL considera, que “las disparidades entre indígenas y no indígenas son contundentes. La probabilidad de que un niño indígena muera antes de cumplir su primer cumpleaños es 3,4 veces más alta (o 240% mayor) que la de niños no indígenas de Panamá y un 10% mayor en Chile”⁴. De acuerdo al estudio, en “...América Latina, la mortalidad infantil indígena es prácticamente el doble que la no

4.- CEPAL (2005). Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: información sociodemográfica para políticas y programas.

indígena, ya que la mediana regional de mortalidad infantil en la población indígena es de 52,2 por 1.000, mientras que la no indígena es de 27,6 por 1.000. Además, en ningún país latinoamericano se ha alcanzado la meta de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo relativa a la eliminación de las desigualdades entre indígenas y no indígenas”⁵.

Los datos del estudio indican que las disparidades a nivel de país son considerables. Así, la tasa de mortalidad de niños y niñas indígenas en Paraguay alcanza la cifra de 82.2 por cada 1000 nacidos vivos, frente a 39.1 por cada 1000 nacidos vivos, de niños y niñas no indígenas. Es decir, una diferencia del 110% más. En Ecuador, la cifra alcanza los 59.3 niños y niñas indígenas por cada 1000 nacidos vivos, frente a 25.8 niños y niñas no indígenas por cada mil nacidos vivos, con una diferencia 130% más. En México, la cifra asciende a 54.6 niños y niñas indígenas por cada 1000 nacidos vivos, frente a 33.2 niños y niñas no indígenas por cada 1000 nacidos vivos, cifra que representa el 64.5% más.

De conformidad con los mismos datos de la CEPAL⁶, las cifras de acceso a la educación, así como de conclusión de la educación primaria, de los niños y niñas indígenas, muestran porcentajes de cobertura que van desde el 62% (Paraguay) hasta el 89% (México) de cobertura, con una importante brecha entre niños y niñas indígenas y niños y niñas no indígenas. Así por ejemplo, La brecha en países como México, Ecuador, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Brasil, Honduras y Paraguay es del: 7, 5, 8, 19, 21, 20, 2, y 31 puntos porcentuales, respectivamente. Las brechas significativamente más altas se encuentran en países como: Paraguay, Brasil, Costa Rica y Panamá.

Las cifras son más altas si se analizan los porcentajes de niños y niñas indígenas que concluyen su educación primaria. La proporción de jóvenes no indígenas de 15 a 19 años que han culminado la primaria va entre un 69% y un 96% en Guatemala y Chile, respectivamente. Entre los jóvenes indígenas, las tasas de término de este nivel van de un 21% en Paraguay a un 93% en Chile. Guatemala alcanza el 36%, Honduras el 45%, Costa Rica y Panamá el 56%, Brasil el 64%, y México el 69%⁷.

Las cifras, pueden variar de un país a otro, tal como se aprecia en los datos proporcionados por el estudio de la CEPAL, también se reflejan altas variaciones a nivel de Estados o bien de municipios. Así, por ejemplo, en el caso de México, en el Estado de Guerrero, 45,4% de la población indígena (1 de cada dos personas) de más de 15 años no pasó por la escuela.

Muchos de estos problemas se encuentran relacionados con la aplicación de políticas excluyentes que implementan los Estados, así como por prácticas racistas, lo que impide a los niños, adolescentes y jóvenes indígenas, o cuando menos les limitan, su desarrollo como seres humanos y ciudadanos plenos con sus derechos generales y específicos como indígenas.

5.- Ibid

6.- Ibid

7.- Ibid

Durante el segundo período de sesiones, celebrado del 12 al 23 de mayo del año 2003, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas decidió, “como se señala en el informe sobre su primer período de sesiones, que los niños y los jóvenes indígenas fueran el elemento fundamental de su labor en los próximos años”. Y, manifestó su preocupación “por los problemas específicos y la discriminación con que se enfrentan los niños y jóvenes indígenas, particularmente en lo que se refiere a la educación, la salud, la cultura, la pobreza extrema, la mortalidad, el encarcelamiento, el trabajo y otros ámbitos importantes”⁸.

Alentó “a los organismos de las Naciones Unidas cuyas actividades tienen repercusiones sobre los niños y los jóvenes indígenas, a que informen regularmente al Foro”⁹. Indicando que los informes debían contener información detallada sobre los progresos, y una evaluación de éstos, hechos dentro de los programas dirigidos a los adolescentes indígenas, que afectan a los adolescentes indígenas y que se refieren a los adolescentes indígenas.

Al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en particular, le solicitó le presentara todos los años un informe completo “incluyendo asignaciones presupuestarias y una evaluación de sus efectos y dando detalles sobre todas las actividades emprendidas por el UNICEF en colaboración con otros organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas en relación con los niños indígenas y sobre las actividades emprendidas en los planos internacional o regional, así como sobre las actividades nacionales cuando proceda; y Proporcione información procedente de la encuesta a base de indicadores múltiples iniciada en el plano mundial por el UNICEF, desagregando los datos sobre la salud prenatal, el nacimiento, el registro, la inmunización y el desarrollo de los niños indígenas en la primera infancia”¹⁰.

Recomendó “que el sistema de las Naciones Unidas, en especial el UNICEF y la OMS, en colaboración con los gobiernos y en consulta con las organizaciones de pueblos indígenas, y con la colaboración y las aportaciones del Comité sobre los Derechos del Niño y el Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, encaren las cuestiones relativas a la trata y explotación sexual de niñas indígenas e insta a los Estados a que establezcan programas de rehabilitación”¹¹.

Durante el séptimo período de sesiones celebrado del 21 de abril al 2 de mayo de 2008, El Foro manifestó su profunda preocupación por “lo expresado en el informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación respecto de la difusión de las prácticas de trabajo infantil en muchos Estados, con inclusión de niños indígenas, hecho que constituye una grave violación de sus derechos humanos, incluido su derecho a la educación”¹², e instó a los Estados “a que tengan en cuenta las obligaciones que en este sentido les incumben en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y los Convenios de la OIT No. 138 (Convenio sobre la edad mínima) y No. 182 (Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil)”¹³.

8.- E/2003/43, E/C.19/2003/22

9.- Ibid

10.- Ibid

11.- Ibid

12.- E/2008/43, E/C.19/2008/13

13.- Ibid

También el Foro, durante su octavo período de sesiones celebrado del 18 al 29 de mayo del año 2009, recomendó a los Estados que “apliquen los principios de la observación general núm. 11 (2009) del Comité de los Derechos del Niño, titulada “Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención”¹⁴.

Las y los adolescentes y jóvenes de los diferentes pueblos indígenas de las Américas, reunidos en marco del VI Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, realizado en la comunidad indígena Hueyapan – Tetela del Volcán del Estado de Morelos, del 05 al 08 de marzo del 2011¹⁵, han expresado su preocupación, por la falta de políticas públicas con participación directa de las mujeres, jóvenes y los pueblos indígenas, la desigual distribución de presupuestos, la vigencia de legislaciones que no concuerdan con la normativa internacional alcanzada.

Existen algunas experiencias interesantes en Latinoamérica y el Caribe desarrolladas por jóvenes indígenas. Así por ejemplo, en la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, los jóvenes han propuesto su política estrategia y plan de juventudes. En otros países como Perú y Guatemala, hay grupos de jóvenes indígenas que están organizados y desarrollan acciones propositivas para encarar los problemas que enfrentan, tal como ocurre con los jóvenes indígenas Niojanchic del Perú y grupos de jóvenes Mojomaya en Guatemala. También se pueden identificar esfuerzos para incorporar a los jóvenes a los programas de formación con la Cátedra Intercultural Indígena (CII). Igualmente, destaca la incorporación de jóvenes a cargos de elección popular, aún cuando una mayor presencia de jóvenes indígenas en estos cargos continúa siendo un desafío que hay que encarar. Asimismo, vemos con mucho interés que el Programa de Gobernabilidad del PNUD, impulse la participación e incorporación de una mayor cantidad de jóvenes indígenas, mujeres y hombres, a cargos de elección en los procesos electorales.

Tomando en cuenta la situación particular de los niños, adolescentes y jóvenes indígenas, el Caucus de Latinoamérica y el Caribe recomienda a los Estados:

1. Impulsar el acceso a los servicios educativos a niños, adolescentes y jóvenes indígenas con enfoque de interculturalidad.
2. Ampliar el reconocimiento del enfoque intercultural considerando los conocimientos ancestrales, metodologías, valores e historia propia de los pueblos indígenas.
3. Fomentar el desarrollo y consolidación de los programas de educación Intercultural Bilingüe con fortalecimiento de la identidad.
4. Impulsar la formación y capacitación permanente a los docentes Indígenas con especialidad en Educación Intercultural Bilingüe.
5. Poner en práctica un programa de becas dirigidos a jóvenes, para su acceso a cursos de especialización, así como maestrías y doctorados.

14.- E/2009/43, E/C.19/2009/14

15.- Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, mismos principios, nuevos liderazgos: niñez y juventud indígena. Declaración del 5 al 8 de marzo, comunidad de Hueyapan, Morelos – México

6. Fortalecer y consolidar la operación de centros de formación universitaria dirigidos a la formación de jóvenes indígenas.
7. Asegurar presupuestos en montos suficientes para implementar la Educación Intercultural Bilingüe con énfasis en la enseñanza del idioma en todos los niveles educativos, así como la incorporación de los conocimientos ancestrales, cosmovisión e identidades de cada pueblo.
8. Fomentar la implementación de programas que favorezcan el acceso de los servicios de salud oportunos y de calidad a los niños, adolescentes y jóvenes indígenas.
9. Favorecer el acceso a la información con enfoque intercultural y metodologías apropiadas sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva.
10. Promover acciones de prevención y atención a enfermedades de transmisión sexual, así como el acceso a los métodos anticonceptivos, basados en la sensibilización sobre los proyectos de vida.
11. Certificar los partos atendidos por parteras así como la registro de nacimiento e identidad legal.
12. Incorporar en el currículo escolar la educación sexual y reproductiva con enfoque diferencial y con acompañamiento de mayores y sabias indígenas.
13. Impulsar el desarrollo de programas de empleo o de emprendimientos empresariales dirigidos a jóvenes indígenas.
14. Desarrollar acciones encaminadas a reducir y eliminar el trabajo infantil indígena.
15. Rediseñar las metodologías censales, y los procedimientos de aplicación, e incorporar datos desagregados y variables étnico-culturales, etáreas y de género en los censos de población, encuestas de hogares y otros registros vitales.

El Caucus de Latinoamérica y el Caribe recomienda a las organizaciones que forman parte del Sistema de Naciones Unidas:

16. Diferenciar el análisis por ciclo de vida en el documento y en la labor de las agencias de Naciones Unidas. Prestando atención a la primera infancia, la necesidad de servicios de atención especialmente ampliar la cobertura de su atención a madres adolescentes, solteras y trabajadoras.
17. Transversalizar el tema de juventud en todos los temas que aborda el Sistema de Naciones Unidas.
18. Trabajar en la concepción indígena sobre el trabajo infantil a diferencia de la explotación infantil, ya que en las culturas originarias se tienen tareas como formación para la vida del niño y la niña. Ya que es una formación para la vida de la persona.

El Caucus de Latinoamérica y el Caribe recomienda a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas:

19. Definir, analizar y desarrollar los ciclos de vida, niñez, adolescencia y juventud en cuenta a los momentos específicos de estas etapas, ya que en las culturas indígenas cada etapa tiene su propia concepción desde su cosmovisión.
20. Sistematizar y documentar las buenas prácticas indígenas con relación a la niñez y juventud.
21. Establecer mecanismo que esfuerzos para encuentros interculturales y fortalecer la participación de la niñez y adolescencia indígena.
22. Prestar especial atención al tema de la situación de las niñas y adolescentes, como un espacio específico a tratar, considerar y atender.
23. Fortalecer los procesos organizativos de niños, adolescentes y jóvenes indígenas.
24. Impulsar la participación política de los jóvenes indígenas de manera que accedan a cargos de elección popular en todos los niveles y ámbitos del ejercicio de la gobernanza.

Resolución: ONUMUJERES

El Conclave de América Latina y el Caribe reunido los días 04, 05 y 06 de abril de 2011 en Managua, Nicaragua en el marco de la Reunión Preparatoria de cara a la 10ma sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas,

Reafirmando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada por la Asamblea General a través de la resolución 61/295, anexo.

Recordando todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y del Consejo Económico y Social relativas a los derechos de los pueblos indígenas,

Acogiéndonos en la resolución 49/7 “Las mujeres indígenas más allá del examen decenal de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing”, adoptada por consenso en el 49° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas,

Reafirmando la Declaración de las Mujeres Indígenas adoptada en Brasilia, Brasil en el marco de la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (CEPAL), del 13 al 16 de Julio del 2010,

Acogiendo con beneplácito la resolución 64/289 adoptada por la Asamblea General el 21 de julio 2010, donde decide establecer una entidad compuesta de género, dando constitución a “ONUMUJERES”,

Reconociendo que la creación de ONUMujeres es un paso importante para el avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y niñas de todo el mundo,

Reafirmando que la creación de ONU Mujeres representa una oportunidad para incluir las perspectivas y prioridades de las mujeres indígenas en el funcionamiento del sistema de las Naciones Unidas de forma coherente y efectiva,

Considerando el papel central de las mujeres indígenas en sus comunidades, en la protección de los conocimientos ancestrales, en la construcción de la identidad social y cultural de sus pueblos y como protagonistas claves en la lucha por el reconocimiento

de sus derechos, la eliminación de la pobreza, exclusión y racismo,

El Conclave de América Latina y el Caribe solicita a ONUMUJERES:

1. Reconocer explícitamente en su mandato la situación de mujeres y niñas indígenas e incluir el enfoque intercultural en todos los niveles;
2. Diseñar e implementar políticas y programas específicos para el adelanto de los derechos humanos de las mujeres indígenas coordinados por un departamento específico, tomando en cuenta la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y las prioridades y demandas planteadas por las organizaciones de mujeres indígenas;
3. Establecer mecanismos adecuados para garantizar la participación e inclusión de las mujeres indígenas en todos los niveles de toma de decisiones,
4. Incluir personal experto en temas de interculturalidad y mecanismos adecuados para facilitar el reclutamiento y permanencia de expertas indígenas en todos los niveles,
5. Asignar un presupuesto específico y adecuado para programas dirigidos a mujeres indígenas.

Los Pueblos Indígenas y el Agua

Para los pueblos indígenas, no es posible separar sus esfuerzos por la reivindicación de sus derechos sobre el agua de su lucha por el reconocimiento de sus derechos fundamentales como pueblos¹. Y, para que se les reconozcan sus propias visiones del agua, tanto a nivel local, nacional y regional como en los foros internacionales. El agua para estos pueblos es, además de un derecho humano básico, fuente de vida y un elemento fundamental dentro de su cosmovisión y espiritualidad. Las aguas, territorios y tierras son la base fundamental física, cultural y espiritual de su existencia e identidad como pueblos distintos.

Sin embargo, sus voces han sido comúnmente acalladas por un discurso basado en la concepción, del agua como una simple mercancía. Esta concepción, ha sido rebatida por los pueblos indígenas en diversos espacios y foros, en el marco de los debates que han surgido sobre el acceso, uso y gestión del agua, así como para la presentación de propuestas dirigidas a atender la crisis mundial del agua². Para los pueblos indígenas, el agua es sagrada, pertenece a la naturaleza y no puede ser objeto de propiedad ni ser transformada en una mercancía por un individuo, estado o empresa. Ellos consideran su responsabilidad y obligación colectiva asegurar la protección, disponibilidad y pureza del agua a las generaciones presentes y futuras, así como al resto de la creación.

Existe un gran vacío entre las políticas internacionales y las prácticas locales en el campo de los recursos hídricos. Asimismo, no existe ningún organismo o programa de las Naciones Unidas que sea responsable de la temática de los recursos hídricos. Esto probablemente explica por qué en general los procesos internacionales sobre el agua, posteriores a la Cumbre de la Tierra, no fueron organizados por las Naciones Unidas, ni tampoco fueron liderados por ellas. Las decisiones sobre el desarrollo acerca del agua están siendo orientadas hacia los organismos mundiales, tales como la Organización Mundial del Comercio o el Banco Mundial.

Se considera que, el desarrollo de los recursos hídricos exige contar con un mecanismo que asegure el equilibrio entre los roles del Estado, el mercado y las comunidades locales³, pues un paradigma en el que prime el papel de las fuerzas del mercado no atribuirá demasiada importancia al papel y la participación de los pueblos indígenas y de las

1.- Victoria Tauli Corpuz

2.- UNESCO, 2007, El Agua y los Pueblos Indígenas.

3.- Victoria Tauli Corpuz

Los Pueblos Indígenas y el Agua

comunidades locales a la hora de diseñar las políticas y programas sobre agua. En todo caso debe tomarse en cuenta el hecho de que las Naciones Unidas ya han declarado el acceso al agua como un derecho humano fundamental y si es así, el agua no debe ser objeto de mercantilización. En algunos países, como en el caso del Perú el agua ya está privatizada. Sin embargo, las grandes empresas, que usan hasta mil litros de agua por segundo como es el caso de las empresas mineras, tienen privilegios, pues el agua prácticamente les resulta gratuita.

El Foro Permanente ha reafirmado que el derecho al agua es parte de los derechos humanos fundamentales y ha pedido la elaboración de normas internacionales para la utilización, ordenación y regulación del agua. También ha instado a los Estados y a las empresas estatales a que celebren consultas y cooperen de buena fe con los pueblos indígenas afectados a fin de recabar su consentimiento previo, libre e informado antes de la aprobación de políticas, planes y proyectos referidos a sus tierras o territorios y otros recursos, en particular en relación con el desarrollo, la utilización o explotación de recursos...hídricos...de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

No existe evidencia que tales recomendaciones hayan sido consideradas por los Estados. Así por ejemplo, en el Ecuador, hubo serias tensiones y disputas en torno al “Proyecto de Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua”. Este proyecto, en sus distintas versiones oficiales presentó serias contradicciones constitucionales. En su proceso de formulación, la participación de organizaciones sociales e indígenas quedó restringida a cuestiones informativas generales. Los actores centrales de la escena fueron las autoridades del ejecutivo y los legisladores de Alianza País, cuyo bloque no es homogéneo, y donde se manifestaron posiciones de abierta defensa a intereses privados en torno al agua, posiciones “indiferentes” y posiciones comprometidas con cambios profundos.

En la nueva Constitución del Ecuador han sido plasmadas garantías importantes como el derecho humano al agua, el reconocimiento del manejo exclusivo público y comunitario del agua –cerrando así el paso a la privatización–, la autoridad única del agua, el manejo y protección de las fuentes de agua o la prelación en su uso para garantizar el caudal ecológico, el consumo humano y la soberanía alimentaria, sin embargo, en la elaboración de la nueva Ley de Recursos Hídricos estos importantes avances sufrieron un retroceso.

Diversas organizaciones indígenas debatieron, analizaron y formularon alternativas en torno a las propuestas oficiales. El desafío principal de las organizaciones fue asegurar que el nuevo marco legal garantice la “participación plena en la gestión de los recursos hídricos y su institucionalidad; reconocimiento y fortalecimiento de los sistemas comunitarios que gestionan sus propios sistemas de agua; asegurar una gestión democrática del riego, así como mecanismos alternativos de financiamiento de la gestión comunitaria de los sistemas de agua; y también garantizar un aprovechamiento del agua en avenencia con los derechos de la Madre Tierra”.

Fue impulsada una movilización por la “Defensa del Agua, la Vida y el Estado Plurinacional”, la que tuvo matices distintos en las distintas regiones. Mientras en la Sierra la convocatoria tuvo poca acogida, en la Amazonía se gestaba una protesta más intensa

encabezada por la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) entre las provincias de Pastaza y Morona Santiago, en la Amazonía central y, específicamente, en las cercanías de la capital provincial Macas, junto al río Upano. José Akachu, presidente de la FICSH, habló de “la posibilidad de declararnos nacionalidad autónoma, para fijar nuestras propias leyes y crear un ejército shuar que proteja el agua, el aire y toda la riqueza natural que hay en la zona”.

En ese marco, la policía intentó desalojar a los manifestantes con más de 50 efectivos, lo que produjo enfrentamientos en el que murió por disparo de arma de fuego el profesor shuar Bosco Wizuma, oriundo de la comunidad de Corazón de Jesús. También hubo 40 heridos, todos de las filas policiales. Tras una serie de acusaciones mutuas en cuanto a las responsabilidades de los incidentes en el río Upano, el Gobierno y la CONAIE aceptaron sentarse en una mesa de diálogo.

Para el caso del tema de la Ley de Aguas, fue creada una comisión que al final logró articular una propuesta base consensuada. Trabajo que facilitó un intenso debate y aprobación –en primera instancia– en la Asamblea Nacional de dicho proyecto de ley. Sin embargo, para las organizaciones sociales quedaron tres temas sensibles aún pendientes: la institucionalidad del agua, la participación y la gratuidad del mínimo vital⁴.

Recomendaciones

El Caucus de Latinoamérica y el Caribe acoge con satisfacción la aprobación por la Asamblea General de la resolución 64/292 de fecha 28 de julio del 2010, que reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho esencial para todos los pueblos de los distintos países, para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Y, dada la importancia que reviste el agua, como uno de los principales derechos de los pueblos indígenas recomienda al Foro:

1. Velar efectivamente porque en el seno del Sistema de Naciones Unidas se logre el equilibrio entre el Estado, el mercado y las comunidades indígenas, para sacar el agua del mercado y de las negociaciones del OMC.
2. Instar a la cooperación internacional a que cambie su modalidad de financiamiento, eliminando a los intermediarios y llegar directamente a las bases.
3. Exigir a los Estados garantizar el suministro de agua potable, suficiente, salubre, aceptable y asequible para el uso personal y doméstico.
4. Solicitar el establecimiento de un Tribunal Internacional del Agua cuyas resoluciones tengan un carácter vinculante para los Estados.
5. Trabajar fuertemente el tema de Cambio Climático con los pueblos indígenas ya que tiene incidencia con la calidad y cantidad del Agua.

4.- IWGIA. Mundo Indígena, 2010.

6. Establecer un marco internacional sobre el uso de agua y a nivel de cada uno de los países, que se trabaje el tema de Código de Uso del agua partiendo de la solidaridad, los derechos de cada uno al agua y la sostenibilidad. Y, que tome en cuenta los derechos de los pueblos indígenas de conformidad con el Convenio No.169 de la OIT, y la Declaración la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
7. Impulsar la incorporación y participación de los pueblos a través de sus representantes, en las instancias, espacios y foros creados a nivel nacional e internacional para la regulación, gestión y control del uso de los recursos hídricos.
8. Solicitar al Banco Mundial no seguir financiando proyectos Mineros que únicamente sirven para contaminar el medio ambiente y las fuentes de agua de los pueblos, en particular las de los pueblos indígenas.

El Caucus de Latinoamérica y el Caribe recomienda a los Estados:

9. Fomentar participación sistemática y efectiva de los pueblos indígenas, a través de sus legítimos representantes, en los procesos de elaboración y definición de las normas jurídicas, políticas, planes y programas nacionales, para el acceso, uso y gestión de los recursos hídricos.
10. Invertir en la educación de los pueblos indígenas y afrodescendientes y comunidades étnicas para que puedan estar bien informados sobre los pro y contra de los megaproyectos relacionados con el agua y poder tomar decisiones correctas en relación a este tema.
11. Desarrollar pasos concretos dirigidos a asegurar el derecho de las comunidades indígenas al agua. Que el agua que está dentro de los territorios de los pueblos indígenas sean de los pueblos y que se considere el sistema de cuencas a que pertenece esa agua para evitar que las fuentes sean contaminadas.
12. Hacer un diagnóstico exhaustivo sobre el grado y fuente de contaminación de las aguas de las comunidades indígenas, para que éstas puedan hacer demandas sustentadas contra aquéllos que las contaminan. Las universidades pueden jugar un rol importante para este diagnóstico, para lo cual habría que fortalecerlas para este rol.
13. Asegurar mecanismos que defienden el derecho de los pueblos al agua y mecanismos concretos que evitan las expulsiones de las comunidades donde harán megaproyectos.
14. Promover la gestión directa de los recursos hídricos, por parte de los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas, en los territorios en que habitan, bajo normas previamente negociadas y acordadas con los Estados.

Pueblos Indígenas e Industrias Extractivas

Muchas de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas tienen como común denominador la presión para que sean explotados los bienes naturales que les pertenecen y que están en sus tierras y territorios, por parte de las corporaciones transnacionales dedicadas a las industrias extractivas, las cuales realizan sus actividades pasando encima de, y violando los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, aumentando la contaminación ambiental por la falta de observancia de las leyes ambientales, y elevando el nivel de pobreza e inseguridad y sub-desarrollo de las poblaciones indígenas.

Hoy en día, los pueblos indígenas se encuentran sometidos a una presión cada vez más intensa sobre sus tierras y territorios, lo que tiene como resultado una rápida deforestación y contaminación ambiental, como producto de la actividad de las corporaciones extractivas dedicadas a la explotación maderera, la minería, la expansión agrícola, la colonización y los proyectos de infraestructura. Por otro lado las iniciativas de conservación del medio ambiente con mucha frecuencia tampoco toman en cuenta los derechos indígenas¹. A ello se agrega la re estatización de las tierras y territorios que pertenecen a los pueblos indígenas a través de la declararlas áreas de reserva sin su consentimiento previo, libre e informado, y de buena fe.

Las prácticas de las corporaciones privadas que realizan actividades de aprovechamiento de recursos tales como: hidrocarburos, minerales, forestales, hídricos, eólicos, agrícolas, y de otra índole, en las tierras y territorios de los pueblos indígenas, se han caracterizado por no tomarlos en cuenta, vulnerar e irrespetar sus derechos individuales y colectivos; y, despojarles de sus tierras y recursos. A estas actividades se agregan el impulso de megaproyectos, sin el ejercicio del derecho de consulta y el consentimiento previo, libre e informado, como los casos de ex plan Puebla-Panamá y el IIRSA, ambos con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Estas prácticas de las corporaciones extractivas hoy en día continúan, y cuentan para ello con la complicidad de los Estados que desconocen a propósito la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre esos bienes naturales, y con frecuencia promueven

1.- Jurisprudencia del Sistema Interamericano.

e impulsan la violencia institucionalizada en contra de los pueblos indígenas que se oponen a las actividades de esas corporaciones, militarizando los territorios indígenas, aplicando medidas de desalojos y desplazamientos forzosos, y criminalizando las justas protestas que estos pueblos indígenas realizan, generando inseguridad social, y persiguiendo, apresando y hasta cegando la vida de sus dirigentes e integrantes.

Los altos precios de los minerales, el petróleo y la madera, entre otros, mueven a las grandes corporaciones y empresas dedicadas a la extracción, para continuar con sus prácticas en detrimento de los intereses de los pueblos indígenas. Los casos acontecidos en Guatemala, Ecuador, Colombia, Panamá y Perú, por mencionar algunos, de violencia estatal institucionalizada en contra los pueblos indígenas y sus representantes, ponen de manifiesto una actitud complaciente de muchos Estados de Latinoamérica y el Caribe, con las corporaciones y empresas dedicadas a las industrias extractivas, en detrimento de los intereses y bienes naturales de los pueblos indígenas.

El Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un instrumento jurídico internacional vinculante para los Estados que lo ratifican y que trata específicamente de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, en su Artículo No.7, establece que estos pueblos tienen el derecho de “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural”.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas², establece que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo (Artículo 23); a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma (Artículo 26.2); a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos (Artículo 29.1); y, a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos (Artículo 32.1). En virtud de este derecho, la intervención estatal o privada, en las tierras y territorios de los pueblos indígenas, con fines de aprovechamiento de los recursos de su propiedad, debe por un lado llevarse a cabo con su consentimiento previo, libre e informado, y de buena fe y, por el otro, asegurar la participación plena y efectiva de éstos, en sus beneficios.

Más de 15 Estados de Latinoamérica y el Caribe han ratificado el Convenio No.169 y todos han adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También en muchos de estos Estados, existen leyes que reconocen y protegen los derechos de estos pueblos. Sin embargo, estas leyes son con frecuencia violadas. Y, en otros casos, estas leyes no se corresponden con las obligaciones de estos mismos estados tienen, conforme al derecho internacional, y, en particular en relación a reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

Si bien algunas corporaciones y empresas, aducen cumplir con principios de Responsabilidad Social Corporativa. Estos son aplicados a través de la implementación voluntaria, por parte de esas corporaciones y empresas, de códigos de conducta que no necesariamente apuntan de modo particular y favorecen sustancialmente intereses y derechos de los pueblos indígenas. Al contrario, están diseñados para asegurar los intereses y derechos de estas corporaciones y empresas, que tienen a su favor el contar con marcos normativos globales que protegen sus intereses y consolidan sus derechos, frente a legislaciones nacionales no tan fuertes como para servirles de contrapeso, y que reflejan la debilidad de los Estados receptores de las inversiones que ellas ejecutan. A ello se suma el hecho de que estas inversiones son sobreprotegidas, mediante la suscripción de acuerdos entre los Estados, que normalmente condiciona al estado receptor. En relación al tema de las industrias extractivas y los pueblos indígenas, el ex presidente del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU señaló³ que: "Hoy los pueblos indígenas son objeto de una agresión bastante fuerte de las llamadas industrias extractivas que continúan con actos de colonización".

En el Informe de la Reunión de Expertos sobre contribuciones empresariales positivas al desarrollo económico y social de los países en desarrollo receptores del 1 de diciembre del año 2005⁴, se ha señalado, entre otros muchos aspectos, que "la sostenibilidad de las operaciones empresariales exigía que se prestara cada vez mayor atención a los resultados a largo plazo de esas operaciones y a la relación existente entre las empresas y las comunidades en las que operan".

Por su parte el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en su tercer informe anual al Consejo de Derechos Humanos, dedica la segunda parte de su informe al análisis de la responsabilidad de las empresas en relación con los derechos de los pueblos indígenas, en el marco de las expectativas que se han generado en la comunidad internacional en este ámbito⁵. Entre otros aspectos del informe, y al referirse a los derechos de los pueblos indígenas, hace ver que: "el desconocimiento de estos derechos genera, recurrentemente, situaciones graves de desposesión, contaminación ambiental, desplazamiento forzoso y daños permanentes a la cultura, espiritualidad y conocimiento tradicional de los pueblos indígenas"; indicando que, con cada vez mayor frecuencia, "las actividades empresariales en territorios indígenas son el detonante de serios conflictos sociales, que desencadenan círculos de violencia y, a su vez, nuevas violaciones de los derechos humanos.

También, en su tercer informe anual, el Relator Especial ha indicado que la comunidad internacional tiene la expectativa de que las empresas asuman un papel proactivo para identificar los derechos de los pueblos indígenas en las áreas en que operan, determinando cómo se verán afectados por las actividades empresariales.

3.- Durante la Conferencia celebrada en la sede de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), que se enmarca en los actos de la IX Asamblea General del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Fondo Indígena), celebrada en Madrid, 7 de Septiembre de 2010.

4.- TD/B/COM.2/EM.17/3

5.- A/HRC/15/37

Asimismo, que respetarán los derechos indígenas, promoviendo y no obstaculizando el cumplimiento de la obligación estatal de proteger estos derechos⁶.

En ese mismo informe, el Relator Especial ha señalado que “la actividad empresarial puede convertirse en un factor clave para el desarrollo de los pueblos indígenas en la medida en que los propios pueblos indígenas pueden controlar dicha actividad en ejercicio de sus derechos de autonomía o de autogobierno. A lo que se oponen los pueblos indígenas, comprensiblemente, es a un tipo de desarrollo que se lleve a cabo sin respetar sus derechos básicos, que deje tras de sí solo impactos adversos y que no redunde en un beneficio visible para sus comunidades”. El mismo Relator Especial ha señalado que un enfoque empresarial basado en el respeto a los derechos indígenas exige que el reparto en los beneficios sea percibido precisamente como una forma de cumplimiento de un derecho, y no como una concesión graciable o caritativa que busque lograr el apoyo social del proyecto o minimizar posibles conflictos⁷.

Sobre este tema, el Foro ha recomendado que “Debe obtenerse el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de efectuar inversiones en proyectos que entrañen consecuencias para sus tierras, territorios y recursos y antes de que se inicien esos proyectos en las tierras y los territorios indígenas”⁸.

Otros señalamientos y recomendaciones sobre el mismo tema, han sido indicados por el Foro. Entre estos se encuentran:

- 1.** Apoya el marco conceptual y normativo propuesto por el Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Este marco se basa en tres pilares: el primero es el deber de los Estados de proteger contra los abusos de los derechos humanos cometidos por terceros, en particular las empresas transnacionales y otras empresas, mediante la adopción de las políticas, reglamentaciones y adjudicaciones pertinentes; el segundo pilar es la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, lo que significa actuar con la debida diligencia respecto de todas las cuestiones para evitar la violación de los derechos de otras personas; y el tercer pilar es la capacidad de ampliar el acceso de las víctimas a mecanismos correctivos eficaces, tanto judiciales como no judiciales.
- 2.** Apoya la labor del Representante Especial encaminada a instar a los Estados a que integren los derechos humanos en las esferas que tienen más importancia para las prácticas empresariales, entre ellas el derecho mercantil, el crédito a las exportaciones y los seguros, las inversiones y los acuerdos comerciales.
- 3.** Sugiere al Representante Especial que inste a los Estados a que garanticen que estas prácticas empresariales cumplan las disposiciones pertinentes de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
- 4.** Insta al Representante Especial a que incorpore en su labor las opiniones concretas y las perspectivas específicas de los pueblos indígenas sobre el desarrollo eco-

6.- A/HRC/15/37.

7.- A/HRC/12/34/Add.5, párrafo 40.

8.- E/2009/43, E/C.19/2009/14

nómico y social. En relación con las Américas, las empresas también deben cumplir los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que interpreta que las obligaciones de los Estados con arreglo al Convenio (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes en lo que respecta a la Declaración se extienden a los Estados que no han ratificado el Convenio. El Foro recomienda que ese principio se aplique a otras jurisdicciones.

5. Recomienda que las empresas transnacionales y otras empresas adopten normas mínimas acordes con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas como requisito de diligencia debida. Este proceso consta de cuatro elementos básicos: la existencia de una política de derechos humanos; la evaluación de las consecuencias de las actividades de las empresas desde el punto de vista de los derechos humanos; la integración de dichos valores y conclusiones en la cultura de las empresas; y el seguimiento del desempeño al respecto y la presentación de los informes correspondientes.

6. Recomienda que, en el caso de los proyectos que entrañen consecuencias para los pueblos indígenas, los Estados velen por que las empresas transnacionales y otras empresas cumplan las normas concretas enunciadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio núm. 169 de la OIT.

7. Recomienda que, a fin de asegurar el acceso a mecanismos correctivos eficaces, los Estados velen por que las empresas cumplan las normas y leyes pertinentes. Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales deben instituir mecanismos efectivos de presentación de reclamaciones para proporcionar una alerta temprana y contribuir a resolver los problemas antes de que se intensifiquen. Sigue habiendo obstáculos considerables para acceder a mecanismos judiciales y no judiciales eficaces, y el Foro apoya la labor del Representante Especial tendiente a determinar y proponer los medios para eliminar dichos obstáculos.

8. Apoya las recomendaciones de la reunión del grupo internacional de expertos sobre las industrias extractivas, los derechos de los pueblos indígenas y la responsabilidad social de las empresas, dirigidas a las empresas de industrias extractivas, los Estados, los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas, las naciones y las organizaciones, así como a las instituciones financieras internacionales, recomendaciones que figuran en un documento presentado al Foro².

9. Exhorta a los Estados y las empresas a que reconozcan plenamente la presencia y la participación efectiva de los pueblos indígenas en todos los procesos de negociación relacionados con el ingreso en sus comunidades de las industrias extractivas, los proyectos de infraestructura y otros proyectos de desarrollo, con arreglo, entre otros, a los artículos 19, 23 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

10. Exhorta a todas las entidades competentes a asegurar que se lleven a cabo análisis pertinentes desde el punto de vista cultural, basados en el género y equilibrados en ese aspecto y una presupuestación en que se tengan en cuenta las cuestiones de género, como elementos fundamentales del desarrollo económico y social, con arreglo a los artículos 21 y 44 de la Declaración.

Pueblos Indígenas e Industrias Extractivas

11. Exhorta a los Estados que hayan adjudicado arrendamientos y otorgado concesiones y licencias sobre los territorios de los pueblos indígenas para proyectos relacionados con la tala y la extracción de minerales, petróleo, gas y agua sin las debidas consultas y sin respetar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados, a que revisen esos arreglos y a que respondan a las reclamaciones planteadas por los pueblos indígenas de esos territorios.

Para mejorar la situación de los pueblos indígenas, de cara al desarrollo de actividades extractivas, por parte de corporaciones y empresas nacionales en sus territorios son las siguientes, el Caucus de Latinoamérica y el Caribe recomienda al Foro:

- 1.** Solicitar al relator especial para pueblos indígenas que en sus informes incluya, de manera permanente, un capítulo de análisis y evaluación de las prácticas que llevan a cabo las empresas que operan en tierras y territorios de los pueblos indígenas, destacando tanto aspectos positivos como negativos, o que potencialmente lo sean.
- 2.** Profundizar en el estudio de casos, esto es, sistematizando las prácticas promotoras por parte de las empresas que operan en las tierras y territorios de los pueblos indígenas.
- 3.** Realizar estudios evaluativos de los impactos ambientales y sociales causados por las industrias extractivas y megaproyectos en los pueblos indígenas.
- 4.** Aplicar las directrices de AKWE KON para realizar estudios de impactos medioambientales y sociales, que han sido adoptadas por los Estados en el marco del convenio de diversidad biológica.
- 5.** Instar a los Estados a adoptar normas de transparencia en información respecto de concesiones de lotes mineros, petroleros y otros proyectos a las empresas transnacionales.
- 6.** Hacer un llamado a los Estados para el fortalecimiento de las instituciones autónomas de los pueblos indígenas, para la toma de decisiones con respecto a la implementación de proyectos extractivos.
- 7.** Solicitar a Amnistía Internacional la realización de un estudio para el establecimiento de normas que garanticen la participación de Pueblos indígenas de los beneficios de la extracción y los megaproyectos, así como de la reparación.
- 8.** Adoptar, el foro tome la iniciativa de trabajar con las empresas para que ellas tomen conocimiento de los instrumentos de protección de los derechos de pueblos indígenas.
- 9.** Elaborar un informe regional sobre las empresas extractivas en tierras indígenas y sus consecuencias sobre los bienes naturales y las condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales de los pueblos indígenas.

El Caucus de Latinoamérica y el Caribe recomienda a los Estados:

10. Dar a los pueblos indígenas participación en los procesos de elaboración de los marcos regulatorios y de procedimientos establecidos, para que las empresas cumplan

con sus obligaciones, de acuerdo a las normas internacionales que definen y protegen los derechos de estos pueblos, en particular los de propiedad de sus tierras y recursos naturales, que son las fuentes de su identidad, espiritualidad y sustento material, y con respecto a la aplicación del principio del consentimiento previo, libre e informado.

11. Evaluar periódica y sistemáticamente el comportamiento, por parte de las empresas que realicen actividades extractivas en las tierras y territorios indígenas en materia de respeto de sus derechos individuales y colectivos, así como de las legislaciones nacionales y normativas internacionales establecidas en beneficio de estos mismos pueblos.

12. Tomar como referencia inicial para el análisis y la evaluación del impacto de las industrias extractivas y mega proyectos y otros, el artículo 3 de la Declaración.

13. Eliminar la presencia de las industrias extractivas en territorios indígenas puesto que causan disputa sobre la soberanía indígena sobre propiedad de la tierra y los bienes naturales.

14. Establecer una organización bipartita (Pueblos indígenas-Estado) que permita el abordaje y solución de situaciones problemáticas que deben ser resueltas por parte de los Estados, y por las empresas que operan en tierras y territorios indígenas.

15. Elaborar un Código en materia de Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa, en el que sean establecidas las normas mínimas que regulen la relación de las empresas con los pueblos indígenas, y les permita contar con un marco para sus relaciones, y sean respetados los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

16. Establecer normas de obligatorio cumplimiento para que los pueblos indígenas reciban beneficios tangibles, en proporción a la magnitud de beneficios de las empresas que operan en sus tierras y territorios con su consentimiento previo, libre e informado.

Asimismo, los Estados deben revertir al menos un 50% de los impuestos, derechos y regalías que reciben de las empresas, en programas que beneficien de manera directa a los pueblos indígenas.

17. Cumplir los gobiernos con su obligación de proteger los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos pertenecientes a los pueblos indígenas.

18. Acatar, los gobiernos, las disposiciones que facultan a las comunidades para dar su consentimiento libre, previo e informado sobre la explotación de sus bienes naturales. Para esto es fundamentales que existan leyes marco que estén armonizadas con los estándares internacionales.

19. Apoyar únicamente proyectos extractivos en tierras indígenas que acaten las directrices internacionales sobre el respeto integral de los derechos humanos indígenas y las normas de protección ambiental, y cuenten con el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas.

20. Rechazar de manera enfática la minería de cielo abierto por ser extremadamente contaminante.

Pueblos Indígenas e Industrias Extractivas

21. Difundir con el apoyo de la OIT los instrumentos de protección de derechos humanos indígenas entre el sector empresarial.

22. Atender las directrices técnicas establecidas por la Comisión Mundial de Represas, para la construcción de represas

El Caucus de Latinoamérica y el Caribe recomienda a las Organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas:

23. Fortalecer los mecanismos internos de vigilancia de los pueblos indígenas para el resguardo de sus territorios para protegerse de esa invasión de las Empresas transnacionales y los colonos.

24. Fortalecer el conocimiento y la difusión de los instrumentos internacionales para la protección de los recursos naturales y territorios de los pueblos indígenas.

Pueblos Indígenas y Bosques

Situación actual

En América Latina viven cerca de 50 millones de mujeres y hombres indígenas, de casi 600 pueblos. Según la FAO¹ en el 2010, casi el 49% de la superficie total estaba cubierta por bosques, cifra equivalente al 22% del área total de los bosques en el mundo, con 881, millones de hectáreas, los cinco países con mayor área de bosques en América Latina son: Brasil, Perú, Colombia, el Estado Plurinacional de Bolivia, y la República Bolivariana de Venezuela. Que entre todos poseen el 84% del área total de los bosques de la Región. Los pueblos indígenas de Mesoamérica, son dueños del 28% de los bosques templados y 50% de selvas tropicales. Ese derecho de propiedad sin embargo, a pesar de estar reconocido en instrumentos del derecho internacional, en la práctica, no se garantiza plenamente².

El factor principal de la deforestación tanto en América del Sur como en Centroamérica es la conversión de tierras forestales a la agricultura y la urbanización, el desarrollo de actividades mineras y el impulso de megaproyectos de infraestructura. La mayor pérdida de bosque se registra en Centro América aunque la tasa de deforestación se ha reducido desde el año 2000. Chile, Costa Rica y Uruguay, presentan cifras de aumento de sus áreas de bosque. Igual ocurre en el Caribe debido a la expansión natural de los bosques sobre tierras agrícolas abandonadas.

Las áreas de bosques en América Latina, así como en otras partes de mundo, y la conservación de los bosques está directamente relacionada con las áreas en donde viven los pueblos indígenas. Ellos han podido satisfacer sus necesidades materiales y espirituales a través de la hábil gestión de su medio ambiente y, como resultado de ello, han sido los principales contribuyentes a la conservación y preservación de los bosques³. Sin embargo el uso del recurso bosque siempre había sido vinculado a una sucesión de modelos económicos que iniciaron con la llegada de los europeos a América, y que luego durante la Colonia y con la presencia de las corporaciones transnacionales explotaron los recursos, sin hacer referencia de concepto de sostenibilidad. Más tarde

1.- FAO. 2011. Situación de los Bosques del Mundo. Roma.

2.- Presentación de Dra. Mirna Cunningham, en el Forest Day 4 realizado en Cancún, México, en el marco de la COP16 de la CM-NUCC. 4 de Diciembre 2010.

3.- Informe de la Reunión del Grupo de Expertos Internacionales sobre los Pueblos Indígenas y los Bosques (E/C.19/2011/5)

los recursos del bosque sirvieron para el desarrollo de la ganadería bajo esquemas de reformas agrarias y desarrollo rural.

De hecho, los pueblos indígenas deben enfrentar continuamente la intrusión en sus tierras, su expropiación, la degradación de sus bosques y el deterioro de sus culturas, valores y formas de vida tradicionales. Sin embargo, están haciendo esfuerzos concertados para preservar sus conocimientos tradicionales y sus vínculos con la tierra para las generaciones futuras. Además, cuestiones relacionadas con la apropiación efectiva o potencial del conocimiento tradicional por científicos e intereses comerciales, como las patentes de plantas medicinales que han sido utilizadas por pueblos indígenas durante siglos, han sensibilizado a la opinión pública respecto de la importancia y pertinencia del conocimiento tradicional y han suscitado litigios sobre derechos de propiedad intelectual. La protección y preservación del conocimiento tradicional de los bosques es una batalla ardua para la mayoría de los pueblos indígenas y sus comunidades, en particular debido a las presiones cada vez mayores para explotar sus recursos forestales⁴.

No es sino hasta en la Cumbre de la Tierra, realizada en Río Janeiro en el 1992, que se habla del concepto de sostenibilidad y conservación. Estos planteamientos coinciden con la beligerancia mostrada por los movimientos de los pueblos indígenas y sus organizaciones, y por el reconocimiento logrado en la comunidad internacional a sus derechos, en particular sus derechos sobre los bosques que ocupan.

En ese proceso los países Centroamericanos y del Caribe definen marcos jurídicos y legales que llegan de manera tardía y contradictoria. Los marcos legislativos relativos al sector forestal han respondido a un modelo de apropiación del territorio y de los bosques, respondiendo a políticas indigenistas en los cuales definen que son los Estados los encargados de tutelar y administrar los recursos naturales, haciéndolo en forma ortodoxa, sin incluir la participación de los pueblos indígenas y sin considerar el consentimiento previo, libre e informado. Sin embargo, a partir de este momento el protagonismo de pueblos indígenas y sus organizaciones se hace más notorio y se suman al debate en el que antes únicamente figuraban las empresas y los Estados.

Amenazas

La definición de bosques utilizada por la FAO y la CMNUCC se refieren únicamente parámetros técnicos como altura de los árboles, porcentaje de cobertura forestal y superficie. Con eso incluyen tanto bosques naturales como plantaciones. Ese tipo de definición amenaza seriamente la existencia de bosques naturales, su diversidad biológica, pues podrían ser destruidos y reemplazados por plantaciones carente de diversidad biológica y sin prestar todos los servicios ambientales, y serían una amenaza a las identidades y culturas de los pueblos.

Las empresas madereras, las empresas de fármacos, las empresas mineras, petroleras, los gobiernos políticamente débiles amenazan las formas de vida de los pueblos indígenas, amenazan su identidad y cultura al afectar en forma desmedida e irracional sus recursos en los territorios en que viven, en particular sus recursos forestales.

4.- Ibid

Adicionalmente, se plantea que “un obstáculo importante para el reconocimiento de los derechos indígenas a los bosques era que en muchos países son los pueblos indígenas quienes deben demostrar que han utilizado u ocupado sus tierras y territorios tradicionales”. Esta situación se considera injustificada. “Dado que los pueblos indígenas son los habitantes originarios de sus tierras, el enfoque sensato y no discriminatorio sería que los Estados o las terceras partes tuvieran que demostrar que los pueblos indígenas no han utilizado tradicionalmente determinada extensión de tierra”⁵.

Buenas prácticas

Son extremadamente pocos los ejemplos de buenas prácticas con relación a los bosques y pueblos indígenas.

El Consorcio Formas de Vida Sostenibles promueve la conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales mediante la generación de mercados sostenibles y sistemas de certificación de madera, cacao, café, castaña y turismo en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En el Ecuador, trabaja en la certificación de la comercialización de cacao en áreas aledañas a los Parques Nacionales Yasuní y Gran Sumaco, la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno y la Reserva Ecológica Cayambe Coca. Para ello, se capacita a las comunidades locales en prácticas sostenibles, además de promover la conservación forestal y desarrollar vínculos con los mercados.

Otro ejemplo de éstas es la certificación forestal y transformación de la madera logrado en las comunidades de Las Crucetas y Layasiksa, comunidad miskita en Nicaragua, que produce madera bajo estándares internacionales del Consejo de Manejo Forestal (FSC), un mecanismo que garantiza y monitorea el aprovechamiento de los recursos naturales como procesos económicamente viables, socialmente beneficiosos y de bajo impacto ambiental.

En Nicaragua, por ejemplo, se han reconocido en el marco del estatuto de autonomía que los derechos colectivos a la tierra eran inalienables, imprescriptibles e inembargables y que las concesiones de bosques indígenas requerían aprobación de las propias comunidades y el gobierno autónomo. En el contexto de la autonomía regional multiétnica de Nicaragua, 16 territorios habían aprobado la formulación de una estrategia forestal regional, con la participación del Estado, donantes privados y pueblos indígenas⁶.

Otro ejemplo positivo en América Latina se relacionaba con México, donde la gestión de bosques comunales había sido mejorada por los pueblos indígenas, con la participación de algunas instituciones de enseñanza superior que habían trabajado con ellos para elaborar cursos de creación de capacidad y capacitación basados en el conocimiento tradicional de los bosques de los pueblos indígenas.

Debate sobre bosques y pueblos indígenas

El Foro Permanente ha recomendado repetidas veces que el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques y los órganos de las Naciones Unidas relacionados con los bosques,

5.- Ibid

6.- Informe de la Reunión del Grupo de Expertos Internacionales sobre los Pueblos Indígenas y los Bosques E/C.19/2011/5

“desarrollen medios eficaces para vigilar y verificar la participación de pueblos indígenas en la elaboración de políticas forestales y en la gestión sostenible de los bosques, y establecer un mecanismo, con la participación de los pueblos indígenas, con objeto de evaluar el cumplimiento de los compromisos y las obligaciones gubernamentales e intergubernamentales de promover y respetar los derechos de los pueblos indígenas⁷.”

Durante el noveno período de sesiones celebrado del 19 al 30 de abril de 2010, se llevó a cabo un debate sobre bosques y pueblos indígenas. Del debate se desprenden los siguientes planteamientos y preocupaciones en torno a la situación relacionada con los bosques y los pueblos indígenas⁸:

1. Muchos indígenas viven en bosques que son sus territorios tradicionales. Sus modos de vida y sus conocimientos tradicionales se han desarrollado en armonía con los bosques que cubren sus tierras y territorios. Los indígenas que viven en zonas forestales tienen unos derechos claramente definidos a la tierra y a los recursos naturales, como la propiedad comunal de sus tierras ancestrales, la gestión de los recursos naturales de sus territorios, el ejercicio de sus leyes consuetudinarias y la capacidad de representarse a sí mismos a través de sus propias instituciones. Por desgracia, los Estados han considerado que los bosques de los pueblos indígenas son territorios bajo su control y los han convertido a otros usos, como la explotación maderera, las plantaciones agrocomerciales, y la extracción de minerales, petróleo y gas. Esas intrusiones obligan a menudo a los indígenas a abandonar sus territorios. Además, algunos planes de conservación que crean parques nacionales y reservas naturales niegan sus derechos a los pueblos indígenas que viven en los bosques.
2. Expresa su grave preocupación por la continua expulsión de pueblos indígenas de sus bosques y pide a los Estados y al Sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales que protejan y respeten los derechos de los pueblos indígenas que viven en los bosques y dependen de ellos y den reparación a aquellos cuyos derechos hayan sido violados.
3. Como parte de su mandato ha planteado problemas y formulado recomendaciones referentes a los pueblos indígenas y los bosques. Ha recomendado sistemáticamente que el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques y los órganos de las Naciones Unidas competentes en materia de bosques elaboren medios eficaces para supervisar y verificar la participación de los pueblos indígenas en la formulación de políticas forestales y la gestión sostenible de los bosques, y que establezca un mecanismo, con la participación de los pueblos indígenas, para evaluar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de los gobiernos y los organismos intergubernamentales en cuanto al respeto y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas⁹.

7.- E/C.19/2004/23

8.- E/2010/43 E/C.19/2010/15

9.- Véase E/C.19/2004/23

4. Acoge favorablemente el anuncio de la Iniciativa de Conservación para los Derechos Humanos por parte de ocho organizaciones mundiales dedicadas a la conservación —la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales, el Fondo Mundial para la Naturaleza, Fauna and Flora International, Wetlands International, Bird Life International, Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society y Conservation International—, que tiene por objeto promover la integración de los derechos humanos en las políticas y prácticas de conservación, basadas en su interés común por fomentar vínculos positivos entre la conservación y los derechos de los pueblos a ganarse el sustento, disfrutar de un medio ambiente saludable y productivo y vivir con dignidad

También el Foro, hizo las siguientes recomendaciones:

1. Reconocer, por los Estados, el derecho de los pueblos indígenas a poseer, controlar, utilizar y tener acceso a sus bosques y pide a los Estados que reformen sus leyes y políticas que niegan este derecho a los indígenas.
2. Pedir al Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques que colabore estrechamente con su secretaría para conseguir la plena participación de los indígenas en la planificación y realización de las actividades previstas para el Año Internacional de los Bosques.
3. Devolver inmediatamente a los pueblos indígenas, los bosques que les han sido arrebatados por los Estados a los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado, so pretexto de aplicar políticas de conservación.
4. Asegurar, por parte de las organizaciones dedicadas a la conservación, la plena participación de los pueblos indígenas al poner en práctica la Iniciativa de Conservación para los Derechos Humanos. Y, además, que las organizaciones que se ocupan de la conservación y tienen proyectos que han provocado la expulsión de pueblos indígenas de sus bosques ofrezcan reparación y restitución a esas víctimas.
5. Asegurar la inclusión y la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la iniciativa Oslo-París para la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD Plus), y que no se limite a ser una iniciativa de los gobiernos. Además que la iniciativa vele por la aplicación de las salvaguardias contenidas en el informe del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención Marco sobre el Cambio climático acerca de su octavo período de sesiones (FCCC/AWGL-CA/2009/17), en el que se destaca la necesidad de respetar los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y se toma nota de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la necesidad de una participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, la no conversión de los bosques naturales a otros usos, y la conservación de la diversidad biológica, así como la necesidad de abordar las causas de la deforestación y las cuestiones relativas a la tenencia de la tierra.

6. Promover, por parte de los gobiernos y los Estados, condiciones apropiadas para que los pueblos indígenas puedan mantener los bosques a su manera tradicional y conservar su identidad cultural, dando prioridad a los pueblos indígenas que viven en un aislamiento voluntario, reforzando sus capacidades y destacando el valor de los conocimientos ancestrales relativos a los bosques nativos. Además, que en todas las políticas forestales y las iniciativas forestales relacionadas con el clima se reconozcan los conocimientos y los métodos de gestión forestal tradicionales y los sistemas de gobernanza de los pueblos indígenas para la protección y utilización de sus bosques.
7. Nombrar a Victoria Tauli-Corpuz, uno de sus miembros, relatora especial para que prepare un estudio sobre los pueblos indígenas y los bosques, que estaría concluido para el 31 de diciembre de 2010 y se presentará al Foro en su décimo período de sesiones.

Recomendaciones:

El Caucus de Latinoamérica y el Caribe, recomienda lo siguiente:

1. Acoger y respaldar plenamente las recomendaciones efectuadas por el Foro Permanente durante su noveno período de sesiones, derivadas del debate sobre **bosques y pueblos indígenas**, y definir medidas y acciones que contribuyan a su cumplimiento por parte de los Estados, Organismos y Órganos del Sistema de las Naciones Unidas, así como de las Organizaciones concernidas.
2. Acoger y respaldar las recomendaciones de la Informe de la Reunión del Grupo de Expertos Internacionales sobre los Pueblos Indígenas y los Bosques¹⁰, en particular la que considera “definir los bosques en sentido amplio, teniendo en cuenta los principios filosóficos y culturales reflejados en los valores y enseñanzas de los pueblos indígenas. Los bosques deben ser reconocidos como un bien, como fuente de vida, medicina, alimento y espacio de espiritualidad. Esto incluye el reconocimiento de las funciones de fideicomiso, que fueron ejercidas en una época por los ancestros de los pueblos indígenas y que hoy incumben a las actuales generaciones. Los bosques se suelen considerar en el contexto de su valor comercial potencial. Las definiciones que se dan de los bosques en el marco de los procesos estatales y de las Naciones Unidas no suelen incluir a los pueblos indígenas ni sus culturas y aspiraciones. Esto ha creado conflictos entre los pueblos indígenas, las empresas y los Estados. Además, existe la idea errónea de que los pueblos indígenas no son buenos administradores y no pueden gestionar sus propios bosques. Esta opinión debe ser impugnada”¹¹.

10.- E/C.19/2011/5. Reunión del Grupo de Expertos Internacionales sobre los Pueblos Indígenas y los Bosques, celebrada del 12 al 14 de enero de 2011 en la Sede de las Naciones Unidas

11.- Ibid

3. Promover el enfoque de que los Estados reconozcan los derechos de los pueblos indígenas sobre los bosques, y examinar y enmendar las leyes que no son coherentes con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y los instrumentos de derechos humanos pertinentes, tal como los interpretan sus órganos correspondientes, que constituyen el marco para los derechos de los pueblos indígenas a los bosques. Esto incluye sus sistemas de derechos a la propiedad y el derecho a tomar decisiones sobre gestión, uso y la distribución de los beneficios que de su utilización se derivan. Asimismo a participar plenamente en el proceso de adopción de decisiones relacionadas con la formulación de normas y políticas relacionadas con los bosques.
4. EL Foro Permanente debe promover la creación de una comisión permanente para monitorear es estado bosques, los salvaguardas y los derechos de los pueblos indígenas
5. Mejorar, por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, la OIT, el Grupo del Banco Mundial y otros organismos pertinentes de las Naciones Unidas, la comprensión de los derechos materiales de los pueblos indígenas subyacentes a la tierra y la necesidad de dar precedencia a los derechos materiales con respecto a los derechos procesales. Asimismo, analizar la forma en que los criterios de intensidad y exclusividad que comúnmente se reconocen en los sistemas nacionales de derechos a la propiedad pueden entenderse en el contexto de las normas internacionales de derechos humanos relacionadas con los derechos indígenas a la propiedad.
6. Atender la recomendación que el Mecanismo de Expertos hiciera a la Asamblea General para que se incluyera la participación plena y efectiva del Foro Permanente en la preparación y organización de la conferencia Río+20 y su seguimiento.
7. Promover la estrecha colaboración entre la Secretaría del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques y el Foro Permanente, la Asociación de Colaboración en Materia de Bosques y otros Organismos, Órganos, Estados y Organizaciones de pueblos indígenas con miras a lograr la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en las iniciativas del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, en particular durante la conmemoración del Año Internacional de los Bosques, en el presente año, para poner de relieve el papel central de los pueblos indígenas como custodios de muchos de los bosques con mayor diversidad biológica del mundo.
8. Tomar iniciativas, a fin de mejorar la capacidad de los funcionarios gubernamentales para entender los derechos, el conocimiento y los sistemas de gobernanza de los pueblos indígenas, y elaborar y aplicar políticas relacionadas con los bosques que sean coherentes con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

9. Documentar, los Estados, Organismos pertinentes de las Naciones Unidas y las organizaciones de pueblos indígenas, las normas consuetudinarias de los pueblos indígenas relacionadas con los bosques, y capacitar a los operadores de justicia, como parte del proceso para fortalecer el pluralismo jurídico.
10. Compilar, el ACNUDH, las disposiciones pertinentes de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas que puedan ser utilizadas para propugnar, defender y promover los derechos de los pueblos indígenas a las tierras, los territorios y los recursos. Asimismo, la jurisprudencia producida por los órganos que supervisan la aplicación de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, recomendaciones de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, en particular la labor del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
11. Los miembros del Foro Permanente y del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques deben compilar buenas prácticas relacionadas con el ejercicio de la autonomía por los pueblos indígenas y casos en los cuales la facultad de decisión se haya dejado en sus manos. Esta compilación se difundirá como buenas prácticas de gobernanza indígena. En este contexto, también es necesario fortalecer los sistemas indígenas de gobernanza.
12. Realizar estudios de caso sobre buenas prácticas por parte de las Secretarías Foro Permanente y del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques sobre bosques y pueblos indígenas para inspirar la emulación en otras partes del mundo. Esto puede incluir buenos ejemplos de ordenación de bosques, en particular los bosques comunitarios, de la aplicación del principio del consentimiento libre, previo e informado, y las formas de resolución de conflictos, incluida la mediación.
13. Apoyar, los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la documentación de los sistemas de conocimiento indígena de los bosques por las organizaciones de pueblos indígenas, con la condición de que obtengan el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.
14. Respetar plenamente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y reconocer que sólo pueden entrar en los territorios de los pueblos indígenas tras haber concertado acuerdos sustentados en la aplicación del principio del consentimiento libre, previo e informado, y mediante negociaciones de buena fe basadas en las normas del Derecho Internacional, sobre la distribución de los beneficios.

15. Impulsar, los Estados, la elaboración de reglamentos de ley y normativas dentro de la legislación nacional para garantizar que los acuerdos de las empresas con los pueblos indígenas sean coherentes con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en lo que respecta a las actividades de explotación de los recursos forestales de sus tierras. Dichas actividades deben realizarse solamente con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y estos deben participar de los beneficios que de ellas se deriven.
16. Colaborar, la Secretaría del Foro Permanente, con el ACNUDH y la OIT para asegurar la protección y defensa de los derechos de los pueblos indígenas relacionados con sus intereses forestales.
17. Promover la integralidad de los convenios internacionales, a través de sus respectivos Secretariados, para asegurar el reconocimiento y potencial ejercicio de los derechos indígenas, en particular los convenios que tienen relación con los bosques, biodiversidad, cambio climático, ambiente, patrimonio mundial de sitios naturales y culturales, áreas protegidas

Pueblos Indígenas y Educación

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 23, establece claramente el derecho de los pueblos indígenas al desarrollo: “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernen y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones”¹. Este artículo y otros artículos conexos deben servir de orientación para el desarrollo de las políticas, programas, modelos, procesos y actividades relacionadas con la educación y la salud de los pueblos indígenas. El Foro Permanente reconoce que la educación es un elemento de importancia decisiva.... En particular, el derecho a la educación en la lengua materna es fundamental para el mantenimiento y crecimiento de la cultura y la identidad y la diversidad cultural y lingüística².

De conformidad con datos de la CEPAL³, sustentados en informes provenientes de 10 países latinoamericanos, las cifras de acceso a la educación, así como de conclusión de la educación primaria, de los niños y niñas indígenas, muestran porcentajes de cobertura que van desde el 62% (Paraguay) hasta el 89% (México) de cobertura, con una importante brecha entre niños y niñas indígenas y niños y niñas no indígenas. Así por ejemplo, La brecha en países como México, Ecuador, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Brasil, Honduras y Paraguay es del: 7, 5, 8, 19, 21, 20, 2, y 31 puntos porcentuales, respectivamente. Las brechas significativamente más altas se encuentran en países como: Paraguay, Brasil, Costa Rica y Panamá. Las cifras son más altas si se analizan los porcentajes de niños y niñas indígenas que concluyen su educación primaria. La proporción de jóvenes no indígenas de 15 a 19 años que han culminado la primaria va entre un 69% y un 96% en Guatemala y Chile, respectivamente. Entre los jóvenes indígenas, las tasas de término de este nivel van de un 21% en Paraguay a un 93% en Chile. Guatemala alcanza el 36%, Honduras el 45%, Costa Rica y Panamá el 56%, Brasil el 64%, y México el 69%⁴.

1.- Resolución 61/295 de la Asamblea General.

2.- E/2010/43, E/C.19/2010/15

3.- CEPAL (2005). Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: información sociodemográfica para políticas y programas.

4.- Ibid

Ahora bien, las cifras, además de variar de un país a otro, tal como se aprecia en los datos proporcionados por el estudio de la CEPAL, también se reflejan altas variaciones a nivel de Estados o bien de municipios. Así, por ejemplo, en el caso de México, en el Estado de Guerrero, 45,4% de la población indígena (1 de cada dos personas) de más de 15 años no pasó por la escuela. De ellas, la mayoría son mujeres⁵. En este Estado, la tasa de analfabetismo de la población, en general, alcanza el 22%. Los datos respecto a la población indígena, indican que la mitad es analfabeta. En los municipios indígenas más marginados este porcentaje se eleva considerablemente, alcanzando el 88% en San Marcos, el 71% en Metlatónoc, el 67% en Ahuacutzingo, y el 65% en Xochistlahuaca.

De acuerdo al estudio de la CEPAL, para el caso de las poblaciones indígenas, "...el acceso constituye solo el punto de partida en materia de equidad educativa, que es necesario complementar con calidad, eficiencia y pertinencia del sistema. Dado que el idioma constituye el elemento central de transmisión de la cultura, la política de educación intercultural bilingüe constituye un paso importante para disminuir la inequidad"⁶.

Considerando este tipo de hallazgos, y su propio mandato, el Foro Permanente ha recomendado que la UNESCO, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el UNICEF y otros organismos competentes de las Naciones Unidas, realizaran una convocatoria conjunta con el Foro, de una reunión de expertos en cuestiones interculturales y educación y representantes de organismos de las Naciones Unidas **para estudiar temas y conceptos relacionados con la educación bilingüe, intercultural y multilingüe en el contexto de la enseñanza en las lenguas maternas de los pueblos indígenas**⁷.

El Foro Permanente observó que, para facilitar la celebración de la reunión de expertos, **sería preciso realizar un análisis de la situación en países específicos. El Foro invitó a la UNESCO a que llevara a cabo ese análisis, dada su experiencia y conocimientos especializados en este ámbito, y que le transmitiera dicho análisis, el que debería indicar los marcos legislativos y normativos que los Estados emplean para facilitar la aplicación de modelos exitosos de aprendizaje bilingüe, aprendizaje multicultural y multilingüe y la educación en lengua materna y determinar los obstáculos que se plantean a la aplicación de esos marcos**⁸.

En el Informe del **Estudio sobre la Experiencia Adquirida y las Dificultades con que se Tropieza para la Plena Aplicación del Derecho de los Pueblos Indígenas a la Educación**, llevado a cabo por el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se ha señalado lo siguiente:

1. Los servicios educativos en las zonas indígenas, con mayor frecuencia, cuentan con escasa financiación, son de mala calidad y están mal equipados. A menudo, los

5.- Guerrero en datos. Fuentes: INEGI 2000, INI 2002

6.- CEPAL. Ibid.

7.- E/2010/43, E/C.19/2010/15

8.- Ibid

niños indígenas asisten a las peores escuelas, con los maestros menos capacitados y con los recursos más escasos. Para conseguir que los pueblos indígenas tengan una enseñanza de calidad es importante velar por que la comunidad participe y dé su consentimiento, así como establecer una buena comunicación entre las partes interesadas, ya que las normas de calidad pueden variar de un Estado a otro y entre los niños que son indígenas y los que no lo son⁹.

2. La mayoría de los países no tienen datos desglosados de los que se pueda obtener una descripción precisa de la educación de los pueblos indígenas. No obstante, cuando se tienen datos, de ellos parece desprenderse que los pueblos indígenas quedan invariablemente por detrás de la población general en lo que se refiere a la calidad de la enseñanza y los logros académicos. Las tasas de matriculación y finalización de la enseñanza entre los niños indígenas, especialmente las niñas, siguen siendo bajas¹⁰.

El informe también hace ver que los Estados están obligados a velar por que todos los niños indígenas en edad escolar tengan acceso a la enseñanza gratuita, incluso en escuelas indígenas instaladas en sus vecindades o comunidades que impartan educación en sus propios idiomas en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. A fin de garantizar que la enseñanza sea segura y apropiada desde el punto de vista cultural para los alumnos indígenas, los planes de estudio deben estar basados en las creencias y los valores culturales de los pueblos indígenas o reflejarlos suficientemente. También, que es necesario que las asignaciones presupuestarias se ajusten a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos para garantizar la realización del derecho de los pueblos indígenas a la educación, incluidos los programas específicos financiados por el Estado orientados a la formación y contratación de personal docente de origen indígena¹¹.

Igualmente, el informe indica que la educación ha de ser físicamente accesible en condiciones de seguridad (accesibilidad material), ya sea por su acceso razonable desde el punto de vista geográfico o por medio de la tecnología moderna, como la educación a distancia. La educación ha de ser también asequible para todas las personas de origen indígena (accesibilidad económica). La enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos. Se pide a los Estados que implanten gradualmente la gratuidad en la enseñanza secundaria y superior¹². Y, que el derecho a la educación es un medio indispensable para el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. La educación es una condición previa esencial para que los pueblos indígenas tengan la capacidad de procurar su propio desarrollo económico, social y cultural de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Declaración¹³.

El Mecanismo de Expertos insta a los Estados a que adopten un marco de políticas para conseguir una educación de calidad para los pueblos indígenas, establezcan ob-

9.- A/HRC/EMRIP/2009/2

10.- Ibid.

11.- A/HRC/EMRIP/2009/2

12.- Ibid.

13.- Ibid

jetivos, metas y prioridades claros y elaboren, conjuntamente con los pueblos indígenas, indicadores para evaluar los logros, entre los que podrían encontrarse una mayor participación, una mejor alfabetización, unas menores tasas de absentismo escolar y la obtención de calificaciones satisfactorias¹⁴.

El informe, también señala que el Relator Especial encontró varios aspectos preocupantes planteados por los pueblos indígenas, las organizaciones y la sociedad civil en relación con el derecho a la educación. Entre ellos se encuentran: a) la falta de control de las iniciativas educativas para los niños indígenas; b) la ausencia de consultas acerca del desarrollo y la aplicación de los servicios educativos que se prestan a los pueblos indígenas; c) la ausencia de consultas con los dirigentes indígenas sobre las propuestas legislativas relacionadas con la educación indígena; d) la limitada atención que se da a la autonomía y la participación de los pueblos indígenas en la prestación de los servicios educativos, incluida la educación multicultural y bilingüe basada en la lengua materna; e) las limitadas posibilidades de acceso a una educación bilingüe de calidad basada en la lengua materna; f) el hecho de que no se hayan desarrollado posibilidades educativas para los pueblos indígenas que muestren respeto por su historia y su cultura; g) la escasez de artículos, fondos y maestros apropiados y la mala calidad de las escuelas; h) la falta generalizada de interés por la educación para los pueblos indígenas; i) el hecho de que los materiales docentes sólo reflejen la cultura de los grupos dominantes; j) el desarrollo limitado y la escasez de financiación de los programas educativos multilingües; k) la insuficiente formación de los maestros y la escasez de becas para los alumnos indígenas; y l) la limitación del desarrollo de unos programas de estudio apropiados desde el punto de vista cultural¹⁵.

Considerando los desafíos que plantea el tema de educación para los pueblos indígenas, el Caucus de Latinoamérica y el Caribe recomienda a los Estados:

1. Impulsar la aplicación de políticas educativas que reconozcan plenamente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
2. Aumentar los niveles de inversión en el sector educativo, dotando de recursos suficientes a los programas educativos propios de los pueblos indígenas, de modo que se garantice plenamente el derecho a la educación, con calidad, equidad y pertinencia, en función de sus necesidades y demandas.
3. Incorporar a la producción académica intercultural bilingüe a intelectuales indígenas, en los procesos investigación y publicación.
4. Impulsar la aplicación de sistemas de educación propios de los pueblos indígenas, considerando la práctica de la educación como una prolongación del hogar, de los patrones de crianza y socialización primaria.
5. Orientar los procesos educativos, enfocándolos hacia el fortalecimiento de reconstrucción del tejido social indígena comunitario, de lo colectivo, planteando

14.- Ibid

15.- Ibid.

alternativas para satisfacer las necesidades en el marco del bien común, en su integralidad y más allá del sistema jurídico.

6. Promover que los proyectos educativos se orienten a eliminar la exclusión, y se enfoquen a la promoción del ejercicio de los derechos colectivos, articulados según las necesidades de los pueblos indígenas.
7. Elaborar materiales que se relacionen con la vida comunitaria; y, que los temas abordados sean de importancia comunitaria.
8. Incluir a la población indígena en las ciudades porque se observa una relación de exclusión. Se propone la conformación de redes de estudiantes indígenas.
9. Tomar en cuenta la cultura indígena en su conjunto, además de la lengua materna,
10. Considerar en el sistema educativo intercultural a los ancianos/as que son portadores de los conocimientos.
11. Incluir en el enfoque intercultural una educación crítica que tenga que ver con la defensa del territorio, de los recursos naturales, además de que debe ser una educación bilingüe y un enfoque intercultural.
12. Contar con indicadores desagregados por pueblos indígenas, esto permitirá contar con una base real de la situación educativa en los pueblos indígenas.
13. Vincular el tema de la educación bilingüe con el derecho a la identidad, considerando que la discriminación origina la negación de la cultura y la lengua indígena.
14. Cumplir con el mandato de Naciones Unidas en el tema de educación que se encuentra en el Convenio 169, en la Declaración sobre pueblos indígenas de la ONU, y otros instrumentos internacionales.
15. Obligar a los Estados a que difundan los instrumentos y leyes en lenguas indígenas.
16. Incluir en los programas educativos los temas con la transversalidad en violencia, salud sexual y reproductiva, y adicciones.
17. La educación intercultural debe ser para todo el país, no únicamente para los pueblos indígenas.
18. Fortalecer la educación intercultural bilingüe, ampliando su cobertura a todos los pueblos indígenas y enriqueciéndola con las experiencias indígenas, y orientándola con políticas públicas basadas en la interculturalidad y el plurilingüismo.
19. Fortalecer las capacidades académicas, metodológicas, técnicas, tecnológicas y financieras de las universidades indígenas.

También el Caucus de Latinoamérica y el Caribe recomienda a la Cátedra Intercultural Indígena (CII)

20. Mantener los contenidos y los enfoques temáticos que aseguren o favorezcan el fortalecimiento de la identidad, sobre todo como forma de lucha contra la subvaloración de los sistemas indígenas y racismo aún vigente en los sistemas académicos occidentales.

La Aplicación del Principio del Consentimiento Previo, Libre e Informado

La aplicación del principio del Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI), ha sido una recomendación efectuada de manera reiterada por el Foro Permanente, con el propósito de contribuir al “respeto y la protección del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación (artículos 3 y 32) y al desarrollo (artículo 32)”. Ambos entrañan el derecho a un consentimiento libre, previo e informado (artículo 32), y se encuentran consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas¹.

Al respecto, la Declaración indica en su artículo 32, numeral 2, que “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”². La aplicación de este principio, por parte de los pueblos indígenas, supone su participación en todas las fases del desarrollo, y la no imposición de determinados planes, programas o proyectos impulsados por los estados nacionales.

De conformidad con el principio del consentimiento libre, previo e informado, los pueblos indígenas deben participar efectivamente y de manera fundamental y determinante de las decisiones sobre los programas y políticas a todos los niveles y en todos los sectores que les atañen bien sea en el ámbito de la administración de justicia o que contribuyan al desarrollo sostenible, la protección de la diversidad biológica, la mitigación del cambio climático y la adaptación a éste, entre otros³.

A pesar del reconocimiento que para la aplicación de este principio, tienen los pueblos indígenas, éstos continúan demandando su cumplimiento efectivo, en el marco del reclamo de la aplicación plena de sus derechos. Ello se debe a que tal aplicación no está exenta de problemas. En efecto, existen, problemas relacionados con la instrumenta-

1.- E/2009/43, E/C.19/2009/14

2.- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

3.- E/2008/43 E/C.19/2008/13

ción jurídica del principio, y de los mecanismos procedimentales contemplados para su puesta en práctica, además de aquéllos problemas de índole conceptual, que confunden la consulta con el consentimiento previo, libre e informado. También existen problemas relacionados con la calidad de la legislación establecida. Tal es el caso del Ecuador, en donde se ha legislado sin alcanzar los estándares internacionales. En Nicaragua, existen vacíos en la aplicabilidad del principio, tal como ocurrió con la promulgación de la Ley de Aguas, sin haber sido consultados los pueblos indígenas.

En México se ha legislado estableciendo la aplicación de un derecho preferente de las comunidades indígenas en lo referente al acceso de bienes materiales, lo cual aplica también a la minería. El derecho preferente es a invertir recursos, de lo contrario los derechos de aprovechamiento de los bienes naturales en tierras y territorios indígenas, son asignados a quienes tienen esa capacidad de invertir, es decir, a las transnacionales. Este derecho es contrario, en la forma en que ha sido enunciado, al principio del Consentimiento Previo Libre e Informado. En todo caso, el Estado mexicano debe respetar lo establecido en la Declaración y el derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado a esas comunidades.

Respecto a los mecanismos, el Foro ha llamado la atención a “un problema frecuente es el consentimiento ficticio que se obtiene al negociar con determinadas personas o comunidades indígenas sin asegurarse de que representen a sus comunidades o a la zona afectada, lo cual crea divisiones en las comunidades⁴. Un ejemplo de tal práctica ha ocurrido en Guatemala en donde el Alcalde de un municipio otorgó la autorización para la construcción de una presa. El Alcalde hizo una simulación de consentimiento, por lo cual recibió 800 mil quetzales. Otros casos identificados dan cuenta que se hace simulación del consentimiento, es decir, se realiza la práctica del consentimiento ficticio a través de la realización de Talleres sin cumplir con lo establecido en la Declaración.

En cuanto a los problemas de índole conceptual hay que decir que el concepto de consulta aparece reflejado en el Convenio No.169, que señala en su artículo 6, numeral 1, que: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, y agrega, en su numeral 2, que “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”⁵. En este sentido, la consulta per se, no tendría sentido sino está vinculada directamente con la finalidad de la misma, es decir, “lograr el consentimiento”.

Al respecto, cabe preguntarse: ¿Cuáles serían las condiciones más apropiadas para la aplicación del principio?. ¿De qué demandaría?. Se hace necesaria la aplicación de medidas estructurales que incluyan modificaciones en los sistemas jurídicos relacionados con la propiedad de los recursos naturales, la modificación del alcance de las políticas, de manera que más que tener políticas de gobierno, respecto a esta cuestión, se dis-

4.- E/2009/43, E/C.19/2009/14

5.- Convenio 169 de la OIT

ponga de políticas de estado que no serían alteradas con los cambios de gobierno, y, por último, se requiere de la definición de mecanismos que propicien una participación efectiva de los pueblos indígenas, a distintos niveles, en el proceso de toma de decisiones para la implementación de planes, programas y proyectos de desarrollo en sus territorios.

Un problema sustantivo identificado se relaciona con el hecho de que resulta fundamental el carácter vinculante que debiera tener la consulta. Es decir, por la naturaleza del instrumento que es vinculante, la norma incluida en el artículo 6 del Convenio también lo es. Sin embargo, es importante la existencia de una norma nacional que pueda definirse a través de una legislación especial y que ratifique su carácter vinculante. Tal es el caso de la Ley de Hidrocarburos recientemente aprobada por Bolivia, que al parecer enfrenta problemas en su aplicación. Se trataría de la definición jurídica del mecanismo y procedimiento a seguirse para la obtención del consentimiento previo, libre e informado, por parte de una determinada población indígena.

Otro de los problemas relacionados con la aplicación del principio, se refiere a su omisión por parte de las autoridades de los países en los que se impulsan proyectos de minería, construcción de presas hidroeléctricas, o bien planes de desarrollo. Esta omisión, está relacionada fundamentalmente con la voluntad política de no aplicación del principio. Algunos casos que ejemplifican las consecuencias derivadas de la no observancia del principio los encontramos en el Perú, con los sucesos de Bagua, que tuvo un saldo negativo de 34 muertos, 10 de ellos indígenas, en el marco de una ocupación pacífica indígena de una carretera que fue violentamente desalojada por la policía militar. Los disturbios sociales en Perú tenían su base en una movilización nacional indígena contra una nueva ley, que permitiría a compañías mineras y petrolíferas entrar en sus territorios sin llevar a cabo consultas y sin su consentimiento libre, previo e informado. La manifestación estaba organizada para expresar el rechazo de los awajún y los wampis sobre las actividades mineras que se estaban llevando a cabo en sus territorios. Otro ejemplo, es el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, que ha significado la violación de los derechos del pueblo ngöbe en Panamá, aunque en este caso las instancias judiciales han resuelto a favor de este pueblo. En Guatemala, el estado guatemalteco ha respaldado las inversiones, en la minería, que realizan las corporaciones transnacionales en alianza con empresarios nacionales. Las actividades mineras siguen su curso normal y algunas de ellas están en pleno proceso de expansión, como se evidencia en las acciones que están llevando a cabo las empresas de explotación de oro, níquel y cemento. El último caso, es el “Plan de Aceleración del Crecimiento” impulsado por gobierno brasileño, que contiene acciones, como la construcción de cientos de plantas energéticas hidroeléctricas en tierras indígenas de la Amazonía, sin que en ninguno de los casos se haya presentado este Plan a los pueblos indígenas afectados para su consulta previa⁶.

Aunque hay problemas muy sensibles relacionados con la aplicación del principio, también se han identificado algunas buenas prácticas, alrededor de las cuales existe un alto grado de desconocimiento de los pueblos indígenas sobre ellas, por lo que se recomien-

6.- IWGIA. Mundo Indígena, 2010.

da invertir recursos en la divulgación, utilizando las redes, los programas educativos indígenas, las universidades y sus propios proyectos. Casos de buenas prácticas han sido identificados en Nicaragua. Entre ellas el proceso de elaboración de la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y los Ríos Coco, Bocay, Indio y Maíz, de 2002 (Ley No.445); la creación de algunos espacios por el Sistema de Naciones Unidas, como el CCPIAN (Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua).

El Foro Permanente en su informe sobre el octavo período de sesiones, ha encomiado “la inclusión del principio del consentimiento libre, previo e informado en la política del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo acerca de los pueblos indígenas, e insta encarecidamente a otras instituciones financieras multilaterales y bilaterales a que sigan ese ejemplo”.... “También exhorta al Banco Mundial y a la Corporación Financiera Internacional a que revisen sus políticas y adopten el principio del consentimiento previo, libre e informado como base de sus gestiones con los pueblos indígenas en lugar de las consultas al respecto que tienen lugar actualmente. Las instituciones financieras internacionales deberían formular una estrategia para concienciar a su personal a nivel nacional y de sus sedes sobre los derechos de los pueblos indígenas y las perspectivas de desarrollo de éstos, mejorando así su relación con los pueblos indígenas en los países”. Este exhorto y recomendación, por parte del Foro, mantiene su validez y actualidad por lo que procede continuar con su puesta en práctica.

El Foro Permanente, en su informe sobre del séptimo período de sesiones insta a los Estados y a las empresas estatales a que celebren consultas y cooperen de buena fe con los pueblos indígenas afectados a fin de recabar su consentimiento previo, libre e informado antes de la aprobación de políticas, planes y proyectos referidos a sus tierras o territorios y otros recursos, en particular en relación con el desarrollo, la utilización o explotación de recursos mineros, hídricos y de otra índole de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Otro ejemplo de buena práctica lo constituye la promulgación, mediante decreto, por parte del gobierno chileno de del reglamento que regula la aplicación del Arto.34 de la Declaración y que establece que los órganos responsables de consultar son los ministerios, municipalidades, las fuerzas armadas, entre otros. También cabe mencionar la iniciativa del Perú para legislar en relación al proceso de consulta. Y, aunque la legislación fue aprobada en el congreso peruano, la iniciativa fue vetada por le presidente de la república.

El Caucus de Latinoamérica y el Caribe recomienda al Foro:

1. Impulsar lo recomendado por la Asamblea General, en su 65 período de sesiones, en el sentido de que “los Estados deberían, de conformidad con el derecho internacional, adoptar medidas positivas y concertadas para asegurar el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indí-

genas, tomando como base la igualdad y la no discriminación y reconociendo el valor y la diversidad de sus propias identidades, culturas y formas de organización social”⁷.

2. Continuar con sus esfuerzos por promover la aplicación del PCLI, por parte de los Estados en todos los niveles y sectores del ejercicio de la gobernanza, los organismos financieros internacionales, los organismos del Sistema de Naciones Unidas, y las empresas nacionales y corporaciones internacionales.
3. Divulgar los estándares mínimos en materia de CPLI, pues cuando los Estados legislan se rebaja el derecho.

El Caucus de Latinoamérica y el Caribe recomienda a los Estados:

4. Elaborar, en consulta y cooperación con los propios pueblos indígenas, las normas, los mecanismos y los procedimientos más apropiados para contribuir a que se cumpla plenamente con la aplicación del principio del consentimiento previo, libre e informado, y de buena fe, en los procesos de formulación de leyes, políticas y programas públicos, en particular aquéllos relacionados con el ejercicio de, o que puedan afectar, los derechos de los pueblos indígenas.
5. Tomar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y en particular los enunciados relacionados con la aplicación del principio del consentimiento previo, libre e informado, y de buena fe, como marco de obligatorio cumplimiento, para la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo; y, considerarla como elemento fundamental para la autorización, por los sus respectivos gobiernos, de las actividades de las transnacionales y corporaciones empresariales en las tierras y territorios de los pueblos indígenas.
6. Legislar lo relacionado con la aplicación del principio del Consentimiento Previo, Libre e Informado tomando en cuenta estándares internacionales. Esto debe ser una referencia obligada para evitar que se reduzca el Derecho de los Pueblos Indígenas.
7. Exhortar a los Estados a que no realicen consultas difíciles para los Pueblos Indígenas.

El Caucus de Latinoamérica y el Caribe recomienda a los organismos y órganos de las Naciones Unidas y a las Instituciones Financieras Internacionales:

8. Dar atención urgente a la recomendación del Foro efectuada durante su segundo período de sesiones, concerniente a la reformulación del concepto de desarrollo, con la participación de los pueblos indígenas en los procesos de desarrollo, teniendo en cuenta sus derechos; y, al establecimiento de procesos de participación y asociaciones significativas, mediando para ello la aplicación del principio del consentimiento previo, libre e informado y de buena fe.
9. Exhortar a la ratificación del Convenio No.169, por parte de los Estados de Latinoamérica y el Caribe que aún no lo han ratificado, y a la aplicación plena de los términos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Pueblos Indígenas y Salud

El derecho a la salud de los pueblos indígenas, así como el mejoramiento de sus condiciones en la esfera de la salud, se encuentra consignado claramente en el artículo 21 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Pueblos Indígenas. En el artículo 23 de la misma Declaración, también se establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones”¹.

Otros derechos en la esfera de la salud, aparecen consignados en el artículo 24 de la Declaración. En efecto, en sus numerales 1 y 2, señala que los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas, animales y minerales de interés vital desde el punto de vista médico. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud. Y, a disfrutar por igual del nivel más alto posible de salud física y mental. Asigna la responsabilidad a los Estados para que adopten las medidas necesarias para lograr progresivamente la plena realización de este derecho².

En los países de Latinoamérica y el Caribe, el ejercicio del derecho a la salud de los pueblos indígenas, se encuentra seriamente limitado, lo que se refleja en las pobres condiciones de salud de las poblaciones indígenas. Diversos estudios corroboran con sus datos esta situación, caracterizada por la existencia de severas y amplias desigualdades, inequidades y brechas en relación a las poblaciones no indígenas.

Por otro lado, las estadísticas de salud de estos países no siempre reflejan con exactitud, a través de sus indicadores y datos, las verdaderas condiciones de deterioro de la salud de las poblaciones indígenas. Considerando las limitaciones existentes en los sistemas estadísticos nacionales, en particular respecto a los indicadores de la salud con una perspectiva étnica, el Foro Permanente ha recomendado a los Estados que incluyan la identificación étnica en las estadísticas vitales y los registros de salud. Asimismo, que asignen más fondos a los servicios interculturales de salud de tal forma que se garantice el acceso de las mujeres indígenas a una atención sanitaria de calidad, incluida la atención obstétrica de emergencia, la planificación familiar voluntaria y la asistencia de nivel profesional en los partos, y que se fortalezca y amplíe la función de las parteras tradicionales³.

1.- Resolución 61/295 de la Asamblea General.

2.- Ibid.

3.- E/2010/43, E/C.19/2010/15

Las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas concernidas, han jugado un importante rol en la promoción de los derechos humanos y la salud de los pueblos indígenas. Así por ejemplo la OPS ha apoyado muchas iniciativas encaminadas al mejoramiento de los servicios de salud dirigidos a los pueblos indígenas. También estas organizaciones han apoyado esfuerzos en materia de salud reproductiva de las mujeres indígenas, incluidos los esfuerzos por reducir la mortalidad materna y empoderar a las mujeres indígenas para que defiendan sus propios derechos reproductivos⁴. En este contexto, el Foro, ha reconocido el importante papel desempeñado por el UNFPA. Así como su labor en la promoción de modelos de salud interculturales. En el curso del diálogo en profundidad celebrado durante el octavo período de sesiones del Foro destacaron los enfoques interculturales que aplica el UNFPA, en Panamá, México, Perú, el Estado Plurinacional de Bolivia y el Ecuador, en los que se pone de relieve el liderazgo de las mujeres indígenas⁵.

Tal como se indicaba, los datos existentes en los Estados de Latinoamérica y del Caribe, dan cuenta que los pueblos indígenas, dentro del ámbito de la salud, sufren diversas formas de inequidad, manifiestas a través de los valores que adquieren indicadores de salud básicos. Así por ejemplo la mortalidad infantil, en Panamá, de los niños y niñas indígenas alcanza una cifra de 84 por cada mil nacidos vivos, en tanto que la cifra de los niños y niñas no indígenas es de 17 por cada mil nacidos vivos. La relación es de casi 5 a 1, esto significa que mueren cinco veces más niños y niñas indígenas que niños y niñas no indígenas. Otro ejemplo, lo encontramos en Honduras, en donde el índice de mortalidad materna de madres indígenas es de 255 por cada 100,000 nacidos vivos, frente a 147 por cada 100,000 nacidos vivos, de madres no indígenas. Esto es, una relación de 1.7 por 1. Otro dato de interés, lo encontramos en Nicaragua, en donde el 90% de los casos de malaria falciparum, se concentran en 24 municipios con población indígena⁶.

Un estudio sociodemográfico de la CEPAL considera, que “las disparidades entre indígenas y no indígenas son contundentes. La probabilidad de que un niño indígena muera antes de cumplir su primer cumpleaños es 3,4 veces más alta (o 240% mayor) que la de niños no indígenas de Panamá y un 10% mayor en Chile”⁷. De acuerdo al estudio, en “... en América Latina, la mortalidad infantil indígena es prácticamente el doble que la no indígena, ya que la mediana regional de mortalidad infantil en la población indígena es de 52,2 por 1.000, mientras que la no indígena es de 27,6 por 1.000. Además, en ningún país latinoamericano se ha alcanzado la meta de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo relativa a la eliminación de las desigualdades entre indígenas y no indígenas”⁸.

Los datos del estudio indican que las disparidades a nivel de país son considerables. Bastan algunos ejemplos: La tasa de mortalidad de niños y niñas indígenas en Paraguay alcanza la cifra de 82.2 por cada 1000 nacidos vivos, frente a 39.1 por cada 1000 nacidos

4.- Ibid.

5.- Ibid.

6.- OPS (2004). Salud de los pueblos indígenas e interculturalidad.

7.- CEPAL (2005). Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: información sociodemográfica para políticas y programas.

8.- Ibid

vivos, de niños y niñas no indígenas. Es decir, una relación de 2.1 a 1. En Ecuador, la cifra alcanza los 59.3 niños y niñas indígenas por cada 1000 nacidos vivos, frente a 25.8 niños y niñas no indígenas por cada mil nacidos vivos, con una relación de 2.3 a 1. En México, la cifra asciende a 54.6 niños y niñas indígenas por cada 1000 nacidos vivos, frente a 33.2 niños y niñas no indígenas por cada 1000 nacidos vivos. Es decir, una relación de 1.6 a 1.

Aunque se notan importantes disparidades entre los países, también al interior de cada uno de ellos es posible encontrar datos que reflejan situaciones de desigualdad e inequidad. Tal es el caso de México. En el Estado de Guerrero, por ejemplo, “el 96% de la población indígena en Guerrero no tiene acceso a servicios de salud por falta de hospitales con personal calificado y con equipamientos básicos”⁹. Asimismo, el índice de mortalidad infantil, en el municipio de Chilapa, es de 89 niños y niñas por cada mil nacidos vivos, cifra extremadamente mayor al promedio indicado para México, como país. Por otro lado, el índice mortalidad materna en este municipio es de las más altas del mundo alcanzando una cifra de “281 mujeres indígenas...por cada 100,000 recién nacidos, mientras el promedio es de 151 en las mujeres indígenas en México y de 51 en las mujeres mexicanas”¹⁰.

Estos indicadores dan cuenta de la incidencia de factores de discriminación, exclusión y marginalidad, “que intervienen en diferentes ámbitos y se manifiestan en el acceso a los servicios, la calidad y la pertinencia de la atención, entre otros. Por ejemplo, los grupos indígenas... pueden no recibir la atención de salud necesaria por diversos motivos, entre los cuales se destacan: problemas de acceso a los centros de salud (inexistencia o lejanía de estos, factores geográficos); limitaciones culturales en materia de accesibilidad a los servicios (lingüística, disonancia de modelos médicos), y otros obstáculos relacionados con la demanda de atención (falta de información, negativas o maltrato). Hay bastantes datos que indican que el personal de salud, de manera consciente o inconsciente, entrega una atención de salud de menor calidad a la población de status más bajo como los pueblos indígenas...”¹¹,

Durante su sexto período de sesiones, realizadas del 14 al 25 de mayo de 2007, el Foro Permanente ha llamado la atención en cuanto a los problemas de salud que afectan a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y ha recomendado “a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los Estados, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de los pueblos indígenas que aúnen sus esfuerzos a la hora de aplicar medidas adecuadas de atención médica experta para prevenir los desastrosos problemas causados por las enfermedades que afectan a los pueblos indígenas que viven voluntariamente aislados y en contacto inicial, y considere la posibilidad de adoptar procedimientos de emergencia de efecto rápido en los casos en que la situación de la salud es crítica, como sucede en la actualidad en el valle del Javará, en el Brasil”¹².

9.- Guerrero en datos. Fuentes: INEGI 2000, INI 2002

10.- Ibid

11.- Ibid

12.- E/2007/43, E/C.19/2007/12

Ante la situación en el ámbito de la salud de los pueblos indígenas, el Caucus de Latinoamérica y el Caribe, considera de importancia tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Reforzar los datos estadísticos, desagregándolos por pueblos indígenas, aplicando un enfoque intercultural en la recolección y análisis de información de salud.

La recopilación y el análisis de datos es esencial para identificar inequidades y discriminación en el sistema de salud¹³. Los datos cuantitativos y cualitativos deben colectarse para todos los grupos de población, desglosándose por pueblos y comunidades indígenas por edad, sexo y otras variables de interés. Y analizarse con un enfoque intercultural y de género, con participación de los miembros de los mismos pueblos. La OPS debe apoyar los esfuerzos para estandarizar medidas de diversidad cultural y salud, que incluyan indicadores sobre los ODMs, morbilidad/mortalidad, acceso, necesidades insatisfechas, y desarrollo, así como también indicadores con pertinencia cultural, relacionados con la visión y desarrollo de los pueblos indígenas, incluyendo a los que viven en lugares aislados. Estos datos deben ser fidedignos, comprensibles y disponibles para la formulación de políticas, programación y abogacía.

2. Abordar la temática de la alimentación y desnutrición de las poblaciones indígenas como problema de salud

Las carencias alimenticias que se reflejan en déficits de proteínas y calóricos, así como los índices de desnutrición entre las poblaciones indígenas son altos, y esto especialmente preocupantes en la niñez indígena. En tal sentido se debe considerar este aspecto como un componente necesario en el desarrollo de programas orientados a mejorar la salud de los pueblos indígenas.

3. Considerar los efectos de la contaminación ambiental y sus enfermedades derivadas en la salud de los pueblos indígenas.

Muchos de los problemas de salud de las poblaciones indígenas están asociados a la existencia de serios problemas de contaminación ambiental. Un ejemplo de esta situación es el hecho de que las fuentes de agua a las cuales recurren para satisfacer sus necesidades se encuentran muchas veces contaminadas por el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas, a mediana y gran escala, ganaderas, al igual que por la actividad de las empresas mineras que utilizan sustancias contaminantes para el procesamiento de los minerales.

4. Implementar políticas públicas de Salud sobre Pueblos Indígenas con presupuestos suficientes que permitan su atención integral en materia de salud.

La aplicación efectiva de políticas integrales en el ámbito de la salud dirigidas específicamente a las poblaciones indígenas con un enfoque de interculturalidad, solamente será posible si éstas y los programas que de ellas se deriven cuentan con los recursos suficientes para ponerlos en práctica.

13.- Y también para contar con datos para definir políticas de salud realmente incluyentes e interculturales.

5. Reconocer a las sabias y sabios de la medicina ancestral, el conocimiento tradicional y la propiedad intelectual, en el desarrollo de prácticas de prácticas en la atención primaria de salud, y su incorporación en los servicios de salud.

Es importante reconocer la importancia y el rol que asumen las sabias y sabios de la medicina tradicional, así como la propiedad intelectual de sus conocimientos tradicionales, en la diversidad de prácticas de medicina utilizadas por los diferentes pueblos e incorporarlas en los servicios de salud. Los diversos pueblos tienen sus propios conceptos espirituales sobre salud y bienestar, y en base a ellos utilizan sus medicamentos y prácticas. Mientras que el acceso de grupos discriminados a los servicios formales de salud debe ser una prioridad; el personal y los sistemas de salud deben hablar sus idiomas y respetar sus símbolos tradicionales, ceremonias, terapistas tradicionales, plantas y animales y comprender sus conceptos de familia, propiedad y comunidad, para que así el acceso a estos servicios sea equitativo. A modo de asegurar el enfoque intercultural, el personal tradicional de salud debe tener acceso a la capacitación, información, intercambios y espacios de desarrollo de capacidades.

6. Centrar los sistemas de salud gubernamentales en la prestación de servicios de salud integrados para mejorar acceso

Un sistema de salud fragmentado es una barrera significativa a la atención de salud para los pueblos indígenas y contribuye a su exclusión y discriminación. Los sistemas de salud de los gobiernos deben centrarse en la atención primaria integrada, basada en redes interculturales y servicios con pertinencia cultural.

7. Basar el acceso a la salud en un claro y genuino compromiso por el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos, y de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

Tanto los derechos humanos colectivos como individuales deben estar protegidos, promovidos y defendidos a través de los sistemas de salud, en cumplimiento con los compromisos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos.

8. Promover el liderazgo y la participación.

La participación de los jóvenes y de las mujeres en las decisiones de programación y políticas de salud, especialmente las relacionadas con la atención de la salud sexual y reproductiva, es fundamental para brindar una respuesta eficaz a necesidades de salud de estas poblaciones.

9. Atender los problemas de Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres indígenas.

Entre estos problemas que, en materia de salud sexual y reproductiva, sufren las mujeres se encuentran: El embarazo a temprana edad, así como la mortalidad materna por causas prevenibles. Como parte de la estrategia de abordaje de estos problemas están la promoción del conocimiento y acceso a la planificación familiar y el uso métodos anticonceptivos con enfoque intercultural y consentimiento. También reviste enorme importancia el empoderamiento de las mujeres para poder decidir en alianza con los hombres.

10. Mejorar el acceso a la información en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, con un enfoque de interculturalidad y una metodología apropiada, tomando en cuenta los derechos de la mujer indígena a la salud sexual y reproductiva.

La necesidad de disponibilidad de información pertinente sobre salud sexual y reproductiva, que tome en consideración los valores culturales de las jóvenes y mujeres indígenas es fundamental para el ejercicio de sus derechos a la salud.

11. Dar prioridad en la atención a los casos de VIH Sida y enfermedades de transmisión sexual, al igual que al alcoholismo y otras adicciones.

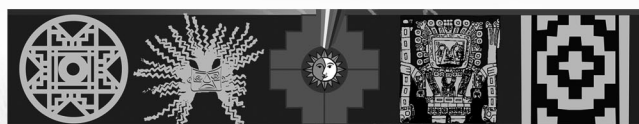
Los procesos migratorios a los que se ven obligados los pueblos indígenas, tienen una fuerte incidencia en la incidencia de casos asociados al VIH-Sida y de enfermedades de transmisión sexual. Estos casos deben ser atendidos de manera prioritaria. Igual ocurre con los casos de alcoholismo y otros tipos de adicciones.

12. Brindar atención integral, a los casos de violencia, en tanto que se les considera como problemas de salud.

Los casos de violencia que sufren las poblaciones indígenas son diversos. Desde los típicos casos de violencia intrafamiliar y sexual, hasta aquellos relacionados con la violencia institucionalizada del Estado o bien la que ejercen grupos armados irregulares. Tales situaciones de violencia tienen secuelas físicas, psicológicas y espirituales que deben ser atendidas de manera prioritaria con un enfoque integral.

Preparatory Meeting of Latin American Indigenous Caucus and the Caribbean

10^A Session of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues



INDEX

The situation of Indigenous Peoples in Latin American and the Caribbean.....	1
Indigenous Justice.....	25
Development with Culture and Identity	31
Indigenous Peoples and Climate Change	35
Indigenous Peoples and Rio+20.....	43
Resolution: World Conference on Indigenous Peoples 2014.....	49
Resolution: Future Work of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues.....	51
The Global Financial Crisis and Indigenous Peoples	53
Indigenous Childhood, Adolescence and Youth.....	59
Resolution: UN WOMEN.....	65
Indigenous Peoples and Water	67
Indigenous Peoples and Extractive Industries.....	71
Indigenous Peoples and Forests.....	79
Indigenous Peoples and Education.....	87
The Application of the Principle of Free, Prior and Informed Consent	93
Indigenous Peoples and Health	99

The situation of Indigenous Peoples in Latin American and the Caribbean

Summary

This report aims to present a brief analysis of the situation in which indigenous peoples in Latin America and the Caribbean find themselves, including the most significant progress made in the last three decades in terms of recognizing and exercising their rights, as well as the legal framework which supports them, on an international and national level; the main factors hindering their application; the priority demands of these peoples, as well as the main challenges they face.

The report also includes recommendations for the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, so that this body takes them into consideration when drawing up its agenda in favour of strengthening indigenous organizations and effectively fulfilling already recognized rights.

I. INTRODUCTION

1. This report presents a brief analysis of the situation in which indigenous peoples from Latin America and the Caribbean find themselves, especially in regards to recognizing and fully exercising their rights, in compliance with different international and national legal instruments, as well as the factors limiting or hindering their application. Similarly this report deals with the most relevant subjects and questions, considered to be a priority for the peoples; as well as with the main challenges they face.

A. Socio-demographic and Socio-environmental information

2. Despite the shortcomings that exist in national statistical systems, they currently have information available for 21 countries in the region of Latin America and the Caribbean, including on around 40 million indigenous people, who have different languages, views of the world, customs, as well as different forms of economic organization adapted to the ecosystems in which they live. ¹And on no fewer than 522 indigenous

The situation of Indigenous Peoples in Latin American and the Caribbean

peoples who live in 15 geocultural areas in Latin America and the Caribbean², and up to 840 peoples who have been identified³.

3. The estimated figure for the number of languages spoken by indigenous peoples is no less than 420 languages which are part of 99 language families⁴. Many of these peoples (108) and languages (103) have a cross-border character, which reflects their geographical and cultural continuity in different countries. This is the case for Quechua which is spoken in seven countries: Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Chile, Ecuador and Peru. Many of them, around 60, exist with no outside contact in different countries of the Amazon Basin (Brazil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela) and of the Gran Chaco, the lowland plains of central South America (Bolivia and Paraguay)⁵.

4. Some international organizations, such as the UNDP, tend to give estimates of around 10% of the total number of inhabitants. In this sense the disparities are considerable. The Ecuadorian case stands out because of the difference between official figures and the ones of our representative organizations. In fact, according to official figures and using the self-identification criterion, the indigenous population of Ecuador only represents 6.8% of the total population. Nonetheless the Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE) estimates that the population represents up to 33,3%.

5. Mexico⁶, Bolivia, Guatemala⁷, Peru and Colombia have approximately 87% of our peoples' populations in Latin America and the Caribbean. The other 13% of our populations live in 20 other States. There are more than a million of five of our peoples, such as the Quechua, Nahua, Aymara, Maya yucateco and the Ki'che. Six peoples, the Mapuche, Maya, Qeqchi, Kaqchikel, Mam, Mixteco and Otomi have populations of between half a million and a million inhabitants.

6. In Latin America and the Caribbean, indigenous peoples live in different ecosystem spaces with which they maintain a balanced material and spiritual relationship. The majority of these peoples are characterized by being located in geographical areas high in biological richness and in a good state of conservation. A good indicator of this is the fact that almost 80% of protected areas in Latin America include territories which belong to indigenous peoples⁸. The ecosystems are varied and very different ranging from the

1.- Vázquez Prada, M. () Pueblos indígenas, artífices de la conservación Mesoamericana. Una oportunidad para la integración de las diversidades biológicas y culturales. Espiral, México. UNICEF (2009). Sociolinguistic atlas of the indigenous peoples of Latin America

4.-As written in the journal Mundo Indígena 2010, by Iwgia "in January 2008 the Catalogue of Indigenous Languages in Mexico was officially published by the recently created National Institute of Indigenous Languages (INALI), in which 364 linguistic varieties from 68 indigenous languages were registered, grouped into 11 language families".

5.- FAO (2008) Indigenous Peoples and Protected Areas.

6.- Following the Population and Housing Census (2005) 13.365.976 indigenous people were counted in 32 of the country's states. That represents 13% of the total population.

7.- In 2009 the estimated figure was of 6.000.000 indigenous people.

rainforests in Central America, the Andes, the Amazon, the Orinoquia, the Pacific and the Eastern Plains to the Guajira desert peninsula. These spaces are also rich in other natural resources such as oil, gas and minerals, making them areas which are highly sought after for exploration and industrial exploitation, for mining activities and the illegal trade in species of flora and fauna.

7. The peoples' survival depends exclusively on the resources that exist in these ecosystems, from the forests, from hunting, fishing, picking fruits and collecting seeds, amongst others things. In addition to this they are the receivers of an accumulation of knowledge about the ecosystems in which they live and contribute to the conservation of these areas which are rich in biological diversity.

B. National and International Legal and regulatory framework

8. The ILO's Convention number 169 is an international legally binding instrument for the States which ratified it. It specifically concerns the rights of indigenous and tribal peoples stating in Article No. 2 that "Governments shall have the responsibility for developing, with the participation of the peoples concerned, co-ordinated and systematic action to protect the rights of these peoples and to guarantee respect for their integrity. 2. Such action shall include measures for: (a) ensuring that members of these peoples benefit on an equal footing from the rights and opportunities which national laws and regulations grant to other members of the population; (b) promoting the full realisation of the social, economic and cultural rights of these peoples with respect for their social and cultural identity, their customs and traditions and their institutions; (c) assisting the members of the peoples concerned to eliminate socio-economic gaps that may exist between indigenous and other members of the national community, in a manner compatible with their aspirations and ways of life." Article 7 establishes the right to "decide their own priorities for the process of development as it affects their lives, beliefs, institutions and spiritual well-being and the lands they occupy or otherwise use, and to exercise control, to the extent possible, over their own economic, social and cultural development⁹."

9. The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples¹⁰, establishes that indigenous peoples have the following rights, amongst others: self-determination (Article 3), autonomy or self-government (Article 4), maintain and strengthen their institutions (Article 5), participate fully, if they so choose, in the political, economic, social and cultural life of the State (Article 5), participate in decision-making in matters which would affect their rights (Article 18), obtain their free, prior and informed consent before adopting and implementing legislative or administrative measures that may affect them (Article 10, 19 and 32.2); determine and develop priorities and strategies for exercising their right to development (Article 23); own, use, develop and control the lands, territories and resources that they possess by reason of traditional ownership or other traditional

8.- FAO (2008). Indigenous Peoples and Protected Areas.

9.- ILO Convention No 169.

10.- General Assembly resolution 61/295

occupation or use, as well as those which they have otherwise acquired (Article 26.2); the conservation and protection of the environment and the productive capacity of their lands or territories and resources (Article 29.1); determine and develop priorities and strategies for the development or use of their lands or territories and other resources (Article 32.1).

10. Many national Latin American and Caribbean States have ratified the International Labour Organization's Convention 169 and have all adhered to the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. In addition to this, the majority have included the recognition of the rights of indigenous peoples in their laws and their legal and regulatory frameworks, to a greater or lesser degree; nonetheless, there is a significant gap and lack of application between what is stated in these regulatory and legal frameworks and what these States see in practice.

11. In fact, although there are laws in many Latin American and Caribbean States which recognise and protect the rights of these peoples, they are frequently violated or not fully abided by. In other cases, national laws are not in line with the obligations that the States in question have, regarding international laws on human rights and especially on indigenous peoples' rights.

12. Many indigenous peoples' rights violations are closely linked to the States' discriminatory and exclusive policies, to them not fulfilling their obligations derived from international legal instruments and to the pressure from international corporations and national companies to exploit natural resources, renewable and non-renewable, such as: hydrocarbons, minerals, forests, water, wind and agricultural, which exist on indigenous peoples' lands and territories. There are many cases which demonstrate this ever-growing pressure on their lands. This results in rapid deforestation which is a product of wood exploitation, mining, agricultural expansion, settlements, and infrastructure projects. Under these circumstances national institutions and the corporations and companies which operate within them are characterized by violating and not taking individual and collective rights into consideration; dispossessing them of their lands and resources. Initiatives for the conservation of the environment, or the declaration on areas under preservation and conservation systems do not take indigenous peoples' rights into account either.¹¹

II. POLITICAL REGULATORY FRAMEWORK GOVERNING THE LIVES OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

13. There are a number of international legal and administrative instruments which promote and protect indigenous peoples' rights. Including:

- a) The Charter of the UN (1945) which recognises that all peoples have the right of self-determination; the Universal Declaration of Human Rights (1948) which establishes that "everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion..."(Art. 2.1)
- b) The Convention N°107 Concerning the Protection and Integration of Indigenous Populations (1957);
- c) The Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide; International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965);
- d) The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights [A/RES/2200 A (XXI)] from the 16th of December 1966; The international covenant on Civil and Political rights international covenant on civil and political rights from the 16th of December 1966, in force as from the 23rd of March 1976;
- e) The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women;
- f) The Convention on the Rights of the Child (1989) which specifically refers to indigenous children in articles 17.d, 29.d and especially article 30, which is a basis for intercultural bilingual education;
- g) The Convention on Biological Diversity (CBD) –art.8j8 and the related regulations-, binding on all parts;
- h) The Vienna Convention adopted by the United Nation's World Conference on Human Rights in 1993, whose aim No.20 "recognizes the inherent dignity and the unique contribution of indigenous people... and strongly reaffirms the commitment of the international community to their economic, social and cultural well-being..."
- i) The United Nations General Assembly Resolution proclaiming a Second Decade of the World's Indigenous Peoples (2005-2015);
- j) The Universal Declaration on Cultural Diversity (2001), which recognizes the importance of consolidating cultural diversity as an ethical imperative and emphasizes the role of indigenous peoples in it;
- k) The Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 2005;
- l) The Durban Action Plan;
- m) The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equita-

ble Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity, adopted by the Conference of the Parties at its tenth meeting on 29 October 2010.

In the Inter-American system there are two legal instruments that stand out:

- n) The American Declaration of the Rights and Duties of Man (1948), and
- o) The American Convention on Human Rights (1969).
- p) The Inter-American Democratic Charter (adopted on September 11th 2001 during the XXVIII Period of Sessions Article 9 states that the protection of human rights of indigenous peoples and respect for ethnic, cultural and religious diversity in the Americas contribute to strengthening democracy and citizen participation.

Case Law created by the Inter-American Court of Human Rights is also of utmost importance in resolving cases dealing with the violation of Indigenous Peoples' rights. In addition to the aforementioned legal instruments, there are a few documents which stand out, reflecting the policies of different organizations, including some that belong to the United Nations System. These documents are:

- q) The working document The UNDP and Indigenous Peoples: A policy of engagement (2001), which establishes the principles for the United Nations Development Programme (UNDP) in this field;
- r) The UNDP's Human Development Report 2004, on the topic of cultural liberty;
- s) The World Health Organization Traditional Medicine Strategy 2002-2005;
- t) The World Bank Operational Directive 4.10 on Indigenous Peoples;
- u) The International Financial Corporation's (IFC)¹² documents on policy and performance standards, in force since April 30th 2006, which favours respecting the international standards on and indigenous peoples' fundamental rights for companies whose projects are located on the lands and territories which they occupy.
- v) The Inter-American Development Bank's (IADB) operational policy aimed at indigenous peoples, as well as an indigenous development strategy. Both were approved in 2006.

14. In the last thirty years, there has been significant progress made in building legal and regulatory frameworks which define in a more substantive manner the rights of indigenous peoples and regulate their relationship with the States. One of these is

ILO Convention No.169 on indigenous and tribal peoples, ratified by twenty countries of the world. 15 (fifteen) of these countries are Latin American, being Mexico (1990), Bolivia (1991), Colombia (1991), Costa Rica (1993), Paraguay (1993), Peru (1994), Honduras (1995), Guatemala (1996), Ecuador (1998), Argentina (2000), Dominica (2002), Venezuela (2002), Chile (2008) and Nicaragua (2010).

15. The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples approved by the General Assembly in 2007 was a response to the indigenous peoples' historical claim to be able to rely on a legal and political instrument which protected their human rights. Its contents focus on recognizing the political, territorial, economic, social and cultural rights of these peoples. Although the Declaration is not binding, as it is the case of the Convention No.169, its approval was a very important step with regards to recognizing, promoting and protecting the rights and liberties of these peoples. In addition, it constitutes a framework of minimum standards for their survival, dignity and well-being. Now the vast majority of Latin American and Caribbean countries have adopted this Declaration.

16. The Declaration establishes the rights of indigenous peoples to self-determination, the right to the lands and territories which they have traditionally or since ancestral times occupied, to obtain their free, prior and informed consent before States make decisions that may affect them. Article 32 of the Declaration, point 1 states that "Indigenous peoples have the right to determine and develop priorities and strategies for the development or use of their lands or territories and other resources", point 2 stipulates that States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representative institutions in order to obtain their free and informed consent prior to the approval of any project affecting their lands or territories and other resources, particularly in connection with the development, utilization or exploitation of mineral, water or other resources". The requirement of prior consultation aims to avoid a decision, which could significantly affect the lives of indigenous people and peoples, being imposed upon them, in line with the right to self-determination which is also protected under the Declaration.

17. With regards to territory, the Declaration highlights the rights of indigenous peoples to lands, territories and resources by reason of traditional ownership or other traditional occupation or use, as well as those which they have otherwise acquired (Article 26.1); to own, use, develop and control the lands, territories and resources that they possess; States shall give legal recognition and protection to these lands, territories and resources (Article 26.2/3); to redress, by means that can include restitution or, when this is not possible, just, fair and equitable compensation, for the lands, territories and resources which have been confiscated, taken, occupied, used or damaged without their free, prior and informed consent (Article 28.1); to the conservation and protection of the environment and the productive capacity of their lands or territories and resources (Article 29.1); and, to determine and develop priorities and strategies for the development or use of their lands or territories and other resources (32.1).

18. The changes made to domestic legal systems made by countries, with the aim of applying the obligations derived from international law, show that significant but different level progress has been made. In the last few years Constitutional Reforms in Latin American and Caribbean countries have been made which recognize the rights of indigenous peoples in political, economic, social and cultural spheres. Recent examples can be seen in Ecuador and Bolivia which have not only carried out reforms but have also enacted new constitutional frameworks. Thus Bolivia under its new constitution is constituted as a “Unitary Social State of Plurinational, Community-based...intercultural Rights...and independent¹³...” .Article 2 of the Constitution of Bolivia states that “Given the pre-colonial existence of nations and former indigenous peoples and their ancestral control over their territories, their self-determination is guaranteed...as it consists of their right to independence, self-government, their culture, the recognition of their institutions and the consolidation of their territorial institutions...”.

19. Under its new constitution the Ecuadorian State defines itself as a “Constitutional State of rights and justice, which is social, democratic,...intercultural, multinational¹⁴...” . Article 57 recognizes and guarantees that “indigenous peoples and nations” a number of collective rights including the following¹⁵: 1. To uphold, develop and strengthen their identity, feeling of belonging, ancestral traditions and forms of social organization (point 1); 2. To keep imprescriptible ownership of their community lands, which shall be unalienable, immune from seizure and indivisible (point 4); 3. To keep ownership of ancestral lands and territories and to obtain free allocation of these lands (point 5); 4. To participate in the use, leasing, administration and conservation of natural renewable resources located on their lands (point 6). 5. To free prior informed consultation, within a reasonable period of time, on the plans and programs for prospecting, producing and marketing non-renewable resources located on their lands and which could have an environmental or cultural impact on them; to participate in the profits earned from these projects and to receive compensation for social, cultural and environmental damages caused to them. The consultation... shall be mandatory and done in due time...”.

20. In Nicaragua, in addition to the changes made to the Constitution, a System of Autonomy for the indigenous peoples and ethnic communities of the Caribbean Coast, under the enactment and implementation of the Statute of Autonomy for the Regions of the Atlantic Coast of Nicaragua, Law No.28, and its corresponding regulations. The Autonomy process has been developing and expanding for 20 years. Because of its new laws have been enacted, complementing some of the aspects of the Statute. An example of these Laws is the Law of System of Communal Property belonging to the indigenous peoples and ethnic communities from the Autonomous Regions of the Atlantic Coast of Nicaragua and the Rios, Coco, Bocay, Indio and Maíz rivers, approved by National Assembly in 2002 under which indigenous authorities organize themselves according

13.- Article 1

14.- Article 1

15.- Article 57, points 1,4,5,6 and 7

to territory and under which they are given authority in terms of land management and management of natural resources.

21. Other countries that have carried out constitutional reforms or adopted special laws related to indigenous peoples and their individual and collective rights are¹⁶: Argentina, Brazil, Colombia, Guatemala, Mexico, Panama, Paraguay, Peru and Venezuela. In 1996, articles 1, 2, 18 and 115 in the Mexican constitution were reformed. Nonetheless the reform was considered insufficient. In other countries like Chile, for example, “the Senate of the Republic voted in favour of the idea of carrying out a constitutional reform on indigenous matters, based on a legislative initiative promoted by the Government and in agreement with a Senate Committee”.¹⁷

III. IMPORTANT ACHIEVEMENTS FOR INDIGENOUS PEOPLES IN THE LAST FEW DECADES

22. Indigenous peoples in Latin America and the Caribbean have made significant progress in having their rights recognized. They are upheld by laws and regulations, under legal instruments at an international level, as well as by changes made to laws in their respective countries. These changes can be verified with new constitutional frameworks that have been enacted or with significant changes made to existing constitutions, as well as with the approval and coming into force of special laws which favour recognizing, respecting and exercising their fundamental rights. However, it is clear to see that the international legal instruments as well as national laws are still far from offering sufficient guarantees of protecting indigenous peoples from having their rights violated.

23. In the last few decades a number of organizations from the Latin American and Caribbean indigenous movement have been actively working to ensure that indigenous peoples can count on international legal instruments with contribute to having their fundamental political, economic, social and cultural rights recognized. In addition, they have been the driving force behind the creation of bodies in favour of having these instruments applied by States in these regions of the continent. Also, these organizations have made proposals in their respective countries, to introduce changes as well as political and legal reforms in favour of indigenous peoples.

24. The subject of indigenous peoples’ right to consultation as well as their right to participate in decision-making processes also received special attention by the United Nations Special Rapporteur and from the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous peoples. In its 20th report to the United Nations Human Rights Council from September 2009, the Special Rapporteur spent the second half of his report analysing the duty of the

16.- E/CN.4/2006/78

17.- A/HRC/12/34/Add.6

States to consult indigenous peoples on matters which affect them. Also in September 2009, the Human Rights Council requested the Mechanism to carry out a study on indigenous peoples and their right to participate in decision-making.

25. In the last few years, a considerable amount of attention has been given to the consequences of climate change for indigenous peoples. This is an enormous challenge that we have to face to protecting our planet. There were a many indigenous peoples' representatives at the last two Climate Change Conferences which took place in Copenhagen and Cancun. Many organizations called to "Stop the disaster with Global Mobilization in Defence of Mother Earth and Her Peoples and Food Sovereignty against the Commodification of Life, Pollution and the Criminalization". And in search of methods with contribute to "More effective action and less rhetoric in applying the Conventions on Biological Diversity and Climate Change, and in respecting the rights of indigenous peoples and communities"¹⁸.

26. The International Indigenous Peoples Forum on Climate Change (IIFCC) has worked intensely to ensure that indigenous peoples' rights are recognised in negotiations under the United Nations Framework Convention on Climate Change. During this process a reference to the Declaration was successfully included in the draft decision on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) which was agreed upon during the Copenhagen meeting. Nonetheless, indigenous peoples face a big challenge in having their fundamental rights, lands, territories and natural resources respected.

27. Indigenous peoples continue to be fiercely opposed, at the cost of many of their members lives, to mega-projects promoted by States, as well as against the actions of many multinational companies which do not recognise their collective rights over their natural resources. Aggressive development projects. In many Latin American countries like Guatemala, Panama, Peru and Ecuador, there have been large-scale mobilisations of indigenous peoples against the business activities and mega-projects encouraged by the State. In Peru one of the worst social conflicts in the country's recent history broke out between indigenous people and the Government, a conflict now known as the Sucesos de Bagua (The events in Bagua). The conflict led to the death of 34 people when a peaceful indigenous roadblock was violently removed by the military police. During the demonstration the Awajún and Wampis people expressed their rejection of mining activities taking place on their territories.

28. State policies in many Latin American countries, criminalizing indigenous peoples' demands to have their rights respected, have also faced fierce opposition from these peoples. The most emblematic are from Brazil, Chile, Guatemala and Peru. In Guatemala for example, recent events in protest against the activities of mining companies on indigenous territories have led to the Special Rapporteur to speak up the human rights

18.- Declaration on the "Dialogue on Alternatives and Alliances of the Indigenous, Farming and Social Movements of Abya Yala". La Paz, 26th of February 2009

and fundamental freedoms of indigenous people. He warned in an unprecedented report that “Guatemala is currently going through a climate of significant social instability and unease regarding activities on the traditional territories of Indigenous Peoples. This has a severe impact on the rights of the Peoples and put the governance and economic development of the country at risk”, Adding, that “we have received statements alleging harassment and attacks against the leaders of the community, which according to witnesses security forces and mining companies could be behind”¹⁹.

29. Indigenous peoples have been strengthening their abilities to organize, as well as strengthening their presence in different forums and national, regional and international bodies, in which many of the problems which affect them are discussed. Levels of organization have considerably developed, and many networks and organizations are currently making efforts in favour of the recognition and respect for the indigenous peoples’ rights which they represent. In Latin America and the Caribbean, the following organizations and networks stand out:

1. Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coordinator for the Indigenous Organizations of the Amazon Basin), COICA, whose members are:

- a. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (The Interethnic Association for the Development of the Peruvian Forest), AIDSESP in Peru;
- b. Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana (The Association for the Amerindian People of Guyana), APA-Guyana;
- c. Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (The Confederation of Indigenous Peoples of Bolivia), CIDOB-Bolivia;
- d. Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (The Coordinator for the Indigenous Organizations of the Brazilian Amazon), COIAB-Brazil;
- e. Confederación de las Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana (The Confederation of the Nationalities from the Ecuadorian Amazon), CONFENAE-Ecuador;
- f. Federación de Organizaciones Autóctonas de Guyana Francesa (The Federation of Independent Organizations of French Guyana)-FOAG-French Guyana;
- g. Consejo Nacional Indio de Venezuela (The National Indian Council of Venezuela), CONIVE-Venezuela;
- h. Organización Indígenas de Surinam (The Indigenous Organization of Surinam), OIS-Surinam; and
- i. Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (The Organization of the Indigenous Peoples from the Colombian Amazon), OPAIC-Colombia

19.- Violent Development: Communities defend themselves from progressive repression in Guatemalan Guatemala. Written by Sandra Cuffe, March 17th, 2011.

2. **Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (The Confederation of the Indigenous Nationalities of Ecuador), CONAIE**
3. **Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (The Andean Coordinator for Indigenous Organizations), CAOI**
4. **Organización Nacional Indígena de Colombia (The National Indigenous Organization of Colombia), ONIC**
5. **Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (The Confederation of Peoples of the Kichwa Nationality from Ecuador), ECUARUNARI**
6. **Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu Bolivia (The National Council of Ayllus and Markas from the Quallasuyu Bolivia), CONAMAQ**
7. **Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (The National Confederation of Peruvian Communities Affected by Mining), CONACAMI**
8. **Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (The Organization of Indigenous Nations and Peoples in Argentina), ONPIA**
9. **Consejo Indígena de Centro América (The Indigenous Council of Central American), CICA**
10. **Coordinadora Kaqchikel (The Kaqchikel Coordinator) POP JAY**
11. **Red Continental de Mujeres indígenas (The Continental Network for Indigenous Women)**
12. **Alianza de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica (The Alliance of the Indigenous Women of Mexico and Central America)**
13. **Coordinadora Indígena Mesoamericana (The Mesoamerican Indigenous Coordinator), CIMA**
14. **El Foro Internacional de Mujeres Indígenas (The International Indigenous Women Forum), IIFW**
15. **El Foro Indígena de Abya Yala de Cambio Climático (The Indigenous Forum of Abya Yala on Climate Change)**

30. Indigenous peoples have been establishing the foundations for promoting a development model based on collective good living. To this aim different organizations, which represent indigenous peoples in Latin America and the Caribbean, have been making progress in regards to reflecting upon and debating on the indigenous peoples' vision of collective good living. Nonetheless, there is still a long way to go in order to be able to count on a model which is firmly in place and which counters the economic and social models supported by the western civilization patterns. The indigenous organizations have moved forward, spreading their vision development and they have publications on the subject, as is the case with CAOI. Others have dealt with the topic in their strategic plans for development, as COICA has. For CICA in Central America, its own planning strategy for community projects for collective well-being, known as Balu Wala, has been applied. This methodology allows for FPIC to be applied, for the peoples' view of the world and spirituality to be taken into account when designing the projects. These are adapted to their experience and to the practice of a community-based economy as well as to the socio-environmental context. Through applying Balu Wala, community projects have been designed.

IV. MAIN CHALLENGES FOR THE INDIGENOUS PEOPLES OF LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

31. The indigenous peoples of Latin America and the Caribbean face different challenges. The most representative of their organizations are characterized by developing, in unfavourable conditions, their arduous fight in favour of the physical and cultural survival in a world dominated by environmental insecurity, aggression in the name of development and the continued criminalization of their way of life and their social protests.

32. One the biggest challenges which these peoples face is overcoming poverty and abject poverty. In the populations of each of the countries in question, they represent the poorest segment of society, live in precarious economic conditions, have low income levels and are considerably marginalized and excluded. They do not participate much in the formal economy, even though they have highly valuable natural resources on their territories. International corporations and national companies exploit these resources without this benefitting the indigenous peoples.

33. Indigenous peoples have not benefitted from substantial improvements to their social, economic and political conditions. On the contrary, the little attention the Government pays to their demands highlights how unimportant the indigenous topic is in public policies. This in turn reflects their very-low level or non-existent participation in the drafting of these policies.

34. A serious challenge for the indigenous peoples of Latin America and the Caribbean is what constitutes an “implementation gap” between the laws which favour the rights of these peoples and the practical application of their contents. This shows that the indigenous question is not a priority for States, and that the historical debt to them becomes increasing consolidated. This situation increases the vulnerability of indigenous peoples in the face of pressure and threats derived from a development model based on using natural resources. One example is territorial dispossession for large-scale extractive activities such as mining, dams and agrofuels.

35. Indigenous peoples’ living conditions continue to deteriorate. Socioeconomic indicators on health, education, housing, employment and salaries continue to show the enormous gap between the indigenous and non-indigenous populations.

36. Generally speaking, census figures ignore, underestimate or often do not include indicators which are relevant to indigenous peoples. In many countries detailed statistics based on indigenous peoples are lacking, especially on indigenous women, despite the fact that they live in precarious conditions and lack most in social terms, namely in healthcare, education and employment.

37. Economic and social policies launched by national States in Latin America and the Caribbean, aimed at the nuclei of indigenous people are not very effective, and their cover is far from satisfying their biggest needs and socioeconomic demands. In line with this few efforts can be said to be effective. Figures on poverty of indigenous peoples reveal this ineffectiveness. For example in Mexico, figures on indigenous peoples show that 75% of their populations live in multidimensional poverty; that is to say they that their incomes are not enough to allow them to receive basic goods and services. 39.2% live in abject poverty as they lack simultaneously four basic social needs, of which food, access to education, healthcare services and decent housing are the most common. The levels of malnutrition are still very high amongst the indigenous population. In Guatemala the figures are also telling. The 2008 Human Development report showed that 73% of indigenous people are poor and of them 26% live in abject poverty, compared to the non-indigenous population of which 35% are poor and only 8% live in abject poverty.²⁰

38. Indigenous peoples in Latin America and the Caribbean are faced with the effects of cyclical financial crises which have a considerable impact on them. Adding to this are the trends from climate change and the impacts suffered due to natural disasters, given their high degree of physical, social and environmental vulnerability.

39. Indigenous women have to face even bigger challenges not only because they are indigenous but also because they are women. Even when through their work and knowledge indigenous women contribute to community life and with their productive and reproductive life, they are rarely taken into account and are not valued. Generally speaking they are not rewarded and there is no reliable information on their situation. Indigenous women have been systematically excluded from opportunities and access to natural resources, from production, formal and informal employment and decision-making spaces. They do not have access to public healthcare services, education or technological resources. In addition to this, indigenous women are disproportionately affected by maternal mortality, one of the most significant poverty indicators.²¹

40. In Latin America, States and governments in turn, have not protected indigenous women from violence. On the contrary, often it was the States themselves who perpetrate violence against them. Caught in the middle of armed conflicts, indigenous women have been raped. They have been subject to mass sterilization, maltreatment, abuse and being abandoned by public healthcare services. In addition to this, the lack of access to public services, which are always spread out and limited, is considered as institutional violence. They have also suffered from violence in work, school and political spaces. Discrimination in itself constitutes violence against indigenous women. Becoming poor because of exclusive policies also constitutes violence against indigenous women. The violation of indigenous peoples' collective rights results in violence against their health, integrity and against their life.

20.- IWGIA (2010). Indigenous World, 2010.

21.- See publication: "El Impacto de la Crisis Económica en la Vida de las Mujeres Indígenas. Documento base para la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe: "Qué Estado para que igualdad?" Foro Internacional de mujeres Indígenas, 2010

41. So-called national interests in the economic field have all been in contradiction with the individual interests of indigenous peoples in the national states of Latin America and the Caribbean. Between national economic interests and the indigenous peoples' right to be consulted and obtain their free, prior and informed consent, these peoples are in an unfavourable position. There are a number of examples to demonstrate this. As is the case with the "Growth Acceleration Plan" launched by the Brazilian government, which contains actions such as building hundreds of hydroelectric plants on indigenous lands of the Amazon. In none of the cases was the Plan presented to the indigenous peoples affected for prior consultation.

42. Indigenous peoples of Latin America and the Caribbean suffer systematic assaults against their interests, rights and physical integrity. Much of this aggression is a result of, with the States responding violently to, the indigenous peoples refusal to implement projects which would considerably damage their lands, territories, natural resources and habitat. In practice, imposing large-scale development programs in the supposedly interests of national development causes mass evictions and human rights violations against indigenous peoples, and members even die.

43. Indigenous peoples face a big challenge due to the strong economic and trade interests which national companies and international corporations have in accessing traditional areas to use the resources. These resources are found on their lands and territories which limit access to areas traditionally used for fishing and to lands for hunting, amongst others. These interests, which are defined by national states, impinge upon the interests and rights of indigenous peoples. For them, force is used as well as the systematic practice of a policy of violence against the indigenous peoples.

44. Another challenge which the indigenous peoples face is permanent State threats and implementation of the forced eviction of indigenous communities in order to free up space for mining and oil exploitation as well as agribusiness. One example of this happens on the ancestral lands of the Mapuche people in Chile and Argentina, where a policy of the systematic criminalization has been created against those who have dared to protest. When the Mapuche movement in the south of Argentina organized itself to claim their legitimate rights, they had to face the traditional political elite falsely accusing them of separatism, charging with them inciting violence and being in contact with foreign terrorist organizations.

V. AGENDAS AND PRIORITIES OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN TO FACE THE CHALLENGES

There are many different issues which are of concern to the indigenous peoples of Latin America and the Caribbean, to their authorities and representative organizations of which we shall mention the following:

1. The defence and protection of land, territory and natural resources, including the forests.
2. The invasion of their territories by multinational companies working in extractive industries, which increase the local populations' conditions of inequality and abject poverty and which also put the whole of humanity's survival at risk by destroying Mother Earth.
3. The militarization of their territories because of State military bases and fields, as well as because of illegal forces.
4. The right of indigenous peoples to prior consultation from the States, companies, corporations, the organizations of the United Nations system, Cooperation Agencies and other organizations involved in drawing up and implementing laws, in drafting and applying policies, strategies, plans, programs and projects for development.
5. The creation of State and companies megaprojects on lands and territories which belong to indigenous peoples.
6. The differences between national and international law, recognising indigenous people's rights, and the operating policies of International Financial Institutions.
7. Applying the principle of free, prior and informed consent and the lack of legal mechanisms and procedures which ensure it is applied.
8. Criminal justice and practices, in this field, of discriminating against and excluding indigenous peoples.
9. The criminalization of their just demands to have their fundamental rights recognized, exercised and fully respected, in line with international law and national laws of the States.
10. Systematic violence against indigenous authorities and organization representatives.
11. Constant pressure, eviction from their ancestral lands, as well as the forced displacement of their populations.
12. The threat of dozens of indigenous peoples dying out physically and culturally.
13. The lack of mechanisms safeguarding their fundamental rights, or their ineffectiveness.
14. Climate change and its consequences for life, culture, human and environmental

health, traditional ways of life, local infrastructure, food security and sovereignty and the very existence of indigenous peoples.

15. The most polluting countries' lack of commitment to seriously reduce their greenhouse gas emissions and paying their climate debt.
16. The use of related financial mechanisms with measures for mitigating and adapting to climate change which could lead to forests and other ecosystems being included in international financial markets, and the eventual usurpation of indigenous peoples' and communities' rights over their lands and territories.
17. Implementation of Convention No. 169 and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
18. The health and education of indigenous children, adolescents and youth, and the marked differences in social indicators between indigenous and non-indigenous, which puts the future of indigenous peoples at risk.
19. The situation of indigenous women whose sacred place and whose responsibility towards preserving the life, culture and existence of indigenous peoples has been, is and will be fundamental.
20. Bio-piracy and recognising, respecting and protecting their rights of intellectual property over their goods and resources, including over genes, traditional medicines, traditional knowledge, their techniques and technology.

In order to respond to these concerns, indigenous peoples organizations have, within their agenda, decided to give priority to the following matters:

agenda, decided to give priority to the following matters:

1. Recognizing and respecting indigenous peoples' fundamental rights, especially those on identity, self-government and self-determination.
2. Recognizing, exercising and defending rights over territory, natural resources and genetic resources.
3. Defending water resources which belong to indigenous peoples.
4. Actions to counter the activities of national companies and transnational corporations from extractive industries.
5. Defining legal mechanisms so that the principle of free, prior and informed consent can be applied in all fields and at all levels.
6. Changing the operating policies of International Financial Institutions.
7. Legal guarantees: Implementation and/or complying with international laws, conventions and treaties. Safeguards for the rights of indigenous peoples.

8. Promote actions to reduce greenhouse gas emissions, as well as measures for adapting to climate change.
9. Analysing mechanisms related to selling environmental services, especially those which aim to turn territories and nature into commodities through the creation and sale of these services, as well as their impact on the lands, territories, ecosystems, food production and food security.
10. Promote development with an identity, through making the model of “collective good living” operational, and systematizing indigenous peoples’ experiences in applying the model in Latin American and Caribbean countries.
11. Strengthening the bodies which contribute to dialogue between peoples, States, the United Nations System, International Financial Institutions, Cooperation Agencies, Non-Governmental Organizations and other organizations.
12. Improving the lives of indigenous children, adolescents and youth as well as improving access systems and education and healthcare services.
13. Access for indigenous young people to an intercultural, higher education systems, facilitating exchanges and research by universities and indigenous research centres, into strategic approaches which involve indigenous organizations.
14. Paying attention to the problems which indigenous women face which prevent them from effectively participating in different social and political participation spaces at a national and international level.
15. Promote actions to put an end to the secular exclusion of indigenous peoples by States.
16. Demanding that States which apply a policy of criminalization, to put an end to the process of criminalizing the demands of social movements, especially those of indigenous peoples.
17. Reviewing projects for the production of biofuels which change the use of the land and threaten indigenous peoples’ food sovereignty and food security.
18. Analysing the situation related to granting concessions of areas, within indigenous territories, given by national governments for extractive activities like mining and oil exploration
19. Reviewing the situation related to the militarization of indigenous territories and its impact in indigenous populations, as well as proposals and actions.
20. Incorporating the approval of the following laws into parliamentary agendas: The Right to Consultations, Mining, Water and other resources.
21. Participating in the drafting of the census paper so as to include data taken from the indigenous peoples of Latin America and the Caribbean.

VI. MAIN RECOMMENDATION TO THE PERMANENT FORUM OF REPRESENTATIVE OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

1. The Permanent Forum must revise the effectiveness of mechanisms used by the United Nations System, so that States comply with indigenous peoples' rights and follow the recommendations of the Forum and other United Nations bodies.
2. The Forum must pay special attention to the situation of those indigenous peoples threatened by State policies which militarize their territories and policies of criminalization. In addition the forum must act proactively, together with the Special Rapporteur on Indigenous Peoples' rights and the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, or other relevant bodies, so that States adopt appropriate measures related to guarantees which must be given to indigenous peoples, their authorities and their representative organizations.
3. The Forum must promote the drafting of proposals for legal and administrative mechanisms which contribute to the effective application of the principle of free-prior and informed consent by States, International Financial Institutions, organizations of the United Nations System, Transnational Corporations and National Companies, Cooperation Agencies and other organizations whose activities are aimed at or take place on indigenous peoples' territories.
4. The Forum must consider the possibility of establishing mechanisms which include ranking the States, organizations of the United Nations System, International Financial Institutions, Cooperation Agencies, Transnational Corporations and National Companies as well as other organizations, with regard to the degree to which they do or do not respect the rights of indigenous peoples, written in international law and in relevant national laws.
5. The Forum must promote and encourage the effective participation of indigenous peoples' authorities and representative organizations in different international spaces and bodies where their situation is analysed, in addition to applying the instruments of international law related to their rights. For this, one should initially consider adequate accreditation of such representation, the scope of and substantiality of the same, in relation to the interests of their peoples.
6. The Forum must draft proposals which contribute to indigenous peoples being better prepared to face the serious consequences of Climate Change. And, advise indigenous authorities and organizations to define strategies which counter the consequences.
7. The Forum must promote, in terms of discussion and drafting proposals related to Climate Change at an international level, existing UN Indigenous mechanism, including the Functional Commissions ECOSOC, the Permanent Forum on Indigenous Issues, the Special Rapporteur on the rights of Indigenous Peoples and the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples in the Human Rights

Council. They must be accredited and be able to participate in the COP and inter-sessional meetings. Participation must be on an equal footing with other UN agencies and programmes.

8. Within the UNFCCC, the Forum must promote the establishment of a fund for and aimed at giving financial support to the Indigenous Peoples which promotes processes within the UNFCCC framework.
9. The Forum must make concerted efforts with the United Nations agencies, including the UNDP, UNICEF, PAHO, UNFPA and UNESCO, in order to launch programs specifically aimed at improving the education and health conditions of indigenous children, adolescents, youth and women.
10. The Forum must review the level of compliance with its recommendations and determine the degree of effectiveness of the results of those which are applied, so that these results are considered in terms of quality.

VII. PRESENTATION OF INTERESTS AND PRIORITIES

On the first day of the Latin American and Caribbean Caucus meeting, people presented different approaches to the interests and priorities which should be taken into consideration so as to present them to the Permanent Forum. These included:

1. It is vital that Indigenous Rights be recognised, exercised and fully respected, in line with Convention No.169 and the United Nations Declaration on the rights of Indigenous Peoples.
2. Identity-based development must not only be heard in statements, because of experiments on the definition and application of a methodology with instruments which already exist, at a technical and political level, contained in the “collective good living”. These are tools which are moving forward. One of these experiments has been developed by the CICA.
3. Within the framework of this development model, rescuing the traditional production system which has kept indigenous peoples must be prioritized. People are looking to achieve food sovereignty in order to ensure food security for indigenous peoples.
4. The issue of Territorial Security has not been possible to maintain, and this decreases the possibility of taking this model forward.
5. The issue related to the Strategy on Climate Change is of the utmost importance because of its impact on all territories.
6. The principle of Free, Prior and Informed Consent is related to everything that has been worked on/ The concepts must not be confused, given that consultation is a mechanism and consent the fundamental element. The essential tool is consent.

The situation of Indigenous Peoples in Latin American and the Caribbean

7. The impact of large-scale projects and megaprojects on a continental scale is also a very important matter.
8. How financial bodies operate. They generally go against what is set out in the Declaration and do not respect indigenous peoples' rights.
9. One topic of interest is State Policies which favour corporations which aim to control indigenous territories for the natural goods which belong to indigenous peoples.
10. Corporations wield ever-increasing power as well as a clear and systematic interest in dispossessing the peoples of their territories and imposing their extractive policies which State support, as well as perpetrating institutionalized violence.
11. A paramilitary movement which favours corporations is growing.
12. Latin America's strategic resources; forests, water, biodiversity, oil and mining constitute the States' economic support, which violate indigenous peoples' human rights, as well as polluting the environment. Another effect is that national economies are weakened as they become dependent on international prices.
13. The problems indigenous peoples have in terms of water. Water causes conflict. The military presence of world powers such as the United States on our continent is concentrated in areas where there is water. Military and police protection. The criminalization associated to the indigenous peoples' right to protest.
14. The systematic non-compliance with indigenous peoples' essential rights: a. Self determination, b. Territory, c. Consultation, and Free, Prior and Informed Consent.
15. Indigenous peoples' lives are governed by living in harmony with nature. When indigenous peoples are dispossessed of their lands, territories and natural goods, they are dispossessed of their identity, spirituality, systems of organization, and own way of thinking as indigenous peoples, and of their community economy.
16. Indigenous peoples and biodiversity are under constant attack. Biodiversity is what supports indigenous peoples. It is also the hope for the inhabitants of the planet.
17. Poverty is increasing and there are healthcare systems which are characterized by excluding indigenous peoples.
18. The prevailing economic model is considered to be the cause of the global crisis as well as the climate and food crises.
19. Indigenous peoples are more vulnerable to the impacts of Climate Change, because of natural disasters, having their agricultural calendar affected, losing traditional seeds, as well as other effects.
20. The approval of the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, on the same rights in the Declaration, has been postponed. This instrument is very important because it takes the particularities of the indigenous peoples of Latin America and the Caribbean into account, in relation to the rest of the world. Latin America has the largest population of indigenous peoples on the planet, it has the greatest diversity and the greatest biodiversity.

21. One existing problem is that States are institutionally weak. Corruption is rife at all levels and groups in power are manipulated. Family clans have risen to power like the Kirchners in Argentina or the Fujimoris in Peru.
22. The subject of violence is highly topical. When we speak about violence, this does not only refer to domestic violence but violence in all its forms. Systematic violence targeted at indigenous peoples is obvious. Thousands of our indigenous brothers and sisters have been murdered by the Forces of Law and Order. Political violence affects indigenous women and children as a whole. The special rapporteur should take the impact of political violence into account as well as the gap between indigenous peoples being able to fully exercise their rights.
23. Laws are becoming stricter, even in countries which are supposed to be progressive like Ecuador. And, instead of protecting indigenous peoples' individual and collective rights, they protect the interests of Corporations.
24. In many Latin American states it is common to see governments apply a systematic policy of criminalization. The fair demands related to exercising the rights established and recognised under international law are criminalized.
25. Racism and discrimination still exist and remain a challenge to be resolved. The State should make these issues visible, through programs fighting racism and discrimination as well as with inclusive practices for children, young people and women.
26. People trafficking, the exploitation of children and prostitution also still exist and need to be given priority.
27. The right to political participation, as well as the right that children, young people and women have to count on programs provided by the State and the United Nations System, to be assured that they can make proposals.
28. Generally speaking indigenous women and young people do not have opportunities. It is not just a question of being able to participate politically but about developing the abilities to take part in decision-making.
29. One of the issues related to Climate Change is food sovereignty, which is also related to a loss of traditional knowledge, to biodiversity and knowledge about traditional medicine. This needs to be taken into account in climate change mitigation or adaptation programs.
30. Sovereignty and healthy food is also a right. Discussions related to this consider whether we are poor or not. States consider that we come from a very rich territory. The issue of poverty is totally relative. We should fairly and strategically look at the resources which are found on the territory, in knowledge and management, as well as how to participate in the implementation and monitoring of policies and programs.
31. Economic development and education. There is a need for programs specific to indigenous women and young people for them to access and develop their own economic development initiatives given that there are unemployed young people who do not have equal access because of their abilities.

The situation of Indigenous Peoples in Latin American and the Caribbean

32. From the United Nations System along with government and State strategies should be developed so that applying the principle of Free, Prior and Informed Consent becomes a reality, and so that it progresses.
33. We must take into consideration our ability to speak to States, not just to the national governments.
34. It is considered of vital importance that the United Nations Program for Women must produce programs and specific lines for indigenous women, separate from the common pot.
35. Proposal for children and young people. For young people the priority is to involve new staff. And that the Indigenous Peoples' struggle also refers to young people, so the new generations are taken into account.
36. The network of young Mayan people made a statement on discrimination against young indigenous people in Guatemala. The same has happened in Mexico, Peru and Venezuela. The priorities have been strengthening ties with parent organizations as well as adjustments.
37. A leadership training program is needed to know the experiences of indigenous peoples, and to know the situational topics and spaces for participation. There is a lack of young peoples' participation in the CAUCUS. This motivates and encourages young people to be actively present in the Expert Mechanism and in the Permanent Forum.
38. One issue that draws our attention is the ineffectiveness of Indigenous Peoples' development plans and programs, given that they have led to increased poverty. What is needed are broad coordination strategies for so that indigenous capital can ensure food security and can be used as a basis for identity-based development. This would support free determination and allow them to exercise their social, cultural, economic and environmental rights.
39. They must have equality and citizenship. They must have third level organizations and representation which allows them to coordinate initiatives from indigenous areas.
40. Their own Economic and union-based initiatives must be taken into account. Indigenous business centres are being created in 22 States in Mexico. Later the indigenous business Union of Mexico will be created, which will represent companies in different sectors of the economy. In the context of an indigenous economy with a different approach, indigenous business will need to coordinate and develop capacities. Generating employment and making the most of the indigenous peoples' natural goods is also necessary.
41. The social fabric of the community must be strengthened. This will allow local development initiatives to be recognised by governments. This proposal aims to contribute to identity-based development.

Indigenous Justice

Current Situation

Approximately 50 million Indigenous women and men belonging to almost 600 groups live in Latin America¹. They rely on their own political systems based on their customs, traditions, cosmogony, spirituality, and the principles of equilibrium between nature and the components of their systems for their everyday activities.

As a product of varying political processes under Indigenous leadership, States have incorporated some and expanded others into their normative constitutional framework. In Latin America and the Caribbean, efforts have been made to insert norms related to Indigenous law² into Latin American constitutions, in which progress in the Indigenous demands in this sphere has been noticed. However, there has been limited activity because they are immersed in a legal order that adheres to the logic of cultural homogeneity³.

Nevertheless, although constitutional precepts on the matter are lacking, in some countries, such as Bolivia and Colombia, political will has been incorporated into the legal constitutional framework. The process of legality of the demands of Indigenous peoples in their most advanced expressions is reflected in the constitutions of Nicaragua (1987), Brazil (1988), Colombia (1991), Paraguay (1992), Bolivia (2008) and Ecuador (2008). Reforms on a smaller scale can be found in the constitutions of Costa Rica (1977), Guatemala (1985), Mexico (1992), Panama (1972, revised in 1983), Argentina (1994) and Peru (1993). In the case of Chile, a law was issued without constitutional reform in 1993.

In the international sphere, the historical dynamic has evolved, not being based on processes limiting the participation of important and well-balanced sectors contributing to fair and equal systems. We are referring to the evolution of international criminal law, whose political and doctrinal fundamentals appeared due to the need to prosecute crimes committed during the First World War⁴.

1.- Presentation of Dr. Mirna Cunningham, Forest Day 4, COP16 of the UNFCCC, Cancun, Mexico, 4 December 2010.

2.- The Indigenous right is “the systems of norms, procedures and authorities that regulate the social life of the communities and Indigenous Peoples, and allow them to resolve conflicts in agreement with their values, world view, needs and interests. Indigenous cultural practices intermingle with the administration of justice. Only in this way can we understand how religious and spiritual elements exist at the time of imposing punishment and penalties. Tibán, Lourdes (2008). *El derecho indígena y su relación con la justicia ordinaria* [The Indigenous Right and its relation to Ordinary Justice].

3.- Gómez, Magdalena, ALAI Publication 256, *Evolución de la política indígena de los estados* [The Evolution of Indigenous Policies of the States]. Presented at the Colloquium of Indigenous Peoples and State in Latin America, Quito, 9-11 July 1998.

4.- Fernández, Jean Marcel. *La Corte Penal Internacional. Soberanía versus justicia universal* [The International Criminal Court: Sovereignty versus Universal Justice]. Madrid, 2008, Reus. ISBN 84-290-1524-8. Author of the work César Rinza.

After the Second World War and the beginnings of the United Nations Organization, the Security Council recommended to a panel of experts the need to establish a permanent court of criminal justice similar or complementary to the main judicial body: the International Court of Justice. On 17 July 1998, the International Criminal Court was founded at the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court. It is the first permanent international judicial body charged with prosecuting and sentencing people who commit the most serious crimes in violation of International Law⁵.

The Rome Statute of the International Criminal Court, approved by the United Nations (A/Conf. 183.9) on 17 July 1998, has jurisdiction over the following crimes, according to Article 5: genocide, crimes against humanity, war crimes, and crimes of aggression. The first three are developed in Articles 6, 7 and 8, and the fourth is not defined⁶.

The Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous Peoples⁷ is centered on an issue of particular interest for Indigenous Peoples: the problems the justice system tries to solve and the relationship between Indigenous customary law and national legal institutions, particularly in relation to the protection of human rights. It signals that it is vital to rely on an effective and fair legal system to encourage reconciliation, peace, stability and the development of Indigenous Peoples.

Some of the problems listed in the report are⁸:

1. Indigenous Peoples do not have equal access to the justice system, and in its functioning, they are accustomed to being subjected to different forms of discrimination.
2. Discrimination against Indigenous Peoples in the administration of justice is very commonplace.
3. Members of Indigenous groups have a disproportionate presence in the penal system, where they are often denied due process and are victims of violence and mistreatment. Indigenous women and children are particularly vulnerable in this respect.
4. The numerous cases of the criminalization of Indigenous political and social protests of the.
5. Linguistic and cultural differences also play a role in this discrimination, and they do not always receive the attention they deserve from the State.

5.- http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Penal_Internacional (In Spanish)

6.- Rome Statute on the International Criminal Court, 17 July 1998.

7.- E/CN.4/2004/80, 26 January 2004.

8.- Ibid.

In the report, the Special Rapporteur recommended that the States carry out exhaustive studies and, when necessary, introduce reforms into their legal systems that better protect the rights of Indigenous Peoples. She also invited the Commission on Human Rights to raise this issue to member States. In the opinion of the Special Rapporteur, the reforms must respect Indigenous judicial customs, language and culture in tribunals and in the administration of justice and involve the full participation of Indigenous Peoples in judicial reform and the establishment of alternative legal mechanisms⁹.

In his report on the situation of Indigenous Peoples in Chile, James Anaya, the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms on Indigenous Peoples, expresses having “received allegations of procedural irregularities and discrimination against Mapuche people, generally in the context of controversies over claims to land and natural resources. Traditional and other leaders and Mapuche community members have been punished and continue being persecuted under various legal systems for acts that in some way relate to the Mapuche social protest against land claims”¹⁰.

Furthermore, the Permanent Forum on Indigenous Issues has witnessed violations of the human rights of Indigenous Peoples with great concern. Thus, in recommendations 13.d, 76, 77 and 78 of the Third Session, it recommends mechanisms for operationalization and vigilance in the application of the rights of Indigenous Peoples. Likewise, in recommendation 62 of the Fourth Session, it requests the reinforcement of mechanisms that urgently approach the serious violations of human rights, the militarization of Indigenous lands and the systematic acts of violence perpetrated by States against Indigenous Peoples.

In its Ninth Session (19-30 April 2010)¹¹, the Permanent Forum on Indigenous Issues adopted the decision to designate Bartolomé Clavero as Special Rapporteur for the development of a study on “international criminal law and the judicial defence of Indigenous Peoples’ rights”¹². He has concluded that the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the Statute of the International Criminal Court have opened important possibilities for the legal defense of the rights of Indigenous Peoples in the international sphere.

Articles 7, 8, 10 and 30 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples provide efforts for the defense and criminalization of actions that affect the rights of Indigenous Peoples on different levels, including the international level, making use of Articles 5, 6, 7 and 8 of the Statute of the Court, which can be complementary to national legal jurisdictions.

9.- Ibid.

10.- A/HRC/12/34/Add.6 (in Spanish)

11.- E/2010/43, E/C.19/2010/15

12.- Clavero, Bartolomé (2010). International Criminal Law and the Judicial Defence of Indigenous Peoples’ Rights.

Threats:

Ex-Special Rapporteur Clavero himself has warned that these are new possibilities, well-reasoned in the vision of international criminal law previously consolidated under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in which Indigenous Peoples do not qualify for protection under the legal system. Theoretically, Indigenous peoples are legally protected by the Convention on genocide. In practice, such protection has not been feasible¹³.

The inclusion of Indigenous law in Latin American constitutions, which describes the Indigenous way of administering justice, is not always clear and presents legal limitations, most commonly the absence of procedures for the implementation of international human rights and the application of what are considered alternative methods of conflict resolution.

The conflicts between the different systems of justice administration (Indigenous and Western) are common due to the lack of experience and intercultural comprehension associated with its action that permits the separation of the spheres of validity and action of each norm under the principle of complementarity.

Good Practices

The Inter-American Court of Human Rights, in the case of the Yakye Axa Indigenous community vs. Paraguay (for monetary compensation, reparations and costs), ruled on 17 June 2005 that the Yakye Axa Indigenous community, a traditional society of hunter-gatherers who traditionally lived on lands and territories of the Paraguayan Chaco can reclaim the title of their traditional territory, now private property. They ruled that the government of Paraguay did not take effective action in recognizing the legal personality of the Yakye Axa Indigenous community and granted the title of their ancestral lands to the community.

The Inter-American Court of Human Right ruled in favor of recognizing that the rights to legal guarantees and protection, as well as the guarantees to life and ownership (Articles 4, 8, 21 and 25 of the American Convention on Human Rights) had been violated. The court ruled that States must authorize effective protection that takes into consideration the particularities, economic and social characteristics, situation of great vulnerability and the customary law, values, uses and customs of Indigenous Peoples. It added that the States must establish effective recourse on the guarantees of due process that allow them to reclaim their traditional lands.

Nevertheless, it must be noted that even though the Inter-American Court ruled in favor of the Yakye Axa community, the Judgment of the Court has not been respected by the State of Paraguay, and they are still waiting for the State's fulfillment.

The case of Awastingni, in which this community alleged its rights to the ancestral possession of its lands and resources, contrary to a concession authorized by the State of Nicaragua for the SOLKARSA company. In this case, the Inter-American Court of Human

13.- Ibid

Rights ruled in favor of the community, recognizing the material and spiritual relationship the Awastingni Community has with its natural resources. The Court recognized the value of the communal property of Indigenous Peoples in light of Article 21 of the American Convention and the validity of land ownership based on Indigenous custom, even without a title, as fundamental to their ownership. It stipulated that the close relationship that the Indigenous have with the lands be recognized and understood as the fundamental basis of their culture, spiritual life, integrity and economic survival.

Recommendations

The Indigenous Peoples Caucus of Latin America and the Caribbean recommends that the Forum:

1. Encourage States to recognize systems of Indigenous justice, strengthen them, and promote their development.
2. Define its objectives and concrete actions for the guarantee that the administration of justice of Indigenous Peoples is applied in the framework of the Second Decade of Indigenous Peoples.

The Indigenous Peoples Caucus of Latin America and the Caribbean recommends that the States:

3. Allow national and international norms to prevail in a supplementary way for the defense of the rights of Indigenous Peoples recognized in international instruments.
4. Recognize the rights of Indigenous Peoples in agreement with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and in legal jurisdictions, making use of the Statute of the International Criminal Court in a complementary manner.
5. Create procedural mechanisms for the implementation of the instruments of international law in a way that permits access to justice in an equal manner, and develop processes of training and sensitivity in relation to Indigenous criminal justice with the purpose of improving the intercultural understanding of the operations of the systems of criminal justice that contribute to the recognition of judicial pluralism and the respect of Indigenous authorities designated by their peoples to administer justice.
6. Revisit the recommendations made by the Permanent Forum on Indigenous Issues related to the protection and guardianship of human rights in various spheres that the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples had forecasted.

Indigenous Justice

The Indigenous Peoples Caucus of Latin America and the Caribbean recommends that the United Nations System:

7. Demand the creation of an International Court or Attorney of Justice to adjudicate violations of the rights of Indigenous Peoples.
8. Request greater technological and economic contributions from the organisms of the United Nations for the strengthening of the systems of Indigenous justice and the development of training of Indigenous authorities who administer of justice and Indigenous attorneys.

The Indigenous Peoples Caucus of Latin America and the Caribbean recommends that Indigenous Peoples' Organizations:

9. Encourage the training of Indigenous authorities on making use of the recommended laws of the international framework, in particular the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and ILO Convention 169.
10. Ensure that various conflicts within their communities and on their territories are settled and resolved in accordance with the norms, procedures and sanctions of the Indigenous judicial system, and that the authorities of Indigenous Peoples establish limits, competence and jurisdiction of competence, establishing the mechanisms that must be developed and adhered to by the parties.
11. Promote legal proceedings against States that do not respect the rights of Indigenous Peoples in accordance with international and national law.

Development with Culture and Identity

During the 9th Session¹, the Permanent Forum recommended that States, the United Nations system and other intergovernmental organizations provide political, institutional and, in accordance with Article 42 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, financial support to the efforts of indigenous peoples so that they may consolidate their own development models and concepts and practices of living well.

If the debate in Latin America and the Caribbean on the view of Indigenous Peoples of living has advanced, very few steps toward the realization of these processes have been given on the development of the concepts associated with the development of identity, which is, besides being a human right, and expression of the right of self-determination of Indigenous Peoples. However, some Indigenous organizations have made advances in disseminating their view of development, and rely on publications on the issue, as in the case of the CAOI. Others have revisited the issue in the strategic plans for development, like the COICA. In the case of CICA in Central America, a distinctive planning strategy for the communal project for good living, called Balu Wala, has been applied. This methodology allows the application of CPLI, keeping in mind the world view and spirituality of the peoples in designing their projects and adapting to their experience and practice of communal economics in the socio-environmental context. A product of application of Balu Wala has been designed by communal projects.

Another interesting experience has been the design and implementation of educational programs that promote distinctive models of development. The Indigenous Intercultural University, with the cooperation of three Indigenous universities (Amawtay Wasi University in Ecuador, the International Indigenous Autonomous University (UAIN) of CRIC in Colombia and the University of the Autonomous Regions of the Caribbean Coast of Nicaragua (URACCAN) in Nicaragua), is offering a communal Master's Degree in Identity Development for Good Living with participants from 17 countries in the region. The participants in the Master's program are documenting the proposals and experiences of a distinctive model of their peoples.

In coordination with the Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Fund for the Development of Indigenous Peoples) (Fondo Indígena (Indigenous Fund)), and through the support of Belgium, regional Indigenous organizations have identified a series of local initiatives for applying distinctive models of development that have been given support and expected to document important lessons.

1.- http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_2010_43_en.pdf

However, we have seen very few satisfactory examples of government support of the models of development of the Indigenous Peoples themselves. The government of Bolivia has supported the establishment of the Fondo Indígena, the government of Nicaragua has made advances in the process of titling Indigenous territories, and the Indigenous territorial governments are parties to the programs and projects of international cooperation, which allow them to state their priorities and respond to the needs and demands of the community. In both cases, it is worth highlighting that the framework of Indigenous autonomy has been an important preliminary step.

Despite the fact that there have been some steps in the drafting of indicators of sustainability and distinctive wellbeing of Indigenous Peoples, there still exists the challenge of having them adopted by the governments and agencies of the United Nations System in its programs with Indigenous Peoples. This satiation is a barrier to measuring the current impact of the external interventions on Indigenous Peoples.

Despite the process of measuring the Millennium Development Goals in the countries of the region, direct participation of Indigenous Peoples from Latin America and the Caribbean was very limited. We recognize that, in both the audience and the high-level plenary meeting of the 65th Session of the General Assembly in September 2010 in New York, there was a certain level of Indigenous participation.

In fact, the General Assembly approved the final document of the High-Level Plenary Meeting of its 65th Session on the Millennium Development Goals in which, referring to the achievement of the first goal aimed at eradicating extreme poverty and hunger, signals the need to “accelerate progress on the challenges faced by indigenous peoples in the context of food security, and in this regard taking special actions to combat the root causes of the disproportionately high level of hunger and malnutrition among indigenous peoples”².

Concerning the 7th MDG: Guaranteeing environmental sustainability and considering the need to continue the promotion of the fulfillment of objectives of the Convention on Biological Diversity, the General Assembly recommends “reducing the rate of loss of biodiversity, including by preserving and maintaining knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities; and continuing ongoing efforts towards elaborating and negotiating an international regime on access and benefit sharing”³.

Among the recommendations made in the document for MDG fulfillment is that which recommends the “[taking of] concerted, positive steps to ensure respect for all human rights and fundamental freedoms of indigenous people, on the basis of equality and non-discrimination and recognizing the value and diversity of their distinctive identities, cultures and social organization”⁴.

We believe, however, that it is necessary to stress that the competent organizations must ensure the effective participation of Indigenous Peoples in the processes of examining the fulfillment of the Millennium Development Goals at the local and national levels and

2.- A/RES/65/1

3.- Ibid.

4.- Ibid.

the inclusion of itemized data on the way in which those goals are achieved on the territories of the Indigenous Peoples.

We Indigenous Peoples of Latin America and the Caribbean believe that the International Fund for Agricultural Development (IFAD), under the framework of applying its policy of action on Indigenous Peoples, has taken an important step by calling on Indigenous organization to establish a forum of Indigenous Peoples. We affirm that this step is a good practice because it will allow Indigenous Peoples to participate at an important level of dialogue and consultation with IFAD and, in this way, have a more direct bearing on the actions they support for rural development that will benefit our peoples. We hope that IFAD follows the established course of action, and more Indigenous organizations in the region have the opportunity to become acquainted with and participate in this effort. We hope this example encourages other organisms of the United Nations and other intergovernmental organizations to establish instances of effective participation of Indigenous Peoples.

Regardless of the efforts on developing and promoting the application of a model of development of identity and culture, there are still some challenges that are listed in these recommendations. Among these are:

1. The preparation, from the suggestions of the Forum, of a mechanism that specifies the concepts of “model of development of identity and culture”, “way of life”, and “living well”, and operationally define them based on categories and indicators; in this way, it allows for the establishment of a dialogue and exchange basis with the national States for its normative incorporation in national legislation and in processes of design and implementation of their policies, strategies and initiatives on development, including those that cover the development of infrastructure, the exploitation of natural goods, the formation and execution of megaprojects or the use of genetic resources. This is extendable to the means of intervention of international cooperation and the multilateral financial organisms.
2. The establishment of an international standard on this right in a way that creates a normative framework and public policies.
3. The establishment of judicial, political and procedural norms that ensure the effective application of the principle of free, prior and informed consent when the definition and implementation of these initiatives of development is referenced, taking into consideration the obligations established in Convention 169 of the ILO, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and other international instruments such as the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity.

4. The need for integral engagement of State initiatives for the promotion of their programs specifically directed toward the social and economic wellbeing of Indigenous populations and the promotion of their self-determination and the full exercising of their fundamental rights, prior consultation and the procurement of free, prior and informed consent. Furthermore, it is vital that Indigenous Peoples have total control over these programs.
5. The evaluation of the consequences of “conditional economic transfer” programs and the recommendation of the formation of a design pertinent to cultural specificity relative to unconditional economic transfers.”
6. The institutions created in State structures on Indigenous issues must be autonomous institutions.
7. The promotion of capacity and the strengthening of the self-government of our peoples in such a way that strengthens its capacity to negotiate when faced with conflict with States and Companies that appropriate natural goods that belong to Indigenous Peoples. Furthermore, the promotion, formation and encouragement of the capacity necessary for them to sufficiently understand, conceive and execute development activities within their communities that affect them in relation to activities of the large-scale exploitation of their natural goods and the development of infrastructure projects⁵.
8. The Forum must propose the elimination of subsections 2.e and 1.c of Article 49 of the United Nations Single Convention of Narcotic Drugs of 1961, which relate to the prohibition of chewing coca leaves.
9. The Forum must firmly ask the pertinent organizations of the United Nations System to declare the year 2013 as the International Year of Quinoa.”
10. The Forum must request that the pertinent organizations of the United Nations System have member States incorporate the calendars of the Indigenous Peoples (Andean calendar, Mayan calendar) into their constitutions.
11. The Forum must organize specific meetings for the monitoring of recommendations made during the 3rd Session dedicated to Indigenous Women.

Indigenous Peoples and Climate Change

Introduction

The Indigenous population of Latin America and the Caribbean is estimated at approximately 50 million people. It makes up represent more than half of the local population in countries such as Bolivia, Guatemala and Peru, and a third of the population of Ecuador. There are more than 600 culturally and linguistically diverse Indigenous Peoples in the region. Despite their cultural and environmental wealth, Indigenous Peoples are the most marginalized, impoverished and vulnerable sector of the population in the world.

Furthermore, given the number of problems that already exist in the lives of Indigenous Peoples, climate change and its effects put their ability to be resilient and adapt at risk; this, in turn, puts their livelihood in jeopardy. Another aspect that provokes climate change is related to territorial laws, as well as their sovereignty and food security.

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), made up of scientists from around the world, has stated that during the last one hundred years, external air temperature has risen by 0.6° Celsius (1.1° F). The increase in temperature has caused melting glaciers, rising sea levels, coastal erosion, water contamination, a change in wind patterns, stronger and more frequent hurricanes, more frequent droughts in some regions, more precipitation in others, bad harvests, and harm to Indigenous myths, legends and world views.

Faced with these changes, Indigenous Peoples have had and shown the ability to adjust their ways of life by developing sustainable and strategic lifestyles. Their traditional knowledge has been the basis for identifying measures to adapt and mitigate on the impact of climate change, although this knowledge is not always completely valued.

Threats of Climate Change for Indigenous Peoples

Climate change (an effect of the emission of greenhouse gases linked to human activity) and its consequences is an unprecedented serious, urgent and immediate threat to humanity in general and to Indigenous Peoples in particular. It threatens their lives, lands, resources, culture, the full exercising of their fundamental human rights, health, sustainable development, food sovereignty, security and peace. For these reasons, serious measures must be adopted to reduce emissions and allow adaptation.

Climate change is expressed in considerable variations of the main variables of climatology, and its threats are faced by many Indigenous Peoples around the world, mainly

Indigenous Peoples and Climate Change

those who live in very fragile ecosystems such as low coastal areas and small islands, semi-arid and arid regions, dry, non-humid lands, tropical and subtropical rainforests, and high mountainous zones. These peoples have already suffered the impacts of climate change. Among the main threats are: the increase in the frequency and intensity of severe regional droughts, drastic changes in rain patterns, and increasingly devastating, extremely fast-moving forest fires or thawings.

Climate change and the degradation of the environment linked to the extraction of natural resources, such as mining and forest exploitation, are serious threats to the traditional lifestyles and cultures of Indigenous Peoples. Due to their high level of physical, economic, social and environmental vulnerability, Indigenous Peoples suffer the most serious consequences of climate change that affect different areas of their lives. The ecosystems they inhabit can be affected and affect their ways of life: in some regions, there are thaws; in others, droughts. There is also a reduction in the availability of drinking water, floods, landslides, intense high temperatures, etc. In many cases, the population has been displaced, adding to the loss of the identity and cultural and spiritual values of these peoples.

Good Practices

Within what could be considered good practices (this varies according to context), we witness actions such as the International Forum of Indigenous Peoples Initiative on Climate Change, which participates as observer in the intersessions and conferences on the negotiation process on climate change.

In those processes, we believe that monitoring is essential. Therefore, the Indigenous Peoples Network on Climate Change has been formed; Indigenous organizations from ten countries participate in this network, including four from Latin America¹. There are also regional Indigenous organizations formed for monitoring (such as COICA). The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues has likewise promised to monitor the process.

One good practice was the management of the International Indigenous Forum on Climate Change before the Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), which successfully designated an Indigenous focal point to be the relator of the topics of interest to the Permanent Forum. This allows their voices to be heard at the high levels of the United Nations system.

Another excellent practice was the planning and carrying out of the International Technical Workshop of Indigenous Peoples and States on Climate Change, which took place in Xcaret, Quintana Roo, Mexico on 27-29 September 2010. This workshop was jointly organized by the Mexican government and the International Forum of Indigenous Peoples on Climate Change.

1.- Indigenous Peoples Global Network on Climate |Change, in which the Indigenous organizations of ten countries participate: Brazil, Cameroon, Indonesia, Kenya, Mexico, Nepal, Nicaragua, Peru, the Philippines, and Vietnam.

The Permanent Forum and Climate Change

The Forum has been approaching and studying the issue of and the problems associated with Climate Change since its first sessions and has expressed its concerns and given its recommendations to the States, Organs and Organisms of the United Nations System, as well as Indigenous Organizations, companies and corporations, and international financial institutions.

In its report on the Second Session (12-23 May 2003), the Forum recommended “to the Economic and Social Council that the United Nations system guarantee the full and effective participation of indigenous peoples in appropriate processes and environmental conventions, such as those on desertification, wetlands and climate change”².

The Forum has also been interested in the fact that Indigenous organizations rely on sufficient information and the ability hear and understand the consequences climate change has, and propose measures to tackle them. In this sense, through the report on the Sixth Session (14-25 May 2007)³, it recommended that “United Nations organizations should provide technical assistance and convene, in cooperation with indigenous peoples’ organizations, regional workshops on the special theme of the seventh session, “Climate change, bio-cultural diversity and livelihoods: the stewardship of indigenous peoples and new challenges, with the participation of the members of the Forum and other experts, indigenous peoples’ representatives, indigenous parliamentarians, State representatives and representatives of the United Nations system, in order to formulate recommendations.” It also recommended that “States, organizations and donors provide resources for these regional workshops and that the report on the human rights situation of indigenous peoples in States and Territories threatened with extinction for environmental reasons be included in the discussions held at the workshop.”

During the Seventh Session (21 April-2 May 2008)⁴, the Permanent Forum proposed, as part of its agenda, the special topic of “Climate change, biocultural diversity and livelihoods: the stewardship roles of indigenous peoples and new challenges.” Some of its proposals were:

1. As stewards of the world’s biodiversity and cultural diversity, indigenous peoples’ traditional livelihoods and ecological knowledge can significantly contribute to designing and implementing appropriate and sustainable mitigation and adaptation measures. Indigenous peoples can also assist in crafting the path towards developing low-carbon release and sustainable communities.
2. Indigenous peoples’ ancestors have adapted to climate change for thousands of years; however, the magnitude, accelerated pace and compound effects of climate change today are unprecedented, thus presenting major challenges to indigenous peoples’ capacity to adapt.

2.- E/2003/43 E/C.19/2003/22

3.- E/2007/43 E/C.19/2007/12

4.- E/2008/43 E/C.19/2008/13

Indigenous Peoples and Climate Change

3. Further, some of the mitigation measures seen as solutions to climate change are also having negative impacts on indigenous peoples.
4. Strategies for mitigation and adaptation must be holistic, taking into account not only the ecological dimensions of climate change, but also social impacts, human rights, equity and environmental justice.
5. The importance of acknowledging global climate change and the need to address it with urgency, as well as implementing clean, just, sustainable and renewable energy practices in localized economies to address the problems faced by indigenous peoples.
6. The clean Development Mechanism, the Clean Energy Investment Framework, the Nairobi Framework, the Nairobi Work Programme and the Global Environment Facility adaptation funds are good examples of the kind of partnership that will become increasingly important. These mechanisms must respond to the needs of indigenous peoples and include them as partners in designing and implementing programmes that are responsive to local problems and to the goals and visions of indigenous women and men.
7. Scientists, policymakers and the international community as a whole should undertake regular consultations with indigenous peoples so that their studies and decisions will be informed by indigenous peoples' traditional knowledge and experiences.
8. The Permanent Forum can play a role in ensuring that the traditional knowledge and best practices of indigenous peoples relevant to fighting climate change and its impacts will be considered in the negotiation processes leading to the Copenhagen Conference of the Parties and beyond, including through discussions with the United Nations Framework Convention on Climate Change.
9. The principles of common but differentiated responsibilities, equity, social justice and sustainable development and development with identity should remain the key principles underpinning the negotiations, policies and programmes on climate change.
10. The human rights based approach to development and the ecosystem approach should guide the design and implementation of local, national, regional and global climate policies and projects. The crucial role of indigenous women and indigenous youth in developing mitigation and adaptation measures should also be ensured.
11. The current framework for Reduced Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) is not supported by most indigenous peoples. It is argued that existing REDD proposals reinforce centralized top-down management of forests, and undermine indigenous peoples rights. In order to directly benefit indigenous peoples, new proposals for avoided deforestation or reduced emissions

from deforestation must address the need for global and national policy reforms and be guided by the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, respecting rights to land, territories and resources; and the rights of self-determination and the free, prior and informed consent of the indigenous peoples concerned

Furthermore, the Forum, in its report on the Eighth Session (18-29 May 2009), accepted “the following message from the Indigenous Peoples’ Global Summit on Climate Change, held in Anchorage, Alaska, from 20 to 24 April 2009, contained in the Anchorage Declaration: ‘We offer to share with humanity our Traditional Knowledge, innovations and practices relevant to climate change, provided our fundamental rights as intergenerational guardians of this knowledge are fully recognized and respected. We reiterate the urgent need for collective action’”⁵.

Among others, the Permanent Forum is asked to take into consideration the Recommendations of the Global Conference of Indigenous Peoples on Climate Change and the Rights of Mother Earth, held in Tiki Paya, Cochabamba, Bolivia, from 20-22 April 2010, giving priority to climate change, traditional knowledge and traditional medicine.

Some of the recommendations offered during the Seventh Session are⁶:

12. The Permanent Forum recommends that the international community take serious measures to mitigate climate change. The survival of the traditional ways of life of indigenous peoples depends in large part on the success of international negotiations in developing strong, enforceable agreements that will truly be effective in combating climate change. The Permanent Forum concurs with a major conclusion of the Stern report that strong and immediate measures to curb greenhouse gas emissions now will be less costly than attempting to adapt to the widespread changes that unchecked climate change will cause in the future.
13. The discussions and negotiations on climate change should respect the rights of indigenous peoples to nurture and develop their traditional knowledge and their environment-friendly technologies. In the case of indigenous peoples living in voluntary isolation and inhabiting the most biodiverse areas in the Amazon, the primary requirement of their free prior and informed consent for any alien intervention must be stressed.
14. The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples should serve as a key and binding framework in the formulation of plans for development and should be considered fundamental in all processes related to climate change at the local, national, regional and global levels. The safeguard policies of the

5.- E/2009/43, E/C.19/2009/14

6.- E/2007/43 E/C.19/2007/12

Indigenous Peoples and Climate Change

multilateral banks and the existing and future policies on indigenous peoples of United Nations bodies and other multilateral bodies should be implemented in all climate change-related projects and programmes.

15. The Forum recommends that States, United Nations agencies, bodies and funds, other multilateral bodies and financial institutions and other donors provide technical and financial support to protect and nurture indigenous peoples' natural resource management, environment-friendly technologies, biodiversity and cultural diversity and low-carbon, traditional livelihoods (pastoralism; rotational or swidden agriculture; hunting and gathering and trapping; marine and coastal livelihoods; high mountain agriculture; etc.). The Forum further recommends that discussions and negotiations on strengthening the links between climate change, biodiversity and cultural diversity under the Convention on Biological Diversity or the United Nations Framework Convention on Climate Change ensure the effective participation of indigenous peoples.
16. The Permanent Forum recommends that the United Nations University Institute of Advanced Studies, university research centres and relevant United Nations agencies conduct further studies on the impacts of climate change and climate change responses on indigenous peoples who are living in highly fragile ecosystems, such as low-lying coastal areas and small island States; semi-arid and arid lands and dry and sub-humid lands (grasslands); tropical and subtropical forests; and high mountain areas.
17. The Permanent Forum calls for urgent, serious and unprecedented action by the Economic and Social Council and the General Assembly, along with all United Nations bodies and agencies, recognizing that climate change is an urgent and immediate threat to human rights, health, sustainable development, food sovereignty, and peace and security, and calls upon all countries to implement the highest, most rigorous and most stringent levels of greenhouse gas reduction.
18. The Permanent Forum urges the Human Rights Council expert mechanism on indigenous peoples to evaluate whether existing and proposed climate change policies and projects adhere to the standards set by the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. These bodies, together with the members of the Inter-Agency Support Group for Indigenous Issues, should collaborate with States, multilateral bodies, donors and indigenous peoples to effectively ensure that the implementation of the Declaration is central to the design and implementation of climate change policies and programmes.
19. The Permanent Forum reaffirms the need for all actors to respect the right to self-determination of indigenous peoples to decide on mitigation and adaptation measures in their lands and territories.
20. The Permanent Forum recommends that the renewed political focus on forests stimulated by current policy debates on Reduced Emissions from Deforestation

and Degradation (REDD) under the UNFCCC be used towards securing the rights of indigenous peoples living in forests and rewarding their historical stewardship role and continuing conservation and sustainable use of forests. According to the principle of free, prior and informed consent, indigenous peoples must not be excluded, and should be centrally involved and benefit from, in deciding forest policies and programmes at all levels, that deliver justice and equity and contribute to sustainable development, biodiversity protection and climate change mitigation and adaptation.

The Forum, during the Ninth session (19-30 April 2010)⁷ “urged States to review their policies on biofuel industries, which, in the name of remedying the impacts of climate change, are resulting in the deforestation of large forest areas and the displacement of indigenous peoples. That increases the vulnerability of indigenous communities and in particular of those living in voluntary isolation.” Further, it encouraged the FAO to continue supporting “indigenous peoples’ organizations in the field of communication for development. In particular, the Permanent Forum recommends that FAO continue to provide support for indigenous peoples’ communication platforms and their activities in the field of participatory territorial development and community-based adaptation to climate change”⁸.

Recommendations

The Indigenous Peoples Caucus on Latin America and the Caribbean recommends the following:

1. Urge the States, Organizations of the United Nations System, International Financial Institutions, Indigenous Peoples’ Organizations, and Companies dedicated to extraction industries to take into account the proposals made by the Forum and fulfill its recommendations in order to tackle the problems caused by climate change and their consequences.
2. All the actors in questions must accept the right of Indigenous Peoples to free, prior and informed consent before any REDD initiative or mechanism that is attempted to be developed on Indigenous territories.
3. Ensure the full and effective participation of specialist Indigenous delegates in all mechanisms, organs and procedures established under the UNFCCC, including mitigation, adaptation, financing, MRV, and technological transfer.

7.- E/2010/43 E/C.19/2010/15

8.- Ibid

Indigenous Peoples and Climate Change

4. Make room for the recognition and protection of Indigenous knowledge, innovations, technologies, traditional cultural expressions, and spiritual beliefs as alternative solutions to the new situations created by climate change.
5. The ensuring of financial resources for the implementation of education campaigns, sensitivity and awareness on climate change, adaptation and mitigation must be demanded before the States and international cooperation.
6. Ensure the direct and immediate access of Indigenous Peoples, especially women, to financing, appropriate technologies and capacity building for mitigation and adaptation.
7. Guarantee the perspective of gender and inter-generational equality (children, women, the young and the elderly) in all negotiating texts.

Indigenous Peoples and Rio+20

On 7-8 March 2011, in New York City, the 2nd Session of the Preparatory Committee Meeting for the United Nations Conference on Environment and Sustainable Development was held.

During this meeting, the Rio+20 Preparatory Committee asked the following questions: What will the conference offer? What will be the outcome? How will Rio+20 be different from other conferences on sustainable development? What are the main problems and challenges?

On the other side, the Parties (Governments) put forward a large number of questions, such as: How is a green economy defined? What are the benefits, risks and challenges of a green economy, and what is its relationship to the eradication of poverty? How to develop an institutional framework for Sustainable Development (SD)? How to approach the issue of food and energy crisis? Recovery after disasters? How to be consistent in finance, business, investment, capacity building and technology transfer? How to educate on SD? And what about the loss of biodiversity and water, marine resources and coasts? And many other questions.

These are the decisions adopted at the 2nd Preparatory Meeting that are related to the process of preparing the final document plan of the United Nations Conference on Sustainable Development 2012:

The second Preparatory Committee of the United Nations Conference on Sustainable Development:

- (a) *Requests the Board to initiate an open, transparent and inclusive process led by Member States, to prepare in a timely manner a draft text, based upon all preparatory inputs, to serve as the basis for an outcome document for the Conference;*
- (b) *Invites all Member States, the relevant United Nations system agencies, and relevant stakeholders to provide their inputs and contributions in writing by 1 November 2011 for inclusion in a compilation document to serve as basis for the preparation of zero-draft of the outcome document;*

- (c) *Requests the Board to compile these inputs and contributions and present their compilation text to Member States and other stakeholders at the second intersessional meeting to be held in mid-December 2011 to seek their comments and further guidance;*
- (d) *Calls upon the co-Chairs on behalf of the Board to present the zero-draft of the outcome document for consideration by Member States and other stakeholders no later than early January 2012;*
- (e) *Recommends the Bureau to convene a three-day meeting in January 2012 for the purposes of having initial discussions on the zero-draft of the outcome document, and set aside one full week for negotiations in each of the months of February, March and April 2012, ensuring that all these meetings are informal and, as such, are to be accommodated within existing resources.*

Before arriving at these decisions, the Parties participating in the 2nd Session had questions such as:

We, in the Latin American Forum, must form other questions related to the issues of interest and concern for Indigenous Peoples on the basis of an evaluation of, at the least, Chapter 26 of the Rio Summit, which we will present below:

What will be the political position of the Indigenous Peoples of Latin America and the Caribbean for the meeting in June 2012? What questions do we have for the Conference on Sustainable Development and the Environment, known as Rio+20 or Rio 2012?

In order to generate discussion, we present Chapter 26 of the Rio Summit, which directly relates to Indigenous Peoples.

Recognizing & Strengthening the Role of Indigenous People & Their Communities

Basis for action

26.1. Indigenous people and their communities have an historical relationship with their lands and are generally descendants of the original inhabitants of such lands. In the context of this chapter the term “lands” is understood to include the environment of the areas which the people concerned traditionally occupy. Indigenous people and their communities represent a significant percentage of the global population. They have developed over many generations a holistic traditional scientific knowledge of their lands,

natural resources and environment. Indigenous people and their communities shall enjoy the full measure of human rights and fundamental freedoms without hindrance or discrimination. Their ability to participate fully in sustainable development practices on their lands has tended to be limited as a result of factors of an economic, social and historical nature. In view of the interrelationship between the natural environment and its sustainable development and the cultural, social, economic and physical well-being of indigenous people, national and international efforts to implement environmentally sound and sustainable development should recognize, accommodate, promote and strengthen the role of indigenous people and their communities.

26.2. Some of the goals inherent in the objectives and activities of this programme area are already contained in such international legal instruments as the ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention (No. 169) and are being incorporated into the draft universal declaration on indigenous rights, being prepared by the United Nations working group on indigenous populations. The International Year for the World's Indigenous People (1993), proclaimed by the General Assembly in its resolution 45/164 of 18 December 1990, presents a timely opportunity to mobilize further international technical and financial cooperation.

Objectives 26.3.

In full partnership with indigenous people and their communities, Governments and, where appropriate, intergovernmental organizations should aim at fulfilling the following objectives:

(a) Establishment of a process to empower indigenous people and their communities through measures that include:

- i) Adoption or ratification of appropriate policies and/or legal instruments at the national level;
- ii) Recognition that the lands of indigenous people and their communities should be protected from activities that are environmentally unsound or that the indigenous people concerned consider to be socially and culturally inappropriate;
- iii) Recognition of their values, traditional knowledge and resource management practices with a view to promoting environmentally sound and sustainable development;
- iv) Recognition that traditional and direct dependence on renewable resources and ecosystems, including sustainable harvesting, continues to be essential to the cultural, economic and physical well-being of indigenous people and their communities;
- v) Development and strengthening of national dispute-resolution arrangements in relation to settlement of land and resource-management concerns;
- vi) Support for alternative environmentally sound means of production to ensure a range of choices on how to improve their quality of life so that they effectively participate in sustainable development;

- vii) Enhancement of capacity-building for indigenous communities, based on the adaptation and exchange of traditional experience, knowledge and resource-management practices, to ensure their sustainable development;
- (b) Establishment, where appropriate, of arrangements to strengthen the active participation of indigenous people and their communities in the national formulation of policies, laws and programmes relating to resource management and other development processes that may affect them, and their initiation of proposals for such policies and programmes;
- (c) Involvement of indigenous people and their communities at the national and local levels in resource management and conservation strategies and other relevant programmes established to support and review sustainable development strategies, such as those suggested in other programme areas of Agenda 21.

Activities 26.4.

Some indigenous people and their communities may require, in accordance with national legislation, greater control over their lands, self-management of their resources, participation in development decisions affecting them, including, where appropriate, participation in the establishment or management of protected areas. The following are some of the specific measures which Governments could take:

- (a) Consider the ratification and application of existing international conventions relevant to indigenous people and their communities (where not yet done) and provide support for the adoption by the General Assembly of a declaration on indigenous rights;
- (b) Adopt or strengthen appropriate policies and/or legal instruments that will protect indigenous intellectual and cultural property and the right to preserve customary and administrative systems and practices.

26.5. United Nations organizations and other international development and finance organizations and Governments should, drawing on the active participation of indigenous people and their communities, as appropriate, take the following measures, inter alia, to incorporate their values, views and knowledge, including the unique contribution of indigenous women, in resource management and other policies and programmes that may affect them:

- (a) Appoint a special focal point within each international organization, and organize annual interorganizational coordination meetings in consultation with Governments and indigenous organizations, as appropriate, and develop a procedure within and between operational agencies for assisting Governments in ensuring the coherent and coordinated incorporation of the views of indigenous people in the design and implementation of policies and programmes. Under this procedure, indigenous people and their communities should be informed and consulted and allowed to participate in national decision-making, in particular regarding regional and international cooperative efforts. In addition, these policies and programmes should take fully into account strategies based on local indigenous initiatives;

(b) Provide technical and financial assistance for capacity-building programmes to support the sustainable self-development of indigenous people and their communities;

(c) Strengthen research and education programmes aimed at:

1. Achieving a better understanding of indigenous people's knowledge and management experience related to the environment, and applying this to contemporary development challenges;
2. Increasing the efficiency of indigenous people's resource management systems, for example, by promoting the adaptation and dissemination of suitable technological innovations;

(d) Contribute to the endeavours of indigenous people and their communities in resource management and conservation strategies (such as those that may be developed under appropriate projects funded through the Global Environment Facility and the Tropical Forestry Action Plan) and other programme areas of Agenda 21, including programmes to collect, analyse and use data and other information in support of sustainable development projects.

26.6. Governments, in full partnership with indigenous people and their communities should, where appropriate:

(a) Develop or strengthen national arrangements to consult with indigenous people and their communities with a view to reflecting their needs and incorporating their values and traditional and other knowledge and practices in national policies and programmes in the field of natural resource management and conservation and other development programmes affecting them;

(b) Cooperate at the regional level, where appropriate, to address common indigenous issues with a view to recognizing and strengthening their participation in sustainable development.

Means of implementation

a) Financing and cost evaluation

b) Legal and administrative frameworks

26.8. Governments should incorporate, in collaboration with the indigenous people affected, the rights and responsibilities of indigenous people and their communities in the legislation of each country, suitable to the country's specific situation. Developing countries may require technical assistance to implement these activities.

c) Human resource development

26.9. International development agencies and Governments should commit financial and other resources to education and training for indigenous people and their communities to develop their capacities to achieve their sustainable self-development, and to contribute to and participate in sustainable and equitable development at the national level. Particular attention should be given to strengthening the role of indigenous women.

Indigenous Peoples and Rio+20

Considering the following, the Indigenous Peoples Forum of Latin America recommends that the Permanent Forum:

- Play a protagonistic role and have great impact in the preparatory process of Rio+20 and during the Conference itself in order to guarantee the participation of Indigenous Peoples and the inclusion of their demands and priority issues.
- Promote a lobbying process within the countries on behalf of the Indigenous Peoples in order for them to convey the position of the Indigenous Peoples of Latin America.
- Recommend that the United Nations system promote and create preparatory processes for Indigenous Peoples before Rio+20.
- Promote advocacy processes at the regional level in order for the positions of the Indigenous Peoples to be included in reports and final documents of the Conference.
- The participation of Indigenous peoples must be full, active and permanent.
- The Forum must promote a preparatory process in order for the Indigenous Peoples to be able to prepare and reach a consensus on global position.
- Recommend that the United Nations system support the process of creating national case studies so they are part of the preparatory stage.
- Recommend that the Forum adopt the issue of Rio+20 at the thematic meeting in January.
- Recommend that the United Nations system disseminate relevant information on the Rio+20 process, as many organizations have not accessed the information.
- Recommend that Indigenous organizations and networks create a Commission that covers organizations and authorities of each people, that studies these themes and disseminate them to other peoples in order to create an effect on government instances, as well as establish the position in association with the peoples regarding the issues being negotiated at the international level.

5 April 2011

**Resolution:
World Conference on Indigenous Peoples 2014**

The Latin America and Caribbean Caucus, during the Preparatory Meeting for the 10th Session of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues on 4-6 April 2011, in Managua, Nicaragua,

Reaffirms the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, adopted by the General Assembly in Resolution 61/295 (Annex),

Recalls all the relevant resolutions of the General Assembly, the Human Rights Council, and the Economic and Social Council related to the rights of Indigenous Peoples,

Welcomes Resolution A/C.3/65/L.22/Rev.1 (12 November 2010) of the United Nations General Assembly on the organization of a high level plenary meeting of the General Assembly that will be named the World Conference on Indigenous Peoples and held in 2014. This meeting will have the objective of exchanging points of view and best practices on the exercising of the rights of Indigenous Peoples, including the fulfillment of the objectives of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and invites the President of the General Assembly to hold open-ended consultations with Member States and representatives of Indigenous Peoples in the Permanent Forum on Indigenous Issues, as well as the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples and the Special Rapporteur in order to agree on certain aspects of this meeting, including the participation of Indigenous Peoples during the conference.

The Latin American and Caribbean Caucus:

1. Recommends that the General Assembly organize processes of high level interactive dialogue and hearings between Member States and representatives of Indigenous Organizations during the 11th and 12th Sessions of the Permanent Forum on Indigenous Issues.

2. Requests the appointment of facilitators by the office of the President of the 65th Session of the General Assembly in order to promote a process of consultation with Indigenous organizations, members of the Permanent Forum and other Member States, during which modalities of the meeting and participation mechanisms will be discussed.
3. Requests that the General Assembly guarantee the participation of Indigenous Peoples, especially that of Indigenous women and youth during the World Conference on Indigenous Peoples, as well as in its preparation.
4. Recommends that the General Assembly commissions the Secretary General, in consultation with Member States, the competent organizations and mechanisms of the United Nations, organizations of Indigenous Peoples, and other interested parties, with the creation of a report on the advances, challenges and best practices of the exercising of the rights of Indigenous Peoples, including the compliance of the articles of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, to be presented during the World Conference on Indigenous Peoples in 2014.
5. Decides to establish a working group composed of members of Permanent Forum from the region and the principal regional Indigenous networks to monitor the process of the 2014 Conference.
6. Decides to promote regional preparatory meetings, reporting the results to the United Nations Permanent Forum on Indigenous issues.
7. Requests that the agencies of the United Nations System, donor Institutions, International Cooperation agencies and Member States financially aid the holding of consultations and preparatory meetings.

**Resolution:
Future Work of the United Nations
Permanent Forum on Indigenous Issues**

The Latin America and Caribbean Caucus, during the Preparatory Meeting for the 10th Session of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues on 4-6 April 2011, in Managua, Nicaragua,

Reaffirming the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, adopted by the General Assembly in Resolution 61/295 (Annex),

Recalling all the relevant resolutions of the General Assembly, the Human Rights Council, and the Economic and Social Council related to the rights of Indigenous Peoples,

Recognizing the Permanent Forum on Indigenous Issues as an essential and international advocacy space in the fight for the recognition of the rights of Indigenous Peoples, coordination within the United Nations system, and a close relationship between Member States and Indigenous Peoples,

Reaffirming the mandate of the Permanent Forum as an advisory body for analyzing Indigenous issues in the context of the mandate of the Economic and Social Council relating to economic and social development, culture, the environment, education, health and human rights,

Considering Article 42 of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which states that the Permanent Forum on Indigenous Issues and others shall promote the respect and full application of the provisions of the Declaration and monitor their efficacy,

Recommends that the Permanent Forum on Indigenous Issues:

1. Welcomes the Declaration of Adolescents and Youths of various Indigenous Peoples of the Americas, adopted under the framework of the VI Continental Meeting of Indigenous Women of the Americas held in the Indigenous community of Hueyapan- Tetela del Volcán, Morelos State, Mexico, on 5-8 March 2011.

Resolution: **Future Work of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues**

2. Give priority to the demands of Indigenous children and youth, ensuring their participation in the processes promoted by the Permanent Forum and considering them subjects of law, agents of change, and protagonists in the fight for the elimination of poverty, exclusion and racism.
3. Welcome the Declaration of Indigenous Women against Violence, adopted by the Indigenous Women of the Americas in Lima, Peru, during the Preparatory Meeting of the Continental Network of Indigenous Women of South America on 24-25 November 2010.
4. Pay special attention to the issue of violence against Indigenous women, supporting the development of strategies for the prevention, documentation and eradication of violence with an intercultural focus, designed and promoted by the communities and organizations of Indigenous Peoples themselves, and considering the Indigenous conceptualization on domestic violence. It must also promote a close relationship and dialogue among Indigenous women, UN WOMEN, and the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW).
5. Pay special attention to the issue of Indigenous Peoples and health, emphasizing the reduction of maternal mortality, respect for the right to sexual and reproductive health, and the negative effects of environmental pollution that affects the lands, waters and food with toxic substances such as mercury, uranium, nuclear waste, pesticides, etc. on Indigenous children, youths, women and men.
6. Emphasize the situation of Indigenous Peoples living in cities, migrant and trans-border Indigenous Peoples, and Indigenous Peoples without representation and/or recognition, and promote the establishment of mechanisms of direct consultation with these peoples.
7. Play a proactive role and lead the preparatory process of the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20), promoting processes of advocacy and visibility of the demands of Indigenous Peoples' organization and facilitating the participation of Indigenous representatives, in particular Indigenous women.
8. Play a proactive role and lead the preparatory process of the Conference on Indigenous Peoples to be held in 2014, promoting dialogue between Member States and Indigenous Peoples' Organizations.
9. Promote high-level dialogue and exchange during the Conference on Indigenous Peoples, with the participation of a greater number of Heads of State and representatives of Indigenous Peoples' network, and consensus building and the obtainment of concrete commitments in the pursuit of the compliance of the rights of Indigenous Peoples that are extensively recognized in the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

The Global Financial Crisis and Indigenous Peoples

The financial and economic crisis that has affected the world's countries in recent years, the worst since the Great Depression, is a manifestation of one of many cyclical crises that affect capitalism, and it is associated with this system's voracious appetite for consumers and profits, and, in the current situation, is accelerated by fraudulent stock-market practices perpetrated by the large global financial centers.

One of the main characteristics of this global crisis is its systemic and integral nature, reflected in the superimposition present in the financial, climate, energy, social and cultural sectors, thus expressing decomposition not only of neoliberalism as an economic doctrine, but also of capitalism as a system and the Western civilization matrix and its erroneous pillars of separation between humanity and nature, man and woman, individual and community, and equality and diversity¹.

Developed countries expect to overcome their crisis by increasing the pressure on Pachamama [Mother Earth] and natural resources (water, food, biodiversity, hydrocarbons, forests) through transnational capital and their strategies of "FTAs", the promotion of megaprojects, and the stigmatization and criminalization of Indigenous and social rights².

The model of development based on the Western view of living better, with a marked individualistic emphasis and which currently expresses itself the most in the doctrine and economic practice of neoliberalism as the most pure expression of wild and predatory capitalism, is found in decadence and "does not offer any solution to the moral, spiritual, cultural, socioeconomic and human crisis"³.

This model has had serious and lasting consequences on the cultures and lives of the Indigenous Peoples of Latin America and the Caribbean. These include:

1.- Declaración del "Diálogo de Alternativas y Alianzas de los Movimientos Indígenas, Campesinos y Sociales del Abya Yala [Declaration of the "Dialogue of Alternatives and Alliances of the Indigenous, Peasant and Social Movements of the Abya Yala]." La Paz, 26 February 2009.

2.- Ibid.

3.- El Buen Vivir, un principio ancestral en respuesta a la crisis mundial [Living Well: An Ancestral Principle in Response to the Global Crisis]. [Http://indigena.todosatierra.com](http://indigena.todosatierra.com) (in Spanish).

The Global Financial Crisis and Indigenous Peoples

1. The systematic and repeated violation of the fundamental rights of their collective and individual character, including the right to life.
2. The invasion and appropriation of their lands by multinational corporations and State-owned companies.
3. The plundering of their land and natural resources, including genetic resources and the water that is their source of material, cultural and spiritual life.
4. The expropriation of technologies and knowledge related to the exploitation of natural resources.
5. The environmental contamination of territories belonging to Indigenous Peoples.
6. The forced migration of Indigenous Peoples from their places of origin due to socioeconomic conditions, and the consequent lack of rights in the destination country of Indigenous migrants.
7. Labor flexibility without guarantees, benefits and security.
8. The loss of their heritage and cultural values.
9. The increase of physical, economic, social, environmental and cultural vulnerability.

One of the mechanisms directed at gaining free trade between States is the signing and implementation of Free Trade Agreements (FTA). These agreements, which are asymmetrically signed between developed and developing countries, have considerable negative effects on the intellectual property rights to the resources, goods and knowledge of Indigenous Peoples.

The model of development that forces the assimilation of Indigenous Peoples into the “civilized world” and considers the cultures and values of Indigenous Peoples as contradictory to the values of the market economy such as the earning of profits, consumption and competition is contrary to that of Indigenous Peoples. This view includes the development of culture and identity, which is characterized by a holistic focus that is based on the rights and security of the collective and more control of and an autonomous government for the lands, territories and resources. These concepts are based on the respect of ancestors, but are also aimed at the future, having enough flexibility to accept changes. The values of reciprocity, solidarity, equilibrium, sustainability, exchange and collectivity are the pillars of the Indigenous model⁴.

Climate change, the food crisis, and policies of privatization, concession and exploitation of natural resources are aspects of the current crisis that have and will have a greater impact on Indigenous communities and the lives of Indigenous women⁵.

4.- Ibid.

5.- See *El Impacto de la Crisis Económica en la Vida de las Mujeres Indígenas* [The Impact of the Economic Crisis on the Live of Indigenous Women]. Base document by IWWF for the 11th Regional Conference on Women of Latin America and the Caribbean.

The Global Financial Crisis and Indigenous Peoples

Some of the impacts of the crisis on Indigenous Peoples are:

1. Malnutrition and preventable or curable illnesses, an increase in unemployment, fewer job opportunities and, consequently, a decrease in income; less access to education and health services, and a lack of social protection.
2. A decrease in human security and an increase in the level of economic, social, cultural and environmental vulnerability.
3. The growing threat to their lands and resources due to extraction activities that, in turn, result in the destruction of the environment and its ecosystems.
4. The rapid increase in the destruction of forested areas belonging to Indigenous Peoples.
5. The affectation of the ecosystems Indigenous Peoples inhabit due mainly to the extraction of natural resources such as mining and forest exploitation. These are serious threats to the traditional lifestyles and culture of Indigenous Peoples.
6. Greater economic and food insecurity for the Indigenous populations of Latin America and the Caribbean.
7. A decrease in access to health services, education and employment due to smaller public budgets for the financing of social policies and programs promoted by the States.
8. The promotion of programs to fight the financial and economic crisis, mainly aimed at the construction of enormous infrastructure projects that cause the forced displacement of Indigenous Peoples without their free, prior and informed consent or good faith.
9. The construction of private and public megaprojects, in particular those related to the construction of oil pipelines, gas pipelines, hydroelectric power and roads, on areas on Indigenous territories with natural resources.
10. The flexibility of social and environmental regulations, as well as those directed toward Indigenous People by the States and financial organisms, such as the World Bank and the Inter-American Development Bank, that provide resources to companies for the financing of projects and investment.

The Permanent Forum has shown its concern for the consequences the global financial and economic crisis is having on Indigenous Peoples. In this context, during the Eighth Session held on 18-29 May 2009, Ms. Victoria Tauli-Corpuz was appointed Special Rapporteur in order to carry out a study on the consequences of the global economic crisis for Indigenous Peoples, define measure and create proposals for the governments and organs, organisms, funds and programs of the United Nations in order to tackle these consequences and present a report to the Ninth Session of the Forum in 2010⁶.

6.- E/2009/43, E/C.19/2009/14

The Global Financial Crisis and Indigenous Peoples

During the Ninth Session, the Permanent Forum decided to reappoint Victoria Tauli-Corpuz as Special Rapporteur to complete the study on the consequences of the global crisis for Indigenous People by 31 December 2010 and present it in front of the Permanent Forum during the Tenth Session in 2011⁷.

The Permanent Forum has also stressed the need that the solutions to face the problems derived from the global financial and economic crisis need to be adjusted to focus on development based on the respect of the rights of Indigenous Peoples. Further, it declared that the effective participation of the Indigenous in the plans the States will adopt in order to fight the crisis is essential. This recommendation fully complies with Article 23 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which states that “Indigenous peoples have the right to determine and develop priorities and strategies for exercising their right to development. In particular, indigenous peoples have the right to be actively involved in developing and determining health, housing and other economic and social programmes affecting them and, as far as possible, to administer such programmes through their own institutions”⁸.

The Indigenous Peoples Caucus of Latin America and the Caribbean recommends the following measures to the States aimed at contributing to the decrease of the impacts of the current international crisis and its repercussions on Indigenous Peoples:

1. Define, in cooperation with Indigenous Peoples, concrete, rapid, decisive and coordinate programs and measures that contribute to progress and important and significant improvements in the socioeconomic conditions of Indigenous Peoples, in particular the reduction of poverty and health and education. These programs must take into consideration the specific condition of each Indigenous People and their respective populations, as well as the application of the principle of free, prior and informed consent and the consideration of the focus on rights to put them into practice.
2. Form and apply special policies, in cooperation with Indigenous Peoples, aimed at the full enjoyment of all political, economic, social and cultural rights listed in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Convention 169 of the ILO and legislation of each State.
3. Promote the definition and application of judicial, administrative and procedural norms aimed at the protection and defense of territories, resources and economic rights, in particular those related to the intellectual protection of their goods, resources, knowledge, wisdom, techniques and technologies of Indigenous Peoples.
4. Define and implement, in cooperation with Indigenous Peoples, programs aimed at facilitating access to sufficient finances and, in favorable conditions, capacity building in infrastructure, profits, business and technology, and give support to the processes of sustainable development that they promote.

7.- E/2010/43, E/C.19/2010/15

8.- United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

The Global Financial Crisis and Indigenous Peoples

5. Establish, in cooperation with Indigenous Peoples and with financing from international organisms such as the World Bank, the International Finance Corporation and the Inter-American Bank, programs directed toward Indigenous Peoples, contributing to the securing of the Millennium Development Goals and international treaties signed by the States on development.
6. Define, in cooperation with Indigenous Peoples, the mechanisms that allow and facilitate, through association, the obtainment of equal benefits for them when activities for the exploitation of existing resources on their territories are developed by State companies and multinational corporations.

Indigenous Childhood, Adolescence and Youth

Article 22 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples states that in its application, “Particular attention shall be paid to the rights and special needs of...Indigenous...youth, children” and that “States shall take measures, in conjunction with indigenous peoples, to ensure that indigenous...children enjoy the full protection and guarantees against all forms of violence and discrimination¹”.

The Convention on the Rights of the Child, ratified by 192 countries, states in Article 30 that “in those States in which...persons of indigenous origin exist, a child...who is indigenous shall not be denied the right, in community with other members of his or her group, to enjoy his or her own culture, to profess and practise his or her own religion, or to use his or her own language².”

Indigenous children, adolescents and youths are subject to general fundamental rights in the recognition of human dignity and specific rights based on the protection and care children and adolescents require to be legally ensured the equal and inalienable rights of the human family; furthermore, as Indigenous Peoples, they are subject to individual and collective rights related to the recognition of their distinctive nature and cultural diversity³. Nevertheless, the exercising of their general and specific rights is far from being completely fulfilled.

Indigenous children, adolescents and youths face and are affected by many problems. Among them are:

1. Limited access to high-quality education.
2. A low level of access to secondary education for adolescents. This is proven in the fact that if the national average is less than 50% for the general population, the average for Indigenous populations, especially rural populations, is estimated at 20%, especially for girls and adolescent females.

1.- United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

2.- Convention on the Rights of the Child, adopted by the United Nations General Assembly, 20 November 1989.

3.- Conference of Latin American Indigenous Peoples and Governments (2010). Indigenous Childhood in Latin America: Situation and Perspectives.

Indigenous Childhood, Adolescence and Youth

3. The prevalence of high rates of malnutrition and infant morbidity and mortality.
4. The existence of new illnesses that affect them, such as HIV/AIDS.
5. The lack of access to quality employment.
6. Forced migration due to a lack of opportunities and, consequently, the effects related to the loss of cultural values and transculturation.
7. Human trafficking, specifically that of children, adolescents and youths.
8. Violence that turns children, adolescents and youth into victims in our countries, and the presence of crime, conflicts, evictions, etc.
9. Sexual exploitation of children.
10. The lack of political recognition of childhood and youth as subjects of contribution such as limitations to access to political power, employment, hearing their opinions and demands.
11. A lack of reflection on the life cycles of Childhood, adolescence and youth regarding specific moments of these steps, as in Indigenous cultures each step has its own conception based on their world view.
12. UNICEF currently is only focused on child and adolescent labor, and there is no instance dedicated specifically to the problems of youth.

The figures are very indicative. Infant deaths of Indigenous children in Panama reached 84 out of every 1,000 live births; the infant mortality rate of non-Indigenous children is 17 out of every 1,000 live births. The difference is almost 400%; this means that four times more Indigenous children die than non-Indigenous children.

A sociodemographic study by ECLAC shows that “the disparities between the Indigenous and non-Indigenous are severe. The probability that an Indigenous child will die before his/her first birthday is 3.4 times higher (or 240% greater) than that of a non-Indigenous child in Panama and 10% greater in Chile⁴”. According to the study, “...in Latin America, Indigenous infant mortality is practically double that of the non-Indigenous, given that the average infant mortality rate in the region among the Indigenous population is 52.2 per 1,000, while the rate for the non-Indigenous is 26.7 per 1,000. Furthermore, no Latin American country has reached the goal of the International Conference on Population and Development related to the elimination of inequalities between the Indigenous and non-Indigenous⁵”.

Data from the study indicate that disparities on a national level are considerable. For example: The mortality rate of Indigenous children in Paraguay has reached 82.2 for every 1,000 live births, versus 39.1 for every 1,000 live births of non-Indigenous children, a difference of 110%. In Ecuador, the rate is 59.3 for every 1,000 Indigenous live births

4.- ECLAC (2005). Indigenous Peoples and Afro-Descendants of Latin America and the Caribbean: Sociodemographic Information for Policies and Programmes.

5.- Ibid

Indigenous Childhood, Adolescence and Youth

versus 25.8 for every 1,000 non-Indigenous live births, a difference of 130%. In Mexico, the rate reaches 54.6 for every 1,000 live births of indigenous children versus 33.2 for every 1,000 live births of non-Indigenous children, a difference of 64.5%.

According to data from ECLAC⁶, the figures of access to education, as well as the completion of primary education of Indigenous children show percentages of coverage that range from 62% (Paraguay) to 89% (Mexico) and gaps in coverage between Indigenous and non-Indigenous children. For example, the gaps in Mexico, Ecuador, Guatemala, Panama, Costa Rica, Brazil, Honduras and Paraguay are seven, five, eight, nineteen, twenty-one, twenty, two and thirty-one percentage points respectively. Significantly higher gaps are found in Paraguay, Costa Rica, Brazil and Panama.

The figures are higher if the percentage of Indigenous children who complete their primary education is analyzed. The proportion of non-Indigenous youths between the ages of 15 and 19 who complete their primary education ranges from 69% to 96% in Guatemala and Chile respectively. Among Indigenous youths, the rates of completion at this level range from 21% in Paraguay to 93% in Chile. The rate in Guatemala is 36%, 45% in Honduras, 56% in Costa Rica and Panama, 64% in Brazil and 69% in Mexico⁷.

The figures vary from country to country, as shown in the data provided by the ECLAC study. They also reflect high variations at the State and even municipal levels. For example, in the case of Mexico, in the State of Guerrero, 45.4% of the Indigenous population (one out of every two people) over the age of fifteen does not attend school.

Many of these problems are related to the application of exclusive policies implemented by States and racist practices that impede Indigenous children, adolescents and youth or at least limit their development as human beings and full citizens with general and specific rights as Indigenous Peoples.

During the Second Session (12-23 May 2003), the Permanent Forum on Indigenous Issues decided “to make indigenous children and youth a focal point of its work in the years to come” and manifested its concern “that particular problems and discrimination are faced by indigenous children and youth, including in the areas of education, health, culture, extreme poverty, mortality, incarceration, labor and other relevant areas”⁸.

It encouraged “United Nations bodies whose activities have an impact on indigenous children and youth to report regularly to the Forum”⁹ This indicates that reports should contain detailed information on the progress and evaluation of these, done within programs aimed at Indigenous adolescents, that affect and refer to Indigenous adolescents. The Forum has requested that the United Nations Children’s Fund (UNICEF) in particular present a complete annual report “including budgetary allocations and an assessment of their impact, including details of all its initiatives undertaken in collaboration with other specialized bodies of the United Nations system relating to indigenous children and those undertaken at the international or regional levels, as well as country initiatives, where

6.- Ibid

7.- Ibid

8.- E/2003/43, E/C.19/2003/22

9.- Ibid

Indigenous Childhood, Adolescence and Youth

applicable; and provide information from the multi-indicator cluster survey being globally undertaken by UNICEF, disaggregating data on the antenatal health, birth, registration, immunization and early childhood development of indigenous children¹⁰”.

It recommended “that the United Nations system, in particular UNICEF and WHO, in collaboration with Governments and in consultation with indigenous peoples, organizations, and with the participation and input from the Committee on the Rights of the Child and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, address issues related to the trafficking and sexual exploitation of indigenous girls, and urges States to create programmes of rehabilitation”¹¹.

During the Seventh Session (21 April-2 May 2008), the Forum manifested its deep concern for “the report of the Special Rapporteur on the right to education regarding the extensive child-labour practices in many States involving indigenous children, which represents a grave violation of their human rights, including their right to education¹²” and urged the States to “consider their obligations, in this regard according to the UN Convention on the Rights of the Child, ILO Convention No. 38 (Minimum Age Convention) and ILO Convention No. 182 (Worst Forms of Child Labour Convention)”¹³.

Furthermore, during its Eighth Session (18-29 May 2009), the Forum recommended that States “apply the principles of general comment No.11 (2009) of the Committee on the Rights of the Child, entitled ‘Indigenous children and their rights under the Convention’¹⁴”.

Adolescents and youths from different Indigenous Peoples of the Americas, meeting on the occasion of the 6th Continental Meeting of Indigenous Women of the Americas in the Indigenous community Heuyapan-Tetela del Volcán in the State of Morelos on 5-8 March 2011¹⁵, have expressed their concern for the lack of public policies with the direct participation of Indigenous women, youths and Peoples, the unequal distribution of budgets, and the validity of legislation that is not in agreement with established international norms.

There are some interesting events in Latin America and the Caribbean developed by Indigenous youth. For example, in the Autonomous Region of the North Atlantic of Nicaragua, youth have proposed their strategic policy and plan for youths. In other countries, such as Peru and Guatemala, there are groups of Indigenous youths that are organized and develop propositional actions to approach the problems they face; this has been done by the Ñiojanichic Indigenous youth of Peru and the Mojomaya Indigenous youths of Guatemala. Efforts to incorporate youths into training programs with the Indigenous Intercltural Chair (IIC) can also be identified. Likewise, the incorporation of youths in

10.- Ibid

11.- Ibid

12.- E/2008/43, E/C.19/2008/13

13.- Ibid

14.- E/2009/43, E/C.19/2009/14

15.- Continental Link of Indigenous Women of the Americas, same principles, new leaders: Indigenous childhood and youth. Declaration of 5-8 March, community of Hueyapan, Morelos, Mexico.

Indigenous Childhood, Adolescence and Youth

elected offices is emphasized, even though a large presence of Indigenous youths in these positions continues to be a challenge that must be faced. Furthermore, we see with great interest that the UNDP Governability Programme promotes the participation and incorporation of a greater number of Indigenous youths, women and men in charge of election in electoral processes.

Taking into account the particular situation of Indigenous children, adolescents and youths, the Indigenous Peoples Caucus on Latin America and the Caribbean recommends that States:

Indigenous Peoples Caucus on Latin America and the Caribbean recommends that States:

1. Promote the access to education services for Indigenous children, adolescents and youths with a focus on interculturality.
2. Broaden the recognition of the intercultural focus, taking into consideration the ancestral knowledge, methodologies, values and distinctive history of Indigenous Peoples.
3. Encourage the development and consolidation of Intercultural Bilingual education programs that strengthen identity.
4. Promote the education and permanent training of Indigenous teachers specializing in Intercultural Bilingual Education.
5. Implement a scholarship program for youths for access to specialty courses and Master's and Doctorate programs.
6. Strengthen and consolidate the operation of centers of university education aimed at the education of Indigenous youth.
7. Ensure sufficient budgets for the implementation of Intercultural Bilingual Education with an emphasis on the teaching of the language at all educational levels, as well as the incorporation of the ancestral knowledge, world view and identities of each People.
8. Encourage the implementation of programs that favor timely access to quality health services for Indigenous children, adolescents and youths.
9. Favor access to information with an intercultural focus and appropriate methodologies on the rights to sexual and reproductive health.
10. Promote actions of prevention and care for sexually transmitted diseases, as well as access to contraception based on the awareness of life expectations.
11. Certify births aided by midwives and register births and legal identity.
12. Incorporate sexual and reproductive education into the school curriculum with a differential focus and the accompaniment of Indigenous elders and sages.
13. Promote the development of employment programs or company ventures for Indigenous youths.
14. Develop actions aimed at reducing and eliminating Indigenous child labor.

Indigenous Childhood, Adolescence and Youth

15. Redesign census methodologies and the procedures of organization and incorporate disaggregate data and ethno-cultural, age and gender variables in the population censuses, home surveys and other vital registries.

The Indigenous Peoples Caucus on Latin America and the Caribbean recommends that the organizations that form the United Nations System:

16. Differentiate the life cycle analysis in the documentation and work of the agencies of the United Nations, paying attention to early childhood, the need for healthcare services, and especially the expansion of coverage of healthcare for teenage, single, and working mothers.
17. Cover the issue of youth in all topics that the United Nations System approaches.
18. View the Indigenous conception of child labor as different from child exploitation, as original cultures have tasks for life training for children; this is training for life.

The Indigenous Peoples Caucus of Latin America and the Caribbean recommends that the representative organizations of Indigenous Peoples:

19. Define, analyze and develop life cycles (childhood, adolescence, youth) and the specific moments during these periods, as in Indigenous cultures each step has its own significance in their world view.
20. Systematize and document good Indigenous practices regarding childhood and youth.
21. Establish a mechanism that strives for intercultural meetings and strengthens the participation of Indigenous children and adolescents.
22. Pay special attention to the situation of girls and adolescent females as a specific area to approach, consider and tackle.
23. Strengthen the political participation of Indigenous children, adolescents and youths.
24. Promote the political participation of Indigenous youths is a way that grants access to elected positions at all levels and areas in government.

Resolution: UN WOMEN

The Latin America and Caribbean Caucus, during the Preparatory Meeting for the 10th Session of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues on 4-6 April 2011, in Managua, Nicaragua,

Reaffirming the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, adopted by the General Assembly in Resolution 61/295 (Annex),

Recalling all the relevant resolutions of the General Assembly, the Human Rights Council, and the Economic and Social Council related to the rights of Indigenous Peoples,

Invoking Resolution 49/7, “Indigenous women beyond the decade review of the Beijing Declaration and Platform for Action”, adopted by consensus during the 49th Session of the United Nations Commission on Status of Women,

Reaffirming the Declaration of Indigenous Women adopted in Brasilia, Brazil during the 11th Regional Conference on Women in Latin America and the Caribbean (ECLAC), 13-16 July 2010,

Welcoming Resolution 64/289, adopted by the General Assembly on 21 July 2010, establishing an entity based on gender, “UN WOMEN”,

Recognizing that the establishment of UN WOMEN is an important step in the recognition of the human rights of women and girls around the world,

Reaffirming that the establishment of UN WOMEN represents an opportunity to include the perspectives and priorities of Indigenous women in the functioning of the United Nations system in a coherent and effective manner,

Considering the central role of Indigenous women in their communities, in the protection of ancestral knowledge, in the construction of the social and cultural identity of the peoples and as key protagonists in the struggle for the recognition of their rights and the elimination of poverty, exclusion and racism,

Requests that UN WOMEN:

1. Explicitly recognize the situation of Indigenous women and girls in its mandate and include an intercultural approach on all levels.
2. Design and implement specific policies and programs for the advancement of the human rights of Indigenous women; these policies and programs must be coordinated by a specific department that takes into account the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the recommendations of the Permanent Forum on Indigenous Issues, and the priorities and demands of Indigenous women's organizations.
3. Establish adequate mechanisms that ensure the participation and inclusion of Indigenous women on all levels of decision making.
4. Include experts in issues of interculturality and adequate mechanisms for facilitating the recruitment and permanence of Indigenous experts on all levels.
5. Allocate a specific, adequate budget for programs aimed at Indigenous women.

Indigenous Peoples and Water

For Indigenous Peoples, it is not possible to separate their efforts in demanding their rights to water from the fight for the recognition of their fundamental rights as peoples¹. Furthermore, their own views on water must be recognized not only at the local, national and regional levels, but also in international forums. For these peoples, water, besides being a basic human right, is a source of life and fundamental element of their world view and spirituality. Waters, territories and lands are the fundamental physical, cultural and spiritual bases of their existence and identity as distinct peoples.

However, their voices have been generally silenced by discourse based on the conception of water as a mere commodity. This conception has been refuted by Indigenous Peoples in various places and forums, in debates that have arisen on the access, use and management of water, and in the presentation of proposals directed at attending to the global water crisis². For Indigenous Peoples, water is sacred. It belongs to nature and cannot be owned or transformed into a commodity by an individual, state or company. They consider assuring the protection, availability and purity of water for present and future generations, as well as for the rest of creation, to be their collective responsibility and obligation.

There is a large gap between international policies and local practices on the issue of water resources. Similarly, there is no agency or program of the United Nations that is responsible for the subject of water resources. This probably explains why international proceedings on water, after the Earth Summit, were not organized or led by the United Nations. Decisions on the development of water are oriented toward international bodies such as the World Trade Organization and World Bank.

The development of water resources must therefore rely on a mechanism that will assure equilibrium among the roles of the State, market and local communities³, since a paradigm that prioritizes the role of market forces will not attach much importance to the role and participation of Indigenous Peoples and local communities when water policies and programs are designed. In any case, the fact that the United Nations has already declared access to water a fundamental human right and therefore must not be an object of commodification must be taken into account. In some countries, such as Peru, water is already privatized. However, large companies that use up to one thousand liters of water per second, such as mining companies, have privileges that make water practically free of charge.

1.- Victoria Tauli Corpuz

2.- UNESCO, 2007, El Agua y los Pueblos Indígenas.

3.- Victoria Tauli Corpuz

Indigenous Peoples and Water

The Permanent Forum has reaffirmed that the right to water is one of the fundamental human rights, and has requested the development of international norms for the use, management and regulation of water. It has also urged States and state companies to hold meetings and cooperate in good faith with the affected Indigenous Peoples in order to obtain their free, prior and informed consent before approving policies, plans and projects concerning their lands or territories and other resources, particularly regarding the development, use or exploitation of water resources in full compliance with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

There is no evidence that such recommendations have been considered by the States. For example, in Ecuador, there has been a great amount of tension and serious disputes over the “Draft Fundamental Bill on Water Resources, Use and Development.” This draft bill, in its various official versions, presented serious constitutional contradictions. In the process of formulation, the participation of social and Indigenous organizations was restricted to general informative questions. The central actors involved were the executive authorities and legislators from the PAIS Alliance, whose block is not homogeneous and held positions of open opposition to private interests regarding water, “indifferent” positions and difficult positions with profound changes.

In the new Constitution of Ecuador, the following vital guarantees have been expressed: the human right to water, the recognition of the exclusive public and community management of water (closing the door to privatization), the central water authority, the management and protection of water sources or the authority of its use to guarantee ecological wealth, and human consumption and food sovereignty. Nevertheless, in the creation of the new Law on Water Resources, these important advances have not been moved forward.

Various Indigenous organizations have debated, analyzed and created alternatives to the official proposals. The main challenge of the organizations was to assure that the new legal framework guaranteed “full participation in the management of the water resources and their institutions, the recognition and strengthening of the community systems that manage their own water systems, the assurance of democratic management of irrigation as well as alternative mechanisms of financing community management of the water systems, and the use of water in agreement with the laws of Mother Earth.”

Mobilization was driven by the “Defense of Water, Life and the Plurinational State”, which had different nuances in different regions. While the call in the Sierra was largely ignored, there was a stronger protest in the Amazon, headed by the Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) (Interprovincial Federation of Shuar Centers) in Pastaza and Morona Santiago provinces, the central Amazon region and, specifically, on the outskirts of the provincial capital of Macas, located on the Upano River. José Akachu, president of FICSH, spoke of “the possibility of declaring ourselves an autonomous nation in order to establish our own laws and forming a Shuar army that will protect the water, air and all the natural wealth in the zone.”

In this framework, the police attempted to disperse the protestors with more than fifty officers, resulting in clashes in which Shuar professor Bosco Wizuma of the village of Corazón de Jesús was shot and killed. Forty were wounded, all by police. After a series of accusations regarding the responsibilities of the incidents at the Upano River, the Go-

vernment and CONAIE (Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador) agreed to sit at the negotiating table.

In the case of the issue of the Law on Water, a commission was created that, in the end, was able to formulate a proposal based on consensus. It worked to facilitate an intense debate and approval, first of all, in the National Assembly on the aforementioned bill. However, for social organizations, there remain three sensitive issues: the institutionality of water, participation and free access to a minimum.

Recommendations

The Indigenous Peoples Caucus of Latin America and the Caribbean is satisfied with the General Assembly's approval of Resolution 64/292 of 28 July 2010, which recognizes that the right to potable water and sanitation are essential rights for all peoples in different countries for the complete enjoyment of life and of all human rights. Therefore, given the importance of water as one of the principal rights of Indigenous Peoples, we recommend that the Forum:

1. Be effectively vigilant, since the heart of the United Nations System is in maintaining equilibrium between the State, the market, and Indigenous communities for taking water from the market and in WTO negotiations.
2. Urge international cooperation in changing its method of funding, eliminating intermediaries and working directly with the bases.
3. Demand that the States guarantee the supply of potable, sufficient, healthy, acceptable and affordable water for personal and domestic use.
4. Request the establishment of an International Tribunal on Water, whose decisions would be binding for States.
5. Work diligently on the issue of Climate Change with Indigenous Peoples who have already been affected by water quality and quantity.
6. Establish an international framework on water use for each country in order to work on the issue of the Code of Use of Water starting with solidarity, the right to water for all and sustainability, and keep in mind the rights of Indigenous Peoples in agreement with ILO Convention 169 and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
7. Promote the incorporation and participation of the peoples through their representatives, in institutions, places, and forums created at the national and international levels for the regulation, management and control of the use of water resources.
8. Request that the World Bank no longer fund Mining projects that only continue to contaminate the environment and water sources of the peoples, especially those of Indigenous Peoples.

The Indigenous Peoples Caucus of Latin America and the Caribbean recommends that States:

9. Promote the systematic and effective participation of Indigenous Peoples through legitimate representatives in the processes of drafting and defining legal norms, policies, plans and national bills on the access, use and management of water resources.
10. Invest in the education of Indigenous Peoples, people of African descent, and ethnic communities so they can be well informed on the positive and negative aspects of megaprojects concerning water and be able to make correct decisions on this issue.
11. Develop concrete steps geared toward ensuring the right of Indigenous communities to water, as well as ensuring that the water on their territories belongs to the peoples and that the system of basins to which the water belongs is considered in order to avoid contamination.
12. Carry out an exhaustive analysis on the level and source of contamination of the water of Indigenous communities so sustained lawsuits can be filed against those who contaminate it. Universities can play an important role in this analysis, a role for which they must be strengthened.
13. Ensure that there are mechanisms that defend the right of the peoples to water and concrete mechanisms that avoid evacuations from communities where megaprojects are carried out.
14. Promote the direct management of water resources by Indigenous Peoples and the representative organizations on the territories in which they live, under norms previously negotiated and agreed upon with the States.

Indigenous Peoples and Extractive Industries

Many of the violations of the rights of Indigenous Peoples have one common denominator: pressure from multinational extractive companies to exploit the natural goods belonging to them and found on their lands and territories. These companies carry out their activities on Indigenous lands, violating the fundamental rights of Indigenous Peoples, increasing pollution by ignoring environmental laws, and raising the levels of poverty, insecurity and underdevelopment of the Indigenous populations.

Today, Indigenous Peoples find themselves submitting to intensifying pressure on their lands and territories, resulting in rapid deforestation and environmental contamination due to the activity of extractive corporations dedicated to exploiting wood, mining, agricultural expansion, colonization and infrastructure projects. Similarly, initiatives on environmental conservation rarely take Indigenous rights into account¹. Added to this is the renationalization of the lands and territories that belong to Indigenous Peoples through the declaration of reserves without their free, prior and informed consent and good faith.

The practices of private corporations that carry out the exploitation of resources such as hydrocarbons, minerals, forests, water, wind power, agriculture, etc. on the lands and territories of Indigenous Peoples have been characterized by the lack of consideration toward, the disrespect for, and the vulnerability of their individual and collective rights and the removal of their lands and resources. Added to these activities is the promotion of megaprojects without consultation or free, prior and informed consent, as in the cases of the ex Puebla-Panama plan and IIRSA (Initiative for the Integration of Regional Infrastructure in South America), both financed by the International Development Bank (IDB).

These extractive corporation practices continue today, and rely on the complicity of States, which are unaware of the collective ownership of Indigenous Peoples of these natural goods and frequently promote institutionalized violence against the Indigenous Peoples who oppose the activities of these corporations; Indigenous territories are militarized, measures for eviction and forced displacement are applied, and legal protests by the Indigenous Peoples are criminalized. The latter action generates social insecurity and leads to the pursuit, arrest and the shortening of the lives of the leaders and members.

1.- Jurisprudence of the Inter-American System

Indigenous Peoples and Extractive Industries

The high prices of minerals, petroleum, wood and other resources move large corporations and companies dedicated to extraction to continue their practices to the detriment of the interests of Indigenous Peoples. The cases in Guatemala, Ecuador, Colombia, Panama and Peru, for example, of institutionalized state violence against Indigenous Peoples and their representatives exhibit the complacent attitude many of the States of Latin American and the Caribbean have toward corporations and companies dedicated to extraction, harming the interests and natural goods of the Indigenous Peoples.

International Labour Organization Convention 169 is a binding international law instrument for the States that ratify it that is specifically directed at the rights of Indigenous Peoples and tribes. In Article 7, it states that these peoples have the right to “decide their own priorities for the process of development as it affects their lives, beliefs, institutions and spiritual well-being and the lands they occupy or otherwise use, and to exercise control, to the extent possible, over their own economic, social and cultural development.”

The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples² states that Indigenous Peoples have the right to determine and develop priorities and strategies for exercising their right to development (Article 23), the right to own, use, develop and control the lands, territories and resources that they possess by reason of traditional ownership or other traditional occupation or use, as well as those which they have otherwise acquired (Article 26.2), the right to the conservation and protection of the environment and the productive capacity of their lands or territories and resource (Article 29), and the right to determine and develop priorities and strategies for the development or use of their lands or territories and other resource (Article 32.1). By virtue of this law, state or private intervention on the lands and territories of Indigenous Peoples for the exploitation of the resources they own must, on one hand, be carried out with their free, prior and informed consent and in good faith and, on the other, ensure their full and effective participation in their benefits.

More than fifteen States of Latin American and the Caribbean have ratified Convention 169, and all have adopted the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. In many States, there are also laws that recognize and protect the rights of these peoples. Nevertheless, these laws are frequently violated. In some cases, they do not correspond to the obligations these states have or conform to international law, in particular regarding the recognition for and respect of the fundamental rights of Indigenous Peoples.

However, some corporations and companies claim to have complied with the principles of Corporate Social Responsibility. These are applied through the voluntary implementation by these corporations and companies of codes of conduct that are not aimed in particular or substantially favor the interests and right of indigenous Peoples. On the contrary, they are designed to ensure the interests and rights of these corporations and companies, who can rely on global normative frameworks that protect their interests and consolidate their rights before weak national legislatures that serve as a counterweight

Indigenous Peoples and Extractive Industries

and highlight the weakness of the receptor States in the investments they make. This summarizes the fact that investments are overprotected by means of the signing of agreements between States that normally condition the recipient State.

Regarding the issue of extractive industries and Indigenous Peoples, the ex-President of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues signaled that³ “Today, Indigenous Peoples are the objects of rather strong aggression from the so-called extractive industries that continue their acts of colonization.”

In the Report of the Expert Meeting on Positive Corporate Contributions to the Economic and Social Development of Host Developing Countries (1 December 2005)⁴, it was stated that, among other aspects, “the sustainability of business operations increasingly required attention to the long-term outcomes of these operations and to the relationship between the corporation and the communities in which it operated.”

For its part, the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms, in his third annual report to the Council of Human Rights, dedicated the second part of the report to the analysis of the responsibility of companies regarding the rights of Indigenous Peoples in the framework of expectation created by the international community on this issue⁵. Among other aspects of the report, and referring to the rights of indigenous Peoples, it was stated that: “lack of awareness of indigenous rights gives rise repeatedly to serious situations of dispossession, environmental contamination, forced displacement and permanent damage to the culture, spirituality and traditional knowledge of indigenous peoples”, indicating that “corporate activities in indigenous territories are causing serious social conflicts, which spark circles of violence and, in turn, new human rights violations.”

Further, in his third annual report, the Special Rapporteur stated that the international community expects companies to be proactive by identifying the rights of indigenous peoples in the areas in which they operate and by determining how those peoples would be affected by their activities. There is at the same time a clear expectation that companies, in carrying out their activities, will respect indigenous rights, fostering rather than blocking States’ compliance with the obligation to protect those rights⁶.

In the same report, the Special Rapporteur states that corporate activity may become a key factor in indigenous peoples’ development when they themselves can control such activity in the exercise of their rights to autonomy and self-government. What indigenous people are opposed to, understandably, is development which is carried out without respect for their basic rights, which brings with it only adverse impacts and which does not result in any visible benefits for their communities.” The Special Rapporteur also stated that “under a corporate approach based on respect for indigenous rights, benefit sharing must be regarded as a means of complying with a right, and not as a charitable award

3.- During the Conference held at the headquarters of the Ibero-American General Secretariat (SEGIB), belonging to the acts of the 9th General Assembly of the Fund for the Development of Indigenous Peoples of Latin America and the Caribbean (Indigenous Fund), 7 September 2010, Madrid.

4.- TD/B/COM.2/EM.17/3

5.- A/HRC/15/37

6.- A/HRC/15/37

Indigenous Peoples and Extractive Industries

or favour granted by the company in order to secure social support for the project or minimize potential conflicts”⁷.

On this issue, the Forum has recommended that “The free, prior and informed consent of indigenous peoples must be obtained before investments are made on projects affecting their lands, territories and resources and before such projects are brought into indigenous lands and territories”⁸.

Other designations and recommendations on the same issue have been indicated by the Forum. Among these, the Permanent Forum:

1. Supports the conceptual and policy framework proposed by the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. This framework rests on three pillars: first, the duty of the State to protect against human rights abuses by third parties, including transnational corporations and other business enterprises, through appropriate policies, regulation and adjudication; second, the corporate responsibility to respect human rights, which means acting with due diligence on all matters to avoid infringing on the rights of others; and third, greater access for victims to effective remedies, both judicial and non-judicial.
2. Supports the work of the Special Representative to urge States to integrate human rights into those areas that most affect business practices, including corporate law, export credit and insurance, investments and trade agreements.
3. Suggests that the Special Representative urge States to ensure that such business practices comply with the relevant provisions of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
4. Urges the Special Representative to incorporate the specific views and distinct perspectives of indigenous peoples on social and economic development. Regarding the Americas, corporations must also comply with the rulings of the Inter-American Court of Human Rights, which construe the States’ obligations under International Labour Organization (ILO) Convention (No. 169) concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries with regard to the Declaration as extending even to States that have not ratified the Convention. The Forum recommends that this principle be applied in other jurisdictions.
5. Recommends that transnational corporations and other business enterprises adopt minimum standards consistent with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples as a requirement of due diligence. This process has four core elements: the existence of a human rights policy; assessment of the impact on human rights of company activities; integration of those values and findings and the presentation of corresponding reports.
6. Recommends that in the case of projects affecting indigenous peoples, Sta-

7.- A/HRC/12/34/Add.5, párrafo 40.

8.- E/2009/43, E/C.19/2009/14

Indigenous Peoples and Extractive Industries

tes ensure that transnational corporations and other business enterprises comply with specific standards contained in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and ILO Convention No. 169.

7. Recommends that, in order to ensure access to effective remedies, States enforce corporate compliance with relevant laws and standards. Transnational corporations and other business enterprises should put into place operational-level grievance mechanisms to provide early warning and help resolve problems before they escalate. Significant barriers to accessing effective judicial and non-judicial remedies persist, and the Forum supports the work of the Special Representative in identifying and proposing ways of eliminating those barriers.
8. Supports the recommendations of the international expert group meeting on extractive industries, indigenous peoples' rights and corporate social responsibility addressed to extractive industry corporations, States, United Nations agencies, funds and programmes, indigenous peoples, nations and organizations, and international financial institutions, contained in a paper presented to the Forum.
9. Calls upon States and corporations to fully recognize the presence and effective participation of indigenous peoples in all negotiation processes relating to the entry of extractive industries, infrastructure projects and other development projects into their communities, consistent with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, *inter alia*, articles 19, 23 and 32.
10. Calls upon all relevant actors to ensure the application of culturally relevant, gender-balanced and gender-based analysis and gender budgeting as critical elements of economic and social development, consistent with articles 21 and 44 of the Declaration.
11. Calls upon those States which have granted leases, concessions and licences on indigenous peoples' territories for projects related to logging, minerals, oil, gas and water without proper consultation and without respecting the free, prior and informed consent of the indigenous peoples concerned to review those arrangements and to address the complaints raised by indigenous peoples in those territories.

In order to improve the situation of Indigenous Peoples in the face of the development of extractive activities of corporations and state companies on their territories, the Indigenous Peoples Caucus of Latin America and the Caribbean recommends that the Forum:

1. Ask the Special Rapporteur on Indigenous Peoples to permanently include a chapter in his reports on the analysis and evaluation of the practices carried out by companies that operate on Indigenous lands and territories. Positive and negative aspects are to be included, as well as their potential aspects.
2. Study in-depth case studies of the systematization of the promising practices of companies that operate on Indigenous lands and territories.

Indigenous Peoples and Extractive Industries

3. Carry out evaluative studies on the social and environmental impacts on Indigenous Peoples caused by extractive industries and megaprojects.
4. Apply the AKWE KON guidelines to carry out studies on the environmental and social impacts that have been adopted by States under the framework of the Convention on Biological Diversity.
5. Urge States to adopt norms of information transparency regarding concessions of mining lots, petroleum companies and other projects to multinational corporations.
6. Make a call to the States for the strengthening of the autonomous institutions of Indigenous Peoples for decision-making regarding the implementation of extraction projects.
7. Ask Amnesty International to carry out a study on the establishment of norms that guarantee the participation of Indigenous Peoples in the profits of extraction and megaprojects, as well as reparations.
8. Take the initiative to work with companies in order for them to become aware of the instruments of protection of the rights of indigenous Peoples.
9. Create a regional report on extractive companies on Indigenous lands and their consequences on natural goods and the economic, social, environmental and cultural conditions of Indigenous Peoples.

The Indigenous Peoples Caucus of Latin America and the Caribbean recommends that States:

10. Allow Indigenous Peoples to participate in the processes of creating regulatory frameworks and established procedures that ensure companies fulfill their obligations in accordance with the international norms that define and protect the rights of these peoples, in particular those of ownership of their lands and natural resources, the sources of their identity, spirituality and material means of support and in respect to the application of the principle of free, prior and informed consent.
11. Periodically and systematically evaluate the behavior of companies that carry out extraction activities on Indigenous lands and territories concerning the respect of individual and collective rights, national legislation and international norms established for the benefit of these peoples.
12. Use Article 3 of the Declaration as an initial reference point for the analysis and evaluation of the impact of extractive industries, megaprojects, etc.
13. Eliminate the presence of extractive
14. industries on Indigenous territories, given that they cause disputes over Indigenous sovereignty of land ownership and natural goods.
15. Establish a bipartisan (Indigenous Peoples-State) organization that permits the

Indigenous Peoples and Extractive Industries

tackling and solution of problematic situations that must be resolved by the States and the companies that operate on Indigenous lands and territories.

16. Create a Code concerning Corporate Social Responsibility, in which minimal norms that regulate the relationship between companies and Indigenous Peoples are established, and that permits reliance on a framework for the relationships and respect for the individual and collective rights of Indigenous Peoples.
17. Establish norms of obligatory compliance in order for Indigenous Peoples to receive tangible benefits proportionate to the amount of profits of the companies that operate on their lands and territories with their free, prior and informed consent. Furthermore, States must use at least 50% of the taxes, fees and royalties received from the companies for programs that directly benefit Indigenous Peoples.
18. Comply with their obligation to protect the rights and fundamental freedoms of citizens belonging to Indigenous groups.
19. Observe the regulations that authorize the communities to give their free, prior and informed consent to the exploitation of their natural goods. For this, it is essential that laws that are in harmony with international standards exist.
20. Only support extraction projects on Indigenous lands that follow international guidelines on the integral respect of Indigenous human rights and the norms of environmental protection and rely on free, prior and informed consent of the Indigenous Peoples.
21. Emphatically reject open-pit mining, as it is a major polluter.
22. With the support of the ILO, issue instruments of the protection of Indigenous human rights to the business sector.
23. Respect the technical guidelines established by the World Commission on Dams for the construction of dams.

The Indigenous Peoples Caucus on Latin America and the Caribbean recommends that the representative Organizations of Indigenous Peoples:

23. Strengthen the Indigenous internal mechanisms of vigilance for the protection of their territories from the invasion of multinational corporations and settlers.
24. Strengthen the knowledge and dissemination of international instruments for the protection of the natural resources and territories of Indigenous Peoples.

Indigenous Peoples and Forests

Current Situation

Approximately 50 million Indigenous men and women from almost 600 peoples live in Latin America. According to the FAO¹, in 2010, almost 49% of its total land was covered by forests. This figure is equivalent to 22% of the total area of forests in the world (881 million hectares). The five countries with the most forest area in Latin America are Brazil, Peru, Colombia, the Plurinational State of Bolivia, and the Bolivarian Republic of Venezuela. These countries contain 84% of the total forest area in the Region. The Indigenous Peoples of Mesoamerica own 28% of the temperate forests and 50% of the tropical rainforest. This right to ownership, however, despite being recognized in instruments of international law, is not fully guaranteed in practice².

The main factor in deforestation in both South and Central America is the conversion of forest lands into lands used for agriculture and urbanization, the development of mining activities, and the promotion of infrastructure megaprojects. The greatest loss of forest has been in Central America, although the rate of deforestation has been reduced since 2000. Chile, Costa Rica and Uruguay show an increase in forest areas. This is also happening in the Caribbean due to the natural expansion of forests onto abandoned farmland.

The forest areas in Latin America, as in other parts of the world, and forest conservation are directly related to the areas in which Indigenous Peoples live. They have been able to fulfill their material and spiritual needs through skilful management of their environment and, as a result, have been the main contributors to the conservation and preservation of forests³. However, the use of forest resources has always been linked to a succession of economic models that began with the arrival of the Europeans in America and continued during the Colonization and the presence of multinational corporations who exploited the resources without making reference to the concept of sustainability. Later, forest resources served in the development of ranching under plans of agricultural reforms and rural development.

1.- FAO. 2011. State of the World's Forests. Rome.

2.- Presentation by Dr. Mirna Cunningham on Forest Day 4, Cancun, Mexico, COP16 of the UNFCCC, 4 December 2010.

3.- Report on the International Expert Group Meeting on Indigenous Peoples and Forests (E/C.19.2011/5)

Indigenous Peoples and Forests

In fact, the Indigenous Peoples must constantly face invasion of their lands and their expropriation, the degradation of their forests and the deterioration of their cultures, values and traditional ways of life. Nevertheless, they are making concerted efforts to preserve their traditional knowledge and links to the land for future generations. In addition, issues connected to current or potential expropriation of traditional knowledge by scientists and commercial interests, such as the patenting of medicinal plants that have been used by indigenous peoples for centuries, have both raised public awareness of the importance and relevance of traditional knowledge, and sparked contentious debates over intellectual property rights. The protection and preservation of traditional forest knowledge is an uphill battle for most indigenous peoples and their communities, in particular in the face of rising exploitation pressures on their forest resources⁴.

It was not until the Earth Summit, which took place in Rio de Janeiro in 1992, that the concepts of sustainability and conservation were discussed. The raising of these issues coincides with the belligerence shown by the movements of the Indigenous Peoples and their organizations and the recognition of their rights by the international community, in particular their rights on the forests they occupy.

In this process, the countries of Central American and the Caribbean define judicial and legal frameworks that are belated and contradictory. The legislative framework related to the forest sector has responded to a model of appropriation of territory and the forests in response to Indigenous activist policies. This model declares that the States are in charge of lawmaking and administering the natural resources in an orthodox way, without including the participation of Indigenous Peoples and without considering free, prior and informed consent. However, today, the Indigenous Peoples and their organizations have become more protagonistic and vocal and are being included to the debate that was previously limited to companies and States.

Threats

The definition of forest used by the FAO and the UNFCCC refers only to technical parameters such as the height of trees, the percentage of forest coverage and area. In this definition, both natural forests and plantations are included. This type of definition seriously threatens the existence of natural forests and their biological diversity, as they could be destroyed and replaced by plantations devoid of biological diversity and without providing environmental services. It would also be a threat to the identities and cultures of the peoples.

Lumber, pharmaceutical, mining and oil companies and politically weak governments threaten the Indigenous Peoples' ways of life and their identity and culture by disproportionately and irrationally affecting their resources on the territories on which they live, particularly their forest resources.

Additionally, it is noted that "major obstacle to recognition of indigenous rights to forests was that in many countries, the onus is on indigenous peoples to prove that they have used and/or occupied their traditional lands and territories." That was perceived

4.- Ibid

as unjustified. “Since indigenous peoples are the original inhabitants of their lands, the sensible and non-discriminatory approach would seem to be that

States or third parties have the onus of proving that indigenous peoples have not traditionally used a particular land area”⁵.

Good Practices

There are extremely few examples of good practices regarding forests and Indigenous Peoples.

The Consorcio Formas de Vida Sostenibles (Sustainable Ways of Life Consortium) promotes the conservation of biodiversity and natural resources through the creation of sustainable markets and systems of certification of wood, cocoa, coffee, chestnuts and tourism in Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru. In Ecuador, it works on the certification of the commercialization of cocoa in areas bordering Yasuní and Gran Sumaco National Parks, Cuyabeno Wildlife Reserve and Cayambe Coca Ecological Reserve. It trains local communities in sustainable practices and promotes forest conservation and the creation of links with markets.

Another example of this is the forest certification and transformation of wood obtained from the communities of Las Crucetas and Layasiksa, a Miskita village in Nicaragua that produces wood under the international standards of the Forest Stewardship Council (FSC), a mechanism that guarantees and monitors the use of natural resources as economically viable, socially beneficial processes with a low environmental impact.

For example, in Nicaragua, within the framework of autonomy, it had been recognized that collective land rights were inalienable, imprescriptible and non-seizable, and that indigenous forest concessions required the approval of the communities themselves and the autonomous government. In the context of the multi-ethnic regional autonomy in Nicaragua, 16 territories had approved the formulation of a regional forestry strategy, with the participation of the State, private donors and indigenous peoples⁶.

Another positive example in Latin America related to Mexico, where community forest management had been strengthened by indigenous peoples, with the involvement of some higher education institutions that had worked with them to develop capacity-building/training courses that build on indigenous peoples’ traditional forest knowledge.

Debate on Forests and Indigenous Peoples

The Permanent Forum has repeatedly recommended that the United Nations Forum on Forests and the organs of the United Nations pertaining to the forests “develop effective means to monitor and verify the participation of indigenous peoples in forest policy-making and sustainable forest management, and establish a mechanism, with the par-

5.- Ibid

6.- Report on the International Expert Group Meeting on Indigenous Peoples and Forests (E/C.19.2011/5)

Indigenous Peoples and Forests

ticipation of indigenous peoples, to assess the performance of governmental and inter-governmental commitments and obligations to uphold and respect indigenous peoples' rights"⁷.

During the Ninth Session held on 19-30 April 2010, a debate was held on forests and Indigenous Peoples. From the debate, the following issues and concerns relating to forests and Indigenous Peoples were raised⁸:

1. Many indigenous peoples live in forests that are their traditional territories. Their way of life and traditional knowledge has developed in tune with the forests on their lands and territories. Indigenous peoples who live in forest areas have clearly defined rights to land and natural resources, including communal ownership of their ancestral lands, management of the natural resources on their territories, the exercise of their customary laws, and the capacity to represent themselves through their own institutions. Unfortunately, States have considered indigenous peoples' forests as State controlled forests and converted them for other uses such as logging, agribusiness plantations and mineral, oil and gas extraction. Such encroachments often force indigenous peoples out of their territories. Furthermore, some conservation schemes that establish national parks and wilderness reserves deny forest-dwelling indigenous peoples their rights.
2. The Forum is gravely concerned about the continuing eviction of indigenous peoples from their forests and calls on States and the United Nations system and other intergovernmental organizations to protect and respect the rights of forest-dwelling and forest-dependent indigenous peoples and to provide redress to those whose rights have been violated.
3. As part of its mandate, it has raised issues and drafted recommendations on Indigenous Peoples and forests. It has systematically recommended that the United Nations Forum on Forests and the organs of the United Nations working with forests develop effective means to monitor and verify the participation of indigenous peoples in forest policy-making and sustainable forest management, and establish a mechanism, with the participation of indigenous peoples, to assess the performance of governmental and intergovernmental commitments and obligations to uphold and respect indigenous peoples' rights⁹.
4. Favorably accept the announcement of the Conservation Initiative on Human Rights on behalf of eight global organizations dedicated to conservation (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, World Wide Fund for Nature, Fauna and Flora International, Wetlands International, Bird Life International, Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society and Conservation International), whose goal is to promote the integration of human

7.- E/C.19/2004/23

8.- E/2010/43 E/C.19/2010/15

9.- See E/C.19/2004/23

rights in conservation policies and practices based on its common interest to form positive links between conservation and the rights of the peoples to earn a means of support, benefit from a productive and healthy environment, and live with dignity.

The Forum also made the following recommendations:

1. Recognize, through the states, the right of Indigenous Peoples to own, control, use and have access to their forests and ask the States to reform their laws and policies that deny this right to the Indigenous.
2. Ask the United Nations Forum on Forests to closely collaborate with its secretariat to secure the full participation of the Indigenous in the planning and carrying out of scheduled activities for the International Year of Forests.
3. Immediately return to the Indigenous Peoples the forests that have been seized by the States without their free, prior and informed consent under to pretext of applying conservation policies.
4. Ensure, on behalf of organizations dedicated to conservation, the full participation of Indigenous Peoples in putting the Conservation Initiative on Human rights into practice. Furthermore, they must ensure that the organizations concerned with conservation and engage in projects that have forced the Indigenous Peoples from their homes offer reparations and restitution to the victims.
5. Ensure the inclusion and full and effective participation of Indigenous Peoples in the Oslo-Paris initiative for the reduction of emissions caused by deforestation and the degradation of the forests (REDD Plus); an initiative must not be limited to governments. Furthermore, the initiative must be vigilant over the application of safeguards listed in the report of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Framework Convention on Climate Change on its eighth session (FCCC/AWGLCA/2009/17), in which the need to respect the knowledge and rights of Indigenous Peoples is highlighted and the approval of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People, the need for full and effective participation of Indigenous Peoples, the halting of conversion of natural forests for other uses, the conservation of biological diversity, and the need to tackle the causes of deforestation and issues related to land possession are noted.
6. Promote, to the governments and States, appropriate conditions in order for Indigenous Peoples to be able to maintain the forests in their traditional manner and preserve their cultural identity, giving priority to the Indigenous Peoples who live in voluntary isolation, reinforcing their capacities and stressing the value of ancestral knowledge related to the native forests. Furthermore, all forest policies and initiatives regarding climate must recognize the knowledge and methods of traditional forest management and the systems of governance of the Indigenous Peoples for the protection and use of their forests.

Indigenous Peoples and Forests

7. Appoint Victoria Tauli-Corpuz, one of its members, as Special Rapporteur in order to prepare a study on Indigenous Peoples and forests, which will conclude on 31 December 2010 and be presented to the Forum during its 10th session.

Recommendations:

The Indigenous Peoples Caucus of Latin America and the Caribbean recommends the following:

1. Fully accept and support the recommendations made by the Permanent Forum during its 9th session deriving from the debate on forests and Indigenous Peoples and define measures and actions that contribute to its fulfillment on behalf of the States, Organisms and Organs of the United Nations System, as well as the Organizations concerned.
2. Accept and support the recommendations of the Report of the International Expert Group Meeting on Indigenous Peoples and Forests¹⁰, in particular the recommendation that states: “Forests need to be defined broadly, taking into account the philosophical and cultural principles reflected in indigenous peoples’ values and teachings. This includes recognition of trusteeship responsibilities that were once exercised by indigenous peoples’ the ancestors and are now being carried out by current generations. Forests are often seen within the context of their potential commodity values. The definitions of forests within States and United Nations processes often do not include indigenous peoples and their visions and aspirations. This has created conflicts among indigenous peoples, corporations and States. In addition, there are misconceptions that indigenous peoples are not good managers and cannot manage their own forests. This is an area that needs to be challenged”¹¹.
3. Promote the approach in which States recognize the rights of Indigenous Peoples on forests, and examine and amend the laws that are not in agreement with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and pertinent human rights instruments as interpreted by the corresponding organs so that they constitute the framework for the rights of Indigenous Peoples to the forests. This includes their systems of rights to ownership and the right to make decisions on management, use and the distribution of the benefits derived from its use. They must also fully participate in the process of adopting decisions related to the creation of norms and policies on forests.
4. The Permanent Forum must promote the creation of a permanent commission to monitor the state of the forests, safeguards and the rights of Indigenous Peoples.

10.- E/C.19/2011/15. International Expert Group Meeting on Indigenous Peoples and Forests. 12-14 January 2001, United Nations Headquarters.

11.- Ibid

5. Improve, on behalf of the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), the Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues, the ILO, the World Bank Group and other pertinent organisms of the United Nations, the understanding of the material rights of Indigenous Peoples to land and the need to give precedence to material rights with respect to procedural rights. They must also analyze the way in which the criteria of strength and exclusivity that are commonly recognized in national systems of rights to ownership can be understood in the context of international norms of human rights related to the Indigenous rights to ownership.
6. Heed the recommendation that the Expert Mechanism made to the General Assembly for the inclusion of the full and effective participation of the Permanent Forum in the preparation and organization of the Rio+20 Conference and its follow-up.
7. Promote close collaboration between the Secretariat of the United Nations Forum on Forests and the Permanent Forum, the Collaborative Partnership of Forests and other Organisms, Organs, States and Indigenous Organizations with the goal of achieving the full and effective participation of Indigenous Peoples in the initiatives of the United Nations Forum on Forests, particularly during the commemoration of the International Year of Forests this year, in order to highlight the central role of Indigenous Peoples as custodians of many of the forests with the most biological diversity in the world.
8. Take initiatives in order to improve the capacity of governmental functionaries for understanding the rights, knowledge and systems of governance of the Indigenous Peoples, and to apply policies related to forests that are in agreement with international norms of human rights, in particular with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
9. States, pertinent Organisms of the United Nations and Indigenous Organizations must document the customary norms of Indigenous Peoples regarding forests, and train legal professionals as part of the process of strengthening judicial pluralism.
10. The OHCHR must compile regulations pertinent to the human rights instruments of the United Nations that can be used to advocate, defend and promote the rights of Indigenous Peoples to land, territories and resources. This also includes the jurisprudence produced by the organs that supervise the application of the treaties of human rights of the United Nations, recommendations of the special proceedings of the United Nations, in particular the work of the Special Rapporteur on the right of Indigenous Peoples, and the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples.
11. The members of the Permanent Forum and the United Nations Forum on Forests must compile good practices related to the exercising of autonomy by Indigenous Peoples and cases in which the faculty of decision has been left in their hands. This compilation will be distributed as good practices of Indigenous go-

Indigenous Peoples and Forests

vernance. In this context, it is also necessary to strengthen Indigenous systems of governance.

12. Carry out case studies on good practices on behalf of the Secretariats of the Permanent Forum and the United Nations Forum on Forests on forests and Indigenous Peoples in order to inspire emulation in other parts of the world. This can include good examples of forest regulation, in particular communal forests, the application of the principle of free, prior and informed consent, and ways to resolve conflict, such as mediation.
13. The pertinent organisms of the United Nations, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the International Fund for Agricultural Development (FIDA), the United Nations Forum on Forests and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) must support the documentation of Indigenous knowledge systems on forests for Indigenous organizations, on the condition that the free, prior and informed consent of the Indigenous Peoples is received.
14. Fully respect the fundamental rights of Indigenous Peoples and understand that they can only enter Indigenous territories through sustained agreements on the application of the principle of free, prior and informed consent and through negotiations of good faith based on the norms of International Law on the distribution of benefits.
15. States must promote the legal regulations and regulations of national legislation for guaranteeing that the agreement of companies with Indigenous Peoples is in compliance with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples regarding the activities of exploitation of the forest resources' of their lands. These activities must only be carried out with the free, prior and informed consent of the Indigenous Peoples, and they must partake in the benefits of the activities.
16. The Secretariat of the Permanent Forum must collaborate with the OHCHR and ILO in order to ensure the protection and defense of the right of Indigenous Peoples related to their forest interests.
17. Promote the integrity of international conventions through their respective Secretariats in order to ensure the recognition and potential exercising of Indigenous rights, in particular the conventions related to forests, biodiversity, climate change, the environment, world heritage of natural and cultural sites, and protected areas.

Indigenous Peoples and Education

The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, in Article 23, clearly establishes the right to development of Indigenous Peoples: “Indigenous peoples have the right to determine and develop priorities and strategies for exercising their right to development. In particular, indigenous peoples have the right to be actively involved in developing and determining health, housing and other economic and social programmes affecting them and, as far as possible, to administer such programmes through their own institutions.¹” This and other related articles serve as an orientation to the development of policies, programs, models, processes and activities related to the education and health of Indigenous Peoples. The Permanent Forum recognizes that education is an element of decisive importance...In particular, the right to education in a person’s mother tongue is vital for the maintenance and growth of the culture and identity and cultural and linguistic diversity².

According to data from ECLAC³, supported by reports from ten Latin American countries, the figures of access to education, as well as the completion of primary education of Indigenous children show percentages of coverage that range from 62% (Paraguay) to 89% (Mexico) and gaps in coverage between Indigenous and non-Indigenous children. For example, the gaps in Mexico, Ecuador, Guatemala, Panama, Costa Rica, Brazil, Honduras and Paraguay are seven, five, eight, nineteen, twenty-one, twenty, two and thirty-one percentage points respectively. Significantly higher gaps are found in Paraguay, Costa Rica, Brazil and Panama. The figures are higher if the percentage of Indigenous children who complete their primary education is analyzed. The proportion of non-Indigenous youths between the ages of 15 and 19 who complete their primary education ranges from 69% to 96% in Guatemala and Chile respectively. Among Indigenous youths, the rates of completion at this level range from 21% in Paraguay to 93% in Chile. The rate in Guatemala is 36%, 45% in Honduras, 56% in Costa Rica and Panama, 64% in Brazil and 69% in Mexico⁴.

1.- General Assembly Resolution 61/295.

2.- E/2010/43, E/C.19/2010/15

3.- ECLAC (2005). Indigenous Peoples and Afro-Descendants of Latin America and the Caribbean: Sociodemographic Information for Policies and Programmes.

4.- Ibid.

Nowadays, the figures, aside from varying from country to country as shown in the data provided by the ECLAC study, also reflect high variations at the State and even municipal levels. For example, in the case of Mexico, in the State of Guerrero, 45.4% of the Indigenous population (one out of every two people) over the age of fifteen does not attend school. Of them, the majority are women⁵. In this State, the rate of illiteracy among the general population reaches 22%. Data on the Indigenous population indicates that half of the population is illiterate. In the most marginalized Indigenous municipalities, this percentage is considerably higher, reaching 88% in San Marcos, 71% en Metlatónoc, 67% in Ahuacutzingo, and 65% in Xochistlahuaca.

In agreement with the ECLAC study, in the case of the Indigenous populations, “[... access constitutes only the starting point for educational equality. It is necessary to complement it with quality, efficiency and pertinence of the system. Given that language is the main element of cultural transmission, bilingual intercultural education policy is a large step in diminishing inequality]”⁶.

Considering these types of findings and its own mandate, the Permanent Forum has recommended that UNESCO, the Convention on Biological Diversity, UNICEF and other competent bodies of the United Nations issue a call, together with the Forum, for an expert meeting on intercultural issues and education and representatives of United Nations bodies **in order to explore themes and concepts related to bilingual, intercultural and multilingual education in the context of teaching in mother tongue indigenous languages**⁷.

The Permanent Forum notes that in order to facilitate the expert meeting, **there is a need for country-specific situation analysis. The Forum invites UNESCO to conduct this analysis, given the agency’s experience and expertise in the area. The Forum also invites UNESCO to transmit the analysis to the Forum. The analysis should identify the legislative and/or policy frameworks that States employ to facilitate successful models of bilingual learning, multicultural and multilingual learning and mother tongue education and identify the barriers to implementation of those frameworks**⁸.

In the Study on Lessons Learned and Challenges to Achieve the Implementation of the Right of Indigenous Peoples, carried out by the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, the following have been noted:

1. Educational services in indigenous areas are more often than not underfunded, of low quality and poorly equipped. Indigenous children often attend the worst schools, with the least educated teachers and the smallest amount of resources.

5.- Guerrero en datos [Guerrero in Data]. Fuentes: INEGO 2000, INI 2002.

6.- ECLAC. Ibid.

7.- E/2010/43, E/C. 19/2010/15

8.- Ibid.

To achieve quality education for indigenous peoples, it is important to ensure consultation with and participation and consent of the target community and to establish good communication between interested parties, given that quality standards may vary from State to State, and between indigenous and non-indigenous children⁹.

2. Most countries do not have disaggregated data that can give an accurate description of the education of indigenous peoples. Nevertheless, where data are available, they suggest that indigenous peoples invariably lag behind the general population with regard to educational quality and achievements. The rates of enrolment and completion of education among indigenous children, in particular girls, remain low¹⁰.

The report also shows that States are obliged to ensure that all indigenous school-age children have access to free education, including through indigenous neighbourhood or community-based schools providing education in their own languages, in a manner appropriate to their cultural methods of teaching and learning. In order to guarantee cultural safety and culturally appropriate education for indigenous students, curricula must be based on, or sufficiently reflect, indigenous peoples' cultural values and beliefs. Fiscal allocations sufficiently matching the State's human rights obligations are also required to ensure the realization of the right to education of indigenous peoples, including specific State-funded programmes for the education and recruitment of indigenous teachers¹¹.

Likewise, the report indicates that education must be within safe physical reach (physical accessibility), either by attendance at some reasonably convenient geographic location or via modern technology, such as access to distance learning. Moreover, education must be affordable to all indigenous individuals (economic accessibility). Primary education should be available free of charge to all. States are required to progressively introduce free secondary and higher education¹². Furthermore, the right to education is an indispensable means of realizing indigenous peoples' right to self-determination. Education is a vital precondition for the capacity and ability of indigenous peoples to pursue their own economic, social and cultural development in accordance with article 3 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples¹³.

The Expert Mechanism urges States to adopt a policy framework for quality education for indigenous peoples, set clear goals, targets and priorities, and develop indicators to measure achievements, together with indigenous peoples, that could include greater participation, improved literacy skills, lower truancy rates and the gaining of meaningful qualifications¹⁴.

The report also shows that the Special Rapporteur identified a number of serious concerns raised by indigenous peoples, organizations and civil society organizations related

9.- A/HRC/EMRIP/2009/2

10.- Ibid.

11.- A/HRC/EMRIP/2009/2

12.- Ibid.

13.- Ibid

14.- Ibid

Indigenous Peoples and Education

to the right to education. They included (a) the lack of control over education initiatives for indigenous children; (b) the lack of consultation on the development and implementation of educational services provided to indigenous peoples; (c) the failure to consult with indigenous leaders on proposals for legislation on indigenous education; (d) the limited consideration given to autonomy and participation of indigenous peoples in the delivery of educational services, including multicultural and mother-tongue-based bilingual education; (e) the limited opportunities of access to quality mother-tongue-based bilingual education; (f) the failure to develop educational opportunities for indigenous peoples that demonstrate respect for their history and culture; (g) the lack of adequate supplies, funding and teachers, and poor quality schools; (h) the general lack of focus on education for indigenous peoples; (i) educational materials that only reflect the culture of dominant groups; (j) insufficiently funded and developed multilingual educational programmes; (k) inadequate teacher training and the lack of scholarships for indigenous students; and (l) the inadequate development of culturally appropriate curricula¹⁵.

Considering the tasks that have been set on the issue of education for Indigenous Peoples, the Indigenous Peoples Caucus of Latin America and the Caribbean recommends that States:

1. Promote the application of educational policies that fully recognize the fundamental rights of Indigenous Peoples.
2. Increase the levels of investment in the education sector, providing sufficient resources for the Indigenous Peoples' own educational programs in a way that fully guarantees the right to education with quality, equality and pertinence according to their needs and demands.
3. Incorporate bilingual intercultural academic production and Indigenous intellectuals into the processes of investigation and publication.
4. Promote the application of the Indigenous Peoples' own systems of education, considering the practice of education as an extension of the home, growth patterns and primary socialization.
5. Orient educational processes toward the strengthening of the reconstruction of the Indigenous community social fabric, the collective, and creating alternatives to satisfy the needs of the common good in its entirety and, further, the judicial system.
6. Promote education projects in a way that they are geared toward eliminating exclusion and focusing on the promotion of the exercising of collective rights according to the needs of Indigenous Peoples.
7. Create materials that are related to communal life in a way that the issues discussed are of communal importance.

15.- Ibid.

Indigenous Peoples and Education

8. Include the Indigenous population in cities, as a relationship of exclusion has been noticed. The formation of Indigenous student networks is proposed.
9. Take into account Indigenous culture in its entirety, not only the mother tongue.
10. Consider involving elders, who are the keepers of knowledge, in the intercultural educational system.
11. Include a critical education that corresponds to the defense of territory, natural resources into the intercultural approach. There must also be bilingual education and an intercultural focus.
12. Rely on indicators disaggregated by Indigenous Peoples. This will permit reliance upon a current base on the educational situation of the Indigenous Peoples.
13. Link the issue of bilingual education to the right to identity, given the fact that discrimination originates from the denial of culture and Indigenous language.
14. Comply with the United Nations mandate on the issue of education found in Convention 169, the UN Declaration on Indigenous Peoples, and other international instruments.
15. Require States to produce instruments and laws in Indigenous languages.
16. Include issues regarding issues with transversality in violence, sexual and reproductive health and addiction in educational programs.
17. Intercultural education must be for everyone in the country, not only Indigenous Peoples.
18. Strengthen intercultural bilingual education, expanding its coverage to all Indigenous Peoples and enriching it with Indigenous experiences, and orienting it toward public policies based in interculturalism and multilingualism.
19. Strengthen the academic, methodological, technical, technological and financial capacities of Indigenous universities.

The Indigenous Peoples Caucus of Latin America and the Caribbean also recommends that the Cátedra Intercultural Indígena (Indigenous Intercultural Chair):

20. Maintain contents and thematic focuses that ensure or favor the strengthening of identity, most importantly as a way of fighting against the undercutting of Indigenous systems and racism that is still present in Western academic systems.

The Application of the Principle of Free, Prior and Informed Consent

The application of the principle of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) has been a repeated recommendation made by the Permanent Forum with the aim of contributing to “the respect and protection of the right of Indigenous Peoples to self-determination (Articles 3 and 32) and to development (Article 32).” Both entail the right to free, prior and informed consent (Article 32) and were highlighted in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples¹.

In that respect, the Declaration indicates in Article 32.2 that “States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representative institutions in order to obtain their free and informed consent prior to the approval of any project affecting their lands or territories and other resources, particularly in connection with the development, utilization or exploitation of mineral, water or other resources”². The application of this principle on behalf of Indigenous Peoples expects their participation in all phases of development and the non-imposition of set plans, programs or projects promoted by national states.

Regarding the principle of free, prior and informed consent, Indigenous Peoples must effectively and in a fundamental and decisive manner participate in the decisions on programs and policies at all levels and in all the sectors that concern them, be they the spheres of the administration of justice or sustainable development, the protection of biological diversity, the mitigation of climate change and the adaptation to this, etc.³

Despite the recognition Indigenous Peoples have for the application of this principle, they continue to demand its effective fulfillment in the framework of the claim to the full application of their rights. This is due to the fact that such an application is not free of problems. In fact, there are problems related to the judicial instrumentation of the principle, as well as the procedural mechanisms considered for its implementation and problems of a conceptual type that confuse consultation with free, prior and informed consent. There are also problems related to the quality of established legislation. This

1.- E/2009/43, E/C.19/2009/14

2.- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

3.- E/2008/43 E/C.19/2008/13

The Application of the Principle of Free, Prior and Informed Consent

is the case in Ecuador, where legislation has been passed that does not reach international standards. In Nicaragua, there are gaps in the applicability of the principle, as what occurred in the enactment of the Law on Waters, without Indigenous Peoples being consulted.

In Mexico, a law has been passed that established the application of a pre-emption of Indigenous communities regarding access to material goods (including mining). The pre-emption is to invest resources; on the contrary, the rights to the exploitation of natural goods on Indigenous lands and territories are given to whoever is able to invest (i.e., multinational corporations). This right is contrary to the principle of Free, Prior and Informed Consent in a way that has been expressed. In any case, the Mexican State must respect what is stated in the Declaration and the right to Free, Prior and Informed Consent of these communities.

In regards to mechanisms, the Forum state, “One problem encountered frequently is manufactured consent, which results from negotiating with selected indigenous individuals or specific communities without ensuring that they represent their communities and/or the affected area, creating divisions within the communities⁴.” An example of such a practice occurred in Guatemala, where the Mayor of a town authorized the construction of a dam. The Mayor forged consent, for which he received 800,000 quetzals. Other known cases show that consent has been manufactured, that is, the practice of manufactured consent is carried out through Workshops without fulfilling what is established in the Declaration.

Regarding conceptual problems, it must be said that the concept of consultation appears in Convention 169, which states in Article 6.1 that “In applying the provisions of this Convention, governments shall: (a) consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative measures which may affect them directly”, and adds in 6.2 that “The consultations carried out in application of this Convention shall be undertaken, in good faith and in a form appropriate to the circumstances, with the objective of achieving agreement or consent to the proposed measures”⁵. In this sense, consultation would not make sense per se, but it is directly linked to its goal, that is, “obtaining consent.”

In that respect, it is appropriate to ask: What will the most appropriate conditions be for the application of the principle? What will they demand? It is necessary for the application of structural measures to include judicial system modification related to the ownership of natural resources and the modification of the scope of policies in a way that includes more than only government policies. In regards to this issue, state policies that will not change with the government are drafted and, finally, the definition of mechanisms that are conducive to the effective participation of Indigenous Peoples at different levels in the decision-making process in the implementation of plans, programs and development projects on their territories is required.

A known major problem is related to the fact that the binding character of the final result

4.- E/2009/43 E/C.19/2009/14 (MANUFACTURED CONSENT-CONSENTIMIENTO FICTICIO)

5.- E/2009/43 E/C.19/2009/14

The Application of the Principle of Free, Prior and Informed Consent

must have consultation. That is, for the binding nature of the instrument, it is the norm included in Article 6 of Convention 169. It is important that there be a national norm that can be defined through special legislation and ratify its binding nature. This is the case in the Law of Hydrocarbons recently approved by Bolivia; problems appeared with this law's application. It involves a judicial definition of the mechanism and procedure to follow in order to obtain free, prior and informed consent on behalf of a determined Indigenous group.

Another problem related to the application of the principle is the omission by national authorities of the promotion of mining and hydroelectric dam construction projects or development plans. This omission is fundamentally related to the political will not to apply the principle. Some cases that exemplify the consequences derived from not observing the principle exist in Peru, with the events of Bagua, where there were 34 deaths, ten of Indigenous individuals, when military police violently dispersed a peaceful Indigenous occupation of a highway. Social disturbances in Peru are based on the national Indigenous mobilization against a new law that would allow mining and petroleum companies to enter their territories without consultation or free, prior and informed consent. The demonstration was organized for the Awajun and Wampis to express their rejection of the mining activities that were taking place on their territories. Another example is the development of hydroelectric projects that have violated the right of the Ngobe peoples in Panama, even though in this case court judgments have been in favor of the Peoples. In Guatemala, the Guatemalan State has supported investment in mining, forming an alliance between multinational corporations and state-owned companies. Mining activities are carried out as usual, and some of these are in full process of expanding, as evidenced in the actions that are carried out by gold, nickel and cement mining companies. The final case is the "Plan of Accelerated Growth", promoted by the Brazilian government, which contains actions such as the construction of hundreds of energy plants on Indigenous lands of the Amazon without presenting this Plan to the Indigenous Peoples affected for their prior consent at any time⁶.

Although there are very sensitive issues related to the application of the principle, some good practices have also been identified on the recommendation of investing resources in communication, using networks, Indigenous education programs, universities and their own projects; Indigenous Peoples are generally not made aware of them. Among them, the process of drafting the Law on the Regimen of Communal Property of the Indigenous Peoples and Ethnic communities of the Autonomous Regions of the Atlantic Coast of Nicaragua and Coco, Bocay, Indio and Maiz Rivers of 2002 (Law 445), the creation of spaces for the United Nations System such as the CCPIAN [Consultative Council of Indigenous Peoples and People of African Descent of Nicaragua].

The Permanent Forum, in its report on the Eighth Session, commended the inclusion "by the European Bank for Reconstruction and Development of free, prior and informed consent in its policy on indigenous peoples, and strongly urges other multilateral and bilateral financial institutions to follow this example...It also calls upon the World Bank

6.- IWGIA, Indigenous World, 2010.

and the International Finance Corporation to review their policies and adopt free, prior and informed consent as the central principle in their dealings with indigenous peoples instead of the present free, prior, informed consultation. The international financial institutions should develop a strategy to raise staff awareness at the national and headquarters levels on indigenous peoples' rights and development perspectives and thereby improve their relationships with indigenous peoples at the country level". This praise and recommendation by the Forum maintains its validity and currency in the continuation of its implementation.

The Permanent Forum, in its report on the Seventh Session, urged States and State-owned companies to have consultation and cooperate in good faith with the Indigenous Peoples affected in order to procure their free, prior and informed consent before approving policies, plans and projects regarding their lands or territories and other resources, in particular those relating to development, the use or exploitation of mining and water resources and other issues in accordance with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

Another example of a good practice is the enactment by decree by the Chilean government of the rule that regulates Article 34 of the Declaration and established that the organs responsible for consultation are the ministers, municipalities, armed forces, etc. It is also worth mentioning the Peruvian initiative in legislating the process of consultation. Although the legislation was approved by the Peruvian congress, the initiative was vetoed by the president of the republic.

The Indigenous Peoples Caucus of Latin America and the Caribbean recommends that the Forum:

1. Promote what was recommended by the General Assembly, during its 65th Session: "States should, in accordance with international law, take concerted, positive steps to ensure respect for all human rights and fundamental freedoms of indigenous people, on the basis of equality and non-discrimination and recognizing the value and diversity of their distinctive identities, cultures and social organization"⁷.
2. Continue with its efforts in promoting the application of FPCI on behalf of the States on all levels and in all sectors of government, the international financial organisms, the organisms of the United Nations System, and national companies and multinational corporations.
3. Disclose the minimum standards of FPCI, since when States legislate, the right is deemphasized.

The Indigenous Peoples Caucus of Latin America and the Caribbean recommends that States:

4. Create, with the consultation and cooperation of the Indigenous Peoples, the norms, mechanisms and procedures most appropriate for contributing to the complete fulfillment of the application of the principle of free, prior and informed

The Application of the Principle of Free, Prior and Informed Consent

consent and good faith in the processes of drafting laws, policies and public programs, in particular those related to the exercising of, or what can affect, the rights of Indigenous Peoples.

5. Accept the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and, in particular, the declarations related to the application of the principle of free, prior and informed consent and good faith as a mark of obligatory fulfillment for the formation and execution of plans, programs and development projects. They must also consider it as a vital element for the authorization of the activities of multinational corporations and companies on the lands and territories of Indigenous Peoples by their respective governments.
6. Legislate the application of the principle of Free, Prior and Informed Consent, taking into account international standards. This must be an obligation in order to avoid the reduction of the Rights of Indigenous Peoples.
7. Admonish the States that do not carry out difficult consultations with Indigenous Peoples.

The Indigenous Peoples Caucus of Latin America and the Caribbean recommends that the organisms and organs of the United Nations and International Financial Institutions:

8. Urgently pay attention to the recommendation of the Forum given during the Second Session regarding the reformation of the concept of development with the participation of Indigenous Peoples in development process while respecting their rights and the establishment of processes of participation and significant associations mediated for the application of the principle of free, prior and informed consent and good faith.
9. Promote the ratification of Convention 169 to the States of Latin America and the Caribbean that have not yet ratified it, and the full application of the terms of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

Indigenous Peoples and Health

The Indigenous People's right to health and the improvement of their health conditions are clearly stated in Article 32 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Article 23 of the Declaration reads: "indigenous peoples have the right to be actively involved in developing and determining health, housing and other economic and social programmes affecting them and, as far as possible, to administer such programmes through their own institutions"¹.

Other rights relating to health are found in Article 24 of the Declaration. Parts 1 and 2 of the Article state that "Indigenous peoples have the right to their traditional medicines and to maintain their health practices, including the conservation of their vital medicinal plants, animals and minerals. Indigenous individuals also have the right to access, without any discrimination, to all social and health services" and "Indigenous individuals have an equal right to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. States shall take the necessary steps with a view to achieving progressively the full realization of this right"².

In the countries of Latin America and the Caribbean, the Indigenous Peoples' ability to exercise the right to health is seriously limited, reflected in poor health conditions among the Indigenous populations. Various studies corroborate the information of this situation, which is characterized by the existence of severe and increasing inequalities, inequities and gaps, compared to non-Indigenous populations.

On the other hand, the indicators and data of health statistics in these countries do not always exactly reflect the true deterioration of the health of Indigenous populations. Considering the existing limitations of national statistics systems, in particular regarding health indicators based on ethnicity, the Permanent Forum has recommended that States include ethnic identification in vital statistics and health records, allocate more funding for intercultural services that ensure indigenous women's access to quality health care, including emergency obstetric care, voluntary family planning and skilled attendants³.

The organizations of the United Nations System concerned have played an important role in the promotion of the health and human rights of Indigenous Peoples. For example, the Pan-American Health Organization (PAHO) has supported many initiatives aimed at the improvement of health services for Indigenous Peoples. These organizations have also supported efforts concerning Indigenous women's reproductive health, including its efforts to reduce maternal mortality and to empower indigenous women to advocate for

1.- Resolution 61/295 of the General Assembly

2.- Ibid.

3.- E/2010/43, E/C.19/2010/15

Indigenous Peoples and Health

their own reproductive rights⁴. In this context, the Forum has recognized the important role held by UNFPA, as well as its work in the promotion of intercultural models of health. UNFPA intercultural approaches in Panama, Mexico, Peru, the Plurinational State of Bolivia and Ecuador, stressing the leadership role of indigenous women at the national and regional levels, were highlighted during the in-depth dialogue at the eighth session of the Forum⁵.

As indicated, existing data in the States of Latin America and the Caribbean show that Indigenous Peoples, within the health sector, suffer from different forms of inequality, manifested through the values that indicators acquire on basic health. For example, infant deaths of Indigenous children in Panama reached 84 out of every 1,000 live births; the infant mortality rate of non-Indigenous children is 17 out of every 1,000 live births. The ratio is nearly 5:1, meaning that five times more Indigenous children die than non-Indigenous children. Another example, in Honduras, where the maternal mortality rate among Indigenous mothers is 255 for every 100,000 live births, opposed to 147 for every 100,000 live births of non-Indigenous mothers. This is a ratio of 1.7:1. Other data of interest is from Nicaragua, where 90% of the cases of falciparum malaria are concentrated in 24 municipalities with Indigenous populations⁶.

A sociodemographic study by ECLAC shows that “the disparities between the Indigenous and non-Indigenous are severe. The probability that an Indigenous child will die before his/her first birthday is 3.4 times higher (or 240% greater) than that of a non-Indigenous child in Panama and 10% greater in Chile”⁷. According to the study, “...in Latin America, Indigenous infant mortality is practically double that of the non-Indigenous, given that the average infant mortality rate in the region among the Indigenous population is 52.2 per 1,000, while the rate for the non-Indigenous is 26.7 per 1,000. Furthermore, no Latin American country has reached the goal of the International Conference on Population and Development related to the elimination of inequalities between the Indigenous and non-Indigenous”⁸.

Data from the study indicate that disparities on a national level are considerable. For example: The mortality rate of Indigenous children in Paraguay has reached 82.2 for every 1,000 live births, versus 39.1 for every 1,000 live births of non-Indigenous children, a ratio of 2.1:1. In Ecuador, the rate is 59.3 for every 1,000 Indigenous live births versus 25.8 for every 1,000 non-Indigenous live births, a ratio of 2.3:1. In Mexico, the rate reaches 54.6 for every 1,000 live births of indigenous children versus 33.2 for every 1,000 live births of non-Indigenous children, a ratio of 1.6:1.

Although there are great disparities among the countries, it is also possible to find data within countries that reflect situations of inequality and inequity. This is the case of Mexico. For example, in the State of Guerrero, “96% of the Indigenous population does not have access to health services due to a lack of hospitals with qualified personnel and ba-

4.- Ibid.

5.- Ibid.

6.- PAHO (2004). Salud de los pueblos indígenas e interculturalidad [The Health of Indigenous Peoples and Interculturality].

7.- ECLAC (2005). Indigenous Peoples and Afro-Descendants of Latin America and the Caribbean: Sociodemographic Information for Policies and Programmes.

8.- Ibid.

sic equipment”⁹. Furthermore, the infant mortality rate in the municipality of Chilapa is 89 children for every 1,000 live births, a figure significantly higher than the average for Mexico in general. Furthermore, the maternal mortality rate in this municipality is one of the highest in the world, reaching”281 Indigenous women out of every 100,000 recent births, while the average is 151 in Indigenous women in Mexico and 51 in Mexican women”¹⁰.

These indicators show the incidence of factors such as discrimination, exclusion and marginality that “intervene in different spheres and manifest themselves in access to service, the quality and pertinence of care, etc. For example, Indigenous groups...cannot receive the necessary healthcare for different reasons such as: problems of access to health centers (nonexistence or distance, geographic factors), cultural limitations concerning accessibility to services (linguistic, dissonance of medical models), and other obstacles related to the demand of care (lack of information, negative information or mistreatment). There is sufficient data that indicates that health professionals, either consciously or unconsciously, care less about the health of a lower-status population, such as Indigenous Peoples...”¹¹.

During the Sixth Session (14-25 May 2007), the Permanent Forum called attention to health problems that affect Indigenous peoples living in voluntary isolation and recommended “that the World Health Organization (WHO), the Pan American Health Organization (PAHO), the United Nations Children’s Fund (UNICEF), States, non-governmental organizations and indigenous peoples’ organizations join efforts in implementing appropriate expert health-care actions to prevent disastrous disease problems affecting indigenous peoples in voluntary isolation and recent contact, and consider adopting rapid-effect emergency procedures in situations where the health situation is critical, as it is at present in the Javari Valley in Brazil”¹².

Faced with the issue of the health of Indigenous Peoples, the Indigenous Peoples Caucus of Latin America and the Caribbean believes it is important to give the following recommendations:

1. Strengthen the statistical data, disaggregated by Indigenous Peoples, by applying an intercultural focus in the recollection and analysis of health information.

The recompilation and analysis of data is essential for identifying inequalities and discrimination in the health system¹³. Quantitative and qualitative data must be collected for all population groups divided by Indigenous groups and communities, age, sex, and other variables of interest and analyzed with a focus on interculturality and gender and with the cooperation of members of the peoples. The PAHO must support the efforts to standardize cultural and health diversity that include indicators on MDGs, morbidity/mortality, access, unsatisfactory needs and development, as well as indicators of cultural pertinence related

9.- Guerrero en datos [Guerrero in Data]. Sources: INEGO 2000, INI 2002.

10.- Ibid.

11.- Ibid.

12.- E/2007/43, E/C.19/2007/12

13.- Also, to rely on data to define intercultural health policies currently included.

Indigenous Peoples and Health

to the view and development of Indigenous Peoples, including those who live in isolation. This data must be reliable, comprehensible and available for the formation of policies, programs and laws.

2. Approach the topic of food and malnutrition of Indigenous Peoples as a health problem.

Food shortages that are reflected in protein and calorie deficiencies, as well as malnutrition rates in Indigenous populations, are high, especially in Indigenous children. In this sense, this aspect as a necessary component in the development of programs oriented toward improving the health of Indigenous Peoples must be considered.

3. Consider the effects of environmental pollution and illnesses caused by it on the health of Indigenous Peoples.

Many of the health problems of Indigenous Peoples are associated with the existence of serious problems of environmental pollution. An example of this is the fact that water sources that serve to satisfy their needs are now often contaminated by the development of medium- and large-scale agricultural and livestock activities and the activity of mining companies that use contaminants for the processing of minerals.

4. Implement public Health policies for Indigenous Peoples with sufficient budgets that allow for integral attention on health.

The effective application of integral policies in the sphere of health directed specifically towards Indigenous populations with a focus on interculturality will only be possible if these and the programs derived from them rely on resources sufficient for their implementation.

5. Recognize experts in ancestral medicine, traditional knowledge and intellectual property in the development of primary health practices and their incorporation into health services.

It is important to recognize the importance and role that experts in traditional medicine assume, as well as the intellectual property of their traditional knowledge, in the diversity of medicinal practices used by different peoples and incorporate them in health services. The different peoples have their own spiritual concepts on health and wellbeing and on the basis that they use their medicines and practices. While access of discriminated groups to formal health services must be a priority, health professionals and systems must use their languages and respect their traditional symbols, ceremonies, traditional therapies, plants, and animals, and understand their concepts of family, ownership and community in order for access to these services to be equal. In order to ensure an intercultural focus, traditional health professionals must have access to training, information, exchange and forums for developing abilities.

6. Focus governmental health systems on the provision of incorporated health services to improve access.

A fragmented health system is a significant barrier to healthcare for Indigenous Peoples, and contributes to their exclusion and discrimination. Government health systems must be focused on integrated primary healthcare based on intercultural networks and services with cultural importance.

7. Base access to health on a clear and genuine commitment to the respect and full exercising of human rights and the fundamental rights of Indigenous Peoples.

Both collective and individual human rights must be protected, promoted and defended through health systems in compliance with international, regional and national agreements on human rights.

8. Promote leadership and participation.

The participation of youths and women in decisions on health programs and policies, especially related to those on sexual and reproductive health, is fundamental in offering an effective response to the health needs of these populations.

9. Watch over Sexual and Reproductive health problems of Indigenous women.

These sexual and reproductive health issues of women include: teenage pregnancy and maternal mortality due to preventable causes. As part of the strategy for tackling these problems are the promotion of knowledge and access to family planning and contraception with consent and an intercultural focus. Also, great importance is given to the empowerment of women for being able to decide in alliance with men.

10. Improve access to information on sexual and reproductive health with a focus on interculturality and an appropriate methodology, taking into account the rights of Indigenous women to sexual and reproductive health.

The need for the availability of pertinent information on sexual and reproductive health that takes into consideration the cultural values of Indigenous youths and women is essential for exercising their rights to health.

11. Give priority to the care of cases of HIV/AIDS and sexually transmitted diseases, as well as alcoholism and other addictions.

The migratory processes that involve Indigenous Peoples have a strong incidence in cases associated with HIV/AIDS and sexually transmitted diseases. These cases must be given priority. The same must be done for cases of alcoholism and other types of addictions.

12. Offer integrated healthcare in cases of violence, which should be considered health problems.

Cases of violence suffered by Indigenous populations are diverse. From the typical cases of domestic and sexual violence to those related to State institutionalized violence or violence from guerilla groups. Such situations of violence have physical, psychological and spiritual consequences that must be given priority with an integral focus.